

PERÍODO 135°



REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

19^a REUNIÓN – 1^a SESIÓN EXTRAORDINARIA

27 DE DICIEMBRE DE 2017

Presidencia de la señora vicepresidente de la Nación, licenciada **MARTA GABRIELA MICHETTI**,
del señor presidente provisional del Honorable Senado, senador don **FEDERICO PINEDO**,
y del señor vicepresidente 1° del Honorable Senado, senador don **JUAN CARLOS MARINO**

Secretarios:

Señor don **JUAN PEDRO TUNESSI** y señor don **HELIO REBOT**

Prosecretarios:

Señor don **MARIO DANIELE**, señor don **ERIC CALCAGNO Y MAILLMANN**
y señor don **ÁNGEL TORRES**



PRESENTES:

AGUILAR, Eduardo Alberto
 ALMIRÓN, Ana Claudia
 ALPEROVICH, José Jorge
 BASUALDO, Roberto Gustavo
 BLAS, Inés Imelda
 BOYADJIAN, Miriam Ruth
 BRAILLARD POCCARD, Néstor
 BRIZUELA Y DORIA, Olga Inés
 BULLRICH, Esteban José
 CASERIO, Carlos Alberto
 CASTILLO, Oscar Aníbal
 CATALÁN MAGNI, Julio César
 CATALFAMO, María Eugenia
 CLOSS, Maurice Fabián
 COBOS, Julio César Cleto
 CREXELL, Lucila
 DE ANGELI, Alfredo
 ELÍAS DE PEREZ, Silvia Beatriz
 ESPÍNOLA, Carlos Mauricio
 FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina
 FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel
 FIAD, Mario Raymundo
 FIORE VIÑUALES, María Cristina del Valle
 FUENTES, Marcelo Jorge
 GIACOPPO, Silvia del Rosario
 GONZÁLEZ, Gladys Esther
 GONZÁLEZ, María Teresa Margarita
 GONZÁLEZ, Nancy Susana
 GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
 IANNI, Ana María
 ITÚRREZ DE CAPELLINI, Ada R. del Valle
 KUNATH, Sigrid Elisabeth
 LÓPEZ VALVERDE, Cristina del Carmen
 LOVERA, Daniel Aníbal
 LUENZO, Alfredo Héctor
 MARINO, Juan Carlos
 MARTÍNEZ, Ernesto Félix

MARTÍNEZ, Julio César
 MAYANS, José Miguel Ángel
 MENEM, Carlos Saúl
 MERA, Dalmacio
 MIRKIN, Beatriz
 MONTENEGRO, Gerardo Antenor
 ODARDA, María Magdalena
 OJEDA, José Antonio
 PAIS, Juan Mario
 PEREYRA, Guillermo Juan
 PEROTTI, Omar Ángel
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
 PICHETTO, Miguel Ángel
 PILATTI VERGARA, María Inés
 PINEDO, Federico
 POGGI, Claudio Javier
 PORCEL DE RICCOBELLI, Blanca
 REUTEMANN, Carlos Alberto
 RODRÍGUEZ MACHADO, Laura
 RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
 ROMERO, Juan Carlos
 ROZAS, Ángel
 SACNUN, María de los Ángeles
 SCHIAVONI, Humberto Luis Arturo
 SNOPEK, Guillermo Eugenio Mario
 SOLANAS, Fernando Ezequiel
 SOLARI QUINTANA, Magdalena
 TAPIA, María Belén
 UÑAC, José Rubén
 URTUBEY, Rodolfo Julio
 VARELA, Marta Lucía
 VERASAY, Pamela Fernanda

AUSENTES, CON AVISO:

COSTA, Eduardo Raúl
 DURANGO, Norma Haydeé
 GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela

SUMARIO

1. **Izamiento de la bandera nacional.** (Pág. 3.)
2. **Himno Nacional Argentino.** (Pág. 3.)
3. **Juramento de la señora senadora Gladys Esther González.** (Pág. 3.)
4. **Asuntos entrados.** (Pág. 3.)

5. **Homenaje en memoria de Roberto Rosito.** (Pág. 4.)
6. **Asuntos entrados.** (Continuación.) (Pág. 4.)
7. **Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Fernández de Kirchner.** (S.-4.743/17.) (Pág. 7.)
8. **Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Odarda.** (S.-4.747/17.) (Pág. 9.)

9. **Acuerdos. Mensajes del Poder Ejecutivo por los cuales solicita acuerdos.** (Pág. 10.)
10. **Plan de labor.** (Pág. 11.)
11. **Reforma al sistema tributario argentino.** (O.D. N° 1.057/17 y C.D.-82/17.) **Presupuesto para el ejercicio 2018.** (C.D.-80/17.) **Modificación de la ley 25.413.** (C.D.-81/17.) (Pág. 13.)
12. **Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operación de Rescate del Submarino ARA “San Juan”.** (C.D.-79/17.) **Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte.** (C.D.-83/17.) (Pág. 137.)
13. **Acuerdos. Mensajes del Poder Ejecutivo por los cuales solicita acuerdos.** (Continuación.) (Pág. 138.)
14. **Apéndice.**

I. **Convocatoria a sesiones extraordinarias.** (Pág. 139.)

II. **Actas de votación.** (Pág. 145.)

III. **Plan de labor.** (Pág. 162.)

IV. **Asuntos entrados.** (Pág. 163.)

V. **Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 594.)

VI. **Inserciones.** (Pág. 1085.)

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11 y 31 del miércoles 27 de diciembre de 2017:

Sra. Presidente.— La primera sesión extraordinaria queda abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidente.— Invito al señor senador Juan Carlos Romero a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los presentes, el senador Romero procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

2

HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sra. Presidente.— Seguidamente, se entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretado en violín por el señor Pablo

Pereyra, de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación.

—Puestos de pie, los presentes entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino. (*Aplausos.*)

3

JURAMENTO DE LA SEÑORA SENADORA GLADYS ESTHER GONZÁLEZ

Sra. Presidente.— Muchas gracias.

Conforme lo que establece el artículo 10 del reglamento de esta Honorable Cámara, corresponde invitar a la señora senadora nacional electa por la provincia de Buenos Aires, doña Gladys Esther González, a prestar el juramento de práctica.

—Así se hace.

Sra. Presidente.— Señora senadora nacional electa por la provincia de Buenos Aires, Gladys Esther González: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?

Sra. Senadora electa González (G. E.).— ¡Sí, juro!

Sra. Presidente.— Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (*Aplausos.*)

Queda incorporada la señora senadora que acaba de prestar juramento.¹

4

ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidente.— Se incorporarán al Diario de Sesiones los mensajes y decretos del Poder Ejecutivo nacional convocando a sesiones extraordinarias y su respectiva ampliación de temario y el decreto dictado por esta Presidencia.²

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.³

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

³ Ver el Apéndice.

a la defensa del interés federal de las provincias, a mantener los recursos de coparticipación, a coparticipar la estructuración de nuevas recaudaciones, como el revalúo. En fin, lo vamos a explicar después a través de distintos senadores.

Nosotros nos hacemos cargo de lo que hacemos. Y quiero decir otra cosa más: la ley tributaria ingresó al mediodía –sería bueno que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda lo explique– y comenzó el debate al mediodía a partir del ingreso de la ley, como lo hemos hecho siempre.

Así que quise recalcar este tema.

Sra. Presidente. – Gracias, senador Pichetto.

La Presidencia ratifica el giro.

Vamos a votar a mano alzada.

Senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Una simple aclaración. Independientemente del planteo de los giros, es un planteo en abstracto, ya que estamos en el marco de sesiones extraordinarias con un temario que solicitó el propio Poder Ejecutivo.

Las comisiones caducaron. Y las que se constituyeron, como la Comisión de Presupuesto y Hacienda, lo hicieron justamente para el abocamiento de los temas a tratar. Por lo tanto, si hubiéramos estado en el período de sesiones ordinarias, con todas las comisiones constituidas, bueno... Pero el planteo no fue dirigido a la Presidencia en ese sentido, y eso lo quería dejar sentado.

Otra aclaración más: no correspondía la moción del tratamiento del tema dopaje, porque lo había solicitado justamente el senador Pichetto, y tenemos que avanzar en dar los dos tercios para el tratamiento integral.

Sra. Presidente. – Entonces, vamos a votar lo que habíamos definido del plan de labor, con la incorporación de lo que planteó el senador Pichetto y lo que consideró el senador Petcoff Naidenoff, respecto de la habilitación de los dos tercios.

Se va a votar a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.

11

**REFORMA AL SISTEMA TRIBUTARIO
ARGENTINO (O.D. N° 1.057/17 Y C.D.-82/17).**

**PRESUPUESTO PARA
EL EJERCICIO 2018 (C.D.-80/17).
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.413
(C.D.-81/17.)**

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el secretario parlamentario.

Sr. Secretario (Tunessi). – Hay que mencionar los expedientes C.D.-79/17, C.D.-80/17, C.D.-81/17 y C.D.-83/17. Estos expedientes son los que requieren la habilitación con dos tercios. Los tuve que nombrar para que quede registrada su habilitación.

Sra. Presidente. – Gracias, secretario.

Ahora, por Secretaría se dará lectura de los proyectos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Proyectos en tratamiento.

Orden del Día N° 1.057/17 y C.D.-82/17. Comisión de Presupuesto y Hacienda. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión sobre reforma al sistema tributario argentino, C.D.-78/17 y C.D. 82/17, con dictamen en minoría.

C.D.-80/17. Dictamen en el proyecto de ley en revisión de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2018, con dictamen en minoría.

C.D.-81/17. Dictamen en el proyecto de ley en revisión que modifica el artículo 3° de la ley 25.413, de competitividad, de impuestos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, sobre destino de los recursos a la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES.

Sra. Presidente. – Senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Habíamos acordado ayer, cuando tratamos el plan de labor, considerar estos temas, primero, mediante un solo debate en general, con flexibilidad de tiempo para los miembros informantes y, también, para los cierres y, lógicamente, cuando se voten en particular. También, acordamos acercar la lista de oradores y cerrarla, para fijar estimativamente un horario de votación.

Sra. Presidente. – Lo tenemos así, exactamente. La lista de oradores se está haciendo y la vamos a votar cuando esté terminada.

Los minutos que tiene cada miembro informante son 40, eso fue lo que se acordó en Labor; el resto de los senadores, 10 minutos y luego, para los cierres, 20 minutos. Ese es el acuerdo de Labor.

Ya tenemos la lista de oradores. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Tunessi). – La lista de los oradores anotados en Secretaría es: Verasay; Perotti; Solanas; Mayans; De Angeli; González, María Teresa; Mera; Ernesto Martínez; Snopek; Romero; Mirkin; Luenzo; Fuentes; Rozas; Odarda; senadora Gladys González; Aguilar; Catalfamo; Pilatti Vergara; Basualdo; Kunath; Elías de Perez; Almirón; Fiore Viñuales; Lovera; Poggi; Ianni; Crexell; Pais; González, Nancy; Closs; Caserio. Y los miembros informantes: Bullrich, Esteban, y Fernández Sagasti y Sacnun por el dictamen en minoría. Para los cierres: Rodríguez Saá; Fernández de Kirchner; Pichetto y Naidenoff.

Sra. Presidente. – Senadora Boyadjian. Espéreme, porque quizás no está en la lista.

Queda incluida en la lista de oradores, senadora Boyadjian.

¿Falta alguien?

Sí, senador Solanas: está incluido.

Vamos a votar, entonces, el cierre de la lista de oradores, a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.

Comenzamos con la presentación del senador Bullrich.

Perdón, no lo vi, senador Caserio. Por favor, el audio.

Sr. Caserio. – Cuando pasaron la lista, le había solicitado al secretario que me anote y me pareció que no me había nombrado. Quiero que lo corrobore, por favor.

Sra. Presidente. – Okay, ahora lo ponemos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Está incluido en la lista, senador Caserio.

Sra. Presidente. – Senadora Blas.

Sra. Blas. – Gracias, presidenta. Para sugerir que se autoricen las inserciones.

Sra. Presidente. – Vamos a votar la autorización para efectuar inserciones.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.

Sr. Pichetto. – Votemos el cierre de la lista, presidenta.

Sra. Presidente. – El cierre de la lista ya lo votamos.

Bueno, ahora sí, entonces, el senador Bullrich comienza.

Sr. Bullrich. – Gracias, presidenta. En esta, mi primera sesión, la última de este Senado en 2017, nos reunimos a tratar, como ya se mencionó, tres proyectos que vamos a considerar en conjunto, en un debate general: el proyecto de presupuesto 2018, la reforma tributaria y la modificación del impuesto a los débitos y créditos bancarios, o impuesto al cheque, como se lo conoce coloquialmente. Son tres proyectos que están enmarcados en una propuesta y una reforma mayor, que incluyó el pacto fiscal, la ley de responsabilidad fiscal, la reforma previsional; proyectos que nacen, además, de un acuerdo con veintitrés de los veinticuatro gobernadores de nuestro país y que, como debe hacerse, se traen al debate en este Congreso.

En el informe en conjunto que voy a hacer quería comenzar planteando la importancia de esta ley de presupuesto. Presupuestar es, al fin, hacer honor a la mayor cesión que los ciudadanos hacen en este Congreso, cesión que nace del pacto social que origina nuestra Nación y que consolida nuestra República. Es una enorme responsabilidad que no se termina solamente en la administración de los recursos públicos, del dinero de los argentinos en la masa impositiva, sino que humanamente también en la responsabilidad de construir, desde las finanzas estatales, un país mejor, una Nación más unida, un Estado más eficiente, que garantice los derechos humanos de todos los ciudadanos de nuestro país.

Asumimos esta responsabilidad convencidos de que la suma de los individuos es siempre menor al resultado social, a la construcción que, en conjunto, podemos hacer a través de las políticas públicas. El Congreso, nuestras acciones dentro de él, multiplican la suma de cada uno de los ciudadanos que representamos. Nuestra misión debe enmarcarse en una visión que este gobierno, con mucha sencillez, en la complejidad que nace de administrar el Estado, ha definido en tres grandes objetivos por los cuales quiere ser

evaluado: el primero de ellos, terminar con la pobreza en la Argentina; el segundo, derrotar el narcotráfico y el tercero, unir a los argentinos. Claramente son metas sociales, pero que deben y están reflejadas en este presupuesto.

El principal ha sido planteado como pobreza cero, la derrota de la pobreza en la Argentina. Y la razón para esto es el convencimiento de que la pobreza es la peor vulneración de los derechos humanos; es en la desigualdad que nacen la informalidad fiscal, la ilicitud moral, la ilegalidad jurídica, la desunión. Y la pobreza es la mayor causa de desigualdad, por eso nuestro objetivo como gobierno es erradicarla.

Donde hay pobreza, hubo un Estado que mal administró los recursos públicos y peor distribuyó las oportunidades de los ciudadanos de un país. Debemos trabajar en conjunto pensando que, así como es clara la responsabilidad de aquel que en dificultades —en la pobreza— vela por su familia, esa responsabilidad contrasta con la negligencia de un Estado que abandonó a ese ciudadano y que lo hizo frente a una sociedad que muchas veces tuvo una actitud pasiva frente a esa pobreza.

Finalmente, salir de la pobreza no es una política pública, salir de la pobreza es un cambio cultural; salir de la pobreza es una decisión social, es una construcción de todos. Un país rico con una Nación empobrecida es como un cuerpo sin alma...

Sr. Mayans. — Se llevaron todo a las *off shore*. Se llevaron toda la plata afuera.

Sr. Bullrich. — ...Es un presupuesto económico sin un sujeto social.

Estamos convencidos de que es la desigualdad la peor causa de la ruptura del orden institucional y de la destrucción de la confianza social, la confianza necesaria para construir una Nación más unida; confianza en el presente, pero también confianza en un futuro común. Es por eso que reconstruir esa confianza está en la raíz de la propuesta de este presupuesto y de las reformas que acompañan este presupuesto. Llevar mayor previsibilidad, construir un sistema institucional más confiable y más duradero que sea capaz de representar a cada uno de los ciudadanos de nuestro país, a cada una de las visiones de nuestro país.

Debemos romper con la cultura de la resignación, con la idea de que no podemos cumplir estos objetivos sociales tan importantes. Y la raíz de ese cambio cultural está en la educación. Es ella la mayor herramienta que tenemos para construir esa sociedad más unida y más justa. Es a través de la educación que comenzamos a garantizar los plenos derechos de cada uno de los ciudadanos. Debemos romper, justamente a través de la educación, esa cadena en donde el más débil es el que más sufre y el que menos oportunidades tiene. Para ello hay tres grandes ejes que resaltar de este presupuesto y de todo el paquete de reformas. El primero tiene que ver con la garantía de los plenos derechos de cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Cada argentino, cada niño, cada niña, cada uno de los adultos mayores deben sentir que están en una sociedad más justa que les garantiza ese futuro brillante con el que sueñan todos los días. Para avanzar en ese camino el primer objetivo que nos hemos puesto fue reducir la inflación, el impuesto más dañino para aquellos que están en la pobreza.

Este año estamos reduciendo la inflación, pasando del 40 por ciento en 2016 al orden del 23 o 24 por ciento y el estimativo de inflación que contempla el presupuesto para el año 2018 es del 15,7 por ciento. La inflación afecta a los que menos tienen, porque son los más desprotegidos contra la suba de precios, que además, en general, afecta más a los bienes principales, a los alimentos. En la Argentina tenemos más de 4 millones de argentinos que están en la informalidad y a ellos no les cabe ninguna paritaria, por eso es tan nociva la inflación.

Para derrotar a la inflación debemos, además, reducir el déficit, y este presupuesto también contempla una caída de un punto en el déficit, llevándolo al 3,2 por ciento del producto bruto interno, con un crecimiento que está por encima de ese número, en el 3,5 por ciento para el año 2018.

Pero obviamente que no basta con reducir la inflación. Reconociendo la situación social, estamos potenciando programas que existían y que recibimos, como la asignación universal por hijo. Ya hemos aumentado en más de 300.000 los niños y niñas que la reciben a través de la incorporación de los monotributistas en la AUH —como se la conoce coloquialmente— y en más

de 40.000 niños y niñas de trabajadores temporarios, que también han sido incorporados. Y para 2018 contemplamos incorporar a 200.000 niños y niñas más.

También hemos tomado una decisión importante en esta situación, que es el aumento del seguro de desempleo, que había quedado en una cifra irrisoria de 300 pesos y la hemos elevado a 3.000 en el camino de reconocer la necesidad de acompañar, como decía antes, a aquellos que están en dificultades.

También hemos trabajado por nuestros jubilados con la reparación histórica, que no solo incorporó a más de un millón de jubilados para que recibieran lo que merecían, lo que es justo, sino que, a partir de la reforma previsional que ha sido votada la semana pasada en la Cámara de Diputados, incorporamos a más de un millón de jubilados también al 82 por ciento móvil, a aquellos que han tenido más de 30 años de aportes, y garantizamos que nunca más –como pasó dos veces en los últimos 4 años– haya jubilados que reciban una jubilación que no aumenta por encima de la inflación. Ahora está la garantía de que la jubilación siempre va a aumentar por encima de la inflación.

Y, finalmente, hemos lanzado la cobertura universal de salud que, de acuerdo al presupuesto, durante el año 2018 va a alcanzar a más de 15 millones de argentinos, garantizándoles una atención de salud y un derecho.

Pero obviamente –y como lo planteaba al principio– no basta con buscar cumplir con el rol del Estado, que es garantizar derechos individuales, sino que debemos también trabajar en conjunto para construir capital social. La base de esa construcción de capital social es el aumento de la confianza. La confianza de los ciudadanos en su Estado, la de un argentino en otro argentino y en la dirigencia en su conjunto se basa en la búsqueda de tres grandes objetivos: aumentar el empleo formal para reducir la informalidad, trabajar para dar mayores herramientas a aquellos que, a través del cooperativismo, buscan construir ese capital social en todo el país y ayudar a formar y capacitar a aquellos argentinos que necesitan un acompañamiento para reinsertarse en el mundo laboral.

En ese sentido, como parte del paquete de medidas, hemos comenzado con una reforma impositiva que busca fomentar la inversión para

mejorar y crear mayores puestos de trabajo. Necesitamos que casi el 16 por ciento de inversión sobre el producto que existe hoy aumente por encima del 20, ese es el objetivo que se pone el gobierno. Y en ese camino favorecemos la inversión a través de medidas directas como es la reducción del impuesto a las ganancias para aquellos que reinviertan sus utilidades del 35 al 25 por ciento y también de medidas históricas como es –finalmente– gravar la renta financiera en la Argentina. Así, aquellos que especulan con la renta financiera van a tener incentivos para salir de ella y para volcar los recursos en inversiones que generen mayor cantidad de puestos de trabajo.

Estas modificaciones se suman a la modificación del impuesto al cheque, que gradualmente comienza a ser tomado a cuenta del impuesto a las ganancias. Un impuesto que es considerado como uno de los más distorsivos. Nació como un impuesto temporal en tiempos de crisis y quedó establecido. Muchas veces, como miembro informante del proyecto de presupuesto en la Cámara de Diputados, me tocó hablar de la eliminación aunque fuera gradual de ese impuesto y hoy, finalmente, se da previsibilidad al eliminarlo totalmente, ya que será considerado a cuenta del impuesto a las ganancias.

Obviamente, no basta con todas estas medidas. También debemos trabajar para fomentar el cooperativismo. En ese sentido, quiero rescatar algo que seguramente va a ser comentado por el bloque Justicialista, dado que fue una modificación que sufrió la reforma tributaria a partir de una sugerencia de dicho bloque. Me refiero a eliminar el gravamen sobre la ganancia financiera de cooperativas y mutuales.

Como le expresó el ministro Dujovne al bloque, estamos convencidos de que hay que gravar esa ganancia financiera, aunque hay que debatirlo más profundamente a fin de no afectar a aquellas cooperativas que en muchos lugares del interior aportan a sus comunidades.

Además, lo estamos haciendo a partir de trabajar en la formación y capacitación de los cooperativistas que están dentro del Programa Argentina Trabaja. Ese programa tiene la visión de dejar la idea de dar un pescado a aquel que lo necesita y enseñarle a pescar. Fue un primer paso, pero creemos nosotros que falta el paso siguiente, que es cómo, a través de esa habilidad,

ese ciudadano, ese cooperativista, puede aportar más a su comunidad al capacitar a otros en la técnica de pesca –siguiendo con la imagen– o poniendo una pescadería. Multiplicar a través del trabajo conjunto y cooperativo. Ese es el objetivo que nos hemos puesto. El año que viene vamos a capacitar a más de 261.000 receptores y beneficiarios de Argentina Trabaja. También vamos a invertir en más de 25.000 microcréditos para aquellas cooperativas que muchas veces necesitan ese capital inicial para lanzar el proyecto que tienen.

Sabemos que un trabajo es el mejor plan social. Un buen empleo en blanco genera dignidad, genera buenos hábitos y una cultura colectiva distinta. Creemos en esa construcción de ese capital social.

También queremos acompañar a aquellos que a través de cooperativas hacen trabajo social en cada una de sus comunidades porque necesitan del apoyo de un Estado presente. Por eso hemos lanzado el salario social complementario para cada uno de ellos, que es la mitad de un salario mínimo, vital y móvil que se da a cada uno en esas cooperativas que demuestran ese trabajo social en sus comunidades.

Finalmente, también a través de la reforma tributaria y fomentando la búsqueda de mejorar la situación del empleo en blanco, estamos reduciendo el mínimo imponible para que sobre todo en los salarios más bajos el costo laboral se reduzca y así logremos que más argentinos entren a la formalidad y salgan de la pobreza.

En términos generales, también este gobierno ha buscado, en esa búsqueda de construir mayor confianza en el Estado, eliminar distorsiones que ha habido. Además del impuesto al cheque, en el acuerdo del pacto fiscal con las provincias hay un camino acordado para recorrer en conjunto, que es la reducción de los ingresos brutos y la inmediata disolución de las aduanas internas que se generan a partir del cobro de estos ingresos brutos de provincia a provincia. Para favorecer la inversión se debe eliminar el tedioso proceso de las DJAI, declaraciones juradas de importaciones.

También hay que construir confianza fuera de la Argentina, abriéndose al mundo con responsabilidad, con seriedad. El cuidado en construir relaciones de largo plazo es también un objetivo, que debe ser no solo del gobierno,

sino de la sociedad. Eso es también parte de la construcción de capital social.

El tercer eje es la infraestructura. La infraestructura también debe estar focalizada en estos objetivos que planteamos recién: el pleno derecho de cada uno de los ciudadanos: el derecho al libre tránsito, con inversión en el plan vial, que busca duplicar la cantidad de autopistas, duplicar la cantidad de pasajeros que vuelan en aviones en nuestro país, aumentando las rutas. Ayer estuvo el ministro Dietrich haciendo un detalle amplio de cómo ya se ve el impacto de estas modificaciones, incluso rompiendo mitos, como que Aerolíneas no puede crecer si tiene competencia, mostrando cómo podemos construir una aerolínea de bandera que no solo conecte a los argentinos entre sí, sino también a los argentinos con el mundo.

Me tocó ser miembro de la comisión bicameral cuando se estatizó Aerolíneas, como miembro de la oposición. Trabajé en conjunto con algunos senadores, como el senador Fuentes, para que lográramos ese objetivo y planteamos ahí también que estamos de acuerdo con la aerolínea de bandera, pero siempre pensando en que realmente conecte a todos los argentinos, como creemos que va en camino a hacerlo.

Por eso, en infraestructura es donde se ve uno de los objetivos más importantes que se ha planteado el gobierno en términos de relación política, que es fortalecer el federalismo.

Ayer, tanto el ministro Dujovne como el ministro Dietrich mostraban las inversiones que está habiendo en los distintos rubros en cada una de las provincias. Cada provincia está teniendo inversiones en términos de mejora de la conectividad aérea, vial, ferroviaria. Sabemos que falta. Pero es en ese camino que hemos construido este pacto fiscal con las provincias, convencidos de que fortalecer el federalismo es fortalecer también nuestra sociedad y el capital social de nuestro país.

Este plan de inversión contempla algo que para nosotros es una señal clara, porque muchas veces a la pobreza se la contempla solamente como no alcanzar un salario, un ingreso, o con no llegar a tener una determinada cantidad de pesos. Pero pobreza es también que la mitad de los ciudadanos de mi provincia no tuvieran cloaca, presidente; que una gran cantidad de hogares en la Argentina no tuviera agua corriente.

Por eso nos hemos planteado como gobierno, como sociedad –y lo planteamos en este presupuesto–, avanzar para que un ciento por ciento de los argentinos tenga agua corriente y un 75 por ciento cloacas para el final de 2019.

Y este presupuesto contempla ese camino incorporando a más de 646.000 familias a la red de cloacas y continuando la inversión que se lanzó este año para 4 millones y medio de cloacas en el conurbano bonaerense, en lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, e incorporando a más de 750.000 familias a la red de agua corriente.

También es parte de la pobreza la falta de vivienda digna. Y ese también es un derecho que estamos atendiendo en este presupuesto. A las obras ya terminadas –más de 35.000 viviendas se han terminado estos dos años–, este presupuesto contempla 66.000 viviendas a construir, cofinanciadas con las provincias, trabajando en conjunto con estas para incorporar 35.000 viviendas más que van a estar en ejecución durante el año.

Además, potenciando otro programa preexistente, estamos sumando un poco más de 140.000 beneficiarios al Pro.Cre.Ar.

Finalmente, con el objetivo de fortalecer el sistema educativo y la igualdad desde el sistema educativo, en un planteo que el presidente Macri hizo en la campaña que me tocó a mí lanzar como ministro de Educación y que ahora continúa el ministro Finocchiaro, estamos continuando la inversión en las salas iniciales, convencidos de que la mayor herramienta de equidad que tiene el sistema educativo es garantizar la educación inicial en una sociedad donde todavía tenemos a más de la mitad de los argentinos que no termina el secundario. De tal modo, tenemos mucho trabajo que hacer todavía en la cobertura de tres años, hemos avanzado en la de cuatro y estamos casi en plena cobertura en la de cinco años, pero son esos tres años de educación inicial que queremos garantizar para todos los argentinos los que aseguran duplicar la graduación del secundario de aquellos que asisten a esa educación inicial.

Este presupuesto es un mapa de ruta de lo que vamos a hacer y del sentido en el que queremos hacerlo. El objetivo de este presupuesto es, como planteé al principio, tener un país más desarrollado, más federal, una Nación más unida

con objetivos comunes, con un futuro común. Es, finalmente, tener ciudadanos con mayor dignidad.

La visión que tenemos es la de un Estado austero, concienzudo, que mire el desarrollo de sus ciudadanos, que sabe que estos ciudadanos lo exceden en creatividad y desarrollo social. Un pueblo que supera a su propio Estado y una sociedad que, a su vez, mejora el Estado. Ese es el círculo virtuoso del crecimiento social.

Este presupuesto, este paquete de reformas, fue debatido como van a seguir siendo debatidas todas las propuestas. Y voy a usar la palabra “debatir” en lugar de “discutir”. Discutir, en su raíz, quiere decir “sacudir para separar”. Yo prefiero la palabra debatir. La idea de que podemos encontrar puntos en común, como hemos encontrado con muchos senadores.

Este gobierno no viene con ninguna verdad revelada. Viene a construir un futuro común. Este gobierno no mira de dónde viene aquel que viene a plantear una idea, sino adónde quiere ir, sabiendo que ese querer ir, ese destino común de un país mejor es el que nos debe unir, sabiendo que ese consenso que debe encontrarse en esta Cámara, en este Congreso Nacional, es el que guía a una democracia que tiene a este Congreso como a su templo.

Es aquí, en esta pluralidad de ideas, pluralidad de voces, que encontramos la riqueza de nuestra República. Y es en esa construcción común, de herramientas fundamentales como este presupuesto, que vamos a encontrar la unión, dejar atrás la división, construir un país mejor y a lograr, finalmente, como sociedad, que todos los argentinos dejemos atrás la pobreza. Que todos los argentinos dejemos atrás la pobreza. Y así construyamos en conjunto un futuro mejor para nosotros, para nuestros hijos y para todos los habitantes del mundo que quieran habitar este suelo.

Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidenta. – Gracias a usted, senador.

Tengo entendido que van a dividirse veinte minutos cada una las senadoras Fernández Sagasti y Sacnun.

Comienza la senadora Fernández Sagasti.

Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señora presidenta.

La verdad es que estoy sorprendida. Pensé que el informe del miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda nos iba a poder dilucidar más acabadamente cuál era la visión del gobierno de este paquetazo de deuda y de ajuste que estamos tratando en una forma maratónica hoy. Pero, en realidad, nos encontramos básicamente con un conglomerado de frases inconexas y también frases preocupantes, ¿no? Porque que la pobreza sea cultural y que venga de un exministro de Educación y un presidente de la Comisión de Hacienda, la verdad es que es muy preocupante para los argentinos. Pero, bueno, tendremos acá mucho tiempo para debatir esos conceptos que, la verdad, no tienen nada que ver con nuestras creencias políticas y con nuestra militancia.

Pero aquí estamos, señora presidenta, para seguir en esta maratón de ajuste, en esta maratón de saqueo de cajas previsionales, de desfinanciamiento de políticas sociales. Es una maratón por lo menos falsa o mentirosa porque siempre, por supuesto, ganan los mismos: aquellos que se denominan “meritócratas”, pero corren con el auto que les regaló el padre mientras todos los argentinos —la mayoría de los argentinos— los siguen a pie.

Primero, quiero dejar algo en claro, para todos los argentinos y las argentinas que están siguiendo esta sesión: que aquí estamos asistiendo a un simulacro de debate. Este Senado, hace algunos años, se ganó el mote de “la Banelco”. Todos lo recordarán. En esos tiempos, la ministra Bullrich no estaba a cargo de la represión del pueblo cuando se movilizaba —como ahora—, sino que estaba a cargo de bajarles jubilaciones y remuneraciones a los trabajadores. Pero más allá de la connotación económica, creo que este Senado y la Comisión de Hacienda han sido más rápidos que una transferencia electrónica. Porque, como decía el senador Rodríguez Saá, todavía no había llegado la media sanción del proyecto de reforma tributaria al Senado ni a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Personalmente, me encargué de llamar a la Secretaría de Hacienda y Presupuesto para conocer el dictamen definitivo, la media sanción. Dicho sea de paso, fue bastante desprolija la sesión de Diputados, arreglando números y cambiando artículos como si atrás de eso no estuvieran la vida, los sueños y los proyectos de

millones de argentinos a través de, por ejemplo, una reforma tributaria. Creo que si vamos al shopping e intentamos comprar una hamburguesa y unas papas fritas van a tardar más de lo que llevó en la comisión el tratamiento del despacho de reforma tributaria.

Pero no concuerdo con que esto es a libro cerrado. Para mí es llana y totalmente un tratamiento a ciegas. Porque la verdad es que no teníamos el contenido de la ley de reforma tributaria cuando se aprobó en una hora y cuarenta minutos en la Cámara de Diputados. ¿Y sabe qué, señor senador? No hubo debate. Porque el debate se entiende cuando uno puede intercambiar opiniones, proponer con la voluntad y la buena fe de contribuir a un mejor proyecto, aunque tengamos diferentes posiciones. Pero esto no sucedió. Y no se le permitió no solamente a la oposición, sino tampoco a los propios senadores del oficialismo para poder contribuir a una mejor ley.

Entonces, esto es simplemente una puesta en escena, un simulacro de debate. Hoy, nosotros nos aprestamos a intentar debatir o explicar a los argentinos lo que está pasando con esta maratón de ajuste.

La reforma tributaria, como dijimos en reiteradas ocasiones y hasta el cansancio en nuestro bloque en la Cámara de Diputados, es parte de un paquete que no solo incluye la reforma tributaria y el consenso fiscal. También incluye el ajuste previsional y la reforma laboral, cuyo único y principal objetivo es ajustar por el lado de los trabajadores y de los jubilados y darles beneficios a las grandes corporaciones.

La reforma previsional —todos lo sabemos y acá lo discutimos— recorta haberes e ingresos a más de 7 millones de jubilados y a más de 8 millones de beneficiarios de asignaciones familiares, de pensiones no contributivas y de la asignación universal por hijo.

Esta reforma tiene dos lineamientos. El primero podría definirse como una reducción de algunas cargas impositivas y alguna modificación de impuestos internos. Entre las reducciones, podemos destacar la del impuesto a las ganancias para las empresas que reinviertan utilidades.

Pero acá tengo un punto de vista diferente de lo que intentó explicar el miembro informante.

Primero, nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, con que se generen incentivos a las inversiones de capitales, a no perder el trabajo. Incluso, lo mejor podría ser que se cree trabajo. Pero la fórmula que ustedes traen en este proyecto de ley no garantiza eso, todo lo contrario. Nadie va a controlar que este dinero que es de los contribuyentes vaya a generar trabajo o por lo menos que no haya despidos o que se invierta en capitales. Simplemente, puede ser que, con las grandes retribuciones que tienen por las rentas financieras que ustedes crearon, puedan invertirlo en LEBAC y timbear con la plata de los contribuyentes.

Otra aclaración más que quiero hacer es que el gravamen a la renta financiera que hoy proponen ya se produjo —y nosotros lo votamos, yo era diputada nacional en ese momento—, porque la renta financiera nosotros la gravamos en 2013 y ustedes en 2016 la sacaron y hoy la vuelven a proponer. Esa es la seriedad con la que el equipo económico trata las finanzas públicas y el programa de gobierno del presidente Mauricio Macri.

Pero creo que, más allá de lo que bien decía el miembro informante sobre los pequeños cambios que se pudieron hacer en la Cámara de Diputados, esta reforma sigue beneficiando a las grandes corporaciones. Y lo voy a graficar en un eje que es el de la reducción de los aportes patronales, sobre lo que no escuché que el miembro informante hiciera referencia.

Para que todos lo tengamos en cuenta, la reducción impositiva que resultará de la transferencia de los ingresos de la seguridad social a las grandes corporaciones, a final de 2022, será de una módica suma de 153.000 millones de pesos; 45 de cada 100 pesos quedarán en manos de compañías que tengan más de 200 trabajadores, que representa al uno por ciento de los empleadores del país; 19 de cada 100 pesos de esa suma de transferencia del sistema previsional a las grandes corporaciones quedarán en manos de las empresas que tengan menos de 9 empleados, esto significa el 89 por ciento del empresariado nacional, y las grandes cadenas comerciales se van a quedar con un descuento de un 40 por ciento de lo que deberían abonar al sistema previsional.

Para que nosotros lo grafiquemos mejor, el beneficio sectorial que representa esta medida

es de 15.600 millones de pesos anuales, lo que significaría poder pagar 180.000 jubilaciones mínimas al valor de hoy por el lapso de un año.

Bajar las contribuciones patronales, señores senadores y señoras senadoras, no va a generar empleo. Y lo vamos a repetir hasta el cansancio. Y lo vamos a repetir porque es parte de la experiencia argentina. Y aunque a ustedes no les guste escucharlo, esto ya lo vivimos en los noventa, porque si fuera que los argentinos no hubiéramos vivido este proceso, bueno, podríamos darle el beneficio de la duda, pero la verdad es que ya lo vivimos y no solamente acá, sino que se probó en numerosos países del mundo y ha fracasado rotundamente.

¿Y cuál fue la experiencia de los noventa? La experiencia de los noventa fue que bajaron contribuciones patronales y pasamos de un 6,5 por ciento de desocupación a un 19,7 por ciento de desocupación. Y en el período 2003 a 2015, donde no se tocó ni un centavo de las contribuciones patronales, pasamos del 20,4 por ciento de desempleo al 5,9 por ciento de desempleo.

Pero todo esto tiene algo más profundo y está vinculado con el paquetazo de ajuste del que venimos hablando. Esto tiene que ver también con el objetivo de desfinanciar a la ANSES. Ahora, bajan los aportes patronales; antes, quitaban el porcentaje que se destinaba de ganancias a la ANSES y como principal objetivo de la falsamente denominada “reparación histórica” permitieron el remate de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y esto no fue dicho por mí, sino por el propio titular del organismo, cuando en el consejo de dicho organismo dijo que para atender los compromisos de la reparación histórica, cuando ya no quede plata del blanqueo, no van a alcanzar las grandes utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y, por supuesto, van a tener que malvender las acciones.

Es un negocio entre amigos y ya lo hicieron. Ya le vendieron a Mindlin, ya le vendieron a Solvay Indupa, a una empresa controlada por Odebretch; ya invirtieron en fondos vinculados con Caputo y, seguramente, como frutilla de la torta, en un horizonte no muy lejano, van a venderle las acciones de Telecom a Clarín, porque después del regalo de fin de año de la fusión con Cablevisión esto es lo que va a suceder y, además, le van a vender el 10 por ciento que

el Estado nacional tiene de Clarín para que el grupo siga creciendo.

Vamos con el relato oficial: según el gobierno nacional, con esta reforma tributaria se estarían ahorrando 1,5 por ciento del PBI de la presión tributaria, sumado –dice el gobierno nacional– a los dos puntos que se habrían ahorrado con las medidas de 2016.

Pero repasemos: ¿cuáles son esas medidas que supuestamente hicieron que bajara dos puntos la presión tributaria? Apenas asumió el presidente Macri, a unos días de asumido el presidente Macri, se comenzó con esta carrera extraordinaria de transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados. Entonces, nos anoticiamos de la baja de retenciones a las mineras, a la soja, luego vino la baja a los grandes patrimonios, luego vino el blanqueo, que posterior e inmediatamente nos enteramos de que era para amigos, socios, hermanos y parientes del gobierno. Sin embargo, a más de dos años de esas medidas, todavía no nos han explicado, o por lo menos a mí no me lo han explicado, cómo generó empleos ese tipo de medidas, cuáles fueron los resultados de esas medidas a más de dos años de tomadas.

La verdad es que les tengo una muy mala noticia. Por ejemplo, en el sector minero no solamente no se creó un solo puesto de trabajo, sino que a mediados de año el sector minero lideró el ranking de despidos de la República Argentina.

Un aspecto que también quiero tener en cuenta, dado que en esas frases que decía el miembro informante hablaba mucho de las provincias, del federalismo. La verdad es que con este ajuste previsional, laboral e impositivo, respecto del federalismo, sin duda, las provincias también van a terminar perdiendo. Perderán las provincias porque la ley, más que reducir impuestos, lo hace a costa del impuesto a las ganancias y es un bien coparticipable. O sea que cada peso que dejen de tributar las corporaciones es en detrimento a las arcas de las provincias, de todas las provincias. Perderán las provincias porque la ley, con la excusa de reducir los aportes patronales a los salarios más bajos, deroga un sistema que permitía que las empresas del interior, de manera diferencial, según la región del país en donde se localizaran, acreditaran un porcentaje de remuneraciones como crédito fiscal del IVA.

Las provincias pierden porque no hay un punto, una sola coma, en esta reforma tributaria que genere incentivos para las economías regionales y las economías de las provincias. Solamente estos beneficios van a producir trabajo, si es que producen, en cualquier lugar de la Argentina, porque los beneficios son genéricos y es por tamaño de empresa. Entonces, al gobierno nacional no le interesa si el trabajo se genera en Capital Federal o en el pueblo más alejado del interior del país. ¿Y saben qué? A la gente que vive en esos pueblos alejados del país, como puede ser un vecino de Bowen, de General Alvear, de Mendoza, o de Palmira en San Martín, de Mendoza, sí le interesa dónde se generan esos empleos. ¿Saben por qué? Porque ahí transcurre su vida, allí tienen sus proyectos de vida, para dejarles un mejor lugar para vivir para sus hijos. Además, esos trabajos se generan con las arcas que deberían entrar a las provincias donde habitan.

Por eso quiero decir claramente, señora presidenta...

–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Juan Carlos Marino.

Sra. Fernández Sagasti. – ...Perdón, señor presidente, que aquí no hay ningún consenso federal. Aquí, como se dijo, hay, literalmente, apriete. Solo hay arreglos sobre la hora para llevarse un peso más.

De hecho, estaba leyendo dos notas, una del diario *Clarín* y una del diario *La Nación*, que básicamente son iguales. Se ve que salieron de los mismos voceros de la casa de gobierno, que dicen que el presidente anda vociferando que cuatro gobernadores lo traicionaron. ¿No? Creo que todos lo vimos. Y que los van a tener entre ceja y ceja para ver cómo se comportan con las próximas leyes. Entiendo que será con la reforma laboral, la reforma política. Pero le tengo una muy mala noticia al presidente: los gobernadores tienen en claro que esta política económica nos lleva al precipicio. Arreglan lo que pueden y, después, si te he visto, no me acuerdo.

No hay consenso de visión de Estado ni convicción, señor presidente. Pueden sacarse una foto obligatoria, pueden sacarse cinco fotos obligatorias, pero, cuando el fracaso sea

evidente, no van a ser cuatro los que tengan enfrente. El presidente va a mirar atrás y creo que tal vez quede Marcos Peña detrás, pero los demás gobernadores, seguramente, van a estar enfrente.

El macrismo sostiene que las empresas no invierten en la Argentina porque los costos laborales –como el oficialismo los denomina– y la gran carga impositiva no permiten generar inversión. Pero, para nosotros, sin impuestos no hay obra pública y sin salarios no hay demanda. Y si eso no sucede, solamente queda la recesión y el achicamiento del Estado.

El problema con la integración al mundo, a la que también hizo mención el miembro informante, es que no quieren reconocer que el mundo real, no los burócratas del FMI, nos da la razón con el tema de la demanda. El presidente de la Nación y su equipo económico tienen por lo menos una visión *naïf* de la integración económica y de la integración de la República Argentina al mundo. Ellos creen que porque los aplauden algunos burócratas en el mundo vamos bien, pero en los Estados Unidos no nos dejan entrar limones porque protegen a sus productores, Gran Bretaña avanza con el Brexit y la reunión de la OMC acá, en la ciudad de Buenos Aires, fue un fracaso rotundo. Esto último no fue dicho por mí, sino por los propios funcionarios del gobierno. Nos regalamos ante la Comunidad Europea y ni así quieren firmar con nosotros el Mercosur.

Entonces, por lo menos, déjenme decirles que tienen una visión zonga de la integración del mundo a la Argentina. Parecemos mendigos de los más poderosos del mundo al imaginar una apertura comercial, cuando todo el mundo está cerrando sus economías para proteger a sus productores y generar un mercado interno fuerte.

Tienen, como les dije, una política económica errática. Les sacan más de 100.000 millones de pesos a los bolsillos de los jubilados, a aquellos jubilados que compran en el almacén, a aquellos jubilados que van a la farmacia, y pagan 360 millones de intereses en LEBAC. Por convicción o por contradicción, del equipo económico del gobierno están dando una mala señal al sector económico. Con estas señales están diciendo: “No inviertan, no generen trabajo. Timbeen con la plata”. Han bajado el consumo, han bajado los

ingresos de los argentinos y así y todo duplican el déficit fiscal.

Esto, señores senadores, ya no es para mí neoliberalismo, esto es “naboliberalismo”. En el mundo hay movimientos de empresarios que dicen que con la baja de impuestos ya no se genera trabajo, sino que se promueve con inversión y que es la demanda la que tracciona...

Sr. Presidente (Marino). – Senadora: le informo que lleva consumido el 50 por ciento de su tiempo.

Sra. Fernández Sagasti. – Redondeo...

Sr. Presidente (Marino). – Usted utilice el tiempo que desee, se le descontará a la senadora Sacnun. Adelante.

Sra. Fernández Sagasti. – Redondeo, senadora Sacnun. (*Risas.*)

Gracias, señor presidente.

Para que algunos no se pongan incómodos, no voy a citar a Perón, sino que voy a citar a Nick Hanauer –uno de los primeros inversionistas de Amazon–, de esta corriente empresaria que dice que es la demanda la que genera el crecimiento y la inversión. Sostiene Hanauer que un legislador que crea que los ricos son creadores de empleo, y que por ese motivo no deberían recaer impuestos en ellos, estaría haciendo una política terrorífica porque los empleos son una consecuencia de la relación entre los consumidores y la empresa y son los consumidores los que pueden hacer variar la demanda y la contratación de los trabajadores.

Para terminar, para ir redondeando, voy a dar un ejemplo. Supongamos que somos dueños de un restaurante y nos bajan las contribuciones patronales en 300 pesos cada uno. Estamos hablando de si tenemos diez mozos, para cocina todos, 3.000 pesos. La verdad es que la última decisión que toma este señor va a ser la de contratar nueva gente. No la va a tomar si no hay consumo, si no tiene más mesas que atender, si no tiene más pedidos que llevar.

Entonces, por eso, señor presidente, no podemos acompañar el despacho de comisión que ustedes nos presentan. Ustedes nos dicen que nosotros somos el pasado y, en nombre del futuro –al que nosotros creemos que hay que integrarnos al mundo, con inteligencia, con valor agregado, apostando a la ciencia y la tecnología, apostando a la educación, a la

industria nacional y al trabajo—, en nombre de ese progreso, ustedes achican el mejor programa de educación digital que tuvo la Argentina. Ese programa es el programa Conectar Igualdad y permitió que 4.500.000 pibes pudieran acceder a una netbook y conectarse a Internet.

Ustedes, que son el futuro. Y nosotros, que somos el pasado—como ustedes dicen—, hicimos que dos satélites, el ARSAT I y el ARSAT II, estuvieran en el espacio. Ustedes dicen que son el futuro, pero les cortan y les coartan el presupuesto a las universidades y a la ciencia y la tecnología. Nosotros—que ustedes dicen que somos el pasado— invertimos en el INVAP y ustedes no consiguen venderle biodiésel a los Estados Unidos.

Con todo respeto, señor presidente, el progreso de una nación se da cuando la natural alternancia democrática que existe entre un gobierno y otro se hace para mejorar las cosas que no estaban bien y para potenciar las que sí estaban bien.

No podemos acompañarlos, señor presidente, porque el supuesto futuro que ustedes nos quieren vender, ¿saben qué?, tiene mucho, pero mucho olor a pasado. Y ustedes eligieron el peor camino. ¿Saben qué?, alimentados por el odio, decidieron representar los intereses de las grandes corporaciones e hicieron lo mismo esta campaña: dijeron que iban a hacer una cosa e hicieron otra.

Para construir ese futuro que nosotros imaginamos para la Argentina, integrada al mundo inteligentemente, con valor agregado, defendiendo el trabajo, defendiendo la industria nacional, defendiendo la ciencia y tecnología, ¿sabe qué, presidente?, hacen falta mucho más que *slogans*.

Si no cambian la política económica, lamentablemente, no van a poder contar con nosotros. Vamos a votar en contra de este despacho—como hizo el bloque de Diputados del Frente para la Victoria - PJ—, que ustedes nos presentan aquí a libro cerrado, porque nosotros tenemos los ojos muy bien abiertos.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Marino). — Gracias, senadora.

Senadora Sacnun, tiene quince minutos. Muchas gracias.

Sra. Sacnun. — No. Tengo entendido, discúlpeme, que tengo veinte minutos; son cuarenta minutos.

Sr. Presidente (Marino). — Sí, pero consumió veinticinco minutos la senadora...

Sra. Sacnun. — Bueno, la verdad es que les voy a decir que no nos dejaron debatir en comisión. No pudimos...

Sr. Presidente (Marino). — Senadora, quédese tranquila que yo aplico el sentido común todas las veces que presido.

Sra. Sacnun. — La verdad es que quiero hablar y quiero expresarme, porque es lo que entiendo han tratado...

Sr. Presidente (Marino). — Perdón. Le pide una interrupción el senador Fuentes.

Sr. Fuentes. — En la Comisión de Labor Parlamentaria, el criterio que determinó la totalidad de los bloques es que, siendo la última sesión del año y habiendo temas de la densidad e importancia como los que vamos a tratar, los tiempos eran indicativos y se iba a ser flexible en la necesidad de los legisladores de poder expresarse en la última sesión del año. Eso fue lo acordado. Se establecieron minutos para los expositores, ¿no es cierto?, que defienden los proyectos, pero con ese criterio: indicativo.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Marino). — Gracias, senador.

Lo que me informan la Secretaría y los presidentes de bloque es que se consensuó en cuarenta minutos. Y entiendan algo—y saben que esta Presidencia actúa así—: voy a ser permisivo dentro de los límites razonables, porque somos muchos para hablar y es un tema no menor. Estamos tratando el presupuesto nacional.

Adelante, senadora Sacnun.

Sra. Sacnun. — Muchas gracias, presidente.

Bueno, yo sí lo voy a citar a Perón: “La única verdad es la realidad”. Y después de escuchar al miembro informante del oficialismo respecto de la necesidad de ratificar los derechos humanos a través del presupuesto nacional, sabemos que el presupuesto nacional, justamente, lo que expresa es cuál es el plan de gobierno, cuáles son las prioridades que el gobierno estima que son importantes para el próximo año. No puedo menos que señalar que se vulneran fuertemente los derechos humanos consagrados en la Cons-

titudin Nacional. Que se vulnera un principio esencial que fue incorporado oportunamente a nuestra Constitución Nacional y que tiene, en consecuencia, rango constitucional, como es la progresividad en el marco de los derechos.

La progresividad en el marco de los derechos ha sido fuertemente vulnerada como consecuencia de que se avanzó en esta reforma previsional conculcando derechos constitucionales adquiridos por miles y miles de jubilados. Y además porque se aplica una fórmula en forma retroactiva. Por lo tanto, seguramente constituirá uno de los basamentos para plantear diferentes acciones de amparo para garantizar esos derechos constitucionales.

Yo creo que uno de los problemas más importantes que afrontamos es el déficit institucional que queda a la vista con el tratamiento sumarísimo que se le ha otorgado al presupuesto y a la reforma tributaria; esta batería de leyes que constituye lo que el presidente Mauricio Macri dio en llamar “el reformismo permanente”. Este reformismo permanente que el presidente lanzó un día después de las elecciones nacionales en el Centro Cultural Kirchner frente a gobernadores, legisladores nacionales y funcionarios. Fue el 30 de octubre.

La verdad es que ese reformismo permanente que traía aparejada esta batería de medidas, la ley de responsabilidad fiscal en el marco del consenso fiscal –que se terminó suscribiendo oportunamente con 23 de los 24 gobernadores–, la reforma previsional y la reforma laboral, conculcan fuertemente los derechos adquiridos por el pueblo argentino, que debieran todo el tiempo estar ampliándose y no significar un retroceso.

Yo estoy convencida de que el auditorio del presidente Mauricio Macri, señor presidente, ese 30 de octubre en el Centro Cultural Kirchner, no era quienes estaban allí presentes. El auditorio estaba constituido –sin lugar a dudas– por la delegación del Fondo Monetario Internacional que venía a la República Argentina a auditar las cuentas públicas.

Quiero ahondar en el análisis político de los hechos tal como se fueron sucediendo, porque me parece que esto también aclara algunas cuestiones. El mismo día que llegaba la delegación del Fondo Monetario Internacional se lanzaba el programa de reformismo permanente y al otro

día aparecía en todos los medios de comunicación una foto, esta.

–La senadora exhibe una fotografía.

Sra. Sacnun. – La foto de la gobernadora Vidal junto a Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esta foto que apareció en todos los medios de comunicación –sin lugar a dudas– no fue una foto inocente, fue una foto que tuvo como objetivo dar inicio a las maniobras extorsivas respecto de los gobernadores. ¿Por qué? Porque al otro día se tenían que reunir con el presidente y, teniendo conocimiento de que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires iniciaba una demanda respecto del Fondo del Conurbano Bonaerense y la pretensión que tiene respecto de lo que le corresponde a su provincia, la verdad es que los gobernadores no iban a venir con la misma conducta con la que vinieron en su momento Estanislao López y Pancho Ramírez, atando los caballos en la pirámide de Mayo de la plaza de la Victoria –actual plaza de Mayo–, sino que iban a venir con una actitud un poco más genuflexa a negociar con el gobierno nacional. Y así fue como se arribó a un consenso fiscal absolutamente perjudicial para las provincias y que ostenta un centralismo absoluto sobre el que voy a ir abundando.

Decía que se llega a esta reunión el 8 de noviembre, el presidente dialoga con los gobernadores y, la verdad, es que les manifiesta expresamente –después el audio estuvo circulando– una orden, prácticamente, que era la de que cuando negociasen las paritarias con el sector público de sus provincias tuvieran a bien tener en cuenta que debían obtener como resultado una no competencia con el sector privado que luego iba a tener que negociar paritarias. Es decir, les dijo: “Negocien paritarias a la baja para no dar un mal ejemplo a los trabajadores del sector privado”. ¿Qué significa esto? Esto significa, sin lugar a dudas, ajuste para los maestros, ajuste para los policías, ajuste para los judiciales, ajuste para las enfermeras y los médicos de los hospitales públicos. Ajuste.

El presupuesto –como decía antes– expresa el programa de ajuste y de endeudamiento en el que está sumida la República Argentina. El perjuicio –el saqueo– a los jubilados, a los beneficiarios de la asignación universal por hijo, a

los beneficiarios de las asignaciones familiares en el caso de los trabajadores registrados, menos obra pública.

Es una mentira, porque no se encuentran contempladas las reformas... Debemos recordar que el presupuesto se eleva en el mes de septiembre, cuando aún no habían sido mandadas al Parlamento de la Nación las reformas que después fueron sancionadas. Por lo tanto, muchas de las partidas que están incluidas en este presupuesto –cuyo tratamiento ha sido sumárisimo en el Senado de la Nación– seguramente ya han caído en letra muerta y no se van a poder aplicar porque ya ha habido cambios, ha habido modificaciones.

Están sobreestimados los principales ingresos del presupuesto nacional 2018. Luego de la reforma tributaria, bajo la premisa de reducción de la presión fiscal destinada a reducir las cargas fiscales de las grandes empresas, se debe compensar esa caída de ingresos. ¿Y cómo se va a compensar?: con más ajuste, sin lugar a dudas.

La subestimación de la inflación en los presupuestos macristas es algo a lo que ya estamos acostumbrados. De hecho, en el presupuesto que se está ejecutando actualmente había una estimación de una inflación de aproximadamente un 20 por ciento y fue del 40, la inflación más alta desde la crisis de 1989. Por suerte, las paritarias, por lo menos, cerraron al 30 por ciento, lo cual permitió que los trabajadores argentinos solo perdieran el 10 por ciento del poder adquisitivo de sus salarios. Pero si a la hora de negociar paritarias nos hubiéramos guiado por los índices de inflación que estimaba el gobierno nacional, evidentemente, los trabajadores hubieran perdido aún mucho más.

En el presupuesto 2018 estiman una inflación del 15,7 por ciento, de muy dudoso cumplimiento, permítame decirle señor presidente.

Los gastos en total van a crecer tan solo un 0,3 por ciento. Pero esto será así si se toma como real el índice del 15,7 por ciento estimado por el gobierno nacional. Si se excede, como ha ocurrido en el presupuesto en ejecución, seguramente, los gastos van a ser menores, con lo cual el ajuste será todavía mayor. Pero, ¿qué hacen? Disimulan detrás de los índices que prevén de inflación cómo achican el gasto y disciplinan a los trabajadores argentinos, utilizando la ley de leyes, el presupuesto nacional, imponiendo

una baja a las paritarias; esas paritarias libres que fueron recuperadas durante nuestro gobierno. Esta metodología nunca fue utilizada por nuestro gobierno porque, justamente, lo que se quería era respetar los derechos de los trabajadores argentinos, es decir, discutir sus salarios en paritarias libres y, fundamentalmente, que tuvieran garantizado su poder adquisitivo, que la inflación no le gane al salario, tal como ocurrió en nuestros doce años de gobierno.

La proyección que más me preocupa es la del consumo, porque lo terminan de destrozar. Ni hablar de lo que ocurre como consecuencia de los 100.000 millones de pesos que les sacaron a jubilados, a niñas y niños de asignación universal por hijo, a beneficiarios de asignaciones familiares y a discapacitados. Esos 100.000 millones se iban a volcar al mercado interno. Sin lugar a dudas, iban a dinamizar la economía del país. Pero, claro, ustedes tienen una teoría económica monetarista. Entonces, creen que van a bajar la inflación destruyendo el consumo interno. Y la verdad, señor presidente, es que esta receta no funciona. Ni siquiera diría que es zonza. Me parece que es un calificativo ingenuo hablar de zonzo. Yo diría que es anacrónico.

Cuando el mundo se ha dado cuenta de que el mercado interno, la industria nacional y la defensa de los puestos de trabajo son centrales para mantener una economía en funcionamiento, el gobierno nacional hace exactamente lo contrario. Además, las importaciones están fuera de control.

Otra de las premisas incumplidas tiene que ver con el crecimiento.

En el 2016, el crecimiento fue negativo en un 2,3 por ciento, cuando se había estimado un crecimiento del 3 por ciento. En el 2017, se va a terminar con un 2,5 por ciento menos de lo estimado. Ni que hablar de lo que van a recibir las provincias argentinas.

En una muestra de centralismo que, realmente, no se veía desde hace muchos años, los únicos grandes beneficiados van a ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, a quien no queremos perjudicar, aunque aspiramos a que se respete y se dé a cada uno lo que le corresponde.

Mi provincia, la de Santa Fe, desde noviembre de 2015 tiene una sentencia a su favor. Y la

deuda, que es de alrededor de 51.000 millones de pesos, no se encuentra incorporada al presupuesto nacional. Sin embargo, rápidamente, la plata de los jubilados se la van a entregar a María Eugenia Vidal. Y quiero decir que parte de esa plata también pertenece a jubilados bonaerenses. En efecto, de los 100.000 millones, unos 34.000 millones pertenecen a los jubilados bonaerenses.

La gobernadora decidió, al firmar el consenso fiscal, sacar el dinero del bolsillo de los jubilados porque no cree que haya que inyectarlo en el mercado interno.

Sr. Presidente (Marino). – Le solicito que vaya cerrando.

Sra. Sacnun. – Quiero darle un par de datos de la Unión Industrial Argentina y voy redondeando: el empleo registrado en el sector manufacturero exhibió en septiembre de 2017 una caída del 0,26 por ciento con respecto al mes anterior, en tanto el empleo asalariado registrado total experimentó incrementos en los últimos meses. Este comportamiento se debió al aumento de monotributistas, emprendedores.

Recuerdo cuando Esteban Bullrich hablaba del emprendedurismo como una de las salidas para el desarrollo de la República Argentina. Miles y miles de pymes cerradas, más de 100.000 puestos de trabajo perdidos.

El mercado de trabajo en el Gran Rosario: una caída estrepitosa. Acaban de despedir a 35 trabajadores en la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán. Hoy hay una marcha en Rosario, en este momento, pidiendo al Ministerio de Trabajo de la provincia que intervenga porque se están terminando los procedimientos preventivos de crisis en mi provincia. Vencen el 31 de diciembre. Hoy, como la empresa Vassalli, que estaría por despedir alrededor de 52 trabajadores, hay diez empresas más en las que se da este vencimiento en el marco de estos procedimientos.

Respecto al cooperativismo, hablar de cooperativismo, de la herramienta por excelencia de la economía social, el cooperativismo, el mutualismo diciendo que van a ser herramientas importantes e incluir dentro del proyecto de reforma tributaria un gravamen con ganancias a las cooperativas y a las mutuales –por supuesto tuvieron que sacarlo frente a la presión social que se generó, la presión de todos aquellos

cooperativistas y mutualistas que defienden esa herramienta de la economía social, que en Santa Fe sabemos lo que implica–, es realmente no conocer lo que significa el cooperativismo.

Las cooperativas no pueden ser gravadas con ganancias porque no tienen ganancias...

Sr. Presidente (Marino). – Senadora, lleva cuatro minutos excedidos. Si puede redondear.

Sra. Sacnun. – Estoy terminando.

Son el regreso de la década del noventa. Domingo Cavallo lo dijo. Provocativo –dice *Clarín* el 9 de octubre de 2017–, Domingo Cavallo: “Hay una gran coincidencia entre Macri y los noventa”. ¿Sabe qué más dice?: “Están orientados”.

Hay que ver hacia dónde están orientados: si hacia el pueblo, si hacia la defensa de los trabajadores, del salario. Evidentemente no están orientados. Han rematado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Por eso quiero decirle, señor presidente, que, por más que lo intenten, no pueden disimular lo que son, lo que defienden y qué intereses son los que están defendiendo.

Bajo el nombre de reparación histórica escondieron un blanqueo fenomenal de capitales para amigos, hermanos y socios del poder. Bajo el nombre de financiamiento productivo –acaba de llegar un proyecto que seguramente vamos a tratarlo pronto– se esconde la vuelta al mercado de capitales, es decir, volvemos, tal como lo dijimos cuando votamos negativamente la llamada reparación histórica, esa ley ómnibus, a las AFJP y al daño que eso ha significado para la República Argentina.

Hoy estamos con un déficit comercial de 9.000 millones de dólares y la verdad es que venimos de una situación de mayor complejidad porque representa el 14 por ciento de las exportaciones que lleva adelante la República Argentina.

Para terminar, a pesar del amplio fracaso de los programas de reforma, vemos que se ha tratado de hablar de sinceramiento de tarifas, cuando se hablaba de tarifazos; de inserción al mundo, cuando hablamos de apertura de las importaciones; reordenamiento del gasto, cuando se hablaba de ajuste fiscal. Ni las palabras ni el cambio de actores van a poder disimular que estamos pasando a través del túnel del tiempo

y que, sin lugar a dudas, nos están llevando a un enorme retroceso.

Por eso, no vamos a acompañar el proyecto de presupuesto nacional.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Marino). – Gracias, senadora. Senador Aguilar: tiene la palabra.

Sr. Aguilar. – Muchas gracias, presidente.

Quiero hacer unas breves consideraciones, que tienen que ver con lo siguiente. Hay un país que, cuando uno se aleja unos pocos kilómetros de la Capital Federal, retrocede varias décadas en condiciones de infraestructura y retrocede varias décadas en indicadores sociales. Es un país en el que más de la mitad de las provincias tiene, aproximadamente, la mitad del PBI per cápita promedio. Es decir, donde un conjunto de provincias tiene un PBI per cápita que es igual o más bajo que el de la mayor parte de América Latina. Y donde hay provincias del centro que tienen –sobre todo, la Capital Federal– niveles de ingreso similares a los del mundo desarrollado.

Hay un país donde, cuando uno se aleja algunos kilómetros, retrocede mucho en cuanto a la calidad de la mano de obra, en cuanto a la densidad del tejido industrial y en cuanto a la capacidad de nuestras empresas para agregar valor agregado y para generar empleo.

Hay un país en que cuando uno está en la zona norte, cuesta más traer la producción a la Capital Federal que lo que cuesta llevarla desde los puertos de la Capital Federal al otro extremo del mundo.

Hay un país que tiene una enorme diferencia en cuanto a la calificación de la mano de obra, porque el deterioro del tejido industrial desde hace por lo menos cuarenta años ha determinado que esas calificaciones se vayan perdiendo. Y no solo de la mano de obra, sino también de las capacidades empresariales.

Es decir, hay un país que no es un país, sino que es dos o tres países. O al menos dos países.

Ahora bien, en ese país, a nosotros se nos pide que votemos impuestos uniformes para toda la Argentina. Es algo que carece del más mínimo sentido común.

Y en ese país se nos pide que los aportes patronales de una empresa de Santiago, del Chaco

o de Salta bajen al mismo nivel que los aportes de una empresa de la Capital Federal. O que la inversión en innovación –cuando se hace– tenga créditos fiscales iguales para una pequeña y mediana empresa del NEA y del NOA, que para una empresa de la Capital Federal.

Entonces, lo que queremos decir es que, en una reforma tributaria de esas características, coincidimos en hay que bajar impuestos –yo coincido en que hay que bajar aportes patronales, pero no con algunas cosas que se dijeron– y creo que el costo del salario obviamente determina la capacidad de generar empleo si el país crece de manera estable. Aunque, si el país no crece de manera estable, nadie va a establecer relaciones laborales de largo plazo. Pero esas decisiones que se tienen que tomar, se deben tomar para consolidar y cohesionar el tejido productivo y social de la Argentina y no al contrario.

Entonces, me parece que, sobre todo cuando se pone esto en consideración del Senado, que es la representación de las provincias y de las regiones del país, no se puede pedir que votemos impuestos uniformes en un país que tiene las enormes diferencias regionales que tiene la Argentina. Es inadmisibles.

Es decir, no le podemos cobrar los mismos aportes patronales a las empresas del NEA y del NOA que lo que pagan las grandes empresas, de capital nacional o extranjero, de la Capital Federal. Porque allá hace doscientos años que la energía es más cara, hace doscientos años que tenemos deficiencia de logística, hace muchísimas décadas que tenemos deterioro del tejido industrial y en consecuencia es más difícil crear empleo. Entonces, ¿les vamos a poner los mismos impuestos? Pero, realmente, ¿esa es la visión económica y social del país que tenemos? A mí me parece realmente inadmisibles. Y creo, sinceramente, que no podemos votar impuestos uniformes en un país con las enormes diferencias regionales de la Argentina. Si los aportes patronales van a bajar, lo podemos hacer perfectamente de manera neutra desde el punto de vista fiscal. Bajando un poco más para las empresas que producen, invierten y crean trabajo en el NEA, en el NOA y en el sur extremo del país y un poco menos para las empresas del centro de la Argentina. Y no va a costar más dinero, pero generamos una estructura fiscal que

apunte a compensar ciertas deficiencias. Me parece que sería lo lógico. Si vamos a tratar de consolidar un sistema impositivo de mediano y largo plazo en la Argentina, tenemos que ponerle diferenciaciones regionales.

Aparte, creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad. El presidente Macri hizo una convocatoria al diálogo después de ganar las elecciones. Lamentablemente hubo grandes ausencias en esa convocatoria al diálogo. No se dijo nada acerca de ninguna estrategia de desarrollo productivo ni ninguna estrategia de desarrollo regional en la Argentina.

Yo les quisiera decir –me parece que aquí a los senadores no hace falta decírselo porque conocen su realidad– que una empresa del NEA o del NOA, una pyme del NEA, del NOA o del Sur, no va a ser más competitiva porque le permitas tomar el impuesto al cheque como pago a cuenta de ganancias. No va a ser más competitiva porque le permitas excluir el aguinaldo del pago de las indemnizaciones. No, porque falta crédito de largo plazo, faltan incentivos para cerrar la brecha tecnológica, faltan programas de capacitación de la mano de obra, faltan programas de apoyo para ganar mercados locales o externos, faltan programas para generar desarrollo de proveedores locales. Falta todo y falta desde hace doscientos años en la Argentina. Desde hace doscientos años en la Argentina no hay políticas de desarrollo regional. Entonces, con pequeños cambios impositivos no vamos a romper los círculos viciosos del estancamiento en el que están nuestras cadenas de valor en el interior de la Argentina. No los vamos a romper porque ahora el cheque pueda tomar pago a cuenta de ganancias. Son círculos viciosos consolidados por todas estas faltas, por todas estas carencias, desde hace décadas. Y creo que, si no solucionamos estas cosas, vamos a descubrir dentro de veinte años que nuestras cadenas de valor siguen igual de estancadas que hoy. Estos pequeños cambios impositivos no lo van a modificar. Porque incluso para algunas zonas del país –estoy seguro de que lo tienen claro los senadores– los cambios que se proponen son regresivos.

En el Chaco, el promedio de aportes patronales que se paga hoy es 16,5. ¿Cuánto va a ser en el año 2021?: 19. Porque hay unas pequeñas diferencias regionales hoy que esta reforma

elimina. O sea, estamos votando para el interior de la Argentina subir los aportes patronales. A las pequeñas diferencias que hay, la reforma las elimina.

Es decir que, el que vota, lo hace para subir los impuestos; en este caso, impuestos al trabajo o aportes patronales, como se quiera nombrar.

Creo que el proyecto tiene que ser claramente reelaborado. Me hubiera gustado tener una posición de los gobernadores planteando esto, más allá de que desde el punto de vista fiscal los afecte más o menos, lo que pasa con el sector privado y lo que pasa con el largo plazo. El país sigue sin una estrategia de desarrollo. Esa estrategia de desarrollo tiene que incorporar como una pata fundamental las diferenciaciones impositivas. Tiene que estar basada en algo concreto, programas integrales para desarrollar las cadenas de valor en el interior del país, y tiene que incorporar como una de sus patas las diferenciaciones impositivas. Pero, aparte, hace falta capacitación de la mano de obra, créditos de largo plazo, estímulos para cerrar brechas tecnológicas, apoyo para ganar mercados locales y externos. Eso no va a pasar por arte de magia. Y no va a pasar por el solo impulso del sector privado, que está absolutamente desarticulado después de décadas de regresión productiva en la Argentina.

Entonces, quiero decir que ni una matriz liberal de pensamiento que diga: bajemos la inflación, pongamos reglas de juego parejas para todos, generemos presión de competencia a través de la apertura y que compitan los más aptos, ni esa matriz nos va a dar desarrollo ni nos va a dar desarrollo una matriz que desprecie los equilibrios macroeconómicos y que crea que el desarrollo va a ocurrir simplemente porque aumentemos el gasto público y lo dirijamos fronteras adentro por el cierre de la economía. Ninguna de esas dos matrices, que son las que han estado vigentes en la Argentina durante las últimas décadas, le va a dar desarrollo a este país. Ambas coinciden, más allá de las diferencias de retórica, en que el desarrollo debiera ocurrir de manera espontánea. Sobre todo: “gastemos más, va a ocurrir el desarrollo”, “abramos la economía, va a ocurrir el desarrollo”. No es así. En veinte años nos vamos a dar cuenta de que nuestras cadenas de valor siguen estancadas.

Entiendo que vamos a discutir todos juntos también lo que tiene que ver con el presupuesto. Pero esto que estamos hablando es la expresión de algunas dificultades que nosotros vemos en el presupuesto.

Quisiera marcar lo siguiente. Creo que lo hacemos desde la buena voluntad, entendiendo la dificultad de corregir desequilibrios, pero lo hacemos sumando a algo que ahora dicen absolutamente todos los economistas del país.

Tiene dos fotos muy peligrosas esta Argentina. Una es la de un crecimiento de la deuda en dólares de entre 30.000 millones y 35.000 millones de dólares por año. Otra es la del estancamiento de las exportaciones, es decir, la máquina con la que tenemos que pagar esa deuda. Eso nos pone en una situación de extrema vulnerabilidad.

Si el presupuesto es la expresión de la política económica del gobierno —las metas, pero, al mismo tiempo, las consecuencias de las decisiones políticas previas—, hay que decir que ese desequilibrio fiscal manifiesta la descoordinación de la política monetaria y de la política fiscal del gobierno, donde tasas de interés altísimas para reducir la inflación en un corto lapso, que no se ha visto en ningún lugar del mundo, están deteriorando la marcha de la economía. Y no hay que ilusionarse con algunos indicadores de crecimiento del último trimestre, muy influidos por la “pichicata” de la obra pública que ha puesto el gobierno.

Hay que tener en cuenta lo siguiente. Seguimos con tasas de interés del orden del 30 por ciento. Las políticas monetaria y fiscal están totalmente descoordinadas. Vamos a aprobar un presupuesto que prevé una inflación del 15,7 por ciento, cuando la meta del Banco Central es 12. Las dos patas del gobierno tienen objetivos distintos. Ahora bien, la tasa de interés se va a fijar de acuerdo con lo que pretende el Banco Central, al 12 por ciento. Entonces, la tasa la ponen al 30, con lo cual no arrancan el consumo ni la inversión. No recaudás y tenés el déficit fiscal que tenés.

Dicho desde la buena voluntad, si el presupuesto es la expresión de la política económica del gobierno, requiere reformas profundas. Nosotros estamos dispuestos a acompañar la reforma fiscal si se admiten modificaciones que permitan diferenciar impuestos a nivel regional.

Caso contrario, en este país de tantas asimetrías regionales, entiendo que no podemos votar a favor impuestos uniformes.

Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra la senadora Catalfamo.

Sra. Catalfamo. — Señor presidente: hoy nos toca tratar en este recinto el presupuesto 2018, un tema muy importante realmente para todos y de muchísima responsabilidad para cada uno de nosotros. Y, lamentablemente, nos ha tocado tratarlo de una manera exprés. Es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros, ya que tiene un impacto directo en la sociedad, en cada una de las personas que conforman este país, pero, además, en las provincias que integran esta Nación.

Cada uno de los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional que ha venido tanto a la Cámara de Diputados como a esta Cámara de Senadores a defender este proyecto ha hablado del marcado federalismo que tiene este presupuesto 2018. Lamentablemente, tengo que decir que no estoy de acuerdo con estas afirmaciones, ya que de federal este presupuesto no tiene absolutamente nada. No ha logrado plasmar la distribución de los recursos en cada una de las provincias. Y San Luis se ha visto notablemente afectada en este sentido.

Para expresarlo con algunos datos y que podamos tener mayor consideración de lo que estamos hablando, les comento que en el ejercicio 2017 la provincia de San Luis contaba con un presupuesto superior a 720 millones de pesos, mientras que para 2018 ese monto se redujo a 314 millones de pesos. Si tenemos en cuenta que estamos hoy ante una inflación interanual superior al 20 por ciento, el gasto que el Estado nacional hace para la provincia de San Luis no acompañó para nada este incremento y, muy por el contrario, lo redujo a un 57 por ciento.

En este mismo sentido, se puede ver que existe una asimetría en la distribución del gasto para obras públicas, ya que en concepto de obras de seguridad, como se menciona en el presupuesto 2018, a la provincia de San Luis solamente le tocan 60 millones de pesos que serían ejecutados en dos años, es decir, 9 millones en 2018 y los 51 millones restantes en 2019, cuando hablamos de que, justamente, 2019 es un año electoral. Estos 60 millones implican un 0,018 por ciento

del total de obras públicas presupuestadas para todo el país.

Esta disminución del gasto en la provincia de San Luis va acompañada de una subejecución de partidas presupuestarias, es decir, que han sido aprobadas en años anteriores, pero, lamentablemente, nunca fueron ejecutadas. Es el caso, por ejemplo, del dique de Quines o del Acueducto del Este, dos obras que nos costó muchísimo como provincia incluirlas en el presupuesto de este año, que aún tenemos, y que, lamentablemente, nunca se ejecutaron.

El dique de Quines debería haberse ejecutado este año en 900 millones, mientras que en el Acueducto del Este deberían haberse ejecutado 750 millones; sin embargo, como dije, ninguna de estas obras se llevó a cabo. En la última sesión que llevó adelante la Cámara de Diputados, donde este presupuesto obtuvo sanción, se agregó a estas obras en una planilla aparte, pero, realmente, estamos a consideración de lo que diga el jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo nacional en la reasignación de partidas para que estas obras se lleven adelante. Esperamos que esta vez sí se lleven a cabo estas obras, ya que son muy necesarias.

Por otro lado, quiero mencionar un caso bastante extremo, que es la obra del aeropuerto de la ciudad de San Luis, que es capital de nuestra provincia. Esta obra fue prevista en 2015, estaba contemplada en el presupuesto de 2015, se llamó a licitación pública para desarrollarla, se aprobaron los pliegos y las especificaciones técnicas para que se lleve adelante y también el presupuesto oficial. Sin embargo, en 2017, este año, bajo la resolución 105 del Ministerio de Transporte de la Nación que dirige el ministro Dietrich, se resolvió dejar sin efecto esta obra sin ningún tipo de justificativo.

Entonces, lo que quiero decir, señor presidente, es que hoy nuestra capital, la capital de la provincia de San Luis, no cuenta con un aeropuerto como la gente: es solamente un espacio en donde, si existen condiciones climáticas adversas, los aviones no pueden aterrizar, lo que genera un gran inconveniente a todos los usuarios.

Tampoco quiero dejar de mencionar en mi discurso que en el presupuesto de este año no se incluye el pago de la deuda que la Nación mantiene con la provincia de San Luis.

El pasado 9 de agosto, el presidente Mauricio Macri, en Tucumán, al hablar del Fondo del Conurbano Bonaerense, dijo que era un reclamo realmente legítimo y que había que cumplir con los fallos de la Corte Suprema de Justicia.

Cabe recordar, señor presidente, que, en noviembre de 2015, el Superior Tribunal había dictado sentencia a favor de San Luis, obligando a la Nación a pagar la deuda que mantiene con San Luis. El monto es de 11.000 millones, más los intereses que nos tienen que abonar. También, el jefe de Gabinete dijo que esa sentencia se iba a cumplir y que, realmente, se iba a pagar lo adeudado.

Señor presidente: si nosotros pudiéramos dialogar con la Nación y solucionar el tema de los intereses que, por ahí, es lo que queda en cuestión, podríamos llegar a algún tipo de conclusión. Nosotros hoy decimos y estamos convencidos de que, si se aplica una tasa activa, nos corresponden algo así como 20.000 millones de pesos y el Poder Ejecutivo nacional dice, por su parte, que, si se aplica una tasa pasiva, nos corresponden 17.000 millones de pesos.

Para tomar dimensión de lo que estos números significan para nuestra provincia, y sin tener en cuenta los intereses, solo teniendo en cuenta los 11.000 millones base, a mi provincia le correspondería contar hoy con 260 escuelas primarias u 8 hospitales de alta complejidad con la mejor aparatología y la mejor tecnología, además de residencias médicas. Claramente, esta es una inversión muy importante que se podría hacer en San Luis y que no se lleva a cabo debido a que no contamos con este dinero que la Nación nos adeuda.

A más de dos años de este fallo, realmente es inentendible cómo no está previsto en ninguna partida presupuestaria pagarnos lo que se nos debe. Esta no es una cuestión caprichosa, señor presidente, como dijo el presidente Macri respecto del Fondo del Conurbano Bonaerense; esta es una cuestión legítima, es algo que nos pertenece y realmente es justo. San Luis también forma parte de la Nación, aunque muchas veces no se lo quiera reconocer.

Creo que las palabras del diputado Luis Lusquiños, quien ya no se encuentra entre nosotros y quien defendió San Luis con muchísima fuerza, resumen lo que estoy diciendo. Me gustaría poder leer lo que él dijo en una sesión de la

Cámara de Diputados. Le pido permiso para poder leerlo.

Dice así: “El artículo que propondremos procura romper –para ser gráfico y cortito– el cuento de la buena pipa que plantea el pago de la deuda a las provincias de Santa Fe y San Luis. Este cuento consiste en que, si no hay acuerdo o no lo podemos poner en el presupuesto, entonces no pueden pagar y, si hay acuerdo, como no está en el presupuesto, tampoco pueden hacerlo. Entonces, palo porque bogas, palo porque no bogas. A los efectos de solucionar este punto, proponemos un nuevo artículo que diga que se autoriza al jefe de Gabinete a modificar las partidas presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema en el caso de San Luis”.

Esto que propuso Lusquiños se incorporó en el presupuesto 2017, por supuesto que no se llevó a cabo porque no se nos pagó absolutamente nada de lo que se nos debe y, ahora, en el presupuesto 2018, no aparece en ningún lado. También, la diputada Rosso, en la sesión pasada, donde se le dio sanción a este presupuesto en la Cámara de Diputados, intentó incluir este artículo, pero, por supuesto, tampoco fue tenido en cuenta.

Como vemos, señor presidente, a lo que voy es que el gobierno nacional no cumple con los principios del federalismo, que se encuentran en la Constitución Nacional. Creo que es momento de entender que las provincias son preexistentes a la Nación y que hay miles de argentinos, en este caso, ciudadanos argentinos que son puntanos, que esperan una mejor calidad de vida y que se podría hacer a costa de este endeudamiento que la Nación mantiene con la provincia.

Finalmente, para no excederme en el tiempo, quiero decirle, señor presidente, que realmente me siento orgullosa de pertenecer a la provincia de San Luis, que es la única provincia que no firmó este consenso fiscal y que no lo hicimos, en realidad, porque afecta directamente a los intereses de nuestro pueblo de San Luis. Es un consenso fiscal que nos iba a derribar nuestra autonomía y no íbamos a dejar que eso sucediera para nada.

San Luis no solamente es un ejemplo de administración –realmente los invito a que nos imiten–, también tiene déficit cero, lo que genera que haya superávit fiscal. Esto no se logra por un sobreendeudamiento, sino que se logra a

través del esfuerzo de cada uno de los puntanos por incluir a los más desprotegidos.

Muchísimas gracias.

Sr. Presidente (Marino). – Muchas gracias, senadora.

Senadora Ianni: tiene la palabra.

Sra. Ianni. – Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.

Hoy, más que nunca, confirmo, al llegar a esta banca, lo que he sostenido durante nuestra campaña recorriendo la provincia de Santa Cruz. Lo único que prometimos es que nunca íbamos a acompañar proyectos que vayan en contra de los derechos conquistados por los argentinos y, sobre todo, por las necesidades e intereses de nuestros comprovincianos santacruceños.

Hoy vuelvo a confirmar lo que también decíamos en campaña: anunciamos que estas reformas, que estos paquetes exprés iban a llegar al Senado y la oposición nos tildaba de que éramos pájaros de mal agüero o que anunciábamos algo que nunca iba a suceder. Sin embargo, hoy estamos aquí, en el Senado, y ya la Cámara de Diputados ha dado tratamiento a estas reformas que, finalmente, fueron impulsadas por el gobierno nacional, a las que –vuelvo a decir– no vamos a acompañar cuando esto vaya a ser contrario a los intereses de nuestra provincia y de nuestros santacruceños por el desarrollo y por la vida de nuestras comunidades.

Todo esto tiene un hilo conductor y, seguramente, tiene que ver con favorecer a los que más tienen en detrimento de los que menos tienen.

Me voy a permitir ir matizando algunos datos con comentarios. Para 2018, el presupuesto nacional destinado a Santa Cruz se incrementará un 19,4 por ciento respecto del sancionado para 2017. Pero esto, que podría ser una buena noticia, se ubica significativamente por debajo del promedio de crecimiento de la región patagónica, que rondará el 27,6 por ciento para 2018. De hecho, la provincia de Santa Cruz es la que menor incremento recibe respecto del resto de las provincias de nuestra región.

En términos de recursos por habitante, Santa Cruz recibirá de la Nación 51.931 pesos, ubicándose levemente por encima del promedio de la región, que es de 51.820 pesos, o sea, 90 pesos más. ¡Qué casualidad! Ser la provincia que menos ve incrementado el presupuesto respecto

del presupuesto nacional para el próximo año y su aporte, en términos de recursos por habitante, solamente supera por 90 pesos el promedio de la región.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que las obligaciones que tendrá a cargo el Tesoro representan un 21,5 por ciento del total presupuestado para la provincia y que sufrirán un recorte del 18 por ciento el año próximo. El ajuste viene a través de las partidas para asistencia financiera a empresas públicas y otros entes del sector de energía, combustible y minería, que se reducen en un 18,5 por ciento, y de las del Fondo Federal Solidario, que caerán un 15,7 por ciento, producto de la desgravación impositiva a las exportaciones agrícolas y mineras.

Acá quiero detenerme para que ustedes puedan referenciar qué es lo que pasa en mi provincia a partir de esto. Para el funcionamiento del yacimiento carbonífero de Río Turbio, se estiman transferencias corrientes por parte del Tesoro por 3.435 millones, es decir, aproximadamente un 10 por ciento menos que lo previsto para 2017, que fueron 3.818 millones. Y en lo que respecta a transferencias de capital por parte del Tesoro para el yacimiento carbonífero de Río Turbio, se proyectaron transferencias para 2017 de 398 millones, mientras que en 2018 no se prevén transferencias de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que no habrá inversión. Y esta no inversión en el yacimiento carbonífero de Río Turbio es lo que venimos viendo en estos dos últimos años de este gobierno nacional llevado adelante por Cambiemos.

¿Esto en qué se traduce? En que, hoy, el yacimiento tiene 2.400 empleados activos, en que ha sufrido el despido injustificado de 80 personas y en que hay un apriete, amenaza, incentivo —llámenlo como quieran— para que los empleados del yacimiento se acojan al retiro voluntario. Hoy, ya han llegado a ser más de 300 personas.

Les pregunto a ustedes: ¿qué hace una persona que se acoge a un retiro voluntario con ese dinero que percibe hoy, que es pan para hoy y hambre para mañana porque no llega ni siquiera a invertirlo en una pyme o en alguna otra inversión que le permita sobrevivir, sobre todo, con los altos costos de vida que tienen nuestras comunidades en el Sur? Ni qué hablar si esa persona se queda sin trabajo. ¿Qué desarrollo y qué vida tendrá esa comunidad que, en

el caso de la cuenca carbonífera, vive en torno del yacimiento?

Esto no es fortuito, porque también esta no inversión está sucediendo en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, donde YPF tampoco está invirtiendo en el petróleo. Porque en estos casi dos años del gobierno nacional, se ha llegado a 4.000 despidos, entre empleados afectados al petróleo en forma directa e indirecta, como los de la construcción y el transporte.

Y esto no solo no se traduce en mano de obra que no está ocupada, con todo lo que implica el hecho de quedarse sin trabajo, sobre todo en las comunidades donde el consumo también en este caso se ve afectado, sino que deja en claro que el gobierno nacional no está invirtiendo ni en el yacimiento de Río Turbio ni en el petróleo para su producción y explotación.

Esto lo queremos dejar concreto y visible, porque, quizás, a tantos kilómetros, no se visualiza. Es muy bueno hablar de números cuando esos ingresos tampoco llegan a la provincia a través de la producción y de las regalías. Ustedes saben que casi el 38 por ciento del presupuesto de mi provincia se alimenta de las regalías que provienen del petróleo y, si no tenemos producción, menos podemos tener recursos. Por lo cual, todo tiene un solo hilo conductor.

En el mismo sentido, quiero tener una palabra sobre lo que va a ser supeditar la asignación del Fondo Federal Solidario —esto está previsto en un artículo del presupuesto— al cumplimiento del consenso fiscal. Es decir que solo recibirán los fondos que les corresponden las provincias que aprueben y cumplan el consenso. Así está redactado. Asimismo, se prevé que las provincias que cumplan esos dos requisitos incrementarán la proporción que reciban, en detrimento de las que no lo hagan, antes del 1º de abril de 2018.

Este último ítem se contradice con la asignación del fondo, que debe hacerse según los coeficientes de coparticipación de la ley de coparticipación federal de impuestos. Además, se deja de considerar el fondo en el presupuesto, con lo cual se desestima este ingreso genuino del Estado, que va a ser manejado discrecionalmente, y esto atenta contra las autonomías de las provincias y de los municipios, que dejarán entonces de percibir este ingreso que estaba

establecido incluso hasta acá en el presupuesto nacional y hoy, llamativamente, queda fuera.

Un dato a tener en cuenta es que el Ministerio de Educación recibirá el 8 por ciento del total del presupuesto para el próximo ejercicio. Y en este caso, las mayores asignaciones corresponden al desarrollo de la educación superior en Santa Cruz, lo cual nos alegra y nos alienta a que ojalá podamos abrir la oferta educativa de carreras universitarias para los santacruceños, que tienen el mismo derecho de estudiar en su territorio que el resto de los argentinos.

También, un aumento para el Fondo Nacional de Incentivo Docente y la construcción de jardines de infantes, cuyo presupuesto crecerá en un 109 por ciento. Ojalá esto se concrete, porque en estos dos años no hemos visto en Santa Cruz ni un solo ladrillo poner desde el gobierno nacional para la construcción de los edificios educativos que necesitamos y que queremos seguir gestionando.

Voy a hacer hincapié en el presupuesto para las universidades nacionales y, a su vez –y pido permiso para insertar–, en esto de simplemente establecer una partida que tenga que ver con el turismo, que también es una actividad económica. Y esto quiero ponerlo en valor. Si hablamos de la industria del turismo, tengan en cuenta que, en los últimos dos años, el Ministerio de Turismo vio cercenados los aportes que se daban en el presupuesto nacional para la actividad turística como industria.

Solo quiero recordarles que hasta 2015 la industria del turismo –no solo en mi provincia, sino a nivel país– aportaba más del 10 por ciento del trabajo formal. Si queremos realmente incentivar, sobre todo, a los jóvenes que hoy tienen la desesperanza de que no van a poder insertarse en el mercado laboral porque van a tener que esperar a que los que están activos se jubilen diez años más tarde de lo que estaba previsto, tengan en cuenta que en este tipo de industrias y de actividades, los jóvenes pueden insertarse no solo como monotributistas, sino también para tener un empleo formal como se merecen y están esperando.

Sr. Presidente (Marino). – Si puede ir cerrando, senadora.

Sra. Ianni. – Para cerrar, señor presidente, simplemente quiero redondear diciendo, ¿qué

mensaje de esperanza puede tener un proyecto –cuando uno proyecta y, sobre todo, en el presupuesto, que es la madre de todas las leyes–, si a nuestra provincia, con acuerdo fiscal o sin acuerdo fiscal, haciendo gestiones por parte de la gobernadora, viniendo a buscar recursos, se nos han quitado o se nos van cercenando? Lo único que pido es que nos asistan, que se comprometan con la palabra empeñada, que han auditado, que se ha presentado la documentación, que es necesario que los santacruceños recibamos la ayuda de la Nación para permitirnos terminar de ordenar, desplegar y crecer como nos merecemos.

Es por eso que le pido al gobierno nacional, en este fin de año, que cumpla con la última cuota de ese fondo fiduciario, que son 300 millones de pesos, que ya está firmado y que no llegan a Santa Cruz, y con la asistencia económica para que los santacruceños puedan terminar de cobrar sus sueldos y su aguinaldo.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Marino). – Gracias, senadora.

Senador Basualdo, tiene la palabra.

Sr. Basualdo. – Gracias, señor presidente.

La verdad es que estamos votando tres temas sumamente importantes para el país, y todos los temas vinculados entre ellos y vinculados también con las otras leyes que hemos votado: consenso fiscal, responsabilidad fiscal. También, si queremos más atrás, la de pymes, emprendedores, todo viene en un paquete. Y en ese paquete me hubiera gustado hoy que votemos la ley de financiamiento productivo o la reforma del mercado de capitales, como la queramos llamar. Pero son todas leyes generadoras de trabajo.

¿Qué nos pasa en este país? Vamos a tocar el presupuesto. Usted dice: “Tenemos déficit, cada vez se endeudan más”. Y, bueno, ¿con qué hacemos las obras? Usted toca el presupuesto y dice: “Bueno, ¿cómo hace el presupuesto para no tener déficit?”. Indudablemente que no se puede.

Todo es importante. Más del 60 por ciento tenemos en gastos corrientes, de previsión, de seguridad social; imposible tocarlo. Tenemos las obras públicas; es imposible poder tocarlo. A mí me encantaría que a mi provincia llegue más obra pública. Si usted me dice: “¿Con la

que están haciendo, está conforme?”. No. Y, seguramente, todos ustedes quieren más obra pública. ¿Pero cómo podemos hacer? Con recortes, no. Se tiene que hacer con crecimiento. Por eso esta ley está enfocada al crecimiento.

Cuando vamos a la reforma tributaria... En la reforma tributaria, cuando decían: “Vamos a poner impuestos a la renta financiera”. Muchos decían... Y hasta yo —le quiero ser sincero—, yo mismo me impacté, me enojé y también me dolió, porque a todos a los que les tocan el bolsillo también les duele.

Ustedes, a los bonos soberanos. Ustedes dicen: “Si ustedes necesitan plata, ¿para qué le ponen impuesto a los bonos soberanos?”. Entonces, primero me costó entenderlo, pero, después, vamos a hacer un poco de historia. Estados Unidos, ¿qué hizo en 2008, cuando entró en crisis? ¿Sabe lo que hizo? Estados Unidos pagaba una tasa del 8 por ciento. Dijo tasa cero. Nosotros no podemos decir tasa cero, porque indudablemente nosotros necesitamos esa inversión, para que nos pueda prestar y seguir creciendo.

Entonces, ¿qué les decimos nosotros a los argentinos? ¿Por qué? Porque algunos decimos que a los argentinos nos van cobrar una renta financiera y a los extranjeros, no. Indudablemente que a los extranjeros no se la podemos cobrar, porque no van a venir a invertir acá, en la Argentina —y necesitamos esa plata—. Y, también, los extranjeros pagan su renta financiera en el país de origen. Entonces, ¿qué le decimos a un argentino?: “No inviertan en la timba financiera, sino inviertan en la parte productiva”. Por eso es muy importante la reforma de capitales, porque vamos a trabajar en la venta de acciones, que una pyme pueda tener acciones. Y eso, usted, comprando una acción, no paga la renta financiera.

Entonces, les estamos dando posibilidad de que crezcan. Cuando hacemos la reforma, les decimos: “Señores: no podemos tener tasa cero, pero, si uno es argentino, le vamos a imponer una renta financiera para que salgan a la producción, que es lo fundamental”. Y nosotros vamos a pedir, de los extranjeros, que nos presten plata, porque a la de los argentinos la ponemos a producir para generar trabajo. Lo mismo o similar a lo que hicieron ellos.

Cuando estamos diciendo, al impuesto a las ganancias, la reforma impositiva: “Mire, si usted invierte en su empresa, va a pagar menos ganancias”. Porque, ¿qué pasaba acá, en la Argentina? Teníamos empresas pobres y empresarios ricos. Y lo que debemos tener son empresas ricas y empresarios que vivan adecuados a su inversión, pero la empresa tiene que ser rica. Si nosotros le cobramos exactamente lo mismo, el 35 por ciento, a aquel que se la llevaba para su casa o a aquel que invertía en producción, una línea de trabajo, era imposible que quisiera invertir. Estábamos incentivando que el empresario fuera rico y que las empresas fueran pobres. Y nosotros necesitamos generar trabajo, que es la única manera de poder avanzar en este país.

El impuesto al cheque, tanto lo hemos criticado todos nosotros, por lo leonino que era. Ahora, el impuesto al cheque, gracias a una ley que hemos votado hace poco, las pymes ya no lo pagan más. En realidad, pagan impuesto al cheque todos los argentinos, pero lo pueden deducir de los otros tipos de impuestos, del impuesto a las ganancias.

Ahora, en cinco años, le vamos a dar a todos la posibilidad de que ese impuesto distorsivo, que lo pagaba el consumidor, lo puedan deducir de diferentes tipos de impuestos, impuesto a las ganancias en este caso. Y aquí el único que lo va a pagar es el que generalmente está en el mercado ilegal, que no genera impuestos. Bueno, tendrá que pagar ese impuesto y no podrá obtener ningún crédito fiscal si no paga impuestos. Entonces, lo tendrá que pagar como corresponde. En eso tenemos que trabajar, en apostar a la producción, porque si no le vamos a echar la culpa a fulano o a mengano. Tenemos que quitar la presión tributaria.

Miren, estamos festejando y podemos festejar todos los argentinos. No le quiero hablar de los últimos cien años de la presión tributaria, de la presión fiscal respecto del PBI, pero les voy a hablar de los últimos veinticinco años. En el año 1992 la presión tributaria era de 17 por ciento, de acuerdo al PBI. En el año 2015 la presión tributaria era de 37 por ciento. ¿Qué estábamos haciendo, presidente? ¡Cazando en un zoológico! A los contribuyentes que aportaban, que eran cada vez menos, directamente les cobrábamos más. ¡Le aumentamos 130 por

ciento en quince años! Si seguíamos de esa manera, indudablemente nos íbamos a quedar sin contribuyentes. Si usted caza en un zoológico, se queda sin animales. Si usted le aumenta la presión tributaria a los que están aportando y no busca más gente que aporte, se va a quedar sin contribuyentes.

Primera vez en los últimos veinticinco años que se ha bajado la presión tributaria. ¿Para qué?, para generar. ¿Y por qué se ha bajado la presión tributaria? Porque le hemos puesto un impuesto a la renta financiera. Más gente pagará, pero pagará menos si lo destinan a producir; porque de la única manera que vamos a salir es produciendo, es generando trabajo.

Por eso todas estas leyes vienen atadas de las manos; ninguna ley es una historia: el consenso fiscal, la responsabilidad fiscal, la ley que vamos a votar de financiamiento productivo o la ley que votamos de emprendedores, todas son generadoras de trabajo y vienen para decirles: “Señores, no vamos a estimular la renta financiera, vamos a estimular la producción, la venta de acciones”. Usted compra una acción que cotiza en bolsa –que todas puedan cotizar en bolsa– y no va a pagar ningún tipo de impuesto. Invirtamos en el país y generemos mano de obra para poder decir: “Señores, no tenemos déficit”. El déficit no lo vamos a eliminar con recortes, lo tenemos que eliminar con crecimiento. Y esta ley que vamos a votar es para poder crecer.

Muchas gracias, señor presidente, el resto lo voy a insertar.

Sr. Presidente (Marino). – Muchas gracias, senador.

Senadora Kunath: tiene la palabra.

Sra. Kunath. – Gracias, señor presidente.

Unas breves consideraciones no solamente en cuanto al presupuesto, sino también a las demás leyes que estamos tratando en esta jornada y a otras leyes que hemos tratado en la sesión anterior.

En primer lugar quiero poner en contexto que estas leyes también forman parte o, de algún modo, vienen a concretar lo que fue conocido como este pacto fiscal en el cual han confluído 23 gobernadores –con la excepción de la provincia de San Luis– y el gobierno nacional. Este es el contexto.

También quiero señalar algunas críticas respecto de cómo se gestó este “consenso”, entre comillas. Tenemos críticas sobre el presupuesto y tenemos críticas también sobre algunas definiciones que se van tomando por parte del partido gobernante, del oficialismo. Lo hago como una senadora que representa a la provincia de Entre Ríos y que, siendo oposición en este Senado, acompaña las políticas que nuestro gobernador Gustavo Bordet ha delineado para la provincia de Entre Ríos, en el entendimiento de la profunda responsabilidad que nuestro voto y nuestro acompañamiento significan para la instrumentación de las cuestiones que nuestro gobernador ha acordado con el gobierno nacional.

Sin dudas que yo, al menos en lo personal, estaría mucho más cómoda votando otras medidas, pero claramente a partir de 2015 ha cambiado esta situación y nosotros hemos pasado a ser oposición. Poco importa la comodidad o incomodidad de quienes estamos acá legislando, es una cuestión de responsabilidad la que nos lleva. Y desde ya que anticipo que voy a estar acompañando estas leyes que estamos tratando. Pero lo hago desde este lugar, señor presidente, porque tampoco el acompañamiento a las estrategias que se definen desde nuestro Poder Ejecutivo provincial –que tienen que ver con estos acuerdos a los que han arribado 23 gobernadores con el gobierno nacional– significan que nosotros estemos adhiriendo sin ningún tipo de crítica o sin ningún tipo de observación a estas medidas que vemos con preocupación que se están tomando desde el gobierno de Cambiemos.

Sobre el presupuesto, una breve reflexión, que creo que se ha dicho también en los debates y en distintas opiniones que hemos escuchado. La crítica consiste en señalar que se subestima la inflación. Más allá de los buenos deseos y expectativas que tenemos, yo lo escuchaba al senador Basualdo con entusiasmo hablando del conjunto de estas leyes y –créame, senador– que nosotros también quisiéramos tener ese mismo entusiasmo, pero esta subestimación de la inflación también genera que la mayoría de las partidas vaya a la baja, excepto en la parte en que se prevé para pagar los servicios de la deuda.

Me preocupa también lo que ha sucedido con ciencia y tecnología. Este es un tema que noso-

tros venimos tratando hace algunos meses en la comisión que integraba y hemos acompañado con muchísima convicción un proyecto –del cual soy coautora– del senador Perotti, que proponía un aumento para las partidas de ciencia y tecnología con una proyección en el tiempo. No solamente por este porcentaje que se le atribuye a la ciencia y a la tecnología, sino también con reclamos puntuales y concretos que ayer los ha mencionado el senador Perotti y también ha hecho referencia el senador Pichetto en la reunión de comisión. Y también al reclamo del Conicet que tiene que ver con cuestiones puntuales que nosotros también fuimos viendo a lo largo de todo este año y que generan preocupación, porque claramente van en una disminución del presupuesto que se asigna a estas áreas, que yo considero que son fundamentales.

La ciencia y la tecnología tienen una mirada estratégica sobre todas las demás áreas y existe un desarrollo y un capital humano en este país que verdaderamente tenemos que cuidar y proteger, pero, a su vez, también fortalecer. Y esa fortaleza se da desde los presupuestos.

Otra de las preocupaciones tiene que ver con las políticas de género. En el presupuesto que había propuesto el Poder Ejecutivo y que felizmente en esta parte pudo ser modificado en Cámara de Diputados, se han agregado 50 millones; esto era una proyección que desde algunas organizaciones de la sociedad civil se hacía para el cumplimiento de los objetivos de la ley 26.485. Esta también es una cuestión frente a la cual debe haber una previsión presupuestaria, más allá de los recursos humanos, de los objetivos. Y esto no tiene que ver con los funcionarios, tiene que ver precisamente con cómo se pueden ejecutar las políticas de prevención de violencia de género si no tenemos recursos asignados para todas las cuestiones que estas políticas necesitan.

En cuanto a las políticas de niñez, vemos que en la Cámara de Diputados también se ha modificado el proyecto que había sido remitido con relación a la incorporación de la comisión bicameral y también la incorporación de la figura del defensor del niño. También sostengo lo mismo frente a lo que planteo con relación a las políticas de género: creo que estas políticas profundamente sociales y que protegen sectores vulnerables deben estar fortalecidas claramente

en términos presupuestarios y en términos de políticas de gestión.

Sobre el presupuesto de la Universidad Nacional de Entre Ríos quiero destacar que, por un trabajo en conjunto con los diputados de mi provincia, se ha podido sostener el presupuesto que se ha planteado.

Hay algunos tópicos o cuestiones que tienen que ver con la cuestión metodológica, no solamente del trámite legislativo, al cual ya aquí se ha hecho referencia. También destaco esta posibilidad de trabajar en conjunto con los diputados de nuestras provincias, pero quiero hacer referencia a la falta de información o a la información de repente confusa o tal vez no clara, como, por ejemplo, nos pasó en ocasión de analizar la información sobre participación público-privada. Sinceramente, nos hemos sentido con poca información.

Aprovechando que está aquí presente el presidente de la comisión, quiero decir que creo que la exposición al inicio no ha sido tan exhaustiva como esperábamos, señor presidente; exhaustiva en cuanto al contenido del presupuesto y a cuáles son los grandes trazos que el Poder Ejecutivo requiere o propone.

Y esto lo digo porque, si sumamos alguna falta de información a inquietudes puntuales de los senadores y senadoras, que obviamente hacen a nuestras provincias, cuestiones planteadas al jefe de Gabinete y que no han tenido demasiado éxito, todo esto termina en un diciembre con una agenda intensa, y se entiende que el Poder Ejecutivo necesita la herramienta del presupuesto, pero claramente hay una acumulación de cuestiones que no han sido resueltas a lo largo del año legislativo y que, obviamente, señor presidente, hacen eclosión o se ponen en superficie en este momento.

Entonces, a este trámite acelerado sumamos ciertas cuestiones que se vienen acumulando a lo largo del año. Lo digo puntualmente por algunas consultas que hemos hecho sobre el puente Paraná-Santa Fe.

En cuanto a la reforma tributaria, lo decíamos la semana pasada juntamente con nuestro gobernador, nos parece beneficiosa la reducción del IVA para la carne de pollo, cerdo y conejo, equiparándolas a la carne vacuna y a otras. Nos parece también positivo que se haya conservado

el régimen para las bebidas azucaradas y que también haya un régimen especial para la producción de cervezas artesanales. La senadora Sacun también se refirió a la exención del impuesto a las ganancias para las cooperativas y mutualidades, lo cual nos parece que es para destacar.

Volviendo a una crítica que referenciaba en cuanto al trámite, quiero destacar que el actual tratamiento del presupuesto nada tiene que ver con lo que fue su tratamiento el año anterior. Debemos estar atentos en cuanto a estos proyectos que vienen a nuestra consideración y plantear que, a partir del consenso, no hubo demasiadas posibilidades de discutir varias cuestiones. Entiéndase –así lo han dicho todos y también ha sido reconocido por el oficialismo– que pareciera que este consenso alcanzado por los gobernadores, de algún modo, ha inhibido la discusión puntual o diferida en otro momento de otras cuestiones que también son preocupantes.

Para ir redondeando, presidente, quiero hacer una reflexión que consiste en una interpelación –creo– a todos los que estamos en política. En primer lugar a las críticas. Las críticas no nos deben ser indiferentes a quienes formamos parte de la dirigencia política. Las críticas que recibimos oficialismo y oposición en estas épocas creo que son un llamado de atención. No nos deben ser indiferentes –no les deben ser a nadie, en realidad– las manifestaciones que han ocurrido en diciembre en nuestro país, tanto la del jueves 14 como la del lunes 18. Creo que estas manifestaciones también merecen un llamado de atención y una alerta.

Las situaciones de violencia, puntualmente las de violencia institucional, merecen una interpelación a la dirigencia política. También tenemos que preguntarnos qué ha pasado con nuestras fuerzas de seguridad y si, de algún modo, existiera alguna habilitación tácita para cometer algunos excesos en estas situaciones. Estas son interpelaciones que hay que hacerse desde la política, pero, fundamentalmente, son interpelaciones que le corresponden al oficialismo.

Por último, ahora sí, de verdad, para terminar, creo que la sanción de una ley o la aprobación de un paquete de leyes en este contexto, en este mes de diciembre, no debe ser leída como un éxito. No debe ser leída como que se consiguió la sanción del paquete de leyes que necesitaba el Poder Ejecutivo. No debe ser leída simple-

mente en ese aspecto. Debe ser considerada en el contexto total, es decir, considerando cómo se gestó el pacto con los gobernadores y cómo se dio el trámite legislativo en este Congreso de la Nación.

Señor presidente: creo que estas cuestiones son las que se nos reclaman a los dirigentes políticos, que estemos muy atentos, que sepamos escuchar y que actuemos en consecuencia porque las situaciones vividas en el mes de diciembre no afectan solamente a un sector. Quien eso crea, tendrá una mirada absolutamente sesgada. Esas situaciones afectan a toda la dirigencia política y, fundamentalmente, el oficialismo debe hacerse cargo y prestar la debida atención.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Marino). – Senadora Elías de Perez: tiene la palabra.

Sra. Elías de Perez. – Gracias, presidente.

He escuchado con atención todos los discursos que se han dicho en el día. Lejos de contestar, señalaré que valoro el disenso básico en la democracia. Sin embargo, hay algunas cosas que exceden porque, cuando se habla desde la amnesia total, excede. Que nos reclamen a nosotros Río Turbio, excede poder quedarse callada o que también se denoste al Congreso. Ya hemos vivido otra época en la que se denostaba al Congreso y no ha sido bueno. La verdad, no me puedo callar al escuchar en la otra Cámara voces, desde el Congreso, que alientan a la violencia o escuchar desde esta Cámara a quienes nos dicen que hay simulacro –olvidándose de más de seis meses de trabajo de la Comisión Bicameral de Reforma Tributaria–, denostando el consenso alcanzado con los gobernadores.

En cuanto al presupuesto nacional que estamos analizando, hemos recuperado el presupuesto nacional como una herramienta creíble, transparente, sincera, que dice la verdad. Por lo tanto, al ser de este modo, podemos claramente sacar cuáles son los lineamientos que tiene el gobierno para el año que viene. Podemos ver claramente cuáles son las prioridades que tiene el gobierno nacional para que no venga ningún agorero escatológico a tratar de meternos miedo.

Está claro: hay dos prioridades. La primera es cuidar a los que menos tienen. Cuando digo que hay que cuidar a los que menos tienen me refiero a que la inversión social que tiene el pre-

supuesto nacional alcanza al 76 por ciento del gasto primario, más que en toda la historia. En el año 2015, por ejemplo, llegaba al 65 por ciento. Lo digo solo para que podamos comparar.

La segunda de las grandes prioridades que tiene el gobierno nacional para el año próximo es una fuerte inversión en infraestructura, indispensable para sacar el país adelante. Cuando digo inversión en infraestructura me refiero a dos tipos de infraestructura. Por un lado, la social básica: que todos los argentinos tengan agua y cloaca porque entendemos que se trata de recursos humanos básicos. Por otro lado, también la infraestructura de crecimiento, que haga que tengamos rutas. Se va a duplicar la cantidad de autopistas en cuatro años. Ya lo estamos haciendo. Que tengamos puertos que sean operativos, que tengan buen precio, que permitan a nuestros productores exportar y ser competitivos.

Por otra parte, en cuanto a aeropuertos, vamos a aumentar al doble la cantidad de pasajeros que se transportan en el país. Ya lo estamos haciendo. En cuanto a los trenes de carga, que han sido un gran sueño, ya estamos en la segunda etapa del Plan Belgrano Cargas, que para las provincias del Norte es indispensable.

¿Por qué digo que lo estamos haciendo? Se lo puede comprobar. Hemos batido récords de utilización de cemento y áridos en un día. Además, con una política transparente, se han puesto en funcionamiento licitaciones transparentes que han llevado a que se disminuya casi en un 40 por ciento el valor que se paga ahora por la obra pública. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque la política para nosotros es una concepción ética de la vida.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, senador Federico Pinedo.

Sra. Elías de Perez. — Eso puede vérselo claramente en el presupuesto nacional que estamos analizando.

Haciendo foco en el tema de la reforma tributaria, es un hito histórico. Digo que es un hito histórico —y no me pongo colorada para decirlo— porque nos estamos haciendo cargo de las reformas que el país necesitaba desde hace muchos años.

Cualquiera de nosotros que hayamos trabajado con el sistema tributario argentino podemos decir claramente que es un sistema complejo, burocrático, inequitativo y regresivo en muchos casos. Además, hemos visto también que es un sistema que se ha ido deformando con la cantidad de parches que se le han ido poniendo a lo largo de los años, que han llevado también a que queden las huellas marcadas de los distintos lobbies de toda la historia.

Por eso, estamos resolviendo muchas injusticias y la poca productividad que teníamos en el país.

La reforma tributaria va a fijar las bases justamente para que pueda aumentar la inversión, para que se pueda generar empleo en la Argentina. Estamos generando los incentivos a la inversión. Y, cuando digo esto, vamos a partir de dónde estamos hoy: la Argentina hoy ocupa el lugar número 135 sobre 138 países en cuanto a los incentivos a la inversión.

Por eso, y en este sentido, estamos disminuyendo el impuesto a las ganancias que son reinvertidas en las empresas, devolviendo anticipadamente saldos a favor en IVA cuando se hagan inversiones, implementando el mínimo no imponible en las cargas patronales y, también, en acuerdo con las provincias —para que se terminen las aduanas interiores que tanto daño hacen en el país—, tendiendo a que progresivamente cada una de las provincias vaya viendo cómo cambiar y disminuir los ingresos brutos.

También estamos disminuyendo injusticias, señor presidente, para que se vuelva más equitativo y más eficiente el sistema y, para esto, aumentamos las deducciones especiales a los autónomos. Y esto no es poca cosa.

Eliminamos el impuesto a las transferencias de la primera vivienda que, junto a la implementación de los créditos hipotecarios, van a llevar a que se cumpla el gran sueño que tenemos de que todos los argentinos tengan acceso a una vivienda propia.

A su vez, estamos también gravando la renta financiera. Se ha hablado mucho de esto, pero somos nosotros los que estamos aquí gravando la renta financiera.

El sistema actual impide el crecimiento indispensable que debe tener el país para poder sacar a los argentinos de la pobreza. Por eso,

estamos disminuyendo la alícuota del IVA para muchos de los productos primarios: pollo, conejo, cerdo...

Cambiamos también el régimen penal tributario, para que nunca más pueda haber personajes que, a raíz de los impuestos que se quedan, tengan ellos solo grandes ganancias, en detrimento del pueblo argentino.

Si yo tuviera que resumir en dos palabras esta reforma tributaria, diría que es una reforma de alivio fiscal. Esto es lo que estamos dando. Y, como tucumana, estoy feliz porque de esta reforma hayamos sacado el impuesto interno, que también ha sido gracias al consenso, porque los legisladores de todas las bancadas han pedido, han pregonado y han hecho lo posible para que esto se lleve a cabo, lo mismo que el gobernador de mi provincia, y quiero reconocerlo: la actividad cañera, la actividad azucarera, para nosotros es muy importante.

Por último, la capacidad emprendedora de nuestro país necesita que se fijen las bases sólidas para que pueda ponerse a andar. Y esto ya lo estamos logrando. Para los que quieran oír, para los que ahora tienen los ojos abiertos —aunque muchos estuvieron con los ojos cerrados—, les vamos a contar que el país ha tenido en el tercer trimestre de este año el mayor crecimiento de todos los países de Latinoamérica: hemos llegado a una expansión de 4,2 del PIB. Y esto lo dice el INDEC y lo pueden comprobar fácilmente. No estamos improvisando. Para nada. Son reformas integrales que van a sentar las bases para el crecimiento de los próximos cincuenta años.

Por eso, presidente, déjeme terminar usando el leítmotiv, el lema que tiene la universidad nacional de mi provincia, la Universidad Nacional de Tucumán, que dice: *pedes in terra ad sidera visus* —con los pies en la tierra y la mirada en el cielo—, para decirles que, parados en la realidad, queremos e instamos a todos los argentinos a mirar con esperanza lo más alto, porque es ahí adonde vamos.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). — Gracias, senadora. Senadora Almirón: tiene la palabra.

Sra. Almirón. — Gracias, señor presidente.

En esta oportunidad, la verdad es que, al escuchar algunos discursos, al igual que cuando escuchaba el otro día al presidente Macri en

conferencia decir que estamos bien, que vamos bien, yo no sé en qué país vive, la verdad. El mismo día en que daba la conferencia, había una marcha de más de 300.000 personas. Pero, bueno, se ve que vive en China.

En esta oportunidad, estamos tratando un conjunto de leyes que entendemos que deberían tener un tratamiento diferenciado, con el tiempo necesario, si es que la verdad, la intención, es generar respuestas que favorezcan al conjunto de la sociedad.

Pero, lamentablemente, estamos ya acostumbrados a que el gobierno nos envíe reformas previsionales, tributarias e impositivas sin la debida participación, sin el debido análisis, sin el debido debate y, mucho menos, generando los consensos para que realmente estos paquetes de leyes beneficien al conjunto de los ciudadanos argentinos. Más bien, parecería que lo que quieren, por la premura de sacar este paquete de leyes, es beneficiar a un conjunto minoritario de la sociedad. Basta con ver las políticas aplicadas a partir de 2015, aunque en sus diversos discursos, al igual que lo hicieron en campaña, disfrazan la intencionalidad de beneficiar a los argentinos.

La orientación general que tiene este presupuesto 2018, con un conjunto de paquetes de leyes tributarias, fiscales e impositivas, claramente no se refleja como un modelo de país federalista, sino, más bien, como un proyecto centralista, lo que refleja la impronta que le pone el gobierno nacional.

La distribución de la riqueza en las provincias no es la misma. La incorporación de la transferencia del sector público nacional no financiero prevé un incremento del 9,9 por ciento en este año, lo que tiene sustento con lo que manifestaban varios miembros del gobierno al decir que las reformas estructurales posteriores a las elecciones del 22 de octubre van a tener un esfuerzo superior de las provincias.

Claramente estamos aprobando un proyecto que va a traer una disminución de los recursos de las provincias, que deberán eliminar los impuestos a los sellos y deberán eliminar en forma progresiva los ingresos brutos. Además, se pide la adecuación de las cajas previsionales y, en el caso de que no cumplan en un tiempo determinado, tendrán sanciones y se recortará financiamiento. Con respecto a la coparticipación

de los impuestos de los débitos y los créditos, se establece un 70 por ciento para la ANSES y un 30 por ciento para las provincias. Del mismo modo, de la ley de responsabilidad fiscal y de la propuesta de revalúo surge claramente que va a haber un recorte de los ingresos de las provincias; recorte que se transfiere a los sectores más concentrados, con un Estado cada vez más presente en la redistribución de los ingresos a las provincias, que nada tiene de federal, nada tiene de inclusivo y nada tiene de sustentable.

Si vemos los gastos totales del presupuesto, hay un 42 por ciento que se va a ver distribuido en provincia de Buenos Aires y en la CABA, 4,5 en Córdoba, 4,3 en Santa Fe y el resto se verá distribuido en los veinte distritos restantes.

Muchas veces se intenta comunicar a través de cada una de las presentaciones de estos proyectos que hay un sistema federal, pero la verdad es que cada una de las propuestas que han enviado a este recinto a partir de 2015 nada tienen de federal. Si miramos la famosa reparación histórica, esa famosa ley ómnibus que mandaron para beneficiar a los abuelos, la verdad es que lo único que trajo es el blanqueo por parte de varios funcionarios de este gobierno que tenían plata en forma ilegal en el extranjero, obligando además a las provincias, en ese paquete de ley ómnibus, a adecuar su normativa.

Para los correntinos eso afecta muchísimo, porque los correntinos tenemos el 82 por ciento móvil. O como, por ejemplo, la devolución del IVA, que si bien tiene un fin loable –nosotros lo hemos acompañado– también hemos dicho que en ese momento se recortaba coparticipación a las provincias. O como, por ejemplo, la recuperación de pymes. En ese momento también nosotros manifestamos que se venía recortando coparticipación. En cada uno de los proyectos enviados por el Ejecutivo se recortó coparticipación.

Lo podemos observar en el consenso fiscal firmado con la reforma previsional y la reforma impositiva y tributaria, que, por otro lado, de consenso no tiene nada. Al consenso se llega cuando hay acuerdo de dos partes o acuerdos en común. La verdad es que acá los gobernadores vinieron extorsionados. Yo creo que ninguno de los gobernadores que estuvieron presentes ese día, de tener libertad de acción, hubiera firmado ese consenso. Va de suyo también que

los gobernadores tienen una responsabilidad con el pueblo de sus provincias.

Las concesiones no son recíprocas. Acá hay arcas que crecen para un lado y no para las provincias. Solamente consiguen las provincias –lo hemos visto– después de firmar el consenso autorización para endeudarse. Deuda, deuda y más deuda. Ese es el único saldo que tenemos de esto.

También debemos notar que el ingreso per cápita que tienen la provincia de Buenos Aires y la CABA en relación a las demás provincias es nueve veces superior al resto de las provincias, como si existiéramos ciudadanos de primera y de segunda categoría. Justamente, en un sistema federal, las provincias –por ejemplo, las del Norte– son las que más necesitan del Estado nacional.

Nosotros, hoy, en 2017, casi llegando a 2018, no contamos con gas natural. Hay viviendas que todavía no tienen cloacas, familias que no tienen viviendas y ni hablar de la energía que todavía no llega a las provincias. Por eso se necesita una mayor presencia del Estado nacional.

Algo que realmente nos preocupa de este presupuesto es el endeudamiento, que se establece un 28 por ciento superior a lo que se aprobó en 2017, con lo cual un 15 por ciento se destina para pagar deuda.

Hace pocos días veíamos que fallecía el juez amigo de los argentinos, Thomas Griesa. Ahora, los casos pendientes quedaron en manos de la jueza Loretta Preska. Y he aquí la paradoja, porque hay un grupo minoritario de bonistas que todavía no han accedido al cierre del acuerdo. Y acá viene el tema. Muchos de esos primeros bonistas son jubilados. Fueron los primeros bonistas que tuvo el Estado argentino. Qué paradoja, ¿no?

La semana pasada aprobábamos un proyecto de ley estableciendo una quita en los recursos de nuestros abuelos y hoy, por un juez extranjero que quizá pueda acceder a eventuales juicios contra el Estado argentino, tal vez sean los jubilados quienes tengan en vilo a todos los argentinos. Claramente, no hay escritorio que no gire 180 grados.

Analizando algunos aspectos puntuales de este presupuesto, no sé cómo pretenden avanzar con la tan ansiada pobreza cero. En

realidad, cada una de las medidas que propone el gobierno nacional genera más inflación, más endeudamiento, más discriminación a los sectores más vulnerables y ni hablar de las provincias postergadas. Y si bien ha mencionado la senadora Kunath que ha habido un pequeño aumento de las políticas de género, nosotros vemos que hay una disminución en un 17 por ciento con respecto al presupuesto de 2017 en lo relativo a la erradicación de la violencia de este tipo, por lo que considero que es un presupuesto sin perspectiva de género.

Casualmente, con relación al proyecto que se aprobaba la semana pasada, muchas de las jubiladas que han accedido a la jubilación a partir de 2006, 2007 y 2008 son mujeres. Y las que cobran asignación universal por hijo son mujeres. Esta situación económica de crisis que estamos viviendo afecta mucho más a las mujeres. Sumado esto a que aumentan los femicidios. Y ni hablar de la disminución del presupuesto para erradicarlos. Para nada es un presupuesto federal, mucho menos, equitativo e igualitario.

Voy a leer una frase: “La riqueza económica de un pueblo no consiste solo en la abundancia total de sus bienes, sino, más bien, en una eficaz distribución según la justicia”. Arturo Illia. Para nada es un presupuesto de distribución de la riqueza.

Creo que no están haciendo mal las cosas. Vinieron a hacer esto: a concentrar la riqueza en un sector. Hagan honor a sus referentes históricos, gobiernen para todos. Somos 44 millones de argentinos. No pretendo desde esta banca que le vaya mal al gobierno argentino. Soy argentina y quiero que a los argentinos les vaya bien, pero también sé que a nosotros nos votaron para ser oposición. No tenemos respuestas mágicas para el gobierno, no se las vamos a dar ni siquiera sentándonos en una comisión. Nos votaron para ser oposición y a ustedes para ser gobierno. Gobiernen para todos.

Por lo expuesto, no vamos a acompañar este presupuesto centralista y que nada tiene de equitativo.

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra la senadora Fiore Viñuales.

Sra. Fiore Viñuales. – Señor presidente: quiero hacer alusión a un artículo que leí a mediados de este año en el diario *El País* de

España, que concretamente estaba titulado de la siguiente manera: “Argentina, el paraíso financiero donde es más rentable prestar al Estado que invertir”.

Allí se hacía un análisis sumamente interesante —obviamente, del tema de las LEBAC— y cómo, de 5 dólares que ingresan en nuestro país, solamente uno va a lo que es el mercado productivo y los 4 restantes al mercado financiero. Es en este contexto y en el de que 23 gobernadores se han puesto de acuerdo con el presidente de la Nación para hacer reformas muy importantes que estamos tratando, tanto la tributaria como el presupuesto y el impuesto al cheque.

En ese sentido, quiero comentarle algo que me llamó mucho la atención. El gobernador Urtubey, como es su característica, cumplió la palabra empeñada en su momento y en la provincia de Salta ya votamos el paquete de medidas de reformas tributarias, curiosamente con el voto de Cambiemos en contra. Repito: curiosamente con el voto de Cambiemos en contra.

Pero, bueno, más allá de esa curiosidad —que se la transmito—, lo que quería comentar es que las provincias están haciendo un esfuerzo muy importante a través de la suscripción de este pacto fiscal donde se plantea la reducción proporcional y paulatina de un ingreso tan importante para las provincias como es el que corresponde a los ingresos brutos que, en algunos casos, llega a ser el 75 por ciento de la recaudación de esas provincias.

El proyecto que estamos tratando, de reforma tributaria, me parece que en este contexto que le comentaba es muy importante porque, ¿qué es lo que busca? Busca, fundamentalmente, incentivar esa inversión que nos está faltando. ¿Cómo? A través de la reducción de la presión tributaria, porque se piensa —y, en este sentido, acompaño ese pensamiento— que, a través de este tipo de medidas o de esta herramienta, se puede mejorar la competitividad y se pueden generar mayores puestos de trabajo genuinos.

Y, cuando hablamos de inversión, estamos viviendo una situación verdaderamente de crisis. Fíjese usted que cuando se analiza el presupuesto en debate, el presupuesto 2018, se hace un análisis de cuál es la participación, en porcentajes, de inversión con relación al PBI. Y resulta que nuestro país viene decayendo paulatinamente a partir de 2007 hasta 2016 y

el porcentaje de inversión, en ese caso, ha sido del 14 por ciento. Es decir, muy por abajo del porcentaje de inversión con relación al PBI que tienen otros países latinoamericanos, que es cercano al 20 por ciento.

Nosotros, en 2017, votamos un presupuesto donde —valga la redundancia de las expresiones— se había presupuestado una inversión de 14 puntos. La proyección final del año nos da una inversión de 10 puntos. Es decir: entre lo que se presupuestó, lo que se pensó y los datos de la realidad, hay una diferencia de casi 3 o 4 puntos.

Peor nos fue con las exportaciones: se había proyectado un 7,7 por ciento con relación a las exportaciones y resulta que la proyección final nos dio el 1,8 por ciento, es decir, una diferencia en menos el 6 por ciento.

En este contexto, entonces, donde verdaderamente se necesita la inversión, me parece que el proyecto de ley que estamos tratando es una herramienta que puede ser útil al gobierno nacional para atraer las tan anheladas inversiones y que esto implique que la Argentina pueda competir en mejores condiciones y generar así trabajo.

Me parece bien y concuerdo con el tema de la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias, de un 35 a un 25 por ciento. Creo que esto es muy importante porque, además, esta reducción está dada en tanto y en cuanto las empresas reinviertan las utilidades. Entonces, considero que es un muy buen incentivo. En el mismo sentido, el saldo a favor del IVA, que es algo que el sector privado viene reclamando desde hace muchísimo tiempo. Que el impuesto al cheque pueda ser utilizado como pago a cuenta de ganancias me parece que también es una herramienta que puede fomentar una mayor inversión.

Respecto de las contribuciones patronales, donde se establece un mínimo no imponible de hasta 12.000 pesos a partir del año 2022, creo que quizá es el tema más controvertido porque, cuando uno lee distintos análisis, algunos dicen que esta medida es riesgosa porque lo que vamos a estar incentivando son sueldos bajos o bien sueldos en grises, es decir, hasta 12.000, en blanco, y más arriba de los 12.000 ya estarían en negro.

Y hay otros, cuya postura suscribo, que dicen que este tipo de medidas verdaderamente pueden ser importantes. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene un mercado informal de cerca del 40 por ciento y, quizá, medidas de esta naturaleza puedan generar empleo genuino porque existe lo que se llama la cuña fiscal. La cuña fiscal es la diferencia que el empleador hace al pagar, por un lado, lo que es el sueldo bruto del trabajador más los aportes patronales y el sueldo real que recibe el trabajador. Esa cuña en nuestro país es del 34 por ciento. Es la más alta de la región. Solamente nos sigue Brasil con el 32 por ciento. En Chile, para dar un ejemplo muy cercano, es del 7 por ciento. Entonces, creo que este es un incentivo que puede ser verdaderamente importante.

Pero, en este aspecto también, a fuer de ser sincera, quiero manifestar una preocupación. La preocupación tiene que ver con el financiamiento de la ANSES. Es decir: estamos tomando una serie de medidas como, por ejemplo, la derogación del artículo 104 del impuesto a las ganancias, que impacta directamente en la recaudación de la ANSES. Las contribuciones patronales implican para los ingresos de la ANSES el 40,5 por ciento de los ingresos totales de este organismo.

El tema del impuesto al cheque, si bien es cierto en el presupuesto de 2018 y de acuerdo a la modificación de Diputados el ciento por ciento del impuesto al cheque va a ir para la ANSES, que significan, en el presupuesto 2018, 163.389.000, todos sabemos que es un impuesto de emergencia, que año a año lo vivimos prorrogando.

Uno puede decir que la Argentina es un país donde las excepciones se vuelven generalizaciones, pero la verdad es que no sé qué va a pasar con el impuesto al cheque y no sé si alguien puede decir qué es lo que va a pasar con el impuesto al cheque.

Entonces, nosotros estamos suponiendo que estas medidas van a generar inversiones. Estamos suponiendo que estas inversiones nos van a hacer más competitivos y vamos a generar empleo. Dios quiera que así sea. Honestamente, Dios quiera que así sea. Pero, si no, me preocupa muchísimo cómo se va a financiar nuestro sistema previsional.

Hablando del tema de aportes patronales, hay otra medida que es la unificación gradual de las alícuotas de las contribuciones patronales y la eliminación de la reducción de contribuciones por zonas geográficas. En este sentido, la verdad es que comparto mucho de lo que decía el senador Aguilar.

Tengo mucho temor porque nuestro país no es un país homogéneo. Las realidades que tenemos son verdaderamente muy diferentes de una región a otra y tratar como iguales a quienes no lo son puede llegar a ser una verdadera injusticia. Honestamente, creo que debemos tener ventajas comparativas, ya sea en función del tema sectorial o en función de las regiones porque, si somos todos iguales, cómo los inversores van a elegir a zonas más desfavorecidas como, por ejemplo, el Norte Argentino.

El Norte Argentino, lo sabemos todos, ha sido víctima de una serie de postergaciones que son casi históricas, les diría. Y a estas postergaciones que tenemos se suma el problema de la distancia. Tenemos un enorme problema de distancia, con rutas que no están en condiciones, con un ferrocarril que sigue siendo una promesa. Fíjense: los productores en la cosecha 2016-2017 tuvieron que gastar en flete 2.900 millones; 2.900 millones en flete. ¿Cómo vamos a competir así con el productor de la Pampa Húmeda? Verdaderamente nos es imposible. Cuando uno analiza el costo de la producción, el flete en el caso de los sojeros es del 29 por ciento, pero en el caso del trigo es del 40 por ciento y en el caso del maíz del 46.

Recuerdo que cuando era chica, en una localidad bien al norte de mi provincia, que se llama Orán, ahí se exportaba muchísimo en otros tiempos, no ahora, el tema de los cítricos. A mí me daba muchísima pena ver un montón de naranjas tiradas en el camino y yo cuando era chica no entendía el porqué. Y ahora entiendo. Resulta que al productor le era menos costoso tirar las naranjas al costado del camino que llevarlas al puerto. Me parece que esto es muy peligroso y debemos tenerlo en cuenta.

Si tuviéramos el tren, quizás, la situación sería distinta. Aquí quiero hacer también otra reflexión, incluso, hasta un pedido de solidaridad con algunos senadores. Es por el tema del ferrocarril Belgrano Cargas.

Sr. Presidente (Pinedo). – Con toda solidaridad, señora senadora, le queda...

Sra. Fiore Viñuales. – Sí, me queda un minuto. Le juro que ya termino.

¿Ahí qué es lo que me preocupa? Vino el ministro de Transporte ayer y la tercera etapa del Belgrano Cargas, presidente, sigue esperando. Fíjese que son 558 kilómetros de vías, que se tienen que hacer nuevamente o recomponer, y resulta que todavía no hay novedades de esto. El senador Romero lo preguntó ayer y dije: “Bueno, vamos a seguir esperando, en unos meses...”. Vamos a seguir con una licitación, es la licitación 26, que tiene 16 oferentes y que todavía seguimos esperando. Y seguimos esperando el tramo de Orán-Pichanal. Seguimos esperando la ruta 34 y seguimos esperando, señor presidente.

La distribución de la obra pública me parece que también favorece mucho a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, la provincia de Buenos Aires, en presupuesto, tiene lo que las provincias del Norte tenemos. Y somos diez provincias. Me parece que son las asimetrías que tenemos que corregir. Sin embargo, la responsabilidad nos hace ver que el presupuesto es una herramienta fundamental que necesita la Nación para gobernar. En este sentido, Salta se ha visto bastante beneficiada. En lo que es el presupuesto de la obra pública, en primer lugar está la provincia de Buenos Aires, CABA, Río Negro, Córdoba y Salta en quinto lugar. Así que vamos a acompañar este paquete de reformas, fundamentalmente, desde la responsabilidad, pero con un llamado de atención muy grande, señor presidente, por el tema del financiamiento de la ANSES y por ese país federal que creo que verdaderamente nos debemos.

Gracias.

Sr. Presidente (Pinedo). – Muchas gracias, senadora.

El senador Poggi tiene la palabra.

Sr. Poggi. – Gracias, presidente.

Hoy estamos tratando la ley de leyes –el presupuesto del próximo año– y una reforma tributaria muy importante. Y, además, otro proyecto de ley que prorroga impuestos y establece nuevas afectaciones en función de los pactos o

consensos fiscales que suscribieron los gobernadores con el gobierno nacional.

En este conjunto de normas y en otras, como bien decía recién el senador Basualdo, se percibe la firme voluntad política del gobierno nacional de poner el norte en, a mi juicio, tres objetivos. En primer lugar, tender al equilibrio de las cuentas públicas. En segundo lugar, tender a generar una mayor competitividad para la generación de empleo genuino y de calidad. Y, en tercer lugar, tender a fortalecer el federalismo fiscal.

En cuanto al equilibrio de las cuentas públicas, resulta de fácil comprensión si copiamos, simplemente, lo que hace un jefe o jefa de familia responsable con sus finanzas personales. Un jefe de familia no gasta más de lo que le ingresa, porque si gasta más de lo que le ingresa compromete a su familia, a sus hijos y a su futuro. Y cuando le sobra unos pesos, mes a mes los ahorra, los invierte en su casa, en su auto, en la maquinaria del trabajo o los guarda por si surge un imprevisto familiar, como una enfermedad, etcétera.

Así debemos tender a manejar las finanzas del Estado. Caso contrario, caemos en la emisión monetaria, que genera inflación, que es el más perverso de los impuestos, ya que su creación no pasa por el Congreso. Es el más perverso de los impuestos pues afecta a los que menos tienen. O caemos en endeudamientos y llega un momento en que se tornan inmanejables y comprometen a futuras generaciones. Por eso debemos tender, como una primera medida, a equilibrar las cuentas públicas.

El segundo objetivo que planteo es mejorar la competitividad para la generación de empleo de calidad. Está claro que ese es el camino que debe transitar la Argentina para dar una lucha frontal contra la pobreza. La reforma tributaria y otras acciones y leyes van en esa dirección: estimular una inversión que genere trabajo. Y gobernar es generar trabajo, que tiene que ser de calidad, es decir, trabajo en blanco. El trabajo de calidad es trabajo en blanco, formal, con sus aportes previsionales, con su cobertura de salud, etcétera.

En tercer lugar, lo que veo es que claramente este presupuesto está consolidando el fortalecimiento del federalismo fiscal, incrementando

los recursos de las provincias en función de sus competencias.

Para el logro de estos objetivos se plantean medidas con un criterio de gradualidad, porque tanto tender a equilibrar las cuentas públicas como tender a sumar competitividad para generar nuevos puestos de trabajo y tender a ir consolidando el fortalecimiento del federalismo fiscal para corregir la distorsión que existe entre la distribución de recursos entre el conjunto de provincias y la Nación no se logran de la noche a la mañana, ya que responden a problemas estructurales que acarrea la Argentina y que demandan soluciones estructurales –que, por supuesto, deben considerar los efectos sociales que cada medida tiene– e ir caminando de la mano del desarrollo sustentable del país, del crecimiento –como decía Basualdo– y del desarrollo sustentable del país. En este gradualismo, más que nunca debemos ser muy sensibles con los más humildes y muy firmes con los poderosos, que se resisten a alterar su statu quo de comodidad y privilegios.

Lo importante es que en este paquete de leyes, fundamentalmente en el presupuesto, está claramente definido cuál es el norte, cuál es la dirección, cuál es la voluntad política del gobierno nacional.

Quiero detenerme unos minutos en el tema del federalismo fiscal. En estos dos años, lo que yo percibo es que en la relación Nación-provincias se ha fortalecido el federalismo fiscal, que es uno de los temas centrales de nuestro sistema federal de gobierno. Y este presupuesto lo va consolidando, lo cual es muy auspicioso.

En mi caso, como exgobernador de una provincia, la provincia de San Luis –hoy senador nacional por dicha provincia–, siempre demandaba un mayor federalismo fiscal no solo por la realidad que vivían las provincias, sino inspirado en lo que establecía la misma Constitución del 94, que fijaba que cada nivel de gobierno –Nación y provincias– debía tener recursos acordes a sus competencias, a sus servicios y a sus funciones. La verdad es que las provincias argentinas tienen bajo su órbita la competencia de los servicios más sensibles y de crecimiento vegetativo: educación pública –inicial, primaria y secundaria–, salud pública, seguridad, la justicia.

La verdad es que la Argentina tenía una distorsión muy grande en la distribución de los recursos totales entre las competencias de la Nación y las del conjunto de las provincias argentinas. Durante años, en cada pacto fiscal que se firmaba, las provincias debían ceder recursos. Siempre fue así, durante años. Recursos que les eran propios. Cuando no era algún destino, era otro, pero siempre había que ceder recursos. Durante años, de todos los recursos tributarios del país, el conjunto de provincias argentinas solo participaba hasta el 27 por ciento del total de los recursos. Ahora veo que gradualmente se está llegando al 34 por ciento del conjunto de recursos del país, que es precisamente el porcentaje que establece la ley de coparticipación vigente, es decir, el 34 por ciento de recursos del país.

Entonces, este gobierno nacional tiene una fuerte tendencia a fortalecer el federalismo fiscal, y lo celebro. En el caso de mi provincia, la provincia San Luis, objetivamente nunca se recibieron tantos fondos en concepto de coparticipación federal, obras públicas y demás acciones sociales como en estos dos años de gobierno del presidente Macri. Lo digo objetivamente.

Se están repavimentando todas las rutas nacionales que transitan por la provincia de San Luis, todas. Una inversión de 1.300 millones de pesos en un año. La ruta 7, las rutas 146, 147, 188, la 79, la 20, un nuevo puente sobre el río Quines, que lo llevó la inundación. Una inversión vial nunca vista en nuestras rutas nacionales, diría histórica.

Se están construyendo nuevos edificios de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. La universidad ya tenía ocho años desde su fundación y en estos dos últimos años se motorizó la inversión en el campus universitario. Las tres universidades nacionales que tienen sede en la provincia de San Luis reciben un incremento de su presupuesto de más del 30 por ciento respecto del presupuesto 2017. Se están construyendo escuelas de nivel inicial que luego, por supuesto, se cederán a la provincia porque es competencia de la provincia la educación inicial.

Hay 12.000 jubilados que recibieron un reajuste jubilatorio. El 20 por ciento de los jubilados de la provincia de San Luis recibió un reajuste jubilatorio que, en total, anualizado, son casi 400 millones de pesos que, por supuesto,

se vuelcan en el consumo de la provincia. Hasta octubre, la ANSES había otorgado 51.000 créditos Argentina: 606 millones de pesos volcados en la economía de la provincia. Pensiones y demás políticas de desarrollo social por 2.600 millones de pesos en dos años. En San Luis nunca se vio: 2.600 millones de pesos es el 10 por ciento del presupuesto de la provincia.

Y lo más importante es que en estos dos años la coparticipación federal que recibió la provincia fue histórica. Nunca recibió tantos fondos de transferencias automáticas. Una transferencia automática –para que se entienda– no es una transferencia discrecional, no es venir a pedir, sino que llega todos los días, gotea todos los días, es de libre disponibilidad, es coparticipación.

Solamente por la restitución del 15 por ciento que antes iba a la seguridad social, los fondos adicionales que recibió la provincia de San Luis en materia de coparticipación en estos dos años ascienden a 4.000 millones de pesos. Los colegas senadores que representan a provincias poblacionalmente afines a la provincia de San Luis saben lo que significan 4.000 millones de pesos en dos años para una provincia como la de San Luis. Entonces, claramente, se está fortaleciendo el federalismo fiscal.

En el presupuesto nacional de este año también figuran dos obras hídricas muy importantes para San Luis: el dique Quines y el acueducto del Este. Y me imagino que muchas más serán las políticas, obras y acciones del gobierno nacional en las otras provincias argentinas, donde sus gobiernos provinciales desean trabajar con el gobierno nacional. Me imagino lo que serán. Yo veo, porque las transitamos, Mendoza, Córdoba, llenas de obras públicas financiadas por el Estado nacional.

Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su tiempo, señor senador.

Sr. Poggi. – La verdad es que, sinceramente, como exgobernador de una provincia y como senador nacional, celebro el avance del federalismo en la República Argentina. Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador. Senadora Pilatti Vergara: tiene la palabra.

Sra. Pilatti Vergara. – Señor presidente: en primer lugar, la verdad es que quiero felicitar

al senador de San Luis, porque, a decir verdad, una provincia cuyo gobierno es abiertamente opositor al gobierno nacional, se ve que ha conseguido más logros que provincias como la mía, donde nuestro gobernador es claramente un asociado de Macri. Así que habrá que cambiar de estrategia.

Señor presidente, señores senadores: la verdad es que yo estoy particularmente preocupada por los temas que vamos a tratar hoy, o que estamos tratando hoy, como parte integrante de un conjunto de normas, de instituciones que hemos tratado en semanas anteriores. Porque, como decía nuestra expresidenta, todo tiene que ver con todo e, indudablemente, esta reforma tributaria tiene que ver con la reforma previsional, con la reforma laboral, con modificaciones al statu quo vigente que, más allá de las predicciones, los buenos deseos y los buenos propósitos que manifiestan desde el gobierno nacional y sus representantes, uno, cuanto menos, puede hacer uso del beneficio de la duda, porque esos mismos propósitos los vienen enunciando desde que asumieron como gobierno y la verdad es que ninguna de las medidas que han tomado, discutibles y a las que nos hemos opuesto oportunamente, han dado ningún resultado que tienda a beneficiar al pueblo argentino y mucho menos lo que pretendían. No bajamos la inflación, no tenemos superávit fiscal, no logramos contener siquiera el empleo; ni hablar de sumar nuevos puestos de trabajo.

La verdad es que no quisiera ser tan pesimista, pero yo creo que todo esto termina de dos formas: mal o muy mal. Obviamente que, en el carácter de oposición que tenemos desde este bloque, quisiéramos que las cosas cambien, que las propuestas cambien, pero, sí, reconocemos que quienes gobiernan son ustedes y que cuentan, además, con el apoyo –so pretexto de la gobernabilidad– de gran mayoría de los senadores de otros bloques en esta Cámara, con lo cual nuestros deseos caen en saco roto.

Quiero manifestar que estoy muy preocupada, porque vemos un Estado de derecho endeble, un Estado de derecho en crisis; una costumbre, una mala costumbre del gobierno nacional de prescindir del Congreso de la Nación cuando cree que las resultas de estos debates les van a ser adversas y ni siquiera ruborizarse al echar mano a DNU o a reglamentaciones de leyes

existentes para cambiar, incluso, el espíritu de la ley, de la ley que se trate. Ya desde aquel primer intento de designar a los dos primeros integrantes de la Corte Suprema a través de DNU, como este último de sacar la reforma jubilatoria cuando parecía que iba a fracasar, en el medio –digamos– de los cuales, en estos dos años –insisto– se han concretado instrumentos legales, administrativos, que violan claramente normas constitucionales y leyes vigentes.

En cuanto al federalismo, la verdad es que me parece que estamos como viviendo en dos países distintos con el senador de San Luis, porque yo, sinceramente, creo que estas reformas que hoy tratamos, estas reformas tributarias, lejos de favorecer, tienden a mermar el federalismo de las provincias. O sea: resignar los ingresos brutos y aceptar estas modificaciones en el impuesto a las ganancias, obviamente que son menos ingresos para la provincia del Chaco. Y si los beneficios de este supuesto pacto fiscal están atados al cumplimiento de las metas a las que se compromete el Estado nacional, me pregunto qué va a pasar en mi provincia cuando el gobernador Peppo no pueda despedir la cantidad de gente que le exige el gobierno nacional para que nos cierren los números, para emprolizar el Estado.

¿Qué va a pasar cuando el gobernador Peppo no pueda cumplir con algunas de las metas impuestas? Indudablemente que el gobierno nacional no va a dudar en dar por terminado este pacto. Y ahí quiero saber de dónde vamos a echar mano. ¿Con qué recursos locales genuinos –que ya no vamos a tener– vamos a contar para paliar estas crisis y estos peligros?

Además de todo esto, de las medidas que no han dado ni creo que den buen resultado, parte de la preocupación que me embarga tiene que ver con el escandaloso endeudamiento que está teniendo la Nación Argentina. Escandaloso endeudamiento que prácticamente se puede decir que no es de la Nación, sino de Luis Andrés Caputo, principalmente, porque en muchos casos solamente la firma de él es la que cuenta en esta toma de obligaciones. ¡Doscientos veinte mil millones de dólares, presidente, en tan solo dos años de gestión!

Uno ve con mucha tristeza cómo la historia se repite en nuestro país, cómo ya desde el régimen rivadaviano hasta la fecha, pasando por el proceso y los años noventa, llegan al go-

bierno, desde el neoliberalismo, con las mejores intenciones –supuestamente– a tomar medidas de fondo, medidas que van a traer felicidad al pueblo argentino –esto de achicar el Estado y agrandar la Nación–, entonces echamos mano a todas y cada una de estas medidas que venimos tomando en los últimos tiempos. Y después terminan muy mal. Todo termina muy mal. ¡Siempre terminó muy mal!

Por suerte, siempre volvió algún representante del campo nacional y popular, como Perón a pagar la deuda de la época rivadaviana o como Néstor y Cristina a pagar la deuda del proceso, la deuda de los noventa. Seguramente vamos a volver, pero mientras tanto quedan miles de compatriotas en el camino.

Nosotros nos enorgullecíamos en la provincia del Chaco de tener una localidad –y esto la expresidenta lo debe tener claro porque nos acompañó muchas veces– como Puerto Tirol, donde está instalado un parque industrial en el cual durante los años del último gobierno peronista se instalaron un sinnúmero de fábricas e industrias que contuvieron a la gente no solamente de Puerto Tirol, haciendo de esta una ciudad con desocupación cero, sino también a ciudadanos de otras localidades aledañas. Que a poco de asumir el gobierno del ingeniero Mauricio Macri –y en base a las importaciones desmedidas– vimos cómo empezaron a cerrarse estas industrias, sobre todo las relacionadas a lo textil. Y cómo se fue quedando sin empleo –formal y privado– toda esa gente que hacía que pudiéramos decir que Puerto Tirol era una ciudad con desocupación cero.

A poco de firmar el pacto fiscal con el gobierno de la Nación, nuestro gobernador, como saludo de Navidad, el 23 de diciembre ya tuvo que firmar un decreto dejando sin trabajo a 900 becados en la provincia del Chaco. Estamos hablando de gente con trabajo precario en el Estado de 4.000, 5.000 o 6.000 pesos, que a partir de esta Navidad ni siquiera con ese ingreso van a contar porque tienen que cerrar los números del Estado. Porque hay que achicar el Estado, porque eso es parte del pacto que firmamos con la Nación. Pero para a mí –discúlpeme– no hay pactos, no hay razón, no hay promesas, no hay esperanza ni hay pronóstico que valga si en el medio queda la gente, los compatriotas a los que nosotros debemos nuestra representación, como

bien dijeron hoy, como dije en mi intervención anterior.

Tal vez muchos de los aquí presentes nos expresemos sobre el mismo tema de distinta manera y lo entiendo; lo entiendo siempre y cuando tengamos en claro a qué sector representamos cada uno de nosotros. Yo tengo muy en claro cuál es el sector de la sociedad que represento y ese sector de la sociedad al que represento es el que hasta la fecha se ha visto muy perjudicado por todas y cada una de las medidas que a lo largo de estos dos años, por más esperanzadoras que nos las hayan vendido, ha tomado el gobierno nacional.

Como dije hace un rato, me parece que esta es una historia de gobiernos neoliberales y de gobiernos populares que lamentablemente se repite en nuestro país. Y quiero decir que la noche es oscura, señor presidente, pero no es eterna y, como no es eterna, yo sé que como en el 45 y como en 2003 van a volver los representantes de las mayorías populares, representantes del campo nacional y popular, a gobernar con medidas que, sin ningún lugar a dudas, incluyan a la mayor parte o a todo el pueblo argentino.

Y para terminar, porque me parece que tiene que ver con esto que digo que es un *corsi e ricorsi* a lo largo de nuestra historia, quiero leer dos párrafos de la proclama de Felipe Varela allá por diciembre de 1866. Decía: “Nuestra Nación, tan feliz en antecedentes, tan grande en poder, tan rica en porvenir, tan engalanada en glorias, ha sido humillada como una esclava, quedando empeñada en más de cien millones de pesos fuertes [hoy 220.000 millones de dólares] y comprometido su alto nombre a la vez que sus grandes destinos por el bárbaro capricho de aquel mismo porteño [léase bonaerense, también] que, después de la derrota de Cepeda, lagrimando juró respetarla. Compatriotas: desde que aquel usurpó el gobierno de la Nación, el monopolio de los tesoros públicos y la absorción de las rentas provinciales vinieron a ser el patrimonio de los porteños, condenando al provinciano a cederles hasta el pan que reservara para sus hijos. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos. Esta es la política del gobierno de Mitre”. Esta es la política del gobierno de Macri.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra la senadora Crexell.

Sra. Crexell. – Gracias, señor presidente.

Voy a ser muy breve. Voy a insertar el discurso, pero no quiero dejar de mencionar un par de aspectos que me parecen importantes en el tratamiento de estos proyectos de presupuesto y de reforma tributaria.

En primer lugar quiero decir que me parece que deberíamos darnos más tiempo para poder estudiar y debatir estos proyectos de tanta envergadura.

El año pasado conformamos una Comisión de Reforma Tributaria en la que solo pudimos reunirnos tres veces y no pudimos trabajar en concordancia con el Poder Ejecutivo. Después nos llega un proyecto en el que casi no podemos introducir reformas, salvo –como lo dijo un senador preopinante– que tengamos alguna relación con la Cámara de Diputados y podamos llevar allí nuestras propuestas. Me pregunto qué sentido tiene la Cámara de Senadores si no puede operar como Cámara revisora, pero bueno...

Con relación al presupuesto nacional, quiero decir que hay dos cuestiones que me preocupan y es que se ha sacado del presupuesto la obra Chihuidos, que es una central hidroeléctrica multipropósito que estaba pensada para la provincia del Neuquén ya hace mucho tiempo. Es una obra de enorme trascendencia y muy sensible para la población, no solamente por su potencial de generación eléctrica, sino también como salvaguarda de la población ante las crecidas que pueda traer el río y, además, tiene todo un proyecto de regadío en aras de poder volver cultivables tierras de la provincia.

Esa obra, que el gobierno nacional ha dicho en reiteradas ocasiones que era prioritaria y sobre la que venimos preguntando insistentemente al jefe de Gabinete en qué estado está, misteriosamente ha sido sacada del presupuesto para el año próximo.

Además, no ha sido contemplado el tramo de la ruta nacional 40 que va de Malargüe a la ciudad del Neuquén, que creemos que es un tramo muy importante para conectar nuestras provincias y no aparece presupuestado.

En lo que hace a las transferencias de fondos al Neuquén, quiero comentarles que el año pasado recibió 500 millones de pesos en ATN. Es la

tercera provincia que recibió discrecionalmente la transferencia de fondos, pero hoy ello se ve reflejado en una reducción de Vialidad Nacional y fondos para la construcción de viviendas. Tan es así que tenemos 426 millones de pesos menos para viviendas, lo cual representa un 55 por ciento del presupuesto. Y en lo que hace a Vialidad Nacional, la baja del presupuesto destinado a obras es de un 30 por ciento.

¿Qué quiero decir con esto? No quiero redundar sobre aspectos que ya mencioné cuando se trató la ley de reforma previsional y cuando aludí a federalismo fiscal, coparticipación y autonomía provincial, pero, en tanto no discutamos la coparticipación primaria y la secundaria, vamos a seguir a merced del gobierno central mediante la transferencia de fondos de manera discrecional. Si hubiera una nueva ley de coparticipación, las provincias podrían recibir automáticamente aquellos fondos que le corresponden en virtud de los criterios que establece la Constitución Nacional para esa clase de ley. Además, es bueno aclarar que estamos en una inconstitucionalidad por mora, ya que desde 1994 no se ha podido avanzar en su discusión.

Justamente, no me quiero extender porque se trata de leyes muy amplias y tengo un nivel de análisis muy detallado en mi discurso que deseo insertar en el Diario de Sesiones, de ahí que solamente quise dejar sentados estos aspectos que no han sido tratados y que no fueron incorporados al debate.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra el señor senador Pais.

Sr. Pais. – Señor presidente: sabedor del escaso tiempo que tenemos para exponer nuestra opinión sobre estos proyectos y de que debemos utilizarlo para una exposición en conjunto, entiendo que es proporcional al escaso tiempo en que fue tratado en el cuerpo, donde, más que revisar las importantes iniciativas, se ha escuchado exponer a funcionarios del Poder Ejecutivo y luego se pasó a la firma del dictamen. Sin embargo, se trata de leyes que van a impactar notablemente en la economía nacional.

Me referiré, en primer lugar, a la reforma tributaria.

Creo que perdimos una importante posibilidad ante este tratamiento.

En el marco de la comisión bicameral a la que hacía referencia la senadora preopinante, escuchamos sobre la necesidad de transformar profundamente el sistema tributario argentino, el cual, en muchos aspectos, es desproporcionado, inequitativo y, en algunos ámbitos, confiscatorio. Además, recibió una gran crítica. Me refiero a una complejidad que imposibilitaba, en primer lugar, la evasión y, en segundo lugar, las dificultades de los pequeños contribuyentes que deben erogar muchos gastos y esfuerzos para poder tributar en tiempo y forma a la Nación.

Esta ley no avanza en una simplificación tributaria, sino en su complejidad, con lo cual no altera la matriz tributaria nacional, sino que la complejiza mucho más en una clara afectación del administrado, es decir, del que debe tributar.

Debemos reconocer que hay algunos avances, pero son mínimos. Fundamentalmente, se refieren a la tributación de la renta financiera. No obstante, considero que la reforma tributaria pierde una oportunidad esencial, como es la de efectuar un reconocimiento y la implementación de medidas tributarias que tiendan a promover mayor justicia, equidad, proporcionalidad y, sobre todo, una orientación destinada a la promoción de las economías regionales —el país no es uno solo— para fomentar la inversión y la generación de puestos de trabajo.

Debemos ir hacia una matriz productiva porque más del 70 por ciento de los tributos recaudados se originan en el consumo y no en cuanto a la tributación por la renta y el capital.

En función de ello, si no se profundiza el consumo, la generación de empleo y las oportunidades de que el mayor bienestar de los argentinos derive en una mayor satisfacción de las necesidades, tampoco vamos a incrementar notablemente la tributación.

Sin perjuicio de ello, quiero decir que, cuando hablamos de tributos, hablamos de un derecho esencial, que es el derecho de propiedad, el cual, como dijo la Corte, no es absoluto, sino que tiene que tener una función social. En esto debemos reconocer que para todos los argentinos y en función del principio de generalidad —es cuando nos quejamos cuando no tributa algún sector, como el de la Justicia— es importante e impostergable.

Hemos perdido una posibilidad importantísima, atento a una suerte de consenso social sobre la necesidad de avanzar en una reforma que simplifique los impuestos y mejore la capacidad contributiva de los particulares y de recaudación del Estado. Tengo que decir que en este proyecto de reforma tributaria hay medidas que van en detrimento de las economías regionales.

Soy senador por la provincia del Chubut. Soy senador patagónico, represento los intereses del Estado y también los intereses del pueblo de la provincia porque a nosotros, los senadores, ya no nos eligen más las legislaturas, sino el pueblo con el voto directo.

En ese marco debo advertir que hay tributos y exenciones que ayer mismo un funcionario del Poder Ejecutivo dio por garantizado que no se afectarían, como es el impuesto a la transferencia de combustibles, pero la ley dice todo lo contrario. Entonces, tengo que decir que tal vez el funcionario no tenía exactitud en cuanto a sus conocimientos o, si no, que faltó a la verdad.

En el impuesto a la transferencia de combustibles, que es un viejo impuesto que se ha extendido, nosotros teníamos exención sobre la nafta sin plomo hasta 92 octanos, la nafta sin plomo de más de 92 octanos, el solvente, el aguarrás, el gasoil y el kerosene. Esa exención era total.

Estos impuestos en un principio tenían una alícuota en pesos y después fue una alícuota variable, *ad valorem*, es decir, porcentualmente de lo que se tributaba en el valor final del litro de combustible o de la unidad de medida del combustible, kerosén o diésel.

Hoy ha variado. Hoy se implementa una suma fija. Se coloca a la nafta sin plomo de menos de 92 octanos y de más de 92 octanos un valor fijo de 6,72 pesos y se mantiene la exención únicamente sobre ambas. No se mantiene la exención sobre el solvente, aguarrás y kerosene. En cuanto al gasoil, ahora se hace una imposición. Ahora el gasoil, el diésel van a tributar en el resto del país 14,14 pesos y en la Patagonia el 50 por ciento aproximadamente, o sea, 7,71 pesos. Esto implica que lo que no se tributaba en la Patagonia se va a tributar. En el gasoil y diésel va a tener una afectación importante y directa en toda la infraestructura, gastos de transportes, que son justamente esenciales y que fue el justificativo, atento las grandes distancias

que se deben recorrer, para la implementación de la exención.

Es decir: sobre lo que justificaba la exención, hoy comenzamos a tributar. Esto va a impactar en el precio, sin bien es cierto que se ha mejorado. Por el artículo 147 del proyecto de ley se deroga el impuesto a las transferencias a título oneroso o gratuito de la importación de gasoil y cualquier otro combustible líquido. Se crea un nuevo tributo, del cual tampoco está exento, que es el impuesto al dióxido de carbono.

Entonces, decimos que, evidentemente, el funcionario que ayer nos garantizó que con relación a la Patagonia iba a seguir todo igual, se equivocó.

Aparte tenemos otro componente que también afecta a la Patagonia. Se dice que los nuevos tributos y el impuesto sobre el dióxido de carbono se actualizarán trimestralmente. Se actualizan conforme el índice de precios al consumidor, el IPC. Hoy se habla de que son índices confiables.

Fíjese usted que los combustibles no se analizan conforme al IPC. Los combustibles han sido liberados y en el último año, contra un IPC que ronda cerca de 25, superan el 30 por ciento. Ya está anunciado un incremento a partir del 1º de enero del 5 por ciento. La proyección y la perspectiva es que el año que viene van a subir mucho más, con lo cual este tributo va a tener una menor incidencia, va a afectar las cuentas de la Nación y se va a incrementar..., porque no sé si las empresas productoras van a bajar el precio de los combustibles, va a incrementar la rentabilidad de las empresas. Todo un despropósito.

También los productores de estos servicios, los sujetos que prestan servicio de laboreo de tierra, siembra, cosecha podían computarlo como pago a cuenta del impuesto. La ganancia es el cien por ciento en este tributo. Hoy va a ser el 45 por ciento. Entonces, también es falso que no tengan impacto. Los productores de servicios en actividad minera y en la actividad de la pesca, que en la Patagonia tiene una gran incidencia, podrán computar al 45 por ciento el valor del IPC para el impuesto a las ganancias. Antes era del ciento por ciento.

Y lo más importante –acá también reivindicó la opinión de otros senadores que han sostenido que debió tramitarse en comisión, la Comisión

de Coparticipación– porque se modifica el destino de los fondos. Fíjese que del ITC iba el 79 por ciento al Tesoro nacional, el 29 por ciento a las provincias y el 42 por ciento al FONAVI. Hoy se modifica esa proporción y al Tesoro nacional irá el 10,40 por ciento, al Fondo Nacional de la Vivienda el 15 por ciento –bastante menos del 42 por ciento–, a las provincias se va a coparticipar el 10,40 por ciento –muchísimo menos que el 29 por ciento– y al Sistema Único de la Seguridad Social se va a destinar el 28,39 por ciento.

A su vez, se destina un 4,31 por ciento al fideicomiso de infraestructura hídrica, al fideicomiso de transportes el 28,58 por ciento y a la compensación al transporte público el 2,55 por ciento.

O sea: se está alterando la matriz de distribución de estos impuestos, que es competencia incluso como cámara de origen del Senado, siendo competencia en materia de coparticipación de impuestos de otra comisión parlamentaria.

Señor presidente: me queda mínimamente redondear el análisis del presupuesto.

Es cierto que venimos de años muy difíciles. Podemos aceptarlo. Hay datos objetivos. Cuando se hablaba de crecimiento en 2016, tuvimos una caída en la economía argentina. Cuando se hablaba de crecimiento en este año y de una proyección de crecimiento, hemos tenido un resultado diferente. Cuando se hablaba de inflación en el año 2016, hemos superado el 40 por ciento y este año se nos proyectó una inflación del 17 por ciento y estamos alrededor del 25 por ciento. O sea, hay una disociación entre la inflación proyectada que existe en este presupuesto, que fue presentado al 15 de septiembre de este año, y la inflación que proyecta el Banco Central, lo cual hace que tengamos un efecto distorsivo en las tasas de interés, fundamentalmente de las LEBAC.

Nosotros, señor presidente, creemos que este proyecto de ley está absolutamente desajustado. Sus proyecciones no tienen en cuenta ni consideran el impacto de las reformas tributarias que posiblemente hoy se sancionarán y, menos aún, van a tener el impacto de la reforma previsional, en la modificación del cálculo de la variación de la actualización de las prestaciones del sistema previsional y de seguridad social.

A su vez, también entendemos que esta falta de ponderación del impacto de estas medidas tributarias va a tener una afectación en cuanto al gasto, el cual sabemos que es inelástico en una sola cuestión, fundamentalmente: en el servicio de la deuda, tanto externa como interna. Y además, no contiene ninguna referencia a los servicios de deudas cuasifiscales, como son fundamentalmente los intereses que se pagan en las LEBAC, con las cuales el Banco Central interactúa en materia de inflación y además restringiendo el acceso al crédito a los particulares, principalmente.

En este marco, esperamos que se puedan hacer modificaciones. En caso contrario, va a hacer falta una ley complementaria durante los próximos tres o cuatro meses.

Y esperamos no equivocarnos, pero creemos que este gobierno va a ser mucho más afecto a utilizar un mecanismo que le está vedado —como los decretos de necesidad y urgencia— para hacer una modificación que es consecuencia de la voluntad del Poder Ejecutivo y que debe adecuarse, conforme lo marca la Constitución, por una ley del Congreso de la Nación.

Entonces, si no se aceptan modificaciones, vamos a propiciar el rechazo de ambos proyectos.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). — Gracias, señor senador.

Senadora Nancy González: tiene la palabra.

Sra. González (N. S.). — Gracias, señor presidente.

La verdad es que estamos asistiendo al tratamiento de leyes muy importantes para nuestro país, tratamiento que realmente nos tiene que avergonzar a todos los que estamos sentados hoy acá en estas bancas. Fue un tratamiento exprés, sin debate. Un tratamiento que empezó en la comisión antes de que ingresara el proyecto. Porque por más que los oficialistas nos quieran decir que el proyecto estaba, el proyecto no estaba. Y así hubiera entrado al mediodía, no creo que ningún senador tenga la capacidad intelectual de poder analizar más de trescientos artículos desde el mediodía hasta las tres de la tarde, cuando empezó la comisión.

Así que hablamos de proyectos que se tratan a libro cerrado, que no solamente pasó con

estas leyes, sino también con otras leyes muy importantes que se han tratado en este Senado.

No se debate, no se escucha a la sociedad, no se escucha a especialistas, no se escucha a organizaciones sociales.

¿Saben qué, compañeros? No se puede legislar de espaldas al pueblo. Los argentinos tienen derecho a saber qué estamos legislando, porque legislamos para ellos.

Luego escucho y sigo escuchando ya casi desde hace dos años, que estoy sentada en esta banca, que “nosotros le tenemos que responder a los gobernadores” y que “nosotros le tenemos que responder a los gobernadores”. Sigo escuchando lo mismo. Está bien, nosotros representamos a una provincia, pero a nosotros no nos pagan el sueldo los gobernadores. Nos pagan el sueldo todos los argentinos. Nosotros nos debemos al pueblo argentino. Yo me debo a los ciudadanos de mi provincia, a los que me votaron y a los que no me votaron.

No puedo ser cómplice de algunas cosas que firman los gobernadores. Por ejemplo, no puedo ser cómplice del pacto fiscal que han firmado los gobernadores y que ha firmado el gobernador de mi provincia, entregando mi provincia.

Recién escuchaba a un senador del federalismo. La verdad, creo que está mirando otra película; no mira la misma película que yo. Porque, si esto es federalismo, ¡por favor, qué será el federalismo de verdad!

Luego, creo que el Ejecutivo termina siendo una escribanía de los organismos de crédito internacionales, una escribanía del FMI. También estoy convencida de que todas estas políticas son las mismas que se aplicaron en los años noventa. Y todos ustedes sabrán cómo terminó el país luego de que en los noventa se aplicaron estas políticas.

Este gobierno, ya desde su campaña de hace más de dos años y luego en esta última campaña, lo único que ha hecho es mentir, es mentirles a los argentinos para tener más votos. Exclusivamente para eso.

Les muestro. No es un invento mío.

—La senadora Nancy González exhibe una hoja impresa.

Sra. González (N. S.). — 3 de agosto. El señor Marcos Peña dice: “No hay que temer.

Ningún proyecto queremos impulsar”. Hablaba de reforma jubilatoria.

Y más abajo el jefe de Gabinete decía: “No tenemos en agenda una reforma laboral”.

Esto lo dijo en agosto Marcos Peña, jefe de Gabinete. Hoy ya está aprobada la reforma jubilatoria, ya le bajaron el sueldo a los jubilados y ya mandaron la reforma laboral, que seguramente no la trataremos este año, pero en extraordinarias o en las primeras sesiones del año que viene la trataremos.

Por eso, creo que este gobierno es un club de la mentira. No le dice la verdad al pueblo argentino. No le dice que venía por todos los derechos de ellos.

Llegaron las reformas, asistimos a un circo espectacular. Porque, la verdad, cuando se trató en el Senado, fuimos muy pocos los que levantamos la voz en contra y el pueblo casi ni se enteró. Pero cuando llegó a Diputados, por suerte, la gente tomó consciencia.

Ahí armaron un gran circo. El circo de la represión, de decir que nosotros habíamos mandado a la gente a la plaza, de mentir a la gente porque tienen el tupé de decir a los jubilados que no les bajan sus salarios.

Un diputado de ustedes –lo voy a leer textualmente–, creo que hasta tomando el pelo a los jubilados, dijo a todos los medios que le preguntaban: “Los jubilados sí van a cobrar menos dinero, pero van a poder tener mayor poder adquisitivo”.

Por favor, no se rían más de la gente y mucho menos de la que menos tiene. Esto lo dijo un diputado de ustedes a los jubilados.

Recién un legislador decía: “Este gobierno tiene prioridades”. Claro que las tiene. Tiene prioridades: bajar el sueldo a los jubilados, aprobar una reforma laboral para que los empleados pierdan derechos y dar más poder adquisitivo a los que más tienen. Porque la verdad es que, con este gobierno, hay claramente ganadores y perdedores bien definidos. Tenemos los ganadores, que son los acreedores de la deuda externa, el FMI e inversores extranjeros del sector financiero, porque todavía no vimos otro tipo de inversión que venga a la Argentina. Y tenemos grandes perdedores, lamentablemente: las pymes, los jubilados, los pensionados, los niños, las mujeres, los trabajadores, las trabajadoras.

Por eso van, por las clases que más necesitan. Por eso va este gobierno.

Este gobierno habla siempre de la teoría del derrame. Dice: garantizamos a los que más tienen y luego caerá sobre el resto de los sectores. Todavía no vi que caiga nada sobre el resto de los sectores más humildes.

La brecha del ingreso familiar promedio del 10 por ciento más pobre y del 10 por ciento más rico llegó al 21,8 por ciento en el primer trimestre de 2017. Esto es lo que genera este gobierno: un aumento impresionante de la desigualdad, a pesar del bonito discurso que tuvieron de pobreza cero.

Luego, también han expresado acá que todas estas medidas que se están tomando son generadoras de trabajo. Quiero contar algo a todos ustedes. La desocupación en el tercer trimestre de 2015 era del 5,9. Y en el segundo semestre de 2017 es del 8,7. Creo que las medidas generadoras de trabajo les están funcionando mal.

Permítame hablar un poquito de mi provincia, presidente. La provincia del Chubut y la provincia de Santa Cruz son a las que menos recursos se les asignan. Las políticas de Macri han sido tremendamente dañinas para la economía patagónica. Quitaron los reembolsos por puertos patagónicos –otra mentira más, ya que habían dicho que nos iban a dar otra compensación–; desregularon el precio del petróleo, por lo cual crearon miles de desocupados; fueron y anunciaron con bombos y platillos el Plan Patagonia, pero todavía es un cuaderno de hojas vacías, y quitaron las retenciones a la lana cruda, pero a cambio de esto, tampoco hay alguna compensación.

¿Sabe qué? La Patagonia pasó a ser hace dos años nuevamente el patio trasero de la República Argentina. A consecuencia del pacto que firmó nuestro gobernador, se le exige reducir personal, se le exige reducir horas de trabajo de ese personal. Y les cuento a todos...

Sr. Presidente (Pinedo). – Está excedida en su tiempo, señora senadora.

Sra. González (N. S.). – ...Les cuento a todos, por favor, que en mi provincia hay aldeas donde vive, por ahí, poca gente: cien, doscientas, trescientas personas. A esas aldeas, como le sacan las horas extras al personal, van

a tener seis horas de luz por día, ¡seis horas de luz por día!

Acá está la resolución del Ministerio de Infraestructura de la provincia.

—La senadora Nancy González exhibe una hoja impresa.

Sra. González (N. S.). — La resolución 741...

—Una señora senadora formula manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. González (N. S.). — ¿Me deja terminar de hablar, señora senadora, por favor? Yo no la interrumpí a usted.

Sr. Presidente (Pinedo). — Le estoy pidiendo, por favor, señora senadora, porque está muy excedida en su tiempo... Termine, por favor.

Sra. González (N. S.). — Bueno, voy a pedir autorización para insertar.

Sr. Presidente (Pinedo). — Sí, cómo no.

Sra. González (N. S.). — Para terminar, quiero decir que no vamos a aprobar estos proyectos que, realmente, atentan contra todos los argentinos.

Pero también me gustaría que mis compañeros senadores piensen y que no me toque escuchar alguna frase como la que escuché alguna vez: les toca la ingrata tarea de votar una ley cuando dicen que sus convicciones y sus principios no se lo permiten, pero que igual la votan. Hay que tener responsabilidad cuando el pueblo te votó y estás sentado en una banca.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). — Les ruego a los señores senadores que cumplan con el tiempo. La anterior expositora se excedió el 35 por ciento de su tiempo.

Senadora Boyadjian, tiene la palabra.

Sra. Boyadjian. — Muchas gracias, señor presidente. Trataré de ser breve.

Creo que desde el gobierno se está enmarcando una reforma tributaria, en la cual se trata de bajar, justamente, la presión de los tributos con el fin de mejorar el sector productivo.

Me parece que es bueno implementar una rebaja en las contribuciones patronales y en el impuesto a las ganancias, siempre y cuando esto realmente se reinvierta y esa reinversión o rentabilidad se pueda terminar convirtiendo en más o en mejor empleo, que es lo que sentimos

todos como objetivo final. Si queremos bajar los índices y los niveles tan altos de pobreza, creo que esto es importante. Pero creo que esta medida va a tomar realmente un buen curso si esa rentabilidad también se traduce en baja de los precios de las mercaderías, en las góndolas, en los insumos. Esto generará un mejor consumo y creo yo que, realmente, el sector productivo podrá ser más eficiente y se va a generar el empleo deseado.

Ahora bien, todo somos optimistas. Yo, por lo menos, trato de serlo desde mi lugar y desde mi rol de senadora, porque creo que se necesitan cambios notables para que el país se transforme y realmente empiece a crecer en todas las regiones, a lo alto y a lo ancho del país. Por eso, consideré acompañar el consenso fiscal entre los gobernadores y el gobierno nacional, pues considero que la transformación del país la hacemos entre todos. No podemos ser meros espectadores, sino protagonistas de este cambio.

Ahora bien, en cuanto a mi provincia, Tierra del Fuego, como senadora fueguina tengo algunas consideraciones respecto a una parte del título III de la reforma tributaria, donde se menciona el artículo 70 de la ley de impuestos internos; concretamente, los artículos 122, 123 y 128 vinculados con las alícuotas de los artículos electrónicos.

El artículo 128, para leerlo y ser puntual con lo que dice: “Se propicia en forma gradual una equiparación en alícuotas de los impuestos internos a los productos que se fabrican en Tierra del Fuego respecto de los que se producen en el continente, llegando en ambos casos a tasa cero para el año 2024”.

O sea, en forma gradual. Implicaría que en el futuro, si tomamos el año 2024, es muy corto el tiempo y no se genera otra situación para mejorar lo que hoy solamente tenemos como polo tecnológico de desarrollo. Nos quedaríamos sin competitividad en las empresas que están radicadas en Tierra del Fuego, razón por la cual se iría perdiendo gradualmente este ventajoso tratamiento impositivo que hoy es vital para nuestra provincia.

Esto se tomó del acuerdo que se firmó hace muy poco tiempo entre el gobierno nacional, provincial, AFARTE —que nuclea todas las cámaras empresariales de las empresas que están radicadas bajo el amparo de la ley 19.640, régimen de promoción industrial, y los sectores

gremiales de la UOM, donde se incluyó además el congelamiento de los salarios de los trabajadores fueguinos por dos años. O sea, hasta finales de 2020. Creo que es un sacrificio muy alto para los trabajadores, sobre todo si no se tiene en cuenta que, de a poco, se iría perdiendo o desmembrando el pilar de desarrollo que hoy fortalece nuestra economía.

Esto, como senadora fueguina, realmente me preocupa. Creo que si las tasas de los impuestos internos llegan a cero para los productos que se fabrican en el continente, a iguales productos que se fabrican en Tierra del Fuego, con el tiempo, se perdería competitividad y sería lo mismo radicarse en Tierra del Fuego o en otra parte. O, quizás, para esa empresa sea más ventajoso radicarse en las cercanías de los centros de consumo, dado el alto costo que insume el transporte y la logística que esto conlleva.

Por eso, creo que es importante que esto se tome en cuenta y, por lo menos, desde mi lado, quiero votar negativamente por estos artículos en lo que se refiere a la reforma tributaria.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora senadora.

Senador Perotti: tiene la palabra.

Sr. Perotti. – Gracias, señor presidente.

Sabiendo de la posibilidad de insertar, voy a referirme a algunos aspectos que tienen que ver con las reformas tributarias y con el presupuesto en general.

En particular, quiero dejar en claro algunas posturas que se dieron en discusiones en las comisiones con respecto a la inclusión del gravamen a las ganancias, a las cooperativas y a las mutuales. Dejar en claro allí –y se han expresado algunos legisladores previamente– lo que significa para las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y otras tantas el desarrollo del sistema cooperativo, que ha ocupado un lugar trascendente en aquellos lugares donde, a veces, no hay capacidad de emprendedores, de inversores y es allí donde ha surgido un desarrollo realmente importante con incorporación de valor y diversificación de sectores. Ello no quita que no queramos discutir o ver que hay situaciones, donde bajo el uso de esta figura, puede aparecer un desvío de esos objetivos.

Cuando el Poder Ejecutivo habla de la necesidad de gravar a los que tienen un funcionamiento financiero y lo denomina como “cuevas”, creo que el Ejecutivo posee todas las posibilidades de tener las instancias de control de los organismos a su cargo para hacerlo. Y si necesitan tener herramientas para mejorar esos controles, vamos a estar acompañándolos. Creo que esa será la mejor manera de dejar claro y resguardar el espíritu cooperativo y de mutuales que tienen un gran impacto en todo el desarrollo del interior y, en particular, en muchas pequeñas localidades donde no solamente no existen entidades bancarias y financieras, sino tampoco otros emprendimientos que impliquen la posibilidad de aunar esfuerzos comunes.

También, debo dejar claro que hemos planteado la necesidad, como santafesinos, de tener clarificada la situación de la deuda de la Nación con la provincia, después del fallo de la Corte. Creo que han sido claras al respecto algunas expresiones de los legisladores de San Luis. Pero quiero dejar muy claro que lo que ayer planteó el ministro fue una primera instancia, el saber que hay una voluntad en marzo –tal como el acuerdo firmado por los gobernadores lo plantea– de llevar adelante el reconocimiento de la deuda. Pero no se hace ninguna expresión con respecto a algún pago en 2018.

Me parece importante que provincia y Nación puedan definir un cumplimiento de pago adecuado, porque los mismos acuerdos plantean sanciones cuando alguna provincia no cumple, pero no está el correlato con respecto a si es la Nación la que no lo hace. Uno aboga para que el entendimiento de provincia y de Nación se dé después de esta firma y sea de la forma más conveniente, no solamente para los santafesinos, sino también para todos los argentinos.

Cuando analizamos muchas de las partidas del presupuesto, vemos que las que crecen son las vinculadas con el servicio de la deuda: se incrementan en más de un 28 por ciento. Nos preocuparon y nos preocupan los números que va arrojando el cierre de 2017, que a noviembre está teniendo un déficit comercial que supera los 7.600 millones. Eso es el 14 por ciento de nuestras exportaciones.

Si analizamos el porcentaje de la relación de deuda en moneda extranjera con las exportaciones desde 2011 hasta aquí, vemos cómo

en 2011 era del 109 por ciento y hoy es del 273 por ciento. En ese sentido, tenemos una preocupación seria acerca de cuál será la política concreta del gobierno para fortalecer una política exportadora, para fortalecer una estrategia de captación de divisas genuinas que permita enfrentar este nivel de endeudamiento. De eso hay que hablar cuando se hacen expresiones acerca de cuál será la inserción de la Argentina en el mundo, de nuestros socios comerciales y de dónde buscaremos los vínculos comerciales.

Desde aquí hemos planteado en innumerables oportunidades la necesidad de ser inteligentes y de leer adecuadamente los cambios que el mundo ha tenido en estos últimos tiempos. No le escapa a nadie la situación que algunos sectores nacionales han sufrido por la suba de los aranceles de Estados Unidos. Y no se trató de aranceles menores. Llevar al 70 por ciento una protección para el biodiésel en los Estados Unidos habla a las claras de que nadie se pone colorado cuando hay que proteger a un sector.

Cuando se habla de las negociaciones con la Unión Europea, aparece claramente la definición de ellos en cuanto a los sectores sensibles y los sectores a proteger y ninguno se pone colorado. Y todos los integrantes de la OSD, a la que permanentemente se refieren muchos de los funcionarios nacionales, son los que tienen pautas de protección muy altas.

Seamos inteligentes en resguardar los sectores que nos pueden generar genuinas divisas. Tengamos una estrategia inteligente de vinculación y fortalecimiento del Mercosur y de los países de América Latina para desde allí poder negociar inteligentemente con Asia, con Europa, con los Estados Unidos, con Rusia, con quien sea. Tengamos muy claro que todos defienden sus sectores. Y no es estar pasado de moda ser proteccionista o cerrarse a hablar de los sectores que tenemos que defender, porque son los que tienen capacidad de generar empleo y divisas para enfrentar estos niveles de endeudamiento.

Cuando analizamos en particular estos sectores que tienen que desarrollarse, crecer y generar posibilidades de más divisas, vemos que requieren financiamiento. Nos preocupa que el Banco Nación pierda 20.000 millones. Nos preocupa que el Banco Nación tenga que remitir utilidades cuando estamos teniendo anuncios de que el banco está suspendiendo sus

líneas de préstamos. Me parece que tenemos que revisar y analizar si es lo más conveniente lo que se está haciendo con esta decisión de quitarle capital y posibilidades de financiamiento a una institución que tiene que estar cerca de los sectores que generan empleo y posibilidades de exportaciones.

Tenemos en este presupuesto las primeras apariciones de obras con los proyectos de participación público-privada y me parece que aquí urge la configuración de una comisión bicameral responsable del seguimiento de la totalidad de los contratos que se estén dando y que también tengamos un rol mucho más activo como representantes de las provincias acerca de cuál es el proceso de priorización y selección de este tipo de obras que aparecen en el presupuesto nacional.

De la misma manera, cuando hablaba de los incrementos en los servicios de la deuda, es necesario que insistamos y recordemos que esta Cámara le dio sanción a un proyecto de ley para recuperar las facultades plenas del Congreso en el manejo de la deuda. Ese proyecto ha pasado a Diputados y allí está. Esta Cámara ha tenido una clara definición al respecto en ese sentido. Y hay otra comisión, la de control parlamentario de la deuda...

Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su tiempo, señor senador.

Sr. Perotti. – Ya estoy en la parte final, lo que no quiere decir que esté terminando.

Le decía que allí tenemos en esta comisión bicameral de seguimiento la necesidad de renovar inmediatamente los miembros y ponerla a funcionar. Si esa comisión fue integrada, tiene que funcionar. No es un tema menor la composición del gasto dentro de este presupuesto que se está analizando.

Este Senado aprobó un proyecto de ciencia y tecnología en el que se establecía el deseo de un presupuesto creciente y sostenido para llegar a 2030 al 3 por ciento del PBI. Quiero decirles que hoy, tomando desde 2015 hasta aquí, que estábamos en 1,58, este presupuesto marca a la función ciencia y tecnología en 1,22. Uno puede correr con viento en contra, pero nadie corre para atrás si quiere llegar a la meta. Puede aflojar la marcha, pero, en todo caso, es siempre para reafirmar el sentido en el que se corre.

Aquí estamos equivocándonos. Aquí estamos con una caída en el presupuesto de ciencia y tecnología. Aquí no estamos mirando que en ningún lugar del mundo existe un sistema tecnológico pendular. La Argentina debe dejar de tener algunas expresiones solitarias, individuales, parciales o de incentivos para apoyar a la ciencia y la tecnología.

Debe apoyarse en la ciencia y la tecnología definitivamente para su desarrollo. Tenemos ejemplos en el mundo, muy claros. Después de la crisis mundial de 2008, China invirtió y creció, en su inversión, en un 118 por ciento. Polonia, por arriba del 62 por ciento.

Sr. Presidente (Pinedo). – Le tengo que recordar el tiempo, señor senador.

Sr. Perotti. – Estoy terminando, presidente.

Por eso, me parece que es allí donde tenemos disyuntivas y claras situaciones por las que hemos acompañado parcialmente el dictamen de presupuesto. Entendemos que es una herramienta a tener. Entendemos que es la posibilidad de estar mejorando la institución presupuesto, pero es allí donde, para hacerlo realmente, después de las profundas modificaciones que se han dado con las leyes de reciente tratamiento, que pedimos que el Poder Ejecutivo envíe una ley rectificando o corrigiendo estos datos, para acercarnos a un presupuesto real.

Quiero finalizar con una frase, le pido permiso para poder leerla: “La disyuntiva es clara: o bien se cultiva la ciencia, la técnica y la investigación y el país es próspero, poderoso y adelanta o no se las practica debidamente y el país se estanca y retrocede, vive en la pobreza y la mediocridad. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara. Cara es la ignorancia”.

Esta frase, dicha en 1967, es de uno de nuestros premios Nobel: Bernardo Houssay. Ojalá definitivamente tomemos conciencia de que es necesaria una inversión en ciencia y tecnología, sería, permanente y que nos permita un crecimiento sostenido.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor senador, a pesar de excederse un 35 por ciento de su tiempo.

Senadora Odarda: le pido puntualidad en el suyo. Gracias y tiene la palabra.

Sra. Odarda. – Gracias, señor presidente.

Bueno, el proyecto de presupuesto, a nuestro juicio, se puede caracterizar en cinco palabras: tarifazo, ajuste, endeudamiento, antifederalismo y, finalmente, pobreza.

Tarifazo, porque este esfuerzo que están haciendo las familias argentinas realmente es inviable en un país que se dice inclusivo, cuando pensamos que va a implicar el 4.200 por ciento en el precio del gas a 2022. Y ninguna excepción se hizo para la región patagónica, como lo dijo en su momento el señor ministro de Energía, ya que si bien la Patagonia es la zona de mayor producción de gas y petróleo, además de eso, nuestra zona –que es productora de perimanzana– está sufriendo el avance del petróleo sobre tierra productiva bajo riego, lo que es realmente una situación intolerable, sobre todo, si pensamos en nuestros pioneros.

Más de 100 años tiene el dique Ballester –toda una zona que era desierto y se convirtió en un vergel– y la estamos destruyendo gracias al avance del gas y el petróleo no convencional. A pesar de eso, tenemos que sufrir un aumento en las tarifas de gas del 4.200 por ciento, además del incremento de la luz y del incremento del transporte.

Con respecto al ajuste, hace pocos días vimos una sesión bochornosa en la Cámara de Diputados. Lamentablemente, se sancionó este proyecto de ley que afecta a más de 17 millones de jubilados, a las pensiones de los veteranos de guerra, a la asignación universal por hijo, a través del cambio de índice de movilidad.

–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta de la Nación, licenciada Marta Gabriela Michetti.

Sra. Odarda. – También, para referirme ya a mi provincia, Río Negro, cuando hablamos de ajuste, un ejemplo del ajuste en educación es lo que pasó con los jardines de infantes. Por ejemplo, un decreto muy reciente, el 1.013/17, establece un recorte del presupuesto en dos jardines de infantes de General Roca, sumado a eso, por supuesto, lo que significa el ajuste en el plan Conectar Igualdad.

El otro concepto: el endeudamiento. La Argentina fue el principal país emergente emi-

sor de deuda en bonos desde enero de 2016 a septiembre de 2017. Detrás de la Argentina se ubican China, México, Corea del Sur e Indonesia. Con un déficit de 4.500 millones de dólares, se estima que es quizás el déficit mayor desde los años noventa. A su vez se autoriza el endeudamiento en 46.500 millones de dólares que, sumado a los 300.000 millones de dólares, o sea, el 70 por ciento del producto bruto interno, conforman este gasto correspondiente al pago de deuda y servicios o intereses de la deuda.

Es como el perro que se muerde la cola. Es una lógica irracional. Es endeudarse mientras se ajusta el gasto y se afecta la calidad de vida de los argentinos. Justamente, no se frena el gasto, el gasto sigue existiendo, pero el endeudamiento también sigue existiendo para parar ese déficit, que no va a parar nunca si se sigue profundizando este endeudamiento devorador. Lamentablemente, estos pagos de la deuda superan lo destinado a universidades, a defensa, a seguridad, a salud, a educación, a cultura, etcétera.

Plan Patagonia, que se nombró aquí. No existe el Plan Patagonia. Se firmó a principios de año en Viedma con la presencia de los gobernadores patagónicos. A diferencia del Plan Belgrano, que tiene presupuestados 350.000 millones de pesos, el Plan Patagonia tiene cero pesos en este presupuesto. Dentro de las obras que fueron elevadas para conformar este supuesto plan que no existe, está el mantenimiento de la traza de las vías del Tren Patagónico, la interconexión de vías ferroviarias entre Chelforó y Ministro Ramos Mejía y la renovación de la traza férrea entre Cipolletti - Contraalmirante Cordero. Ninguna de las tres obras existe en el presupuesto.

Respecto del transporte, el ministro Dietrich hablaba ayer de la revolución de los aviones. Lamentablemente, Aerolíneas Argentinas acaba de levantar tres frecuencias del vuelo Viedma - Buenos Aires. Teníamos un solo vuelo por día. Hablamos de la capital de la provincia de Río Negro. Y, lamentablemente, el vuelo que cubría el trayecto Viedma-Bariloche fue desterrado absolutamente con el argumento de que no tiene pasajeros, cuando los mismos trabajadores aseguran que ese trayecto va completo de pasajeros. Esto por supuesto que afecta nuestra política aerocomercial, sobre todo de integración regional.

Lamentablemente, pareciera que el servicio que presta Aerolíneas Argentinas, que es nuestra línea de bandera, que debiera ser fortalecida, cada vez se ve más debilitada y no por el esfuerzo de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, a quienes siempre felicito por su empeño, su trabajo y su esfuerzo.

¿Sabe una cosa, señora presidenta?: en algunos tramos ni siquiera un vaso de agua sirve Aerolíneas Argentinas a sus pasajeros. Y esto no es casual. Yo lo que siento con este auge de las aerolíneas *low cost* es que lo que estamos haciendo es una privatización encubierta del servicio aéreo, sobre todo de nuestra línea de bandera.

Los trenes de pasajeros siempre son una preocupación. Venimos peleando por la recuperación de los trenes que perdimos en la década del noventa. ¿Qué nos dijo el jefe de Gabinete? Que no eran prioritarios en la Patagonia, pero sí en Buenos Aires. ¿Qué nos dijo ayer el ministro Dietrich? Que ya los trenes de pasajeros no son tan importantes, ni siquiera en Europa, cuando todos sabemos el valor que le da el mundo a la comunicación a través de los trenes.

Yo aquí sí quiero recordar a alguien que peleó mucho por los trenes, por la nacionalización de los trenes. Y cuando hago este alegato a favor de los trenes es porque los trenes dan vida a los pueblos, esa vida que se les arrebató a muchos pueblos de la Argentina con aquella frase: “Ramal que para, ramal que cierra”, en la década del noventa. Y hablo de quien trabajó tanto por la nacionalización: Scalabrini Ortiz, que junto a Jauretche —de FORJA— lucharon a brazo partido para nacionalizar los trenes en la Argentina. Y cuando allí por el año 1947 el presidente Perón anunciaba la nacionalización del sistema ferroviario argentino y en el año 1948 apareció en forma gloriosa la locomotora “La Porteña”, Scalabrini Ortiz soñaba con ese país de trenes. Para él comprar un tren significaba comprar soberanía, comprar patria.

Lamentablemente, pasaron muchos años y hoy se sigue priorizando el fin económico y no el fin social de los trenes, se sigue priorizando el transporte de carga —en este caso, a Vaca Muerta— y no el tren de pasajeros. Esperamos que esta política se revierta porque no hay un solo proyecto ferroviario del gobierno nacional para la Patagonia argentina.

También quiero hablarles del recorte del INTA. El INTA presta un servicio invaluable a la sociedad con sus investigadores y necesita 400 millones extras para poder seguir funcionando.

Sobre ciencia y tecnología, reitero lo que manifestaba el senador Perotti: lamentablemente el proyecto que se aprobó en el Senado fue pisado en Diputados. Necesitamos un mayor presupuesto en ciencia y tecnología, sobre todo por nuestros científicos, porque es el futuro de nuestra patria.

Respecto de la Universidad Nacional del Comahue, me gustaría que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en algún momento me responda por qué ha sido discriminada de esta manera: de 57 universidades argentinas, está en el número 53 en el presupuesto. Cero pesos más que el año pasado le han sumado al presupuesto de la Universidad Nacional del Comahue.

¿Qué decir de la fruticultura? No hay una sola mención a la crisis que están viviendo nuestros fruticultores. Se sigue cobrando 5 pesos el kilo de manzana, por ejemplo, y a 70 pesos nos lo venden en el supermercado o en el mercado a nosotros, los consumidores. ¿Cuál es la respuesta del gobierno?: Endeudamiento. ¿Cuál es la respuesta del gobierno?: “Estamos trabajando en ello”, mientras tanto se caen productores, familias obreras se quedan sin trabajo, pueblos frutícolas ven cómo cambia su realidad económica, desarraigo, avance del extractivismo, del petróleo sobre zona productiva...

Sra. Presidente. – Senadora: estamos en 11 minutos, le pido si puede redondear.

Sra. Odarda. – No hay que tenerle miedo a la palabra subsidio para la fruticultura, señora presidenta. Necesitamos, de una vez por todas, precio para la fruta, como lo tienen otras economías regionales.

No puede ser que estemos importando manzana de Chile y pera de Corea del Sur. Eso destruye nuestro mercado interno. Eso destruye a nuestros productores.

En cuanto al tema indígena, no se cumple con el artículo 4º de la ley 26.160, que es el fondo especial para el relevamiento.

Algo muy grave: 40 por ciento menos de presupuesto para nuestros bomberos voluntarios.

¿Dónde está el presupuesto para seguir la búsqueda de los 44 tripulantes del ARA “San Juan”?

Ni hablar de la pobreza: 13,5 millones de hermanos en la pobreza y la mitad son niños de 0 a 14 años. Hay 2,5 millones de indigentes en la Argentina de hoy.

Por eso, señora presidenta, para finalizar, cuando yo hablaba de que también una de las características de este presupuesto era el antifederalismo, me pregunto cómo puede haber federalismo si con el pacto fiscal se obligó a las provincias a resignar, a renunciar a sus juicios de coparticipación, a los atrasados y a los que vienen...

Sra. Presidente. – Senadora...

Sra. Odarda. – Termino.

La reforma tributaria le significa a Río Negro una pérdida de 282 millones de pesos.

Por eso, señora presidenta, voy a finalizar diciendo simplemente esto: se trata de un presupuesto que lejos está de ser inclusivo, lejos está de ser equitativo y, por supuesto, lejos está de ese sueño de Scalabrini Ortiz de una Argentina definitivamente justa.

Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente. – Gracias, senadora Odarda.

Tiene la palabra el senador Mayans.

Sr. Mayans. – Presidente: gracias.

En primer lugar, para este tipo de debates, diez minutos por orador no es nada.

Sra. Presidente. – Es lo que se acordó en Labor.

Sr. Mayans. – Pero es lamentable, realmente, porque este tipo de debates deberían ser abiertos para que todos puedan expresarse y máxime que, prácticamente, no hubo trabajo en comisión, ya que en la comisión fue un tratamiento exprés, exprés.

Sra. Presidente. – Tomo su opinión, pero se lo debe decir a su presidente de bloque.

Sr. Mayans. – Es una aberración que nos corten el uso de la palabra en un tema central como el que estamos tratando.

Sra. Presidente. – Bueno, yo cumplo con lo decidido en la reunión de Labor Parlamentaria.

Sr. Mayans. – Entonces, hay que tratar las leyes por separado.

Sra. Presidente. – Mire que está perdiendo minutos. Así que dele.

Sr. Mayans. – No, no es dele. Ustedes tienen que hacer mejor las cosas. No puede venir acá a someternos a un debate y decir diez minutos. Es una vergüenza el trato que recibimos como senadores. Hay senadores de primera que tienen cuarenta minutos y senadores de segunda que tienen diez minutos. Le pido que me compute bien el tiempo, si no, voy a plantear una cuestión de privilegio. No voy a tener otra salida. Quiero hablar y explicar muchas cosas que se dicen.

Sra. Presidente. – Senador: ¿le puedo explicar...?

Sr. Mayans. – Le pido que empiece de nuevo con el reloj.

Sra. Presidente. –Vamos a empezar de nuevo.

Sr. Mayans. – Es una vergüenza que nos traten de esa forma en Labor Parlamentaria. ¿Quién acuerda que haya senadores de primera y senadores de segunda?

Cuando se trata el presupuesto y cuando se tratan estos temas centrales debe haber debate libre. Y, si están apurados, los que lo están que se vayan a su casa. Que no nos vengan a poner tiempos para hacer uso de la palabra sobre temas centrales que van a tener impacto en el país.

Señora presidente: ponga de nuevo el reloj y empiezo.

Sra. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Rodríguez Machado.

Sra. Rodríguez Machado. – Simplemente para una aclaración.

Senador Mayans: usted no integró esta semana la Comisión de Labor –ha ido otras veces– y se acordó en conjunto. La presidenta no estuvo en esa reunión, pero se acordó una flexibilización para los oradores que sean miembros informantes o en el momento de cierre.

Sr. Mayans. – No se trabaja en comisión y vienen con un tema exprés...

Sra. Presidente. – Va a comenzar el senador Mayans.

Sr. Mayans. – Gracias, señora presidente.

Acá me quiero acordar de algo que le preguntaron a Duhalde sobre cómo sería la segunda etapa del gobierno de la Alianza y él dijo: “Van

a empezar a mentir de lindo...”. Y la verdad es que la mentira gobierna al mundo. Esto está lleno de mentiras lamentables. Hay declaraciones del presidente que veo que van para cualquier lado, y sin medir la realidad. Porque la única verdad es la realidad y la realidad ¿cómo se maneja? Por el resultado. Y los resultados que tenemos son pésimos. Esta es la realidad.

Hablemos del PBI. Hay caída del PBI como resultado del problema del consumo. Lo mismo sucede en el comercio exterior y con la inversión. O sea, se hace un dibujo.

Si el presidente maneja estas cifras, me imagino que la senadora hará lo mismo. Se manejan con una visión totalmente desencajada de la realidad. Reitero que los resultados han sido pésimos. En lo que hace a la recaudación, también han caído los ingresos medidos en forma real. Lo digo ya que veo que está llegando el miembro informante.

En lo que hace a la inflación, hubo un 66 por ciento en dos años. Más de un 40 por ciento el primer año y este año el 24 por ciento. Repito: 66 por ciento de inflación. Este es el resultado del plan económico del actual gobierno.

La canasta básica pasó de 7.800 pesos a 17.000 pesos. ¿Conoce el miembro informante que la canasta está en ese valor? ¿Reconoce el miembro informante que ese es el valor que dan todos los medios? La canasta básica durante nuestro gobierno era de 7.800 pesos y hoy está en 17.000 pesos. Lo digo para que vean cómo impactó el programa económico.

El miembro informante habló de la pobreza, y lo que ustedes hicieron con este programa económico fue generar pobres. Nadie generó tantos pobres como este gobierno y como el gobierno de la Alianza. Cuando a nosotros nos dejó el gobierno en 2001 había 56 por ciento de pobreza.

El presidente, muy hábil, con todo su equipo económico y asesores empezó a leer la pobreza a partir de agosto del año pasado. Dice: “Recibí, de acuerdo con el índice que tengo, 32 por ciento de pobreza”. Una mentira grande como la casa.

En realidad, cuando el salario mínimo estaba en 6.800, la canasta básica estaba en 7.800. Ahora el salario está en 8.000 y la canasta en 17.000. Imagínense la cantidad de pobres e indigentes que han generado en el país.

El asalariado está cada vez está más lejos de la canasta básica familiar y, por supuesto, ni qué hablar de los jubilados, también cada vez más lejos de la canasta básica. Para mejorar la pobreza tenemos que aumentar la capacidad de respuesta en materia de la canasta básica familiar, si no, no entendemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de la pobreza generada por el costo de la canasta básica familiar. Una verdadera vergüenza de interpretación. Este gobierno ha generado pobres por cantidades. Indigencia, ni qué hablar, porque la canasta de indigencia está cada vez más lejos también.

Esa es la otra gran mentira. Con respecto al tema del IPC, ni hablar. En el Banco Central tenemos una maniobra que para mí es delictiva. Cuando tengamos una Justicia como la gente, los que tienen que ir presos son de Sturzenegger para abajo, completo. Todos están haciendo la maniobra traspasando desde el sector estatal hacia el sector privado 61.000 millones de dólares generados en dos años en materia de LEBAC, que están pagando a tasas del 30 por ciento.

Entonces, ¿cuál es la explicación que hacen ahora? Dicen, fíjense, está subiendo el dólar. ¿Y por qué está subiendo el dólar? Dicen que porque hay necesidad de pagar aguinaldo. No, está subiendo el dólar porque hay más de 100.000 millones en LEBAC que no se cambiaron, lo cual impacta directamente en el dólar. Tenemos más de un billón en LEBAC y el criterio del Banco Central es llegar a 1,8 billones. Imagínense ustedes la deuda. Nadie le pone límite a esto. El problema que tenemos, como decía Bill Clinton: “Es la economía, estúpido”. Este programa no funciona, este programa genera cada vez más pobreza.

El miembro informante sigue en la campaña, porque usted habla—con todo respeto le digo—de que queremos ser menos pobres, queremos un país inclusivo, queremos mejorar...

Mejorar la calidad institucional. Fíjese usted: tienen un fallo de la Corte, un fallo de la Cámara. No incluyeron en este presupuesto, por ejemplo, el tema del Parlamento del Mercosur. El Parlamento del Mercosur está afuera. Los parlamentarios del Mercosur van a pedir limosna a Uruguay. Una vergüenza. Además, les sacaron los fueros parlamentarios, otro fallo inédito de la Corte. Hablando de tema institucional, la única parte del Mercosur en donde los

países asociados no tienen fueros parlamentarios es acá, en la República Argentina. Eso es obviamente una intromisión directa del Poder Ejecutivo en la Corte diciéndole que, como van a meter preso a Milagro Sala, saquen el tema de los fueros parlamentarios. Por eso sacaron los fueros parlamentarios. Esa es la calidad institucional que ustedes proclaman.

Obviamente que no hay límites en el tema del Banco Central, no hay límites en el tema del endeudamiento. Allí está nuestro verdadero problema.

Acá nadie viene a dar cuenta de nada. Basavilbaso va a hacer polvo el fondo de garantía sustentable. No vino a dar una sola explicación acá, al Parlamento. Nosotros nos callamos, miramos. La verdad es que en eso estamos re-contra mal. Tiene que haber límite en materia de endeudamiento. El ministro de Finanzas no puede hacer lo que hizo, endeudar al país en la forma en que lo ha endeudado y sin límite.

En la parte general, obviamente que uno no se puede oponer al funcionamiento del Estado. Pero, en la parte de la deuda pública, tendríamos que haber traído acá al ministro a explicar qué ha hecho con toda esa plata. Estamos hablando de 307.000 millones de dólares, sin incluir los 61.000 millones que tiene el Banco Central en LEBAC. Y el Banco Central también sin límite de emisión. Dos señores que hacen lo que quieren de la economía argentina y ustedes buscan una defensa injustificada. El Banco Central tiene que tener límites a la emisión de LEBAC.

Acá dicen: “Bajamos la inflación, del 44 al 24 por ciento”. ¿Con qué bajaron? ¿Con las LEBAC? Cada vez debemos más. No se llaman LEBAC, se llaman pagarés. El Banco Central emite pagarés todos los meses en una forma vergonzosa. Está pagando lo que ningún banco del mundo paga, al 29 por ciento. La Reserva de Estados Unidos paga al 0,5 por ciento. Un verdadero desastre. Vamos mal.

Entonces, no vengan acá a mentirnos, por lo menos a nosotros. Ya que han mentido lindo en la campaña, dejen de mentir acá. Acá tenemos que hablar de las cosas reales. Acá, si se analiza el presupuesto como tiene que ser, tiene que venir el señor secretario de Finanzas a explicar qué ha hecho con la deuda y qué límite de endeudamiento le vamos a dar. Ahora pide una cifra sideral. Analicen ustedes el tema del

endeudamiento del crédito público. Es sideral la cifra que están pidiendo. ¡Sideral! Ni siquiera se discutió eso en la comisión. Ni siquiera se trajo a este hombre. Debió venir el señor secretario de Finanzas a explicar qué está haciendo con la deuda del país.

¿No le interesa a usted, que es miembro informante, lo que está haciendo con la deuda del país? ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Me puede explicar usted los alcances del artículo 33? Estamos hablando de cifras siderales. Y lo estamos autorizando así porque sí, sin ningún tipo de explicación.

Entonces, lo que es la parte pétrea del presupuesto yo no la discuto. ¿Cómo voy a discutir el tema, por ejemplo, de la administración central, que es el 0,9 por ciento? Razonable. En el caso del servicio de defensa: 13 por ciento. Razonable. En el caso de los servicios sociales: 21 por ciento. Razonable. En el caso de los servicios económicos, menos 8 por ciento. Razonable. Pero la deuda pública, por favor, es un desastre. Esto no lo puede pagar nadie.

¿De dónde se nutre el Estado? Del comercio exterior. Sin embargo, 8.000 millones de dólares tenemos de balanza comercial negativa. Es negativa la balanza comercial.

Entonces, yo digo: como termina la mentira tan rápido, hacemos un pacto fiscal. Les ponen, como dijo el gobernador Rodríguez Saá, una pistola en la cabeza a todos y les dicen: “Bueno, señores, hacemos esto o...”. Había provincias que estaban desesperadas, realmente. Y con eso forman el núcleo de la mayoría. Y a otras provincias les dicen: “Si no entraste al pacto fiscal, estás afuera”. Esto es lo que se hizo ahora.

Ahora bien, con este plan, ¿vamos a estar mejor el año que viene? Le firmo, señora presidente, a usted que es una persona de buena fe, que el año que viene vamos a estar peor.

Ni siquiera se dice cómo se va a compensar el tema de ganancias ni el tema del impuesto al cheque. Nadie sabe cómo se van a compensar. Se dice por la ley de revalúo. Pero sacan una coparticipación que hoy es directa y la suplantán por una forma en que le van a coparticipar nuevamente a las provincias. Miren, de los 3.000 millones que tienen pensado recaudar, 700.000 van para las provincias. El resto va para el gasto.

Y el déficit proyectado es de 7 puntos del PBI. Estamos en el horno con eso.

Entonces, lo que está demostrado acá es que realmente ese programa ha traído graves problemas para el país. Hay provincias que han entrado en déficit gracias a este gobierno. ¿Y cómo hacen para resolver sus problemas? Sacan deuda.

Me acuerdo que el año pasado nos ofrecían todo tipo de deuda en dólares con sede en Nueva York. Y usted vio cómo hace el CIADI con nosotros. Hasta ahora me parece que no ganamos un solo juicio. Siempre los perdemos.

Sra. Presidente. – Senador: vaya tomando en cuenta el tiempo...

Sr. Mayans. – “Vaya redondeando”, dice...

Presidente: para mí –vuelvo a insistir– sigue siendo nuestro problema el programa económico del gobierno. Es un desastre. Por algo echaron ya al ministro Prat Gay. Lo echaron por eso, porque su programa fracasó. El gobierno llegó hasta las elecciones con deuda. Terminó las elecciones y tiene que ver la verdad acá. Tenemos un déficit de casi 8 puntos. Ocho puntos son 40.000 millones de dólares. ¿De dónde sacás eso? Esa es la realidad del programa económico.

Y el otro problema es el programa de inversiones, porque el PBI crece, el PBI es consumo, inversión y comercio exterior, pero, bueno, la inversión se daba en las provincias del color político del gobierno. Y en esa inversión figura, por ejemplo, el programa de viviendas a 1.000 dólares el metro cuadrado. Ni en Nueva York ya se hacen viviendas a 1.000 dólares el metro cuadrado. Se hacen, sí, pero son viviendas con porcelanato... Para los que entienden algo de obras públicas, una vivienda es el programa básico. Obviamente que después de las viviendas viene el tema educativo –o sea las escuelas–, después la seguridad, el agua potable, la energía eléctrica.

Todas esas cosas realmente han sido aplastadas por este programa que dice que nadie gastó. ¿Y cómo van a gastar si están pagando por una vivienda 1.000 dólares el metro cuadrado? Me imagino lo que es en el otro tema.

Ahora, en el tema energético, escuché hablar al presidente. La verdad, da lástima. No entiende nada de lo que dice. Dice: “Recibimos un país

sin energía”. Nosotros recibimos un país con un consumo que estaba limitado por el desastre económico en ese momento —que vaya a los archivos, por lo menos que alguien lo asesore—: 13.000 megavatios. Él recibe un país con 26.000 megavatios. ¿De dónde salieron los 26.000 megavatios? ¿De la magia, salieron?

¡Y ahora tenemos la energía más cara del país! ¿Saben qué pasa ahí en mi ciudad? Van a comprar la nafta a Asunción: 1,40 dólares. Alguien que maneja precios, que maneja el presupuesto, ¿discutió eso en el presupuesto? ¿Van a seguir manteniendo ese nivel de aumento en los combustibles? ¡1,40 o 1,30! Van a Asunción a comprar la nafta. Antes venían todos los paraguayos acá, consumían, utilizaban hoteles y nadie preguntaba por los impuestos.

¡Lo que vale la nafta en la República Argentina, lo que vale el consumo energético! Hay privilegiados. En mi ciudad o en mi provincia, tener un aire acondicionado no es un lujo; un aire acondicionado es una necesidad para el que es hipertenso, para el que es diabético, para no morirse.

Sra. Presidente. — Senador...

Sr. Mayans. — Entonces ahora dicen: “Damos subsidio a 400 vatios”. Cuatrocientos vatios es una lámpara prendida.

Hay gente que habla y no sabe de lo que habla acá, ese es el problema que tenemos.

Entonces, cuando se hace una discusión del presupuesto, se supone que tiene que haber una discusión amplia —como dijo el senador Rodríguez Saá— donde se habla de estos temas y no tenés cada tres minutos a la presidente que te dice: “Senador, está su tiempo en juego”.

¡Porque acá estamos discutiendo que debemos 370.000 millones de dólares y están apurados por irse a sus casas! ¡370.000 millones de dólares! ¡Nadie le pregunta al ministro de Finanzas qué mierda hizo con la guita! ¡Ni al secretario de la ANSES qué está haciendo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad! ¡Nos están robando a todos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad! ¡Está haciendo pelota el sistema previsional! ¡No sé cómo quiere que le diga! ¡Entonces acá no estamos discutiendo cosas que no son serias!

¡Que venga ese señor y que explique para qué estamos acá! El miembro informante dice que

quiere eliminar la pobreza, que estemos todos bien, que seamos un país feliz, que tengamos un sistema espectacular. La verdad es que el discurso es bueno, pero la conclusión es que no explicó nada del tema del déficit y esas cosas. No explicó cómo se va a combatir el tema de la deuda, cómo se va a resolver el problema de la deuda de las provincias.

Sra. Presidente. — Senador: le pido por favor, son quince minutos...

Sr. Mayans. — ¡Están endeudadas en dólares!

Sra. Presidente. — Le voy a tener que cortar el micrófono.

Sr. Mayans. — Córteme, presidente, ¿qué problema hay?

Sra. Presidente. — No, pero no vale eso.

Sr. Mayans. — ¿Qué podemos hacer? El problema es cómo están dando tratamiento a temas que son centrales...

Sra. Presidente. — No, porque me parece que siempre somos respetuosos...

Sr. Mayans. — Es vergonzoso realmente que vengamos acá con ese apuro y con gente que no diga nada en materia...

Sra. Presidente. — Se terminó, listo.

Tiene la palabra la senadora González, María Teresa.

Sí, senador Fuentes.

Sr. Fuentes. — Gracias, presidenta.

Yo estuve en la reunión de Labor. Atento a que era la última sesión del año y el volumen de las materias en discusión, se tuvo el criterio y estuvieron de acuerdo todos los bloques presentes en que iba a haber elasticidad. Elasticidad implica poder terminar la sesión armoniosamente, poder despedirnos e ir a nuestras casas. Entonces, no estar con esto del tiempo. Creo que todos tienen sentido de la proporcionalidad y de la responsabilidad.

A los efectos de su tranquilidad también y del debate, mantengamos ese criterio. Se dijo “estimativamente”, lo cual implica que cuando hay algo de núcleo central, se explaya.

Yo creo que tenemos tiempo, estamos dispuestos a quedarnos el tiempo necesario y, sobre todo, vamos a llevar la reunión sobre carriles adecuados.

Simplemente esa observación. Se habló de ser flexibles en la cuestión del tiempo.

Sra. Presidente. – Gracias, senador.

Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.

Sra. Rodríguez Machado. – Gracias, señora presidente.

Simplemente voy a pedir a los senadores, que son caballeros y respetuosos, que la señora presidente está tratando de hacer cumplir algo que acordamos entre todos. Pero también coincido en que dijimos que podíamos ser algo flexibles, a la vez que también pedimos una racionalidad en esa flexibilidad.

Así que queda a criterio de la presidenta cuántos minutos más le otorga, pero lo que estamos tratando de hacer es cumplir un acuerdo que nosotros mismos generamos, que es identificar el término y el tiempo que íbamos a hablar.

Señora presidente: usted definirá esa mayor flexibilidad a su criterio. Gracias.

Sra. Presidente. – Gracias, senadora.

Estoy tratando de que no pasemos los 15 minutos, que es el 50 por ciento más del tiempo acordado.

Tiene la palabra la senadora González.

Sra. González (M. T. M.). – Si la Presidencia no otorga más tiempo al senador Mayans, los 10 minutos que me corresponden van para él.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador Caserio.

Sr. Caserio. – Era por lo que estábamos hablando.

Hay un poco de tensión por distintas situaciones. Estamos tratando el último día del año tres leyes muy significativas que no han tenido posibilidad de ser debatidas profundamente porque las hemos recibido a último momento. En Labor Parlamentaria nos pusimos de acuerdo en hablar 10 minutos, pero también se dijo que debía haber flexibilidad, porque muchas veces que ese tiempo no es suficiente para alguien que quiere expresarse un poco.

Desde nuestro bloque, le pido que usted tenga la mejor predisposición para que la sesión no se enturbie y que si alguien quiere hablar un poco más, lo sostengamos. Creo que venimos bien con el tiempo. No faltan tantos oradores. Incluso, veo que hay senadores que estaban en la lista y ahora ya no.

Me parece que sería importante que tuviéramos esa flexibilidad en función de la realidad de lo que nos toca tratar en estas leyes.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador Mayans.

Sr. Mayans. – Presidenta: agradezco el gesto a mi compañera de bancada.

Voy a cerrar, cortito.

Voy a votar en contra de lo que es el crédito público porque aspiro a que el secretario de Finanzas venga a explicarnos qué hizo con la plata y cómo metió su fondo con respecto al tema del endeudamiento de cien años, ya que no nos trajo ninguna explicación. Nos endeudó a cien años con un fondo que él manejaba.

Es un experto en evasión. Porque él manejaba todos los *offshore*. El director técnico en evasión era el secretario de Finanzas que tenemos. Él estaba encargado de hacer todos los *offshore* en la República Argentina. Y de realizar este plan que han hecho con el blanqueo de capitales. De toda la plata que estaba afuera de la Argentina, que se ganó con el esfuerzo de todos los argentinos –estamos hablando de más de 400.000 millones de dólares–, a alguien se le ocurrió esta genialidad del blanqueo –yo sé a quién–, con lo que supuestamente iba a darse una reparación histórica a los jubilados. Eso nunca existió. Fue una mentira grande.

¡Guarda con el manejo del Fondo de Garantía Sustentable! Ahí también hay delitos porque se venden acciones que están a la baja. Se venden cuando están a 9 y después se venden a 20 en tres meses. Se ganan 200 o 250 palos. Si eso no se llama corrupción, ¿cómo se llama?

Sé que usted es una persona de buena fe. Y cuando a usted la llame la Justicia después de que se vaya de acá, le va a decir: “Usted, que era vicepresidenta, ¿admitía lo que sucedía?”. Y usted dirá: “Yo no sabía lo que hacía Basavilbaso”.

Había sido que este infeliz vendía las acciones... Digo infeliz porque no creo que sea feliz vendiendo las acciones de los jubilados al 50 por ciento de su valor. Entonces, hay un grave problema con el Fondo de Garantía Sustentable. Un señor que no asiste al Parlamento y hace lo que quiere con él.

Grave problema en el costo de la obra pública. Grave problema en el costo energético del

país. Grave problema en el tema de las LEBAC. Grave problema con el endeudamiento de las provincias. Grave problema en la mentira del tema de la inflación.

El Banco Central dice que estamos en el 29 por ciento y el ministro de Economía, al uno por ciento. Vaya a un banco a ver quién le va a prestar al 12 por ciento en el país. Estamos hablando de bancos que están prestando al 40 por ciento. Obviamente, si la tasa del Banco Central está en el 29 por ciento, ¿a quién va a convenir, si están pagando 29 por ciento en dólares? ¿Cómo va a funcionar el sistema económico así? No funciona el sistema económico así. Dejen el verso de lado.

El tema del Parlamento del Mercosur. No puede ser que nuestros parlamentarios estén mendigando para poder asistir al Parlamento. Tienen un fallo de primera instancia, una ratificación por Cámara que está firme y ahora el Poder Ejecutivo va en queja. ¿Ese es el proceso de integración como lo entienden ustedes?

No se paga a los parlamentarios. Un gran ahorro han hecho. Y por otro lado, el ministro de Finanzas despilfarra lo que quiere. El secretario de Hacienda hace lo que quiere.

No puedo votar en contra de que cobre un jubilado. Voy a votar en general lo que son los gastos fijos que hemos venido cumpliendo siempre. Como dije, de lo que está acá, lo que es razonable. ¿Pero podemos votar este cheque en blanco, que es el crédito público, al jefe de Finanzas del país? ¿Podemos votárselo al jefe de las *offshore*?

Entonces, ojalá realmente exista reflexión, que cambie el rumbo. Tiene que cambiar el rumbo. Esto es papel, nada más, la realidad está en la canasta básica, que ya se fue a 17. Ahora aumentó la nafta, aumentó el dólar. ¡Midan la canasta dentro de un mes para ver a cuánto va a estar! Ya va a estar a 18. ¡Y cada vez más lejos la canasta! ¡Y cada vez al revés de lo que dice el miembro informante! ¡Va a haber más pobreza y va a haber más indigencia! ¿Por qué? Porque el asalariado llega menos y porque el jubilado llega menos. Y tiene una tarifa de luz que es así...

—El señor senador Mayans hace gestos con sus manos.

Sr. Mayans. — ...Tiene una tarifa de gas que es así, tiene un alquiler que es así y tiene un salario que es así. Bueno, para explicarlo con señas, como dice la gente. Si no se entiende eso y queremos venir acá a versear que está todo bien... ¡No está bien, señores!

¡Que venga el secretario de Finanzas! Esa es una moción concreta que yo hago, aunque estamos votando acá la ley de presupuesto. ¡Que venga el secretario de la ANSES, que explique qué están haciendo! ¡Que expliquen qué hacen con la conformación de los precios dentro del país! ¡Y que cumplan con el programa de inversiones!

Con mi provincia, hasta ahora una parte se cumplió, pero la otra parte no se cumple, no se cumple. Dicen que Dietrich dijo que en mi provincia hizo 700 kilómetros de ruta. Ojalá que me lleve y que me muestre dónde están, porque no conocemos nosotros. Ojalá que me lleve y me diga: “Mire, acá están los 700 kilómetros de ruta”. Entonces, para que mientan como están mintiendo...

Así que, presidente, en particular, me opongo totalmente a que nosotros le demos un cheque en blanco para el tema del financiamiento. Hay que aprobarlo porque la ley de administración financiera dice que hasta el 31 vence el plazo y que, a partir de ahí, hay que corregir todo el tema del presupuesto y que, incluso, las disposiciones generales no funcionan si es que no tenemos ley para el 31. Esto está en la ley de administración financiera. Por eso, hay que votar, pero hay que negarle la posibilidad, con voto negativo, en el tema del crédito público para que a partir de ese momento venga el secretario de Finanzas... Si hace falta que venga en enero, ¡venga en enero! ¡Qué problema hay! El 2, el 3 o el 4 y, a partir de ahí, lo autorizamos.

Una cantidad impresionante. ¿Casi estamos hablando de 80.000 millones de dólares? No estamos hablando de tres pesos. ¿Quién va a pagar eso? Ustedes mismos tienen que estar preocupados porque se les va a caer el gobierno así. ¡No va a funcionar esto! ¡Que venga el secretario y venga a explicar! ¿Qué va a hacer usted acá con la plata esta de la ANSES?

No, señor. Cheque en blanco para nadie. Ustedes ven el tema del crédito público y es..., ¡cheque en blanco! Yo me opongo a eso. Eso lo voto en contra.

Le agradezco la amabilidad que tuvo usted. Gracias, presidenta, a usted también.

Sra. Presidente. – Gracias, senador.

Le quedan cuatro minutos, senadora.

Sra. González (M. T. M.). – Muchísimas gracias, señora presidenta.

Voy a tratar de ser breve. En primer lugar, quisiera resaltar y reconstituir dos palabras y dos conceptos que he escuchado durante toda la sesión: políticas públicas y federalismo. Con respecto a esto, quisiera referirme unos breves minutos al presupuesto específico y, sobre todo, al de mi provincia.

Del análisis presupuestario de la distribución del gasto de capital por región geográfica del presupuesto, lo primero que quiero destacar es que se produce una disminución en términos nominales del 16 por ciento y en términos reales del 28 por ciento con respecto al presupuesto anterior, que perjudica a todas las provincias en su conjunto, privándolas del efecto dinamizador de la economía que conlleva consigo la obra pública en un momento en que resulta crucial para las provincias incrementar la generación de mano de obra y el consumo consecuente.

Lo siguiente es que no se visualiza una intención de promover un desarrollo intrarregional equitativo ni igualitario entre las provincias, porque al analizar dentro de una misma región o entre regiones vecinas, como es el caso del NEA y del NOA, ambas con problemas estructurales de desinversión en infraestructura y de gasto social de muy vieja data, no observamos, en este presupuesto, una planificación estratégica para el desarrollo conjunto y armónico de las provincias que integran estas regiones. Muy por el contrario, para el caso de Formosa se observa que su participación en el gasto de capital de este proyecto de presupuesto es un 94 por ciento del porcentaje, 2 por ciento que le correspondía en 2017, en tanto que en la misma región, Corrientes y Misiones o en regiones vecinas, existen otras provincias también beneficiarias de incrementos en su participación porcentual, que superan el 50 por ciento con respecto al presupuesto anterior.

Esto, en números: Formosa apenas llega al 2 por ciento de participación y sus vecinas al 3 y al 4. Se ha dado el caso de provincias en que solo el incremento interanual operado en sus

porcentajes son iguales. La de Río Negro, un 2 por ciento o superiores; Santa Fe, 3 por ciento; al total de la participación de Formosa, 2 por ciento en el presupuesto, lo cual nos lleva a dos cuestiones. Una: cuáles son los criterios de elegibilidad que sustentan dicha diferenciación presupuestaria entre provincias de una misma región y si esos criterios responden a algún plan estratégico de desarrollo de la región.

La otra cuestión sería si la provincia de Formosa evidentemente no meritó a criterio de este gobierno para acceder al incremento porcentual que sí tuvieron otras. Entonces, al menos, se hubiera tenido en cuenta que la disminución en inversiones de la provincia que se quitan impacta directamente sobre el nivel de vida del pueblo de la provincia de Formosa y sobre su población más vulnerable. Son escuelas que ya no se van a construir para los niños y jóvenes, hospitales que no van a existir para los enfermos y viviendas que nunca van a habitar los sectores de más bajos recursos. Entonces, y con un criterio más equitativo de distribución, la provincia de Formosa debería estar incluida en forma activa en el plan de obras previsto, ya que las obras fueron peticionadas e incluidas en los anteriores presupuestos.

Con respecto específicamente al paquete de viviendas, los compañeros diputados pertenecientes al Partido Justicialista de la Cámara de Diputados han presentado una nota con un anexo adjunto respecto del listado de viviendas, que para evitar enumerarlas aquí, dado el escaso tiempo que tengo, me gustaría por Presidencia acercárselo para que, de manera conjunta, con los diputados de la provincia de Formosa que ya han elevado a la Presidencia, se pueda incluir en el presupuesto esta tan ansiada y necesitada área, como lo es la vivienda social.

También, es importante aclarar que se han quitado del presupuesto obras de mantenimiento muy importantes con respecto a infraestructura hídrica, que son la limpieza de riadas pertenecientes al río Pilcomayo, obra que año a año se debe y se tiene que realizar en la provincia, puesto que, si no, las inundaciones son mayúsculas. Por lo tanto, también es un pedido de la provincia de Formosa la inserción en el presupuesto de esa obra.

Dos temas más: el ramal C-25, que ya lo he planteado ayer en la Comisión de Presupuesto,

junto con el puerto de carga y descarga nodo de Colonia Aquino.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora.

Tiene la palabra el senador Caserio.

Sr. Caserio. – Gracias, señora presidenta.

Para empezar, creo que todos en el país estábamos esperando trabajar en la modificación de una nueva reforma tributaria que permitiera ayudar o incentivar a la producción en su conjunto, en un país como el nuestro en donde la presión fiscal es altísima. Eso no permite que las empresas, especialmente pequeñas y medianas, puedan subsistir; esa es la realidad.

Para no abundar en lo que ya dijeron muchos otros senadores respecto de la reforma tributaria, quiero dar una opinión sobre las cosas que me parecen negativas, sobre las que me parecen positivas y sobre las cosas que a lo mejor no son tan negativas, pero, por lo menos, podrían haberse profundizado.

Me parece que la más importante de las medidas positivas de esta reforma es el adelanto del pago de ganancias del impuesto al cheque. Evidentemente, eso va a ser una cosa significativa, porque permitirá que las empresas puedan de algún modo achicar los costos productivos que tiene el pago del impuesto al cheque, respecto del cual creo que todos en este país coincidimos en que es una de las medidas que se fueron tomando para recaudar, pero es extraordinariamente distorsiva para el aspecto productivo.

Me parece que la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias empresariales también es una buena medida. Evidentemente, supondrá un fuerte incentivo a la inversión, pero tendremos que analizarla, porque muchas veces las medidas que establecemos en este país como parámetros para ayudar a la inversión no siempre dan ese resultado, por distintos motivos. De todos modos, la medida en sí misma me parece positiva.

La devolución anticipada de saldos a favor del IVA también es una cosa importante, que seguramente posibilitará mejores proyectos de inversión, porque de algún modo bajará la carga tributaria.

Creo que la modificación más importante –la única– que tiene el IVA es que alcanzará con

una alícuota del 21 por ciento a los servicios digitales especialmente prestados por sujetos residentes o domiciliados en el exterior. Me parece que esa es una cosa positiva porque, al fin y al cabo, era utilizado como una competencia desleal que afectaba al resto de las empresas, que evidentemente tienen una carga tributaria muy fuerte.

Nosotros, desde nuestro bloque, solicitamos en su momento medidas especiales para las pymes y, de las varias que propusimos, Diputados aceptó –y pienso que por el gobierno nacional también, pues durante mucho tiempo las hemos trabajado todos juntos– que en el caso de las pymes exportadoras se las exima del impuesto a las sumas percibidas por las exportaciones correspondientes a reintegros o reembolsos. Me parece una cosa positiva que ayuda a las pequeñas empresas.

Hay un cambio en las contribuciones patronales que, según el Poder Ejecutivo, significa una reducción gradual del costo laboral. Si bien esto es técnicamente real, en este país no está demostrado –porque ha sucedido en otro momento– que el apoyo que se le da al sector patronal signifique más y mejor empleo.

Por último, como cosa positiva quiero manifestar el retroceso que tuvo el proyecto con respecto al pago de ganancias a cooperativas y mutuales. Especialmente los que estamos en el centro del país podemos decir que el desarrollo cooperativo es muy fuerte. Al fin y al cabo, son entidades sin fines de lucro creadas por la misma sociedad de los lugares donde empezaron a desarrollarse para tratar de cubrir la “mano corta” del Estado. En Córdoba hay 205 cooperativas eléctricas, a pesar de que nosotros tenemos nuestra propia empresa eléctrica –a lo mejor, una de las pocas estatales que quedan en el país–. Pero hay 205 cooperativas eléctricas que cubren, en un lugar municipalizado como Córdoba –que tiene 427 municipios y comunas–, 205 pueblos de la provincia. Evidentemente, esas cooperativas surgieron sin fines de lucro y no es su objetivo ganar dinero, sino cubrir en su momento las deficiencias del Estado. Hoy ya no se justifica cubrir esas localidades con nuestra propia empresa, porque saldría mucho más caro y la gente está acostumbrada a ese desarrollo.

Además, tenemos 50 cooperativas de agua y saneamiento en la provincia. Nosotros las tenemos reguladas, porque hay un organismo

en la provincia de Córdoba, el Ente Regulador de Servicios Públicos, que permite que las cooperativas puedan aumentar las tarifas. Todo está de algún modo regulado y se hace mediante audiencia pública. Me parece que gravar con ganancias a las cooperativas y mutuales es una mala medida porque, de algún modo, mata un concepto que tenemos en la Argentina de los últimos solidarios que quedan. Creo que las cooperativas, las mutuales y los bomberos voluntarios deben ser los últimos movimientos solidarios que dio nuestra sociedad y me parece que hay que cubrirlos.

No significa eso, bajo ningún aspecto, que nosotros estemos de acuerdo con algunas cooperativas o empresas disfrazadas de cooperativas que tengan las cuevas que generalmente tiene la Capital Federal para intercambio de dinero y demás. Esa es una cuestión que debe controlar el Estado para no permitirle o para que de algún modo cambie en algo.

Nuestro bloque está dispuesto a discutirlo. En su momento, el ministro Dujovne planteó que lo quería discutir. Me parece que no hay problema en discutirlo, en tanto y en cuanto el espíritu de la sociedad argentina sea en pos de armar y cubrir con empresas propias, como son las cooperativas, la deficiencia donde el Estado no llega. Me parece que es una cosa que en ningún momento podemos poner en riesgo.

Entre los aspectos negativos, evidentemente es una reforma pobre. Fíjense que si esta reforma cumple los objetivos que tiene, vamos a llegar dentro de cuatro o cinco años con una reducción de 1,5 en el producto bruto interno. Lo mismo que si hoy hubiésemos eliminado el impuesto al cheque y no lo cobráramos más. Tendríamos más o menos la misma reducción y no hubiéramos tenido el trabajo de discutir esto tanto. Si lo que se quería era achicar un poco, lo primero que habría que hacer es achicar todo lo que significa impuestos distorsivos, pero es el gobierno nacional el que propone las políticas y para eso fue elegido por la gente. Evidentemente, me parece que los objetivos de esta propuesta no van a cubrir las necesidades de déficit fiscal que realmente tiene el país.

Además, una cosa que parece también mala es que esta reforma no corrige la notable presión tributaria que sufren los empleados dependientes de ingresos medios y, fundamentalmente, los

trabajadores independientes, los cuales están alcanzados por impuestos y son sometidos actualmente a una cuota muy distorsiva, con una disparidad muy importante con el trabajador que está en relación de dependencia.

Si bien logramos ese pequeño mérito –por decirlo así– de haber sido escuchados con el tema de las pymes, quiero decirle, señora presidente, que me parece que en ese aspecto esta reforma podría haber hecho mucho más. Otorgarles a las pymes un tratamiento diferencial siempre es una buena noticia, porque representan el 98 por ciento de la totalidad de las empresas argentinas y porque, además, generan el 70 por ciento del empleo y aportan el 40 por ciento del producto bruto nacional.

Evidentemente, si bien se han hecho y hemos hecho leyes en este mismo Congreso favoreciéndolas, me parece que en esta situación de incertidumbre que hay –donde vemos que a las empresas les cuesta desarrollarse, que el consumo no se reactiva en este país y que tendríamos que encontrar incentivos–, podría haber ayudado un poco más, especialmente a las microempresas, podría haber sido muy importante. Bajar del 35 al 25 por ciento la carga impositiva a las empresas que reinviertan sus ganancias va a significar simplemente el 0,8 por ciento del producto bruto interno en cinco años. Imagínense que si le hubiésemos dado la posibilidad a las microempresas de haberles bajado hasta el 20 por ciento en vez del 25 o en vez de esperar a 2022 a que lleguen al 25 por ciento y haberlo hecho este año, ¿cuánto hubiese significado como costo fiscal? Nada. A lo mejor, el 0,1 por ciento.

Me parece que faltó decisión de parte del Estado nacional para tomar medidas que realmente incentiven en serio, ya que estamos hablando de las empresas que dan el 70 por ciento del empleo nacional. En ese aspecto, creo que quedó una asignatura pendiente, que faltó voluntad política o decisión de cosas que no significan un ajuste importante en las arcas del Estado nacional. Creo que faltó política para debatir y discutir este tema a fondo.

Pasando al tema del presupuesto y para tratar de cumplir con sus tiempos, señora presidenta, si uno ve el presupuesto en el mes de octubre, parece realista. Yo acepto que en este gobierno el presupuesto se ha transformado en una herramienta donde se trata de que sea lo más realista

posible. A mí me parece una cosa muy positiva porque, al fin y al cabo, en cualquier parte del mundo, un presupuesto sirve para que el que va a reinvertir, el que va a trabajar, el que está en la actividad productiva tenga un parámetro en el que basarse para implementar sus inversiones, para ver hasta dónde puede llegar, cuál es el horizonte.

Lamentablemente, esto quedó un poco deformado porque el realismo de este presupuesto quedó disminuido entre las reformas que se fueron aprobando, después de su llegada, y que no están contempladas en él. Me parece que este Congreso requeriría que los cambios que, evidentemente, va a tener en la realidad este presupuesto –porque las reformas van a tener un impacto fiscal en él– sean comunicados para que todos los conozcamos.

Creo que el gran déficit de este presupuesto es la medida de la inflación. Ya vamos por el segundo año consecutivo que creo que las medidas de inflación que se proponen no son realistas. Al no ser realistas, evidentemente, hay una distorsión en un presupuesto que quiere ser realista. Creemos que el crecimiento va a estar parecido a lo que planteábamos. Ahora, los porcentajes inflacionarios ya fueron muy errados el año pasado y este año es probable que lo sean más. Nosotros no podemos tener un Banco Central que diga A, un Ministerio de Hacienda que diga B y toda la actividad privada –incluso los informes que da el Congreso Nacional– digan C y que, en realidad, generalmente, los planteos que hace el gobierno por medio del banco y del ministerio no son realistas. Evidentemente, va a ser muy difícil cumplir la meta inflacionaria del año que viene. Nadie estima que se vaya a poder cumplir. En privado, lo dicen los mismos funcionarios.

No entiendo por qué se hace. ¿Es un capricho? ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, después, los trabajadores tienen que discutir sus salarios con esa posible meta inflacionaria, que es mentirosa. Eso crea una discusión en la sociedad, donde evidentemente los gremios, defendiendo a sus trabajadores, piden lo que creen que va a ser la meta y la meta no es realista.

Con respecto a mi provincia, para nosotros –más allá de que nunca pueda estar conforme totalmente en un presupuesto– es un presupuesto realista en el aspecto de que vivimos muchos

años con gobiernos anteriores donde el presupuesto de la obra pública de Córdoba fue cero, porque, evidentemente, teníamos diferencias políticas y se expresaban en el presupuesto. Lamentablemente, fue así.

A mí no me gusta mirar para atrás. Creo que los argentinos que miramos todo con el espejo retrovisor vamos a chocar porque, en realidad, tenemos que mirar para adelante. Entonces, en ese aspecto, para nosotros es un presupuesto que es discutible, que lo vemos bien. La provincia de Córdoba realmente tiene cosas importantes.

Quiero dejar dos reflexiones y termino, presidente. Primera reflexión: en este presupuesto tiene una alta incidencia la participación público-privada, con presupuestos muy significativos, extraordinariamente grandes, donde los recibimos con la llegada del presupuesto, donde ya hay obras que están programadas con un porcentaje para el presupuesto 2018. Y la verdad es que me quedé sorprendido por su magnitud, sin tener el más mínimo conocimiento de por qué fueron esas obras, por qué se llevan adelante, con quién se consensuaron, de qué modo se piensa que semejante actividad de obras, que evidentemente terminará pagando en su gran mayoría la gente con peajes o distintas formas de pago o el mismo gobierno nacional, porque las empresas que vienen a construir esas obras o que ofrecen un servicio van a pedir crédito a los bancos y va a ser, como este mismo presupuesto lo dice, que el Estado nacional es el que va a hacer un importante aporte a partir de 2020 para ir pagando todo esto. Entonces, me parece que, si los argentinos tomamos semejante deuda en obras, que está bien que se hagan, deberíamos tener una discusión. Por ejemplo, más allá de las autopistas que están para todo el país, Córdoba no tiene ninguna obra significativa. Pero no lo veo desde mi provincia. Lo veo desde por qué no logramos discutir que semejante cantidad de dinero sea una cosa que nos sirva a todos, en la cual todos tengamos un criterio para poder exponer.

Por último, quiero decir una cosa que dije en la comisión y que no quiero que afecte a nadie. La verdad, me parece, con total sinceridad, que nosotros no podemos seguir votando y debatiendo un presupuesto la última semana del año. Es una cosa ilógica. No nos sirve a nosotros. No le

sirve al gobierno. Evidentemente no es lo que corresponde.

Ya dije el otro día en la comisión que no voto más un presupuesto así. Pero no es una amenaza, es simplemente lo que me parece que es razonable en democracia. Porque nosotros no podemos seguir con la presión de que, si rechazamos este presupuesto, entonces se quedan sin presupuesto. O que, si rechazamos la reforma tributaria, a partir del 1º de enero los impuestos no se pueden aplicar. Pero para que esto no sea así tenemos que estar un poco más organizados, las leyes tienen que venir en tiempo y forma.

La Cámara de Diputados no puede mandarnos este presupuesto y esta reforma con un camión volcador los últimos días del año, porque esto termina por generar presiones y genera disgustos. Y me parece a mí que tenemos el derecho, como senadores de la Nación, cuando una ley no nos gusta, de devolverla. Evidentemente, si a uno no le gusta algo y ahora la devuelve se queda con la presión –que a algunos les parece que no es lógica, pero a mí sí me parece lógica– de dejar al Estado nacional sin presupuesto. Para que eso no pase, me parece que tenemos que cambiar.

Es verdad que hemos tenido relación con la Cámara de Diputados –nuestro bloque lo hizo y tratamos de mejorar las cosas–, pero también hay una realidad: una ley que se está discutiendo allá, donde ya todo el mundo sabe que de algún modo nosotros la tenemos que votar porque de lo contrario se cae, no genera todas las cosas que creo que podemos lograr.

Muchísimas gracias.

Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.

Tiene la palabra el señor senador Romero... No está.

Tiene la palabra el señor senador Lovera.

Sr. Lovera. – Señora presidente: la verdad es que en el convencimiento de que uno debe ser no solo políticamente correcto, sino que también debe ser políticamente responsable, quiero manifestar mi acompañamiento en general en estos proyectos: en el presupuesto, en el proyecto que modifica el artículo 3º de la ley 25.413 y en el proyecto de reforma del sistema tributario argentino.

Respecto del proyecto del presupuesto 2018, sostengo mi acompañamiento fundamentado

en la idea de que no es posible un país democrático, que sea confiable, si no cuenta con su presupuesto aprobado tal como lo prevé la normativa vigente. No obstante, a nivel general no puedo dejar de mencionar algo que me preocupa –coincido y lo escuchaba al senador Mayans– en lo que respecta al artículo 32 y sus concordantes, que el Poder Ejecutivo tenga la facultad de tomar créditos públicos, en un total de algo más de 1,5 millones de pesos, sin ningún tipo de control por parte del Poder Legislativo, que simplemente nos informe cuando la operación de crédito ya esté efectivizada. En esto no podemos no más que estar en desacuerdo.

Con respecto al presupuesto, ya en algo relativo o directo con mi provincia, La Pampa, necesito aunque sea realizar algunos comentarios. Como fue de público conocimiento, a principios de este año los problemas meteorológicos que tuvo la Argentina y a los cuales no fue ajena mi provincia, lamentablemente, con la complicación de las inundaciones, nos llevó a un enorme deterioro de las rutas nacionales. Tenemos la ruta 5, la 188 y la 151. Y la realidad es que Vialidad Nacional no efectuó en tiempo y forma los “alteos”. Cuando los realizaron, ya en forma muy tardía –y tuvieron muchísimos problemas muchos pueblos y muchas localidades de mi provincia–, no cumplieron con las normativas técnicas correspondientes. Situación que nos llevó a que todavía en la actualidad, señora presidente, no se pueda efectuar la carpeta asfáltica. A pesar de todo eso, ante esa demora y esa ausencia, el gobernador se ofreció a que el gobierno de la provincia realice dicho “alteo”, pero lo único que obtuvimos fueron negativas permanentes y trabas que nos impidieron llegar a una solución definitiva para todos los pampeanos que transitamos diariamente las rutas de nuestra provincia. Y, aparte de esto, debido al estado deplorable de estas rutas nacionales, se produjo un deterioro lógico de todas las rutas provinciales, porque a causa de la imposibilidad de transitar por las rutas nacionales aumentó por ellas en forma exponencial el tránsito pesado y todo el tránsito vehicular.

Por eso yo decía en la comisión que me hubiera gustado que alguien del área del gobierno nacional hubiese tratado de pasar por la ruta 151, al oeste de nuestra provincia, que une el límite de Mendoza con Río Negro, que es in-

transitable, para que después nos contase cuál es la travesía que hay que hacer para transitar esta ruta, que tanto perjuicio nos trajo y nos trae en nuestra provincia.

Otro de los temas con respecto al presupuesto es que, en 2015, quienes hoy son gobierno nacional, durante la campaña se comprometieron a realizar la autovía Santa Rosa-Anguil y los pampeanos aún estamos a la espera de esa tan imperiosa obra.

Y lo más preocupante que veo en este presupuesto en cuanto a mi provincia, señora presidenta, es el tema de la escasez de viviendas sociales que se prevén.

En la provincia de La Pampa, una provincia muy pequeña, nosotros tenemos inscriptos algo más de 14.000 pedidos de viviendas y en este presupuesto se incluyeron 103 viviendas. Es una tomada de pelo, realmente, y sobre todo si miramos los años anteriores. En la provincia de La Pampa se construyeron y se entregaron entre 1.000 y 1.200 viviendas por año.

Me gustaría decir que las demandas sociales deberían ser prioridad, señora presidenta, no solo para este gobierno, sino para todos los gobiernos, y todos los que hacemos política sabemos lo importante que es para cada familia tener su techo propio, su vivienda digna. Por eso es que quiero solicitar al Poder Ejecutivo nacional que reconsidere en los próximos proyectos la inclusión de mi provincia, teniendo en cuenta las necesidades sociales reales que tenemos en este aspecto.

Ahora me voy a referir al proyecto de reforma previsional, ese proyecto que pretende reformular el sistema tributario argentino y que formó parte de ese acuerdo que se firmó entre el Poder Ejecutivo y casi todos los gobernadores argentinos, excepto la provincia de San Luis, y que también fue parte del paquete de acuerdos donde estaba la reforma previsional, que con la senadora Durango acompañamos en general.

Lo que hicimos en ese momento con la senadora Durango fue tomar la decisión de legitimar a través de nuestro voto el pacto fiscal que había firmado el ingeniero Carlos Verna, nuestro gobernador. En ese momento en particular habíamos votado en contra el tema de la edad jubilatoria a los 70 años en forma optativa y habíamos votado en contra todo el capítulo de

los artículos relacionados a esa tan nombrada fórmula de movilidad y actualización de los haberes jubilatorios, que trajo como consecuencia la situación por la que atravesó nuestro país en ese entonces. Y simplemente lo habíamos hecho no porque no cumplíamos, sino porque ese tipo de fórmula no era uno de los acuerdos que había pactado el gobierno nacional con los mandatarios provinciales.

Por eso es que yo siento, y quiero decirlo en esta última sesión del año, que los mejores resultados no se consiguen con demagogia exitista. Debemos esforzarnos todos y tomar un diálogo sincero en la Argentina y juntos tendremos así resultados exitosos. No hay otra manera.

Siempre es necesario y también imprescindible el diálogo político, pero no solo desde la declamación, como se ha hecho en muchos casos en estos dos años, sino desde los hechos. Y así, solamente de esa manera, vamos a lograr el desarrollo de una república federal, como la que seguramente todos queremos.

Antes de entrar al punto final de la reforma previsional, el bloque PJ-La Pampa, al votarse la otra reforma y para honrar el compromiso que se había firmado con los veintitrés gobernadores, lo hizo de manera afirmativa en lo que hace al 82 por ciento de movilidad para las jubilaciones mínimas. Y así fue porque hace más de diez años que se viene garantizando en la provincia. O sea, que desde ningún punto de vista se podía estar en desacuerdo. Y reitero que una cosa es ser políticamente correctos, dando discursos mediáticos bonitos a través de los distintos medios de comunicación o de las redes sociales, y otra es ser políticamente responsables. Y, como dije, se honraron los compromisos que se habían asumido en defensa de los intereses de todas las provincias argentinas por encima de cualquier interés de carácter personal.

Ahora bien. En ese momento, señora presidenta, cuando los senadores del oficialismo fundamentaban la necesidad de la nueva fórmula, nos decían que no se podía desfinanciar el sistema jubilatorio y que con ese nivel de aumento que tenía el sistema no iba a aguantar más y en el corto plazo iba a colapsar. Suponiendo que todo eso no era cierto, los senadores del bloque PJ-La Pampa votaron de manera negativa ese artículo. Hoy, pasado el tiempo, vemos que teníamos razón.

Se trata la reforma tributaria y como nos dicen que es necesario crear empleo y blanquear trabajadores, por ende, se deben bajar las cargas patronales.

La verdad es que debo decir que orgullosamente provengo del sector sindical y soy algo conocedor del comportamiento de los empresarios argentinos. Estoy casi en condiciones de afirmar que con esta reducción no se va a crear ningún empleo. ¿Sabe cuántos trabajadores se van a blanquear con esta reducción? Creo que ninguno.

La disminución de las contribuciones patronales no genera puestos de trabajo, no genera que haya formalidad en los trabajadores que hay en negro. El motor para que haya más trabajo es mayor producción y mayor consumo interno, situación que hoy no se está dando en la Argentina. Cada uno de nosotros conoce el estancamiento que hay en nuestras provincias, que es notorio.

Por eso, esta reducción de aportes, que a mi entender el gobierno plantea como una medida revolucionaria en el ámbito laboral, solo va a beneficiar a las grandes corporaciones y, una vez más, hay un olvido del federalismo en la Argentina. Se fomenta la instalación de empresas en las grandes urbes y, lo que es más grave aún, lo que presuntamente se había ahorrado con la reforma previsional se dilapida en beneficio de las grandes empresas. Como resultado de ello, también hay una disminución del fondo previsional, con el consecuente crecimiento de su desequilibrio.

Por todos estos argumentos y por todos los antecedentes inmediatos de lo que nos ha ocurrido en el Parlamento, el capítulo VI, que modifica el decreto N° 814/01, que contemplaba una alícuota del 17 por ciento para los empleadores que revestían la características de la pymes, micropymes, obras sociales, asociaciones sindicales, entre otros grupos que estaban en esa rama, hoy, con este proyecto, con este cambio, se va a implementar esa alícuota que se va a ir acrecentando progresivamente hasta alcanzar al 19,5. Del 17 al 19,5 en el año 2022.

Debo señalar el perjuicio que esto les va a ocasionar a los principales generadores de empleo, sobre todo en las provincias argentinas, en el interior del país, que son nuestras pequeñas y medianas empresas, que son las que constituyen

el motor de las economías regionales. ¿Por qué digo esto? Porque las ponemos otra vez en pie de igualdad con las grandes empresas, que yo digo que van a ser las únicas beneficiadas con esta reforma tributaria de este capítulo VI.

Además, el artículo 167 de este proyecto de ley de reforma tributaria modifica el artículo 4° de este decreto, incorporando un mínimo no imponible de 12.000 pesos mensuales por empleado. A su vez, elimina la posibilidad que existía de computarse esta contribución patronal como crédito fiscal de IVA y que había diversas regiones del país que preveían en el anexo I un tipo de parámetro. Por ejemplo, en mi provincia se podía computar el 6,55 por ciento —era una metodología que estaba implementada para incentivar el trabajo en las zonas desfavorables— y el Poder Ejecutivo mediante esta reforma adopta, a mi criterio, una vez más una medida centralista poniendo en pie de igualdad a las empresas de los grandes centros urbanos con las zonas más desfavorables económicamente.

En base a todo lo expuesto, me resulta imposible acompañar el capítulo VI en particular, con lo cual lo voy a votar en contra. Anhele que el Poder Ejecutivo reconsidere estas políticas que van en detrimento de las pequeñas y medianas empresas del interior del país y que de una vez por todas empecemos a mirar y apostemos a un país más federal.

Sra. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Mirkin.

Sra. Mirkin. — En primer lugar, quiero decir que vamos a acompañar —así lo hicimos ayer en la comisión con la firma del dictamen— el proyecto de ley de presupuesto, porque, además, responsablemente vamos a cumplir como corresponde con la ley de administración financiera. No vamos a hacer la irresponsabilidad que hicieron quienes hoy son del oficialismo en el año 2011, que se negaron a darle al peronismo, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presupuesto.

En una gran mayoría vamos a votarlo. En otros aspectos los compañeros del bloque han planteado sus preocupaciones. Yo también quiero plantear mis preocupaciones porque el hecho de acompañar significa darle la herramienta que necesita o que ha planteado el Poder Ejecutivo nacional para su plan de gobierno. Eso es lo que plantea el presupuesto: plan de gobierno para

el gobierno que ha sido votado y que quiere, a través de los números, expresar cuál es su propuesta.

La verdad, me genera preocupación. Hay luces amarillas, ya tirando a rojas, en el semáforo respecto a la deuda pública, por ejemplo, que ha planteado con mucha crudeza el senador Mayans con respecto a las cuestiones que tienen que ver con los servicios que genera esa deuda pública. Dice el presupuesto que va a ser el 14 por ciento y que era el año pasado el 10 por ciento. Un incremento muy grande en la toma de esa deuda que nosotros no vemos cómo va a ser posible pagar y, por otro lado, desconocemos cómo se está ejecutando en realidad.

Por otro lado, vemos que la distribución de los recursos va en un sentido de un modelo que no comparto, de un modelo exportador de productos primarios, como era allá lejos, que también tiene dificultades con el tipo de cambio, porque ya han empezado a guardar las cosechas en los silos porque no la piensan vender hasta que no se verifique una movilidad en ese tipo de cambio. Este modelo agroexportador va en detrimento de la producción industrial —que tiene valor agregado—, lo cual se corresponde también con una baja en el presupuesto para ciencia e innovación tecnológica, cosa que la verdad que este gobierno se había planteado aumentar y desde ningún punto de vista está haciendo, sino que está impidiendo que avancemos en cosas centrales en las que el gobierno anterior había avanzado, como son las cuestiones ya planteadas vinculadas a los radares, a los satélites, etcétera. Estas son las cuestiones que centralmente me preocupan.

En el tema tributario, en primer lugar, quiero agradecer a los legisladores de mi bloque que trabajaron con los legisladores diputados y con el Poder Ejecutivo nacional con el objeto de modificar el proyecto original de la ley tributaria.

En primer lugar, para mi provincia, Tucumán, el tema del mantenimiento de la alícuota en esta cuestión de las bebidas azucaradas, que se mantiene en el 8 por ciento, y en las que contienen jugo de limón, que se mantiene en el 4 por ciento, es importante. Porque habían pensado aumentarlas, con lo cual iban a dejar de trabajar miles de trabajadores en la industria azucarera y en la industria del limón, que como ustedes saben es la más importante del mundo.

Nuestra provincia es el exportador de limones más importante de la Argentina.

En segundo lugar, en lo que respecta a las cervezas, es importante esa modificación que logró hacerse entre las cervezas artesanales y las cervezas industriales, porque las artesanales provienen de microproductores o pequeñas pymes que han logrado generarse y no tenían por qué recibir semejante carga como se estaba planteando.

En tercer lugar, como muy importante en el tema de ganancias, ha sido eliminado en los artículos 23 y 24 para las cooperativas y mutuales en general. Pero quiero hacer una salvedad: queremos que se controlen las cuevas que existen en el centro de CABA. Acá están las cuevas financieras, que son financiadas por alguien y que toman la forma de cooperativas o de mutuales, pero que son verdaderas cuevas financieras, que incluso ha planteado el ministro Dujovne que forman parte de la preocupación que tienen centralmente acerca de cómo están operando. Y están acá en la ciudad, las grandes, en el centro financiero, no en las provincias, donde las cooperativas se manifiestan como un modo solidario de construcción social o como una herramienta solidaria, donde no es como dijo en ese sentido el presidente de la comisión respecto al programa Argentina Trabaja, que me ha tocado realizar en la provincia de Tucumán como ministra y que ha dejado de tener cooperativas. Porque, increíblemente, este gobierno ha mantenido el programa Argentina Trabaja, pero le ha sacado todos los componentes que el programa tenía, salvo el hecho de la capacitación y la distribución de recursos de un ingreso a los que eran cooperativistas, y ha dejado en grupos de capacitación a los cooperativistas sin trabajo.

Por otra parte, no hay transferencia de recursos para obras, ni para capacitación, ni para otros instrumentos que permitan a los cooperativistas modificar sus condiciones de vida.

Con respecto a las pymes exportadoras, quiero señalar que aunque las pymes representan el 10 por ciento de todas las exportaciones, son el 95 por ciento de todas las empresas exportadoras. Así que es muy importante que se plantee la posibilidad de que puedan seguir exportando.

En último lugar, quiero plantear que hemos logrado que el Poder Ejecutivo tenga la posibilidad de adelantar el mínimo no imponible

para las remuneraciones de las pymes en las provincias llamadas “del Plan Belgrano” –yo diría, del Norte Grande–, entre ellas, Tucumán.

Quiero plantear por último una cuestión que han señalado casi todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, que es el tema del federalismo. El federalismo busca modificar las inequidades que existen entre regiones o entre provincias.

Acá hay provincias, la provincia y CABA. La verdad es que el presupuesto manifiesta centralmente eso.

Miren, lo escuchaba al senador por La Pampa decir que para su provincia hay en el Plan Nacional de Viviendas 103 millones de pesos. Si uno fuera generoso, diría cien viviendas.

En la provincia de Tucumán, 130 millones dice el presupuesto. La verdad es que nos están tomando el pelo.

El secretario de Vivienda de la Nación, o el subsecretario, es tucumano. ¿Saben cómo dice el presupuesto?: Plan Nacional de Vivienda, Localidades varias.

¿Saben qué significa esto? Que no pasa por la provincia, no pasa por el gobierno de la provincia, sino que va directamente a los municipios. ¿Saben a qué municipios va? A los municipios de Cambiemos.

Así ha venido ocurriendo este año y va a volver a ocurrir, porque la forma, que creen que es municipalizar o federalizar, es discrecional con respecto hacia dónde van. Y lo que señala el gobierno nacional es lo siguiente...

No se ría, senador. Puede no gustarle lo que yo le digo, pero así ha ocurrido en mi provincia. Ha ido al municipio de San Miguel de Tucumán, ha ido al municipio de Yerba Buena y ha ido al municipio de Bella Vista.

Le planteo eso porque para el resto de los municipios dicen que no se presentó proyecto o que no están adecuados los proyectos o que no están a tiempo los proyectos. Pero el propio presupuesto no identifica ni siquiera las localidades que van a recibir 130 viviendas, por ahí, si consideramos que el metro cuadrado está a mil. Yo no sé de los precios, pero más o menos sé cuánto cuestan las casas.

Entonces, lo que quiero señalar es que el plan de obras, por ejemplo, para la provincia de Tucumán, es vergonzoso.

Por eso digo que el Plan Belgrano no existe. Ese plan que planteaba la resolución de las inequidades de las provincias del Norte Grande respecto al resto no está planteado en el presupuesto.

Quiero saber si el Plan Belgrano existe, si es una entelequia o si hay un segundo Plan Belgrano, como escuché, o un tercero o un cuarto. No sé cuál era el primero, porque el Plan Belgrano, como plan, no estaba en el presupuesto, no era una unidad administrativa. El Plan Belgrano era la suma de no se sabe qué, que se iba por los distintos programas y decían que todo formaba parte del Plan Belgrano. Inauguraban una casilla, el Plan Belgrano; inauguraban una canaleta, el Plan Belgrano... No se sabe bien qué incluye el Plan Belgrano, así que quiero saber si el Plan Belgrano, que no figura en el presupuesto, sigue existiendo aunque sea como entelequia.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador Mera.

Sr. Mera. – Gracias, presidenta.

Viene a este recinto con media sanción un paquete de leyes que están planteadas en el presupuesto, en la reforma tributaria y en la prórroga de la ley de cheques.

Quiero plantear algunas cuestiones positivas que veo en la reforma, vinculadas a la posibilidad de algunos sectores de poder dinamizar la economía y su actividad profesional, muchas de ellas logradas a partir de planteos y reformas propuestas en la Cámara de Diputados y algunas de ellas por nuestro bloque de diputados.

Primero, la devolución del IVA para algunos sectores, como el plan Prog.R.Es.Ar, que les mejora las posibilidades a muchos jóvenes –en Catamarca tenemos muchos de ellos–, y de asignación universal por hijo que pueden verse beneficiados con esta posibilidad.

Segundo, que a las cooperativas y a las mutuales se les iba a imponer un gravamen tributario y creo que, con mucha inteligencia, finalmente no se ha hecho. También en Catamarca tenemos muchas mutuales. Son treinta y siete registradas y más de quinientas cooperativas, lo que hubiese sido un impacto muy negativo. Muchas de nuestras economías artesanales trabajan en este tipo de asociación y habría sido muy negativo si se las hubiera gravado, así que considero un acierto haberlas dejado de lado en este caso.

A los nuevos profesionales y emprendedores también se los asiste en una nueva categoría que les va a permitir, sobre todo a los nuevos profesionales, una mejor posibilidad de tributación. Y esto se va a ver en mayores recursos con los que van a poder contar.

En cuanto a las cervezas artesanales, también las tenemos y muy ricas en Catamarca. También se ha hecho una discriminación entre las industriales y las artesanales, a las que se grava mucho menos que a las primeras, y se fija el cero por ciento a aquellas que tienen el 1,2 por ciento de menos de esa graduación alcohólica, lo que también está vinculado con el tema de la salud.

Respecto del presupuesto, debo marcar algunas preocupaciones. Estamos terminando el presente presupuesto, el presente ejercicio, y no se ha logrado cumplir las pautas de inversión y de inflación que se preveían. Tenemos un déficit comercial que es récord. Es una situación muy preocupante, que se está financiando con deuda de más de 50.000 millones de dólares. Creo que en este Senado se ha dado sanción y hay proyectos presentados para que controlemos el tema de la deuda pública. Es difícil proyectarse a futuro si nosotros no sabemos para qué nos estamos endeudando ni con quién ni en qué se aplica la deuda.

Respecto de este presupuesto, también uno ve que son muy ambiciosas las pautas. Ojalá puedan cumplirse. Ojalá la inflación, que parecía tan fácil de bajar, sea bajada definitivamente y pueda dar un grado de certidumbre a todos los argentinos y, fundamentalmente, a los asalariados. Es un impuesto que hace varios años viene impactando duramente siempre en los que menos tienen.

También en el presupuesto hemos logrado incorporar obras para Catamarca que no estaban previstas originalmente, muchas de las cuales eran reclamadas por vecinos. Nosotros teníamos previstas hace algunos años cloacas en Valle Viejo y en Fray Mamerto Esquiú, en el área del valle central de Catamarca. La etapa 2 venía demorándose y son obras que generan mucho malestar en la vida cotidiana, porque se levantan los asfaltos y hay que cambiar el recorrido del transporte público. Es muy incómodo para el ciudadano cuando se están haciendo obras de cloaca en su casa y se demoran. Por lo tanto, celebro las gestiones que hemos hecho ante

funcionarios del gobierno nacional para que se hayan incorporado –algunos barrios también–, así como también algunas posibilidades de mayores viviendas.

Decía bien el senador Caserio que siempre trabajar contrarreloj con el tema del presupuesto es muy complejo. Pero, ciertamente, nunca hemos tenido una oficina de presupuesto. Ahora sí tenemos una ley –creo que usted, presidenta, cuando era senadora presentó un proyecto de ley, que es el que hemos aprobado el año pasado– y este presupuesto prevé fondos importantes para esa oficina de presupuesto. En este sentido, hago un pedido a la comisión que está a cargo de poner en funcionamiento esta oficina para que se haga rápidamente, de manera que todos podamos proveernos de información fidedigna y real para poder trabajar el próximo presupuesto a lo largo de todo el año.

En el artículo 127 planteo un punto sobre el que, en verdad, me cuesta comprender el origen y el motivo en el presupuesto, que consiste en eliminar el fondo de financiamiento y la forma de financiamiento del ENARD.

He leído al respecto. El ENARD se financia con el uno por ciento de las telefónicas. Estoy seguro de que yo y cualquier argentino está feliz de financiar en un uno por ciento a los deportistas argentinos que, a lo largo y a lo ancho del país, tienen un lugar para capacitarse, para ponerse a tono a nivel mundial, competitivamente hablando, y que financia el deporte paraolímpico. Se trata de muchos deportistas que son embajadores nuestros, que les han dado muchísimas alegrías a los argentinos.

Por eso, no entiendo, si estamos en un momento de difícil situación fiscal, por qué algo que funcionaba bien se lo quitamos a los deportistas para que lo financie el Poder Ejecutivo nacional. O tiene alguna... La verdad, no lo entiendo. Nada bueno de lo que pienso, de las razones, puede uno creer que obedezca a estas reformas. Así que, seguramente, en particular, lo vamos a rechazar porque suena poco entendible.

También, vamos a proponer una modificación a la reforma tributaria respecto del mínimo no imponible. Es otra medida que nos parece positiva. En el artículo 173 se plantea claramente la posibilidad de la detracción en los aportes patronales de un 20 por ciento.

Ahora bien, nosotros presentamos un proyecto en este sentido, pero que tenía algunas diferenciaciones que creo que hay que sostener. Primero, que estos fondos sostienen el sistema previsional, que todos sabemos que es muy delicada la situación financiera en la que se encuentra. Segundo, que no puede ser una ventaja plana, una ventaja que da lo mismo en la provincia de Buenos Aires que en Catamarca. La Constitución Nacional marca claramente la posibilidad de tener políticas diferenciadas. Manda que haya políticas diferenciadas para un crecimiento armónico de la Nación. Y así reza en el artículo 75, inciso 19: la necesidad de que el Congreso legisle para armonizar el desarrollo del país.

Si nosotros damos ventajas igualitarias en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el interior de la Argentina, vamos a seguir generando desigualdades y vamos a seguir generando una discusión que tiene doscientos años de historia en nuestra patria. Si solo hay un foco iluminando en la noche, ese foco se tapa por todos los que van a buscar calor y los que van a buscar luz.

Basta con caminar la provincia de Buenos Aires, presidenta, hablar con la gente del conurbano y se va a encontrar con miles, cientos de miles, millones que son santiagueños, catamarqueños, salteños, jujeños, hijos de ellos, nietos de ellos, que no se han ido de sus provincias porque no tengan querencia por ellas, sino porque no han tenido oportunidades. Dejemos de construir desigualdad en la Argentina. No sigamos constituyendo desigualdad. Son doscientos años de esta historia triste de nuestra Argentina, donde en algunos lugares hay oportunidades y en otros, pocas o ninguna.

Oportunamente, también con el senador Aguilar –y quizá con algunos otros senadores–, vamos a presentar, en particular, una propuesta de reforma para el artículo 173, inciso c), de la reforma.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador. Tiene la palabra el senador Luenzo.

Sr. Luenzo. – Gracias, señora presidenta.

Creo que sería redundante insistir en algunos puntos que se han analizado durante toda esta tarde, fundamentalmente, con la poca posibi-

lidad que hemos tenido de discutir dos leyes fundamentales para la República Argentina: el presupuesto y la reforma tributaria.

Si bien hemos hecho algunos esfuerzos en particular, trabajando con Diputados –incluso del oficialismo, y lo quiero reconocer, con el diputado Gustavo Mena, de Cambiemos–, para tratar de modificar parte de lo que nosotros queremos, es justicia para la Patagonia argentina y en el caso particular para la provincia del Chubut, pero no hemos logrado el éxito necesario. Esto, obviamente, pone más al desnudo todavía las dificultades que nosotros tenemos en esta Cámara para poder incidir en estas dos leyes fundamentales.

Una la vamos a estar acompañando en líneas generales –en lo particular, mostraremos nuestra disidencia– y en la reforma tributaria, de algún modo, tengo que responder frente a lo que ayer dejó en esta misma casa el ministro de Economía Dujovne cuando contestó las preguntas sobre este paquete de modificación de la reforma tributaria, una reforma tributaria que tiene cosas virtuosas, modestas por cierto, porque creo que frente a las expectativas que se habían generado, la devolución que le hacemos a la sociedad acerca de estas reformas no colman esas expectativas que nosotros teníamos en función de algunos gestos interesantes que tiene: gravar la renta financiera, bajar el IVA en algunos casos en particular. Creo que tiene como principios interesantes para tener en cuenta, pero creo yo, en definitiva, que esto hay que profundizarlo para que tenga un carácter realmente virtuoso en el efecto económico-social que todos deseamos en la República Argentina.

Pero, remitiéndome y anclado más fundamentalmente en nuestra región, en la Patagonia argentina, yo le preguntaba al ministro de Economía cuáles eran las ventajas comparativas que ofrecía esta reforma tributaria para una región que, históricamente, ha peleado por ese tipo de políticas. Ninguna, me dijo el ministro; el criterio es homogeneizar la política tributaria. Entonces, le quiero decir, señora presidenta, que este principio va a contramano del espíritu que tiene esta casa, que es el principio de defender el federalismo. No por casualidad la mayoría de los senadores han marcado este defecto, este problema que tiene la reforma tributaria y este

problema que tiene el presupuesto nacional en la asignación de recursos.

Entiendo que las provincias siguen formando parte de la periferia de la patria. Creo que, por lo menos desde la palabra, logramos un efecto no deseado, que consiste en seguir evitando la concentración de población en Gran Buenos Aires, en la Capital Federal y que tengamos un país soberano desde el punto de vista del desarrollo poblacional, cosa que hasta ahora no ha ocurrido y que temo yo, en la Patagonia argentina, seguramente, vamos a ir profundizando con medidas que no atienden las diferencias.

Incluso, señora vicepresidenta, le digo que el artículo 75 de la Constitución Nacional es taxativo. En una de sus partes habla de que el Estado está obligado a atender las desigualdades que se generan entre las diferentes regiones. ¿Qué significa esto? Igualdad de oportunidades con todas las regiones. Creo que la Patagonia argentina, si uno la mide con los recursos que recibe la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, donde se puede dar el lujo en alguna plazoleta de tener un cubículo para poder descansar y relajarse, nosotros no tenemos viviendas en el Sur argentino. Esa es la realidad que contrastamos nosotros desde el sur, desde nuestra querida Patagonia argentina. No nos damos esos lujos, ni mucho menos. En materia de reforma tributaria, insisto en lo que ayer dejó en este recinto el ministro de Economía, nosotros no vamos a tener ventajas comparativas y tenemos una larga historia de pedidos.

Reembolsos por puertos patagónicos: luego se transformó en la posibilidad de un reintegro; no fue factible. El desarrollo de la industria naval y la marina mercante, que ojalá le dé vida al principal litoral marítimo que tenemos en toda América Latina. Tenemos un mercado extraordinario que podríamos explotar y podríamos comunicarnos. La Patagonia debería ser protagonista de ese desafío con la industria naval y con la marina mercante. El sector petrolero está en decadencia. Hemos perdido casi 10.000 puestos de trabajo en Comodoro Rivadavia y en el norte de la provincia de Santa Cruz. Lo mismo ocurre con la industria textil y todo esto como producto-resultado de la falta de estímulos impositivos.

La Patagonia se pudo poblar y este es un principio de ocupación territorial que tiene que

ver con un principio de la geopolítica básico en una parte del continente con proyección antártica que vamos a discutir y mucho en el futuro, con recursos naturales extraordinarios, que no tiene población argentina. La Patagonia no solamente tiene que ser para los Benetton y los Lewis. Tiene que ser para muchos argentinos. Para esto tenemos que ser atractivos, tenemos que ser atractivos para las inversiones, que no las hay. Por el contrario, las inversiones las espantamos. Con un costo laboral que va entre el 20 —de acuerdo al convenio— y el 50 por ciento por encima del costo de un salario acá, en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal. Yo pregunto, ¿además, agregarle cargas patronales? ¿Quién podría invertir en estas condiciones? Son luces amarillas que se encienden permanentemente y que dicen que a la Patagonia no hay que ir. La pregunta es: ¿apostamos al vaciamiento?, ¿apostamos a qué tipo de proyecto para la Patagonia argentina?

Si nos remitimos a las obras públicas, quiero contarle que hemos trabajado junto con diputados incluso del oficialismo. Lo reitero porque esta no es una cuestión político-partidaria ni ideológica. Ideológica tal vez, desde la óptica de la región, pero no ideológico-partidaria. Hemos trabajado por algo más de 40 obras para la provincia del Chubut. ¿Sabe cuántas llegan? Cuatro o cinco. El 90 por ciento son obras cloacales; poder simbólico si lo tienen. Eso es lo que nos queda a nosotros en materia de infraestructura, de obras para la provincia del Chubut.

Nos están faltando rutas; no es un tema nuevo. Le reconocí a Iguacel, ayer, que hace 30 años que no veía la repavimentación de algunas rutas troncales, como la 40, por ejemplo. Y se lo tengo que reconocer a Javier Iguacel, porque realmente las cosas que se hacen bien hay que decirlas y reconocerlas, porque es de buena persona. Es de buena persona poder hacerlo, y nosotros reconocemos que estamos repavimentando vías de comunicación que han estado abandonadas por años, cuando no pavimentadas cada año, porque en lugar de tener el pavimento cinco centímetros, tenía uno, porque cuatro centímetros quedaban en el bolsillo de alguno. Eso es lo que ocurría, y a las pruebas me puedo remitir sin ningún tipo de problemas.

Por lo tanto, nosotros venimos de una larga postergación en la Patagonia argentina desde

todo punto de vista. Y la Patagonia es un fuerte desafío también para la República Argentina. Tal vez el único que lo vio como dirigente político, como estadista, en este país, en este proceso democrático, fue don Raúl Alfonsín, cuando allá por el 87 u 88 quiso mirar hacia el viento, hacia el frío, hacia la nieve y todas esas condiciones climáticas que nosotros tenemos en la Patagonia argentina, y dijo que no podemos seguir sosteniendo la Patagonia o el país en estas condiciones. Debemos tener, tal vez, esa cabeza que hoy es la Capital Federal en algún otro lugar que nos corra de este conglomerado que es el Gran Buenos Aires, que es la Capital Federal.

Pero, además, no solamente con una visión más federal, sino también con una visión integral de país. Algún día tenemos que comenzar a discutir en serio el concepto de regiones en la República Argentina. No podemos seguir con divisiones políticas caprichosas de hace 200 años; nos atrasa. Tenemos que comenzar a discutir regiones. He visto –y, tal vez, mal de muchos, consuelo de tontos– que el Plan Belgrano ha sido una buena expresión, una buena intención, al igual que el Plan Patagonia. El Plan Patagonia es un buen título que contiene algunas cositas sueltas, pero que, en definitiva, hoy no se traduce en absolutamente ningún elemento que nos pueda hacer pensar que a partir de allí vamos a cambiar nuestra realidad.

Señora vicepresidenta: nosotros entendemos que el presupuesto es una herramienta que necesita el gobierno. No quiero que pase como en alguna otra oportunidad, que el gobierno se quede sin presupuesto. Eso es malo, es una muy mala señal que puede dar la clase política. Por eso, nos vamos a abstener o votar en contra algunos artículos.

La reforma tributaria no la vamos a acompañar. No porque no signifique un gesto modesto hacia objetivos que tenemos que profundizar, sino –insisto– porque no está contenida la Patagonia argentina. Respecto a la alícuota del mínimo no imponible, le hice una propuesta concreta al ministro de Economía de que estos 12.000 pesos previstos para el 2022 se apliquen en forma inmediata en la Patagonia argentina, porque esto es un aliciente para nuestra región. Pero no fue tenido en cuenta. Y no solamente esto, sino que también en esa progresividad nosotros vamos a ir con la alícuota del 17,5 al

19,5 por ciento y, como contrapartida, el país central irá del 22,5 al 19,5 por ciento. Es decir que vamos a empezar a pagar más. No solamente que no pagamos menos, vamos a pagar más.

Lo mismo sucederá con el ITC, con el impuesto a la transferencia de los combustibles. En cuanto al gasoil, vamos a comenzar a pagar a partir de ahora 2,20 pesos más a los 40 centavos del impuesto al dióxido de carbono; casi 3 pesos más. Hay que tener en cuenta que las distancias en la Patagonia representan un costo extraordinario en cada uno de los productos.

Alguien dijo aquí que la canasta básica en estos momentos está en 17.000 pesos. ¿Sabe cuánto está la canasta básica en Comodoro Rivadavia hoy, señora vicepresidenta? En 23.000 pesos. Con casi un 14 por ciento de desocupación. Yo pregunto si este es un país equilibrado, si este es un país simétrico. Este es un país injusto en la distribución de sus recursos. No es que no tenemos recursos. No podemos tener una capital con cubículos para el descanso, la reflexión budista, y, por el otro lado, tener un país casi vacío, con infraestructura elemental sin poder desarrollarse. No puede ser que seamos noticia nada más que por el ARA “San Juan”, por los mapuches, por los RAM y todo lo demás o por los desastres. Por las malas noticias somos noticia. Algún día, queremos ser buena noticia en la Patagonia argentina.

Queremos formar parte de ese maravilloso país que muchos imaginamos. Y quiero creer que ese país lo vamos a lograr, pero con equilibrio, no con los desaciertos de seguir generando tantas asimetrías con el interior de la República Argentina. Se queja el Norte, se queja Cuyo, se queja la Patagonia argentina, excepto provincia de Buenos Aires. Algo está pasando, algo se está haciendo mal. No estamos mirando el país. Estamos mirando un nicho del país. No podemos permitir que las luces del centro de la ciudad nos encandilen. Miremos el resto de la Argentina, que es muy bella.

Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente. – Muchas gracias, señor senador.

Tiene la palabra el senador Fuentes.

Sr. Fuentes. – Presidenta: para cerrar las exposiciones del Frente para la Victoria-PJ, va

a hacer uso de la palabra, en el momento oportuno, la senadora Cristina Fernández de Kirchner.

Ayer, cuando fui durante breves minutos a la sala de comisiones, fui testigo de que era en realidad lo que hoy, acá, se está confrontando. El senador Luenzo, que es un caballero, que siempre ha interrogado a los representantes del Ejecutivo con suma educación, yo digo que hasta conmovido, al ministro le planteó cómo esta crisis, en la provincia del Chubut, castigaba a su población, cómo esa provincia estaba limitada en sus posibilidades, en su distancia, en su infraestructura, para ir generando riquezas sustitutivas: 5.000, 6.000 despedidos, sin horizonte adelante. Y el señor ministro de Economía, como una especie de aprendiz de brujo, le dijo que hay minería: ustedes tienen minería, hagan minería. Es decir, con un desconocimiento supino de nuestras realidades, no solo de las economías regionales, sino de las realidades geopolíticas en las que nuestro país está inserto.

Las compañías mineras, en el mundo, conforman *pools*. No son muchas. Son sumamente poderosas y tienen perfectamente planificado el desarrollo de sus actividades extractivas. En América del Sur, el núcleo central de la minería es la cordillera de los Andes. Todos los proyectos a largo plazo de esas empresas mineras están, precisamente, radicados del lado correspondiente al Pacífico; 80 kilómetros como máximo a un puerto. Todo yacimiento, sea de cobre, del mineral o de la sustancia que sea, requiere la infraestructura al lado.

Les recuerdo, simplemente, entonces, la desproporción abismal para nuestras provincias, donde no puede haber ningún emprendimiento en minería, tal cual alegre e irresponsablemente y con un desconocimiento no solo de las economías regionales, sino de la realidad y de la geografía nacional, este ministro manifestaba. Es decir, no hay inversión minera en la Argentina hasta tanto no se agoten las reservas del lado cordillerano. Y, las que hay, tienen que tener subsidios pavorosos por parte del Estado. Simplemente traigo a colación, como un recuerdo reciente para los senadores de Río Negro y el Neuquén, el tren del potasio, qué es lo que pedían para poder desarrollar eso. Es decir, no solo eso. Se contesta: tienen minería, hagan

minería. Fácil: montar, revertir una actividad, transformar. Es una cosa...

Estuve diez minutos en la sala y ante la pregunta del senador Perotti, que le dice: “Señor ministro, me llama poderosamente la atención que en la partida presupuestaria no figure la deuda con mi provincia”. ¿Qué contestó el ministro? Vamos a pagar siempre que no haya que pagar nada. Quédense tranquilo –dice–, vamos a emitir el bono Mongo Aurelio, siempre y cuando a nosotros no nos cueste. Tomá el bono vos, andá a negociarlo, entregá tu madre, tu abuela y la provincia.

Entonces, esto desnuda claramente qué discutimos hoy. Hoy no discutimos un paquete de medidas de buen gobernar. Por eso discrepo. O sea, nunca lo he hecho en materia económica ante el conocimiento y la sabiduría del senador Mayans. Coincido plenamente con su análisis, pero discrepo cuando dice que este programa de gobierno no va a funcionar. ¡Sí funciona, está haciendo lo que pretende hacer! Esto es lo que hay que entender. Existe acá una confrontación de dos modelos de realidad que engloban, además, perspectivas ideológicas diametralmente opuestas.

Al verlo al senador explicando una realidad que todos en el interior –y más profundo y patagónico– conocemos, tratando de explicarle a un burócrata de la Capital Federal, que se maneja en mesas de dinero y es lo único que entiende de qué se trata el país, recibe esa respuesta, me obligó a pedirle a mi hijo que buscara la palabra crueldad en el diccionario. Hoy, senador, estamos enfrentando a la crueldad con la ingenuidad: creer que si apelamos a la sensibilidad social de este gobierno vamos a lograr cambios es absurdo. Este gobierno no necesita sensibilidad social; es más, es un obstáculo para llevarla adelante.

Para poder realizar un modelo de país donde las ventajas para pocos poderosos –que las llaman inversiones– vengan, deben garantizarle que la mayoría de la gente viva y trabaje en condiciones de precariedad, que les garantice el máximo de rinde. A eso llaman condiciones favorables para la inversión: precarizar el trabajo, precarizar el régimen previsional. Y lo tercero, para culminar el diseño, aquello que sobra, cae. Y a eso le llaman el derrame. Esta, es decir, es la primera etapa.

Ya cuando hablamos en su momento en el debate del pago a los fondos buitres fuimos estafados, porque la argumentación mayoritaria de los compañeros de mi bloque era que no nos quedaba más remedio que pagar. Pero, a propuesta del senador Rodríguez Saá, hay un proyecto de ley donde vamos a obligar a que el endeudamiento que tome de aquí en más –eran 16.000 millones de dólares que autorizábamos– tiene que tener el control del Congreso. No hace falta que les explique qué es lo que pasó con eso. Es decir, en ese momento, yo decía que los fondos buitres no son una anomalía, sino la lógica evolutiva, son la etapa superior del sistema capitalista financiero en el mundo. Y hoy, acá estamos asistiendo a ese correlato externo e interno de esa discusión.

Pero lo peor de esto, que es lo que agravia, consiste... Porque se puede tolerar el desconocimiento, se puede tolerar la ignorancia y, en última instancia, la crueldad. Dice el diccionario: “quien disfruta del sufrimiento de otro”. La crueldad, en última instancia, puede ser una situación de percepción interna, pero está el otro tema, que es más grave, que es la burla. Es decir, cuando esa crueldad la objetivo y se la hago sentir.

Cuando el ministro, en su crueldad, que ni siquiera ha sido cuestionada por él... Ningún juego de comparaciones valorativas, axiológicas, ¡no! Es una concepción, están hechos así. ¡Son eso! Encima tienen la jactancia, porque la burla es la jactancia de esa crueldad: la expongo y la manifiesto.

Entonces, acá no solo se están discutiendo dos modelos de país. Fundamentalmente, y lo que más me preocupa –porque esa es una discusión que en el marco del respeto con los compañeros que formamos parte de nuestro mismo origen político tenemos que darnos–, es la calidad del sistema de representación: qué representamos y qué somos, qué es el mandato y qué es el contrato que el voto popular nos genera.

Acá, a este paquete perfectamente desmenuzado de estas tres leyes por los miembros informantes de mi bloque, se lo ha pretendido vender como la culminación de la armonización de los intereses contrapuestos entre provincias y Estado nacional, es decir, este pacto, que en realidad en su momento dijimos que era una trampa, porque hay materias que prerrogativamente

son exclusividad de este cuerpo, del Congreso de la Nación. No son los gobernadores quienes deben legislar sobre regímenes previsionales nacionales. Pueden colegislar y tener iniciativas en sus ámbitos específicos.

Entonces, esta ingeniería de buena gobernanza con la cual se nos presenta, en realidad, confronta con la otra concepción de cuál es la obligación como representante en mi coherencia y en mi lealtad al mandato recibido.

Entonces, es clarito que este modelo –por eso digo que discrepo con la apreciación– va exitosamente desarrollándose. Hay una brutal transferencia de recursos a los sectores concentrados. Las primeras medidas solamente ya lo indicaban: transferencia a las compañías de energía y petroleras –60.000 millones de un solo saque–, levantamiento de las retenciones y desfinanciamiento del sistema público con el tema de la soja –recuerden ustedes: 8.000 millones de dólares–.

Entonces, venir a plantear hoy en este paquete que el ahorro de 100.000 millones de pesos sobre uno de los sectores más precarios, que son los jubilados, va a solucionar el déficit fiscal es cruel. Porque la crueldad no es una patología de conducta de un funcionario o de un gobierno, la crueldad es un disciplinador social. No se puede precarizar empleo. No se puede precarizar régimen previsional. No se puede hacer caer el consumo popular. No se pueden hacer todas esas cuestiones con un brutal tarifazo. Porque los perros están al acecho: pasamos las vacaciones, nos van a agarrar distraídos y van a venir. Y yo quiero ver marzo, cuando lleguen esas facturas.

Es decir, esta política de transferencia de recursos es absolutamente exitosa y la lógica con la cual la llevan adelante es impecable. El tema es quiénes tenemos la responsabilidad del voto que hemos recibido.

Yo recuerdo cuando, en la despedida de su gobierno, la actual senadora y en ese momento jefa de gobierno, presidenta de la Nación, a una plaza llena, en función de una nota del diario *La Nación* que decía “Cristina deja un país difícil de gobernar”, ella dijo que sí, que efectivamente dejaba un país difícil de gobernar. Que el empoderamiento, la conciencia de los derechos, la capacidad de movilización hacía que todas esas reivindicaciones concretadas durante ese período no sean tan fáciles de avasallar.

Esta creo que es la cuestión central. No hay una sola conquista, no hay un solo derecho en la historia de la humanidad que haya sido producto del debate de los sabios. Las conquistas –por eso se llaman conquistas– son producto de las movilizaciones populares y de los reclamos de los pueblos. Está en la responsabilidad de honrar el mandato político que recibimos en las urnas. Cada uno a lo suyo. Porque la trampa en este paquete de leyes consistió en que se lo encubrió. Nunca fue motivo de discusión con quién voy a celebrar ese contrato electoral; es más, se afirmó en toda la campaña que no iba a haber ni perjuicio para los jubilados ni iba a haber reforma laboral. Se ocultó el dato en el medio de la campaña. Eso es una violación a ese contrato electoral.

Y esto hace a algo más importante, que es la calidad política. Y la calidad política es una construcción, no es algo que se nos da gratis. Calidad política es, fundamentalmente, representar con coherencia esos mandatos que hemos recibido.

Por lo tanto, ese fraude en el planteo de esta cuestión, acompañado con ese sinceramiento cruel, indicativo de la necesidad de sostener un incremento del cuadro represivo en la Argentina. Ninguna de estas políticas –y estamos advertidos, lo estamos viendo todos los días: la persecución política y la crueldad– se expresa sino desde la utilización del Poder Judicial como un elemento de castigo y prisiones preventivas sin explicación legal suficiente y tipificaciones penales absurdas son parte de una crueldad atemorizante. Lo mismo se puede decir respecto de la persecución de militantes políticos o los conflictos en el Sur.

Tenemos una Constitución que es clara sobre el tema de la propiedad de los pueblos originarios. Reformamos el Código Civil y el Código Comercial y la reconocimos. Es una simple cuestión de prueba. ¿Cómo es posible que vayamos a generar un conflicto de la magnitud que se ha visto, salvo que, a la manera de Scorza en *Redoble por Rancas*, esa figura policial, la gendarmería interna, simplemente sea la gendarmería volante de Pasco Company en el Perú?

Entonces, cerrando, presidenta, antes que me diga nada, quiero decir que esto no se sostiene sin el incremento de la actividad represiva. La

modificación de la doctrina de la seguridad interior –a la cual hemos asistido–, la presunción del beneficio del disparo de las fuerzas represivas, el equipamiento extraordinario... Quisiera saber, por eso, dentro de las citaciones que hay que hacer, qué tipo de compromiso con el armamento israelí hemos adquirido en la capacitación y doctrina.

Todo esto conforma un cuadro que, inexorablemente y contrario a lo que en este caso opinaba el senador Mayans, entiendo culmina exitosamente cuando este gobierno, en el período que le permita continuar con el endeudamiento producto de las condiciones macroeconómicas que nuestro gobierno dejó en el país, llegue a su límite con el Fondo. Y termina recibiendo a la misión del Fondo y preguntando qué se debe. 400.000 millones de dólares. Bueno, acá están.

Este es el programa económico, político y social para la Argentina para los próximos sesenta años. Grecia. Este es el camino que ustedes han elegido como gobierno. Por lo tanto, discrepo con el senador preopinante. Es exitoso lo que han planteado. Lo van logrando y van trayendo las consecuencias que estamos viviendo.

Por lo tanto, mi bloque votará en contra de estos proyectos.

Sra. Presidente. – Gracias, senador.

Tiene la palabra el senador Pino Solanas.

Sr. Solanas. – Muchas gracias, señora presidenta.

No es nada nuevo lo que voy a formular y después de todo lo que han planteado con sólidos argumentos los oradores preopinantes. Ya lo dijimos cuando en este recinto se votó la reforma previsional. Fuimos una de las voces que plantearon la enormidad antipopular que se iba a cometer, impulsando una reforma rechazada por la inmensa mayoría del pueblo argentino y que no había formado parte de ninguna de las dos campañas electorales o no había sido enunciada en ninguna de las dos campañas electorales del presente año.

Lamentable episodio que hizo historia porque, por un lado, no nos cansaremos de criticar la idea peregrina y provocadora de contestar a la violencia con más violencia o provocar la violencia repetitiva a piedrazos, porque eso le abre las puertas a la represión y a la justificación de todos los atropellos, más contando con el

manejo del aparato comunicacional como pocas veces se ha visto en la Argentina.

Este diciembre se coronó de manera lamentable con una represión que nos retrotrajo a un pasado que creímos que estaba definitivamente superado. El fantasma del 19 y 20 de diciembre. Incomprensible para el ciudadano común tanta vocación represiva ligada a una campaña de demonización de los pueblos originarios y de la invención de un nuevo enemigo. La verdad, verdaderos desatinos que, seguramente, esconden otros designios.

En aquella votación del Senado nosotros criticamos duramente. Por supuesto, nadie deja de comprender que las provincias fueron arrojadas en estos años o en estas décadas, que la coparticipación federal estaba atrasadísima. Una sola ronda de coparticipación federal tuvimos, sin olvidarnos que la cláusula transitoria de la reforma del 94 le daba veinticuatro meses para llamar a una nueva ronda de coparticipación federal.

Entonces, ¿cómo no comprender a las provincias de aprobar medidas infames? No es exagerado el argumento, señora presidenta. Es una enorme mentira decir que la Argentina no tiene recursos para afrontar su déficit fiscal. Es una mentira. Por supuesto, transitando la misma ruta y queriendo seguir en la misma, no hay otro destino que ese sendero, pero no es el único sendero o camino que puede tomar la Argentina, porque la Argentina tiene recursos extraordinarios y sectores que hicieron ganancias supermillonarias en estos años pasados.

Para dar un ejemplo, el sector financiero y bancario superó los dos dígitos y durante dos, tres o cuatro ejercicios ha estado arriba del 30 o del 40 por ciento y hasta en un año hicieron un 51 por ciento de tasa de ganancias. ¿Cómo? Con las tasas usurarias que cobraron con el descubierto de cuenta corriente a los pobres y endeudados ciudadanos con las tarjetas de crédito.

¿Y las petroleras? Esto viene de lejos, por supuesto. El festín del subsidio a las petroleras y el invento de 7,5 dólares el millón de BTU, el gas más caro del planeta a los que perforan en Vaca Muerta o dicen que perforan el gas no convencional. Una cifra que anualmente pagaron los consumidores, tractoristas, camioneros, automovilistas. Hemos venido pagando los años

pasados entre 5.000 y 7.000 millones de dólares directos del consumidor a las petroleras por la invención de que el gas y el petróleo estaban en baja. El único país del mundo que pagaba más adentro que lo que valía importarlo. El petróleo cayó hasta los 30 dólares el barril y acá se reconocían cifras increíbles.

Si sumáramos aquellos subsidios de esos años, la Argentina pudo haber comprado todos los activos petroleros y gasíferos. Digo bien: comprado. ¡Comprado!

En fin, señora presidenta, volviendo al tema que nos ocupa, nosotros votamos seriamente en contra y con argumentos, porque no se puede pensar que la crisis y el déficit los paguen los que menos tienen. ¿Cuál es el sustento ético, político, de ese argumento?

Nosotros seguimos la palabra iluminada del papa Francisco y luchamos por la paz, por la solución no violenta y por hacernos cargo de las nuevas formas de la esclavitud moderna, como es el trabajo esclavo y los descartados de la Argentina, señora presidenta, que tiene un tercio de la población sin cobertura social alguna.

Entonces, para nosotros la política es un alto ejercicio de ética pública. Y eso es absolutamente injustificable, como que la Argentina siga teniendo más de un millón de desnutridos en un país que es una fábrica de proteínas. Y que la protesta popular se pretenda combatir con despliegue represivo, la verdad, es injustificable. Como es injustificable, señora presidenta, permítame decirlo, que se quiera pasar por encima de los códigos procesales penales. Los que hemos sufrido persecución, exilio o actos de violencia sobre nuestras personas, quizá somos los mejores en valorar la paz y la mayor calidad democrática, republicana e institucional.

Nosotros hemos denunciado muchos actos de corrupción del gobierno anterior. A nadie le queda duda. Las denuncias que hicimos nosotros con la privatización de YPF me costaron a mí seis tiros en las piernas. Año 1991. Es decir, que nunca le sacamos el cuerpo a la defensa de una Argentina democrática, plural y respetuosa de sus instituciones y de sus códigos. Ahora, llevarse preso y en pijama supongamos al peor de los enemigos o adversarios, sin condena, es absolutamente repudiable. Nosotros tenemos que dejar un mejor país a los que vienen. Y ese

mejor país es para todos: el colorado, el verde, el azul, el blanco o el negro.

En sus épocas, Raúl Alfonsín dejó una gran lección: cuando hubo que poner en ejecución los juicios a los responsables del terrorismo de Estado, se juzgó con tribunales ordinarios, pero fueron de una excelencia tal, que esos juicios y esas condenas no fueron contestadas. Es más, en el mundo, en las universidades europeas y de Estados Unidos se pone como ejemplo de juicios contra los delitos de lesa humanidad al caso argentino. Pero ninguno se apartó de los códigos.

Entonces, señora presidenta, también debo decir que yo me opuse en el pasado a los debates exprés. ¿Qué es esto del debate exprés? De verdad, ¿cuál es la justificación del apuro? ¿Por qué hay apuro por estas leyes? La reforma laboral finalmente pasó para después. Pero, ¿por qué el apuro? ¿Cuántas veces la Argentina se manejó uno, dos o tres meses sin presupuesto? ¿Qué pasó?

Yo, hoy, señora presidenta, lamento que no se haya votado con llave, porque yo y mi compañera de bloque no estuvimos de acuerdo en aprobar los dos tercios. ¿Cuál es el apuro?

Reforma tributaria: una tontería. Son pavadas. Hoy se votan pavadas. Pavadas que son parches de un viejo neumático ya muy gastado, que es el déficit, el plan económico tributario nacional. Porque ninguna de estas reformas se mete con los reales problemas económicos de la Argentina que todos queremos solucionar. ¡Los quiere solucionar el argentino común, que querría volver a creer y tener confianza en su patria y no la tiene, por eso fuga al dólar! No fuga el chileno al dólar, ni el uruguayo ni el brasilero. La reconstrucción de la confianza del argentino es la principal meta de todas las fuerzas políticas. Ser serios de una vez por todas.

¡A los debates exprés de leyes de esta envergadura nos opusimos en el pasado y nos oponemos hoy, señora presidenta! Discúlpeme el énfasis que pongo, porque los temas ameritan no hablarlos como si uno estuviera leyendo.

¡Nos duele la Argentina!, señora presidenta. ¡Nos duele el destino de la Argentina! ¿A dónde va este país, señora presidenta?

Tengo dos metáforas: o es una cabalgata en medio de la noche al precipicio y todos cantando contentos o es un tren que a toda velocidad se

estrella contra una montaña. Porque, ¿cómo es posible hablar de que van a venir las inversiones y todo hay que hacerlo por las inversiones...? ¿De qué estamos hablando? De invertir en industria...

Sra. Presidente. – Senador: vaya redondeando, por favor.

Sr. Solanas. – Sí, pero tengo veinte minutos porque hago el cierre de mi bloque, señora presidenta. Gracias.

Sra. Presidente. – Bueno.

Sr. Solanas. – Entonces, ¿va a invertir en industria? ¿Cómo va a invertir en industria si nada menos que el Banco Central le está asegurando 28, 29, 30 por ciento de tasa de interés en dólares?

Esto es de una inmoralidad que no tiene nombre, señora presidenta. Yo le diría más: es una agresión financiera semejante a un acto de terrorismo económico contra la República Argentina. Y si a eso le sumo que la idea que tiene el gobierno es cubrir el déficit fiscal con endeudamiento... ¡Con endeudamiento! ¡No hay ninguna familia de la Tierra ni ningún país serio que piense el crecimiento o el financiamiento de sus hábitos o necesidades de vida viviendo de prestado!

No nos olvidemos de la historia: los grandes períodos de crecimiento de la Argentina fueron cuando la Argentina privilegió la capitalización nacional; cuando la Argentina capitalizó el excedente de riqueza que producía el pueblo argentino. ¿Quién financió la primera industria hidrocarburífera del hemisferio Sur? ¿Quién la financió, señora presidenta? ¡Ningún dólar prestado! ¡Ningún crédito! ¡La capitalización que una dirigencia con visión estratégica realizó durante siete, ocho años!

Mosconi multiplicó cuatrocientas veces el capital original de YPF. ¿Cómo se construyó el gasoducto más largo del mundo en su época? Se empezó a construir en el año 47. El ingeniero Canessa, de quien yo fui asistente en su secretaría privada teniendo 21 años, le dijo al general Perón: “Presidente, yo le puedo traer el gas de Comodoro Rivadavia”. “¿Es una broma?”, le dijo el general. “Métale”. 1.700 kilómetros sin financiamiento externo, con tecnología nacional. ¿Saben cuántos años se tardó? Porque uno a veces ha escuchado tanta exageración: “no,

para reconstruir esto, lo otro, hacen falta muchos años...”. Se hizo en diecinueve meses, señora presidenta. En diciembre del 49 se inauguraba el gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires.

Había proyecto. Y cuando uno analiza este plan se da cuenta de que no hay proyecto y de que lo que hay es endeudamiento. Pero eso tiene las patas cortas. Y a la vez, ¿cómo se puede justificar pasar todo esto a las generaciones futuras? Esto es anticonstitucional.

No en vano el Financial Times, que da dos menciones al año –una a la mejor medida financiera y otra a la peor–, premió esta vez el bono a cien años de la Argentina al 7,8 por ciento de interés anual. Es doloroso pensar que hay una dirigencia a la que no tiembla la mano al firmar un empréstito así que va a endeudar a cuatro o cinco generaciones de argentinos. Es muy difícil de creer.

Entonces, si voy al gasto, para ir terminando –no quiero pasarme de los 20 minutos– cuando uno analiza el presupuesto se da cuenta de que la inversión nacional es del 17 por ciento. Un poquito más abajo están los servicios de la deuda: 14 por ciento.

Los economistas liberales dicen: solo se podrá superar la pobreza y el desempleo, etcétera, si la Argentina, durante 10 o 15 años, crece a un porcentaje de arriba del 30 por ciento. Ahora, ¿cómo se condice esto con el festín del 30 por ciento de las LEBAC?

Señora presidenta: en la inversión de transporte se contemplan 39.000 millones de pesos para rutas viales, 4.500 para ferrocarriles y para la industria naval –esto tómenlo en serio, muchachos– 136.000 pesos.

Ayer escuché algo que descalifica tanto a quien lo pronunció. Era el ministro Dujovne. Se le dijo: el gobierno acaba de vetar los dos artículos del fondo para reactivar el equipamiento de la industria naval. Ustedes saben que acá se votaron por unanimidad las dos leyes –marina mercante e industria naval–, un fondo de 80 millones anuales, 1.500 millones de pesos. Y dijo el ministro: sí, los vetamos porque tenemos otras ideas, otras previsiones.

Sra. Presidente. – Senador, su tiempo, por favor.

Sr. Solanas. – Sí, estoy terminando.

Es la industria naval en un país productor y exportador de materias primas como el nuestro, que gasta 7.000 millones de dólares anuales de fletes. La industria naval, industria de industrias, como lo es la ferroviaria, que genera cientos o miles de fábricas subsidiarias.

La verdad, podríamos decir muchísimas cosas más.

En los años noventa...

Sra. Presidente. – Por favor, senador. Me dijo que terminaba a los 20 minutos y son 21.

Sr. Solanas. – Termino.

En los años noventa hubo un ministro que dijo: no podemos hacer milagros, el país está arrodillado; estamos de rodillas. Creo que Roberto Dromi dijo eso.

Nos han pasado tantas cosas que lo peor es que nos hemos acostumbrado. Y la deuda es uno de esos virus de costumbre. Hoy la cama ha estado tan bien hecha y tentadora que no estamos arrodillados en el país, señora presidenta: estamos acostados en el país. Unos hacen la plancha, otros hacen la siesta y otros duermen esperando mejores tiempos.

Es penoso. Muchas gracias.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor Maurice Closs.

Sra. González (N. S.). – Pido la palabra.

Sra. Presidente. – Pero le tocaba al senador primero, porque así está en la lista de oradores.

¿Quiere una interrupción?

Sra. González (N. S.). – Sí.

Sra. Presidente. – Una interrupción.

Sra. González (N. S.). – Señora presidenta, volvemos a lo mismo.

Creo que es la última sesión del año, estamos tratando leyes sumamente importantes para los argentinos, ¡déjenlos expresarnos!, porque son muy buenos para sacar cuentas... A mí me dijeron: “se pasó un 35 por ciento del tiempo”. Son muy buenos para sacar cuentas para que el pueblo no nos escuche.

Es la última sesión del año. Señora presidenta, si se quieren ir, ¡que se vayan!, pero deje expresarse a los senadores, por favor. Me parece que no estamos tratando una ley que es mínima para el destino de la República Argentina.

Gracias.

Sra. Presidente. – Gracias, senadora.

Tiene la palabra el senador Maurice Closs.

Sr. Closs. – Gracias, señora presidenta.

Primero, voy a referirme a la reforma tributaria para luego hablar, en líneas generales, del presupuesto, sin olvidar la situación de la economía tal cual, modesta y seguramente con algunos equívocos, la estamos viendo nosotros.

En la reforma tributaria hay que resaltar que hay algunas mejoras que son graduales, que son simples y que van en la buena senda, buscando la inversión. En esto vemos la disminución de la alícuota del impuesto a las ganancias para todas aquellas ganancias que no son distribuidas y son reinvertidas; la devolución de saldos a favor de IVA transcurrido un tiempo; gradualmente, el impuesto al cheque como pago a cuenta de ganancias; fijación gradual de una franquicia o mínimo no imponible, libre de contribuciones patronales, que irá luego a los 12.000 pesos y un enorme esfuerzo fiscal de las provincias, un enorme esfuerzo fiscal de las provincias, tema al que me voy a referir luego, haciendo un análisis muy puntual, casi como un reclamo, explicando la situación puntual de Misiones.

Ahora bien, esta reforma –y lo que voy a decir es reiterativo, cada uno desde su latitud tiene algunos claros y algunos oscuros– es una reforma que por algunos lados te da y por otros lados te quita, en especial, te quita cuando se es una pyme o cuando se está en una región alejada del país. Escuchamos a gente del Norte Grande, a gente de la Patagonia hablar sobre este tema y la verdad es que esto tiene en sí mismo una enorme contradicción, contradicción que está dada porque uno analiza las realidades propias.

Una gran empresa hoy sí tiene claramente un beneficio con este proyecto. ¿Por qué? Porque su contribución patronal, por ejemplo, claramente va a bajar del 22,5 al 19,5. Ahora, en muchas provincias, en muchas regiones en esta reforma que, supuestamente, viene a mejorar la competitividad, va a subir la alícuota del 17,5 al 19. Difícil de calcular, difícil de calcular cómo se van a cruzar porque depende de la actividad que se desarrolle. Entonces, se da una cosa muy rara, contraria a lo que en cualquier libro uno podrá estudiar: de priorizar y de dar un beneficio concreto a la gran empresa y dar un beneficio

dudoso a la pequeña y mediana empresa y a las regiones que tenían este beneficio.

Yo escuché decir que no hay que hablar mal de las grandes empresas; lejos estoy de hacerlo, bajo ningún punto de vista. Lo que sí creo es que las pequeñas y medianas empresas, por tamaño, por formación, por capacitación, por información o por lo que fuera necesitan una mirada especial y me parece que en este proyecto este claroscuro existe y lo han advertido senadores y senadoras de todas las latitudes del país.

Por eso, solicito que en el correr del tiempo, seguramente el año que viene, se revea esta situación, porque la implementación es gradual y no puede ser esta legislación motivo para subir los impuestos, en este caso, las contribuciones, nada más y nada menos que a las pymes.

También solicito que no se quite, y que lo estudiemos luego, algo que ha dado muy buenos resultados y que lo utilizan muchas pymes del país –con diferentes alícuotas, depende la región del país donde estén–, que es la posibilidad que se tiene de utilizar el 10 por ciento de la masa salarial a cuenta de la posición técnica del IVA a pagar. Este beneficio, si se cae gradualmente, implica una vez más: “te doy por un lado y te saco por el otro”.

La gran empresa que hoy no puede usar este beneficio, una gran empresa de cualquier lugar de la Capital, tiene concretamente el beneficio. La pequeña y mediana empresa, por ser pequeña y mediana y del interior del país, pierde este beneficio. Entiendo que no podemos estar anunciando con bombos y platillos una reforma que busca inversiones, crecimiento de la economía, cuando, justamente, a las pequeñas y medianas empresas les damos por un lado y les sacamos por el otro. Insisto, no estoy tomando una posición diciendo: “las pymes son buenas o malas” o “las grandes son malas”. Todas son importantes, pero nadie puede dudar, en la economía de ningún país del mundo y menos en la Argentina, que las pymes son las grandes generadoras de empleo y de crecimiento de una nación.

También solicito que se tenga en cuenta algo que es fundamental y que ha sido fundamental en este año 2017, que es el mantenimiento de las líneas de inversiones productivas, que también afectan a las pequeñas y medianas empresas. Las líneas de inversiones productivas generan tasas subsidiadas para que inviertan las pymes.

Ya se ha anunciado que a partir de enero perderán vigencia. Nos van a llamar, seguramente, en febrero o marzo para discutir una nueva ley de mercado de capitales de doscientos y tantos de artículos, difícil de entender y de comprender. Van a dejar de aplicar una metodología que ha sido buena, que son las líneas de inversiones productivas. Esto tiene claramente impacto en la economía. En las maquinarias agrícolas, en los camiones, más del 50 por ciento de las operaciones que se hicieron en 2017 fueron gracias a las líneas de inversión productiva con tasa subsidiada.

Ahora sí quiero empezar a hablar un tanto del presupuesto y algo de economía. Ya lo que vimos de los ingresos, claramente, es fundamental. El presupuesto se nutre de los ingresos y yo no dudo de la buena fe de esta reforma y de su intencionalidad de crecimiento de la economía. No tengo duda alguna.

Ahora, lo que sí quiero decir es que ni el presupuesto que estamos votando ni tampoco la reforma tributaria se desenvuelven en la luna de Valencia. Se desenvuelven dentro de una economía, dentro de un país con una economía y yo afirmo, como tantos otros, a mi manera, que veo en este momento de la economía argentina un cóctel explosivo, que se da por tres elementos que se reiteran hasta el cansancio: el primero, las tasas altas, altísimas tasas; el segundo punto, atraso cambiario, innegable y el tercer punto, el ingreso indiscriminado de divisas, ya sea para la timba o por la deuda que toma el sector público y el sector privado. Estas reflexiones que uno hace son porque uno quiere que le vaya bien al país y que le vaya bien a esta reforma para que el país crezca. Pero yo, en lo personal, con este cóctel explosivo, no veo que el país vaya a crecer ese 3,5 por ciento que nos dicen en el presupuesto.

Las tasas altas son increíbles. Hay una loca competencia entre LETE y LEBAC. Esto no conduce a nada. No podemos estar votando un presupuesto que nos dice que se plantea una inflación del 15,7 por ciento y la tasa que está homologando nada más y nada menos que el Banco Central para estabilizar moneda o el Tesoro para financiarse está arriba del 26, 27 y hasta el 28,75 por ciento. Es increíble garantizar ya de antemano, tomando guita de ayer, votando ahora nosotros un presupuesto que estima una

inflación del 15,7 por ciento y teniendo al presidente del Banco Central, casi como un capricho, que mantiene esas tasas altas. Esas tasas altas atentan contra el crecimiento de la economía, contra la inversión que tanto se busca. Por eso decimos que es tiempo de que se revea y mire esta política.

No creo en un presidente del Banco Central omnipresente y todopoderoso. No creo en él. Porque no puede ser que en esa independencia esté condicionando, nada más y nada menos, semejante volumen de toma de dinero a una tasa de interés que no se ve en ningún lugar del mundo.

Veo también que tenemos un atraso cambiario increíble. Este atraso cambiario no se puede dudar. Tenemos cerca de 10.000 millones de déficit en la balanza comercial. Medido solo el del turismo, llega a los 11.000. Un país que hoy está exportando cuero chorreando sal –lo digo porque estoy en esa actividad–, que no le puede agregar valor, que le vende ese cuero a las zonas del sur del Brasil y vuelve transformado en zapatos, algún problema está teniendo.

Cuando las grandes empresas lácteas o cooperativas no pueden exportar la mejor manteca del mundo, un problema estamos teniendo. Cuando la provincia de Misiones, donde el pino se hace maderable a los 12 años, no puede competir en la industria forestal, algún problema estamos teniendo.

Y que no me digan que el tipo de cambio y las tasas están altas porque hay libertad de mercado y porque flota la divisa libremente. La divisa flota libremente cuando se compensa lo que se necesita para importar y lo que ingresa para exportar. Pero a este mercado del tipo de cambio hay que agregarle el festival del ingreso de dólares para la timba y de dólares para endeudamiento que toma el sector público y el sector privado. Entonces, el presidente del Banco Central, con su formación, que seguramente es buena, a mí no me va a convencer de que este tipo de cambio es producto de una flotación libre.

Con estos elementos, la economía no va a crecer. ¿Y sabe qué? La necesidad de que crezca la economía es de todos: es de las provincias, es de esta legislatura que está votando un presupuesto y pautas de crecimiento. Pero yo no veo que haya elementos para ese crecimiento.

Ejemplo uno: ¿el mercado externo hoy es atractivo para nosotros? No, porque no somos competitivos por el tipo de cambio y por tantas otras cosas. Ejemplo dos: el mercado interno es la otra posibilidad de crecer. Pero nadie va a invertir en este país si no tienes a quién venderle. Si no le vendés al exterior y no le vendés al interior, ¿a quién le vas a vender?

Se sacan las líneas de inversión productiva del mercado interno. Sabemos el ajuste previsional que se vino y, además, sabemos que en el año en curso se les dieron a los sectores más necesitados créditos que tendrán que devolver con la asignación universal por hijo o con la jubilación que cobrarán el año que viene. Yo no sé si se va a crecer al 3,5 por ciento. ¿Y saben qué? Es difícil esta situación, porque este presupuesto, si no se crece al 3,5 por ciento, no va a cerrar y habrá déficit fiscal. Y este presupuesto si no crece, no va a compensar el grave perjuicio que sufren las provincias.

Y acá me pongo a hablar concretamente de la provincia de Misiones. En cuanto a la provincia de Misiones —esto lo voy a decir muchas veces en este recinto, en muchos tiempos—, nosotros tenemos hoy un pacto fiscal mediante el cual aceptamos reducir los ingresos brutos, seguramente una de las políticas fiscales más rígidas de la Argentina. Pero no teníamos otra alternativa. No teníamos otra salida, porque recibimos el 40 por ciento menos que el Chaco, el 23 por ciento menos que Corrientes y el 27 por ciento menos que Santiago del Estero. Eso nadie lo resolvió. Han pasado —como se ha dicho acá— gobernadores y presidentes desde el 94 y nadie resolvió eso. Entonces, salimos a buscar los propios recursos y somos ejemplo de no endeudamiento, de equilibrio; no le pedimos plata de anticipo a la Nación. Y lo hicimos con nuestros recursos.

Y ahora confiamos y fuimos ahora renunciando a nuestra política fiscal, si se quiere. Pero para eso debe crecer la economía. Y si la economía no crece, les va a ir también bastante mal a las provincias, en especial, a las provincias que no tenemos coparticipación buena, como Misiones. La “copa” per cápita del interior del país es 32.000 pesos habitante y la de Misiones es 23.000 pesos; vean la enorme injusticia. ¿Saben por qué digo esto? Porque gran parte de las cosas que estamos discutiendo y la reforma pre-

visional fueron para resolverle la situación a una provincia que tenía su razón. La provincia de Buenos Aires tenía su razón en reclamar, porque tenía un índice malo y una “copa” baja. ¿Pero saben lo que veo? Que mientras a todo el mundo las cosas se le van resolviendo gradualmente —o te doy o te saco—, a la provincia de Misiones le dicen: “Bajá los ingresos brutos”. A la provincia de Buenos Aires sí se le resuelven las cosas en un solo instante. La verdad es que no me parece justo ni equitativo cómo se reclama en un proceso de reparto de recursos y, especialmente, en el debate de la coparticipación.

Por eso, quiero terminar diciendo que nosotros, con muchas diferencias y en aras de la gobernabilidad, queremos que al país le vaya bien y hacemos estas recomendaciones quizás apasionadas. Muchas de ellas son producto de vivir en la frontera. Y en la frontera se vive distinto y las cosas vinculadas con el tipo de cambio impactan mucho. Les pongo un ejemplo. Miren, no está nuestro compañero el senador Schiavoni, pero nosotros estamos peleando por el ITC diferenciado. Yo no estoy tan preocupado, porque creo que hay una facultad por la que el Ejecutivo lo puede adicionar. ITC. ¿Por qué? Porque la nafta es mucho más barata del otro lado, en Encarnación; mucho más barata. Lo mismo ocurre en Formosa.

¿Sabe qué ITC vamos a tener que poner pronto? El ITC de la cerveza: impuesto a la transferencia de la cerveza, porque vale menos de 120 pesos el pack de cerveza en la ciudad de Encarnación. Y también a vos te pasa del otro lado de Clorinda. Y la gente no solamente se va a ir a cargar combustible, sino también va a ir a buscar su pack de cerveza. Y, a veces, decimos que los impuestos internos no impactan y lo que impacta es no solamente el costo argentino, que se hace del tipo de cambio, sino también de esos costos internos. Yo no voy a tener cara y seguramente me va a ir mal si pido un impuesto diferencial para la cerveza en la provincia de Misiones que, a veces, uno la toma y es bastante rica.

Así, queridos amigos, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo, presidenta, muchas gracias por la posibilidad de expresar y volver a insistir con algunas cosas que creo que se pueden modificar a partir de mañana. Primero, que no saquen los beneficios existentes para las

pymes y las regiones. Ejemplo, el decreto 814, las líneas de inversión productiva y el aporte patronal del 17 por ciento.

Tiene todo el margen del mundo el Poder Ejecutivo, para no hacer lo que hacía en la historietita Condorito a su sobrino Coné, que lo llevaba a ver tomar helado. Y si esto se da, si nos dan por un lado a las pymes del interior y por otro lado nos sacan, esta reforma es ver tomar helado. Que se corrija el rumbo, que se beneficie al país productivo y no al país de la timba financiera y, por último, que haya justicia –como hubo para la provincia de Buenos Aires– para todas las provincias que tienen claramente un atraso en su coparticipación federal.

Muchas gracias, presidente. Y feliz año nuevo a cada uno de los colegas y de los trabajadores de esta casa. Muchas gracias.

Sra. Presidente. – Gracias, senador. Felicidades para usted también.

Tiene la palabra el senador Rozas.

Sr. Rozas. – Gracias, señora presidente. Trataré de hacer algunas referencias conceptuales respecto de estas tres leyes importantes, que tienen que ver, fundamentalmente, con la marcha de la economía y del campo social de nuestra República.

Como los demás senadores, yo he escuchado y he seguido los análisis y los mensajes de cada uno de los senadores y lógicamente que tengo algunas coincidencias y bastantes disidencias. Disidencias porque no creo que ningún argentino, seriamente, no coincida con la necesidad de que, en la Argentina, debemos provocar cambios y reformas. La diferencia puede ser cómo la encaramos, cómo la tenemos que llevar adelante. Puede que, en eso, seguramente, tengamos puntos de vista diferentes, pero no puedo creer que haya un solo argentino que crea que no es necesario provocar cambios en este país.

Es decir –acá se dijo también– que, si seguimos transitando siempre el mismo camino, el resultado no puede ser otro que el mismo que se consiguió antes. Y la verdad es que tenemos que pensar de dónde venimos para poner en contexto la conversación o nuestras reflexiones. Es decir, el país no nació o no empezó de nuevo a partir de diciembre de 2015. Cambiaron las autoridades, se cambió el presidente, ganó otro partido, otra coalición. Pero el análisis de la

economía del campo social que tenemos que hacer viene de antes. Es decir, acá se habla como que este gobierno es exclusivamente el único responsable de la actual situación en la que está el país. Mi pregunta es: ¿nadie se va a hacer cargo del 30 por ciento de pobreza que heredó este gobierno? ¿Eso también no se va a considerar en el contexto y en el análisis de la situación actual del país? Frente al 30 por ciento, me parece que no resiste el menor análisis que algunos cambios tenemos que propiciar.

Repito, puede que –seguramente que lo es– haya puntos de vista diferentes de cómo se encaran esos cambios. Ahora, yo no escucho propuestas alternativas de cambio. Lo que sí escucho es que realmente algunos creen que tienen la verdad absoluta y los demás no solamente estamos equivocados, sino que actuamos con crueldad y burlándonos de la gente con estas políticas.

He escuchado con atención decir que nos vinculan con las políticas de los noventa. Me pregunto: ¿quién gobernaba en los noventa? Nosotros no gobernábamos en los noventa, gobernaban los que hoy nos critican. Y apoyaban esas políticas. Nosotros estábamos en contra de esas políticas en los noventa, políticas liberales ortodoxas. Y ahora nos quieren vincular, como si volviéramos a retomar esas políticas de los noventa, cuando acá se ha sido claro en que lo que se está tratando es de aplicar son políticas graduales. Yo creo que lo que se pretende hacer es crear la imagen de un país donde se está viviendo un ajuste insoportable.

Quiero decir, señora presidente, que acá no he escuchado decir a nadie que estas reformas que se trataron en Diputados y tratamos acá en el Senado, si bien es cierto que son iniciativas del gobierno nacional, han sido avaladas y firmadas por 23 gobernadores sobre 24 provincias argentinas.

La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿esos 23 gobernadores han traicionado a los ciudadanos de sus provincias?, ¿han sido extorcionados? ¿O realmente habrán visto, más allá de los colores políticos a los cuales pertenecen, algunas ventajas o algunas desventajas? Porque cuando uno firma un acuerdo, naturalmente que obtiene algunas ventajas y tiene que ceder otras.

¿Que se pretende hacer un acuerdo Nación-provincias o provincias-Nación que sea favora-

ble exclusivamente para un sector de los dos? ¡Es imposible! Yo creo que los gobernadores, si terminaron firmando ese consenso fiscal que se traduce en estas reformas económicas y sociales, es porque habrán obtenido compensaciones o ventajas comparativas. Yo sé, en el tema jubilatorio, que hay provincias que tienen un déficit extraordinario en las cajas de jubilaciones provinciales y que en el convenio que se ha firmado la Nación se hace cargo de ese diferencial para las provincias. Esto es verdad. Entonces, para poner la verdad sobre la mesa, es un acuerdo del gobierno nacional con los gobiernos de provincias. Esto es importante.

El otro día, alguien dijo –y yo quiero reiterarlo– que no nos podemos hacer los distraídos, lo cual no quiere decir que cada senador o cada diputado no tengan derecho a votar como les dicten sus conciencias, como crean que es lo mejor. Pero repito que esto es un acuerdo de gobernadores con el gobierno nacional.

En segundo lugar, parece ser que no tenemos claro que el país no puede seguir soportando el déficit fiscal con el que vive la República. O es por el lado de la emisión monetaria –que lógicamente hace incontrolable el tema de la inflación– o es por el lado del endeudamiento externo –que también complica el tema de nuestra moneda–; no hay otra manera. Mientras la Argentina no comience a buscar su equilibrio fiscal, ¿de qué otra manera se puede sostener el país de pie?

Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer para hacernos cargo todos los argentinos de la situación que estamos atravesando, es si el déficit fiscal de la República empezó el 10 de diciembre de 2015 o si el país venía con déficit fiscal anterior, si el país tenía un problema de generación de empleo genuino con anterioridad al 10 de diciembre de 2015. Digo todo esto no como pretexto para justificar la situación actual que vive la República, sino simplemente para poner las cosas en el lugar que correspondan.

Lógicamente, como siempre, los argentinos soñamos con la idea del mesías, de la presencia del Messi, y las soluciones tienen que aparecer en 24 horas. No. Hay situaciones en las que vamos a ir saliendo paso a paso, recuperando espacios perdidos y no se lo va a lograr de la noche a la mañana. Parece que decir estas cosas

también es un pecado en la Argentina y hay que decirlas.

¿Qué tiene que recuperar el país? Fundamentalmente, tiene que afianzar la actividad productiva, tenemos que mejorar nuestra competitividad. Es grave esto si no tomamos conciencia de que uno de los graves problemas que tiene la Argentina es la falta de competitividad y de que a través de la competitividad y del afianzamiento de la actividad productiva vendrá la nueva generación de empleos, si es que queremos terminar con la pobreza. Pero yo creo que, más que buscar soluciones, lo que se busca acá son responsables en la situación actual y, en esto, realmente no coincido con la visión de muchos de mis colegas. Nosotros nos deberemos hacer cargo de nuestros errores, pero también los demás se deben hacer cargo de los suyos.

Nadie puede negar ciertas cosas. Y vamos a tomar datos desde 2016 en adelante para no medir con gestiones anteriores, pero hay cosas que no puedo dejar de decir, señora presidenta. Por ejemplo, acá se ha tratado de insinuar que estamos frente a un presupuesto dibujado, a un presupuesto que no tiene nada que ver con la realidad ni va a tener nada que ver con la realidad.

Por supuesto que un presupuesto es presupuesto que esas metas se van a cumplir y, en función del cumplimiento de esas metas, uno logra un resultado en lo económico, en lo político y en lo social. Entonces, si nos ponemos a mirar cuál es el desvío entre lo presupuestado y lo ejecutado en el presupuesto de 2017, llega a cerca del 3 por ciento durante este gobierno.

En el 2014, la desviación llegó al 38 por ciento de las partidas y el promedio de los últimos diez o doce años el desvío entre el presupuesto y su correspondiente ejecución llegó al 18,5 por ciento.

Entonces, me parece que hay una diferencia sustancial, aunque no es exacto, lógicamente, porque se previó una inflación menor a la que tuvimos. Sin embargo, reitero que la desviación alcanzó someramente el 3 por ciento.

Para cerrar, señora presidenta, quería decir que en 2016 hubo un déficit fiscal cercano al 5,4 por ciento. El actual presupuesto cerrará con un déficit fiscal del 4,2 por ciento y está previsto

que, sucesivamente, se vaya bajando un punto por año. Y la presión tributaria era récord, del 32 por ciento con respecto al producto bruto interno.

Creo que debemos tomar conciencia de que estas cosas no se pueden bajar de la noche a la mañana porque entonces si caemos en la política de los noventa, la del ajuste brutal por las políticas ortodoxas. De ahí que se hace de manera gradual.

No medí bien el tiempo y, si bien me queda mucho más de la mitad para expresarme, no quiero abusar del tiempo de la Presidencia y de la paciencia de mis colegas.

Gracias, señora presidente.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidente: cuando se produjo el debate de la ley previsional donde fueron invitados los gobernadores, fui muy crítico y lo fui con el gobernador de Córdoba, quien justificó el acuerdo en base a porcentajes de coparticipación que son absolutamente falsos. El dijo que el presupuesto nacional repartía el 49 por ciento a las provincias argentinas.

En la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se hizo ayer, el ministro de Finanzas dijo o reconoció que la Nación va a repartir el año próximo, tanto como una meta, como un logro, el 31 por ciento en lugar del 29 por ciento para luego llegar al 34 por ciento en 2019.

Con anterioridad, el año pasado, los ministros de Interior y de Economía dijeron que se repartía el 27 por ciento.

La ley de coparticipación vigente establece que, como mínimo, la Nación debe repartir el 34 por ciento.

Lo quiero dejar en claro porque lo que dice el gobernador de Córdoba afecta gravemente al federalismo argentino, ya que justifica la mala distribución que se hace entre la Nación y las provincias dando datos confusos, como aquellos teóricos que dicen que depende de qué se ponga en el numerador o en el denominador para tener una fórmula mágica que se acomoda de acuerdo a los intereses que se defiendan.

La realidad es que este año, de acuerdo al presupuesto, se distribuye un 29 por ciento y el

año próximo, como una meta, se va a distribuir el 31, cosa que es positiva para las provincias que se distribuya un poco más, pero bajo ningún concepto se justifica que no se cumpla con la ley que establece el 34 por ciento.

La segunda cuestión que quiero aclarar, que tiene que ver sobre la forma del debate, es que acá tengo la entrada del proyecto de ley tributaria: ingresó a la Cámara a las 14:30 horas, no como dijo el senador Pichetto, al mediodía. A las 14 y 30 horas. Tengo acá el Diario de Sesiones que dice que siendo las 14 y 38 del miércoles 20 de diciembre continúa la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; ocho minutos después.

No sé cómo pudieron leer la ley porque ni siquiera tuvieron tiempo de hacer una copia. No sé cómo pudieron leer la ley. La trataron y firmaron el dictamen. Perdónenme, esto de la calidad institucional... No sé. Después tienen una verbosidad para hablar de la República, de las instituciones, de la Constitución y de la ley, pero el trámite es exprés. El trámite que se hizo del presupuesto está demostrado con el debate que fue absolutamente insuficiente. Los temas principales, medulares del debate, no fueron discutidos en la comisión.

Lo que el ministro de Transporte informó, que tal vez fue lo más amplio, todo quedó en la duda, porque fue más o menos. Nada categórico. ¿Se va a hacer o no? Objetivos: vamos a duplicar el número de pasajeros. Bueno..., vamos a duplicarlo. Vamos a duplicar los kilómetros de autopistas. ¿Cuándo? Bueno...

Me parece que el debate exprés es grave y fue grave porque afecta las instituciones de la República la amenaza del DNU que firmó todo el gobierno, menos el presidente.

El país tiene que saber lo que no sabe: se sancionó una ley que autoriza a que en la Argentina el presidente de la Nación dicte una ley que, con el aval de una sola Cámara, sea ley. Ese es el régimen de los DNU, que eran excepcionales —o, por lo menos, más o menos excepcionales— y ahora sirven para cualquier cosa y en cualquier momento. Si no sale la ley previsional, dictamos un DNU. Es la amenaza. Y el periodismo completo lo analiza con superficialidad. Así se castiga a las instituciones.

El trámite exprés consiste en haber anulado la facultad de revisar que tiene este Senado, porque la coalición dominante arregla en Diputados las leyes que vienen a este Senado y que no podemos modificar aunque tengan errores, aunque sean errores que reconocemos, aunque sean errores materiales, porque la premura de la sanción no permite que funcionen correctamente las instituciones. La verdad es que no puedo compartir esto.

El Senado tiene facultades para revisar las leyes. Esa es la razón de la existencia de dos Cámaras: para parlamentar, para discutir, para encontrar consensos. Pero mire usted los consensos, lo que denunciaron en la comisión con el veto parcial de la ley de la industria naval. Fue por consenso unánime. Incluía a funcionarios del Poder Ejecutivo. Y después un veto parcial, que por supuesto no se tratará nunca. ¿Y el consenso? Se terminó el consenso. Son consensos unilaterales. Es grave. Por lo menos, desde mi punto de vista, es grave.

Los objetivos que fijó el presidente cuando asumió me parecían a mí buenos y nobles: pobreza cero, lucha contra el narcotráfico y unidad de los argentinos. El miembro informante pretendió encuadrar el presupuesto en estos objetivos.

Me parece que nosotros tenemos que pensar, y respeto mucho lo que dijo el senador por el Chaco, que la pobreza es un problema de la Argentina. Pero luchar para erradicar la pobreza es luchar para que haya empleo, inversión y trabajo. Para que la gente salga del pozo en que se encuentra. Sin embargo, si había 13.500.000, hay 13.500.000 y seguirá habiendo 13.500.000. O más. Porque, ¿a cuántos miles y miles de jubilados argentinos con el cambio de la fórmula y al restarles 100.000 millones en el año no vamos a sumergir en la pobreza? Los jubilados tienen un gasto que no es normal en los otros sectores de la población. Tienen gastos de enfermedad y de farmacia que son muy superiores al de un habitante común.

Cuando se habla del gradualismo, está bien, es un camino. Es neutro. Ahora, el gradualismo se puede aplicar para beneficiar a los pobres o para beneficiar a los ricos. La preocupación son los pobres o son los ricos. Y lo que veo en este paquete de leyes es que se va ejecutando un proyecto que va favoreciendo a los ricos. ¿O no escuchan? ¿O somos sordos? ¿No ven que

el sistema de los pagarés que emite el Banco Central es un gran negocio para la bicicleta financiera? ¿O no recordamos que esto ya pasó en la Argentina? Pasó muchas veces. En una época se llamaban capitales golondrina. Siguen siendo los mismos. Vienen, cambian los dólares, cobran intereses fabulosos que no pueden cobrar en ningún lugar del mundo y luego se llevan la plata. Negocios. ¿Qué los hacen los jubilados, los hombres y mujeres que están buscando trabajo en los barrios argentinos o los hacen los poderes concentrados económicos del mundo?

Entonces, tenemos que saber cuál es la orientación. Y me parece que la orientación es equivocada. El paquete de leyes es equivocado en su rumbo.

Con respecto a las provincias argentinas, yo estimo que seguramente van a aprobar esta iniciativa y que muchos van a justificar su voto, aunque en sus expresiones orales han sido absolutamente críticos —pero al momento del voto lo acompañarán—, condenando a las provincias argentinas a más pobreza.

El 34 por ciento es menor, si le sacamos la afectación del cheque, porque el monto a repartir es menor. Entonces, el 34 por ciento es una meta más fácil de alcanzar. Todo el andamiaje está hecho con picardía. Todo el andamiaje está hecho con picardía. Nos quieren llevar a montos fijos, que la inflación se los va a comer.

Y yo digo una cosa: ¿será cierto que necesitan 100.000 millones y se los sacan a los jubilados y después son tan generosos para pagar otras cuentas? ¿No sería más fácil sincerarse y defender a los más humildes, a los que tienen inmensa cantidad de problemas?

Por todo eso, señora presidenta, porque creemos que el trámite exprés, superexprés, el evitar la discusión... Todo el día estuvo la puja entre hablar y dejar hablar.

Yo, que siempre me opongo a que se traten los paquetes de leyes juntos, acepté bajo el pedido de que fuéramos amplios en el criterio. Las palabras “amplios en el criterio” no se las transmitieron a la presidenta, por su forma de actuar. Entonces, se limitó la palabra a muchos senadores. ¿Qué nos hubiera llevado? ¿Media hora más? ¿Que en vez de terminar a las diez de la noche termináramos a las diez y media? Si ese no es el problema. El problema es que estamos

tratando temas que van a afectar a la Argentina de los tiempos presentes y futuros. Y yo creo que la van a afectar mal, entonces queremos opinar para que quede sentada claramente cuál es la posición.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.

Tiene la palabra la senadora Fernández de Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. – Sí, señora presidenta.

Creo que en todas las intervenciones aletea la idea de a quién favorece esto.

En definitiva, me parece que cuando uno está discutiendo impuestos, aprobar impuestos, modificar impuestos, modificar asignaciones de impuestos no es tan complejo ni tan ideológico. Es ideológico tal vez al momento que uno decide a quién va a desgravar, a quién le va a sacar, a quién va a imponer. Pero no una vez que envían al Parlamento el proyecto, donde se establece que, por ejemplo, se va a desfinanciar la ANSES, porque no se va a alcanzar a cubrir con la asignación del impuesto al cheque, lo que por otra parte se lo retira fundamentalmente también por el tema de la reducción que se hace de las contribuciones patronales. Usted sabe que las contribuciones patronales, a diferencia del resto de los impuestos, son el ciento por ciento para el sistema de seguridad social, así que su reducción no ofrece ninguna duda a nadie.

Estamos desfinanciando la ANSES. ¿A favor de quién? De los empresarios. Podrá haber pequeños empresarios, medianos empresarios, grandes empresarios. Lo cierto es que esta disminución a las pymes no las favorece en absoluto. Si una pyme tuviera que pedirle al Parlamento o al presidente que le rebajen una contribución patronal o que le garanticen mercado interno para ganar dinero y garanticen buenos salarios para inyectar a la demanda, estoy convencida de que las pymes, masivamente, como lo dicen además en sus pronunciamientos empresariales, optarían por elegir no las contribuciones patronales, sino mantenimiento de mercado interno, demanda, etcétera.

Posiblemente para empresas de más de 2.000, 3.000 trabajadores, sí sea importante reducir la contribución patronal, porque va a aumentar su rentabilidad; lo que no va a asegurar es que

genere empleo. De hecho, del año 2003 al año 2015 no se tocaron las contribuciones patronales y sin embargo se redujo la informalidad del 50 por ciento recibido al 32,7. Fue una reducción muy importante de la informalidad, que, además de dignificar a los trabajadores, fundamentalmente hizo crecer la economía.

Pero si además vemos el resto de los impuestos, como la reducción de ganancias, o la posibilidad de imputar el impuesto al cheque... Ese no es un impuesto regresivo, como alguien dijo. Los hay progresivos, los hay regresivos. Este es un impuesto *flat*, es a las fluctuaciones de caja de las empresas. Es de fácil percepción y actúan como agentes de retención los bancos.

Es cierto que se creó en el año 2001 durante el gobierno de la primera Alianza y de la gestión del doctor Cavallo, pero en realidad se viene posponiendo su eliminación porque no hay impuesto sustitutivo por lo menos pergeñado o ideado hasta ahora.

Es muy simple. Hay que sumar o restar el 1,5 por ciento del PBI que el Estado renuncia a percibir en concepto de impuestos, lo que también es contradictorio con presentar el déficit fiscal como el problema más importante. Porque realmente no se explica cómo el déficit fiscal es conceptuado como el tema más importante, pero al mismo tiempo se renuncia a percibir impuestos en favor de los sectores más concentrados y más favorecidos y se retienen 100.000 millones de pesos a los sectores más vulnerables a partir del cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria que era aplicable a 17 millones de personas.

Estas cosas son objetivas. Es ideológico decidir a quién le voy a sacar plata y a quién se la voy a poner. Pero una vez que esto se decide y queda consagrado en la letra de una reforma impositiva, es fácil determinar que es una transferencia de ingresos. Porque los impuestos son eso: transferencias de ingresos que el Estado hace a través de la iniciativa del Poder Ejecutivo, o del Parlamento, para beneficiar un proceso de redistribución o para, tal vez con buenas intenciones –por qué dudarlo–, creer que de esta manera se va a incentivar el crecimiento de la economía.

Todo esto estaría fantástico si estuviéramos viendo estas cosas por primera vez.

Alguien se molestó recién porque las senadoras que informaron y algunos otros legisladores hablaron de los años noventa. Fui senadora la primera vez el 10 de diciembre de 1995. El gobierno de entonces acababa de ganar las elecciones. Kirchner en ese momento era gobernador de la provincia de Santa Cruz, iniciaba su segunda gestión.

A esa altura los gobernadores de la República Argentina ya habían firmado dos pactos fiscales. Uno en agosto de 1992. Ese, Kirchner lo firmó a los pocos meses de asumir como gobernador el 10 de diciembre del 91. Ahí se establecía una de las reformas estructurales que han contribuido al desfinanciamiento histórico de las provincias argentinas: la transferencia de los servicios sanatorios y de salud, servicios básicos de vivienda y de agua a las provincias, sin los recursos correspondientes.

Usted me dirá: ¿y para qué lo firmaron? Bueno, señora presidenta, porque en ese momento estábamos saliendo de lo traumático que había sido el final del gobierno del expresidente Alfonsín, de lo traumática que había sido la hiperinflación.

Cuando hablan de las crisis, digo que ninguna ha sido igual. Como militante y como dirigente que participaba en la vida activa política pública, he presenciado dos. La crisis de la “híper”. Kirchner era intendente de la ciudad de Río Gallegos. He visto gente pelearse en un supermercado allí con el repositor para ver quién llegaba primero a agarrar la mercadería sin que se la remarcaran por segunda, tercera o cuarta vez en el día. Fue muy traumático para la sociedad argentina.

Recuerdo que desde la ¿Intendencia salimos a organizar a las juventudes políticas argentinas—de todos los partidos, por cierto— a los efectos de cubrir lo que era inmanejable.

Entonces, se firmó el pacto del 91 y después vino el del 93. Ya, ese, Kirchner se negó a firmarlo porque decía que se quedaban con recursos de las provincias y, además, porque se había evidenciado que el acuerdo del primer pacto no había sido bueno.

El del 93 se llamó Pacto por el Crecimiento, el Empleo y la Productividad. Son las tres palabras que se emplean en este mismo consenso fiscal que se está firmando hoy. Y se compromie-

tían a las mismas cosas: reducción de impuestos de ingresos brutos, reducción de sellos... Nunca fue cumplido por ninguna provincia argentina, señora presidenta. Y no porque los gobernadores sean incumplidores seriales, como alguien los calificó, sino por una razón mucho más sencilla y terrenal: estos ingresos constituyen, para muchas provincias argentinas, la mayor fuente de recursos.

De hecho, si uno mira la estructura impositiva de la Argentina, va a advertir que los ingresos brutos y sellos y otros impuestos de carácter provincial significan el 4 por ciento del PBI nacional. Y los impuestos sobre la propiedad en las provincias representan el 1,1 por ciento, mientras que los impuestos sobre la propiedad a nivel nacional solamente representan el 0,3. Algunos van a cambiar ingresos brutos y van a gravar más inmuebles, otros van a hacer otro tipo de combos. En definitiva, lo terminan pagando siempre las provincias y las provincias no van a poder disminuir su carga impositiva general y total porque se quedan sin recursos.

¿Por qué firmaron esto? Algunos hablan de... Decía recién un senador cómo se puede despreciar que veintitrés gobernadores firmaron. Todos saben por qué firmaron veintitrés gobernadores, señora presidenta, señores legisladores.

Dos días antes de la reunión que los gobernadores debían realizar en el CFI—donde, me consta, la mayoría no estaba de acuerdo—, apareció en los diarios una foto de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y del presidente de la Corte con motivo del juicio que la provincia de Buenos Aires había establecido por el tema del fondo del conurbano. Justo..., hay que reconocer que, además, tampoco es el problema del fondo del conurbano. El problema de la provincia de Buenos Aires es cuando pierde entre 6 y 8 puntos de coparticipación en 1983—84 creo que fue la reforma de coparticipación—; allí, el gobierno de Armendáriz pierde entre 6 y 8 puntos de coparticipación que la provincia nunca logra recuperar y que, luego, se trata de suplir con el Fondo del Conurbano Bonaerense.

¿Que había que atender el descalce de la provincia de Buenos Aires?, ¿Sin lugar a dudas! Era necesario. Ahora, ¿esto no ameritaba que se sentaran sin extorsiones? Porque debo decir, señora presidenta y señores legisladores y a aquellos que tienen dudas de por qué firmaron

los veintitrés gobernadores, que a esa reunión en el CFI llegó el señor ministro del Interior y cuando algunos gobernadores le manifestaron que no estaban de acuerdo con lo que se proponía les dijo: “¿Vieron la foto que salió en el diario? Mejor que arreglen porque si no la Corte está por darle la razón a la provincia de Buenos Aires”. ¡Esta es la razón por la que los gobernadores tuvieron terror, señora presidenta!, porque significaba miles de millones de pesos para algunas provincias, que les descontaban, que les detraían si ese fallo salía de esa manera. Conducta bastante poco institucional, por cierto, del presidente de la Corte porque está visto que, por la propia doctrina de la Corte, no podría nunca reunirse ningún miembro de la Corte con parte de un juicio si no están presentes las otras. Pero, bueno, estas son las cosas que están pasando con el Poder Judicial, las instituciones y la Corte en la República Argentina. Todo hace juego con todo.

Con lo cual no hubo libre albedrío, señora presidenta, para firmar este consenso. Muchos gobernadores y gobernadoras tienen severos problemas porque no pueden pagar los sueldos, que no les alcanzan los recursos y dependen del giro que les hace el gobierno nacional a las provincias. Entonces, digo yo, señora presidenta, ¿por qué se insiste?

Me acuerdo, también, que en el año 94 Cavallo decidió bajar los aportes patronales, las contribuciones –los aportes patronales, sí, bien digo, las contribuciones– de los empresarios con el pretexto, también, de generar empleo. Cuando las bajó, el empleo era de un dígito. Terminó en dos dígitos y terminó en la hiperdesocupación que recibió en 2003 el presidente Kirchner.

Y digo que esto no significa que estuviera todo maravilloso en el país en 2015. Pero digo sí que había problemas que hoy están mucho más agravados, como el déficit fiscal, y que lo siguen agravando, porque siguen regalando impuestos a los que más tienen.

Es incomprensible. Es incomprensible que ustedes hayan tratado el año pasado la reparación histórica y hoy digan que hay déficit previsional, que no lo había tampoco en 2015. Había superávit en la ANSES con los números del propio gobierno. Y digo yo: si era tan grave la situación de la ANSES, ¿qué sentido tiene la ley de reparación histórica –que de reparación

tuvo poco y de histórica nada– que hicieron el año pasado?

Tal vez, si querían presentar una ley de blanqueo, ¿no hubiera sido más sincero y más sensato, en términos económicos, plantear la ley de blanqueo sin necesidad de comprometer el patrimonio de la ANSES? Lo hicieron. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando, me parece, es que cuando se tenga que discutir en 2019 o 2020 el régimen previsional, se presente una ANSES quebrada, una ANSES sin recursos. Entonces, todos digan y todos hablen.

Porque hay una cosa que también me impresiona mucho, déjeme decirle, presidenta, a usted y a todos mis colegas. Si bajara un marciano y nos escuchara hablar a todos, diría: “Pobre gobierno. Este no saca nada hoy”. Y, después, aparece todo aprobado. Esto también va a tener que ser revisado, porque yo no creo que la gobernabilidad sea decir a todo que sí.

También fui senadora en 2001. Volví a esta Cámara, ¿sabe cuándo? Me fui en el 97 para Diputados. Siempre fui peronista, pero la verdad es que no le voté casi nada al gobierno de los noventa. Es más, me enfrenté. A mí me expulsaron de este bloque en el 97 por no querer votar lo que quería el oficialismo. En el 98, enfrente, en Diputados, voté en contra de la reforma laboral. No solamente voté en contra de la reforma laboral: estuvieron un mes, señora presidenta, sin tener quórum porque cuatro diputados, cinco, no les dábamos quórum.

O sea, el hecho de una identidad política no necesariamente conlleva a tener una identidad con determinadas políticas que claramente fueron neoliberales. En un momento, debo decir, que el neoliberalismo estaba en pleno auge en el mundo y no era cuestionado. Se había caído el nuevo gobierno que se inició en el 89. Tenía el panorama nacional de una sociedad traumatizada por la hiperinflación, la caída del Muro de Berlín –parecía que la historia se había acabado– e, incluso, muchísimos dirigentes de mi partido que habían militado en la renovación, que eran peronistas, por así decirlo, terminaron o sucumbieron a lo que fue lo que popularmente se conoció como la década de los noventa, el neoliberalismo o, si les gusta, el menemismo, pongámosle. Así como hablan del kirchnerismo, hablan del menemismo. Pero la verdad es que

no formé parte de eso y no por eso dejé de ser peronista, ni me fui de ningún partido, ni nada.

Por lo tanto, creo que este tipo de discusiones no sirven, porque sí coincido con lo que dijo el senador Solanas en el sentido de que hay cosas que hay que discutir en serio en la República Argentina. Una de ellas es, a mi criterio y según la experiencia que hemos tenido en 12 años y medio de gestión, el tema de la restricción externa, el tema del dólar, de una economía bimonetaria, que además está vinculada directamente con otro problema estructural de la Argentina en materia económica, que es la inflación.

La inflación no es –como decían ustedes cuando eran oposición– que era porque emitíamos o porque había consumo desenfrenado. Yo lo escuché a usted y a algún otro dirigente decir: “Y, no sé... La gente quería tener... Creía que podía tener un celular, un televisor, salir de vacaciones y tener un auto”.

No era ese el motivo de la inflación, señora presidenta. Hoy nadie consume nada, se seca la plaza a través de las LEBAC y la inflación sigue. Quiere decir que la inflación es un fenómeno multicausal de profunda raigambre cultural en una economía bimonetaria, donde se piensa en dólares, donde los precios de los departamentos o de las casas son en dólares y no pasa lo mismo en ningún país de Latinoamérica. Si nosotros no resolvemos el sistema de la restricción externa y de una estructura monetaria, bimonetaria, no hay salida. Y esto hay que discutirlo en serio. Ahora, que este camino que ustedes están proponiendo es el que va a mejorar las cosas, no.

La única duda que me queda de todo esto es si... Porque me cuesta mucho pensar y creer que gente que tenga una determinada experiencia pueda pensar que lo que no dio resultado en los noventa ahora va a dar resultado, en un mundo mucho más complejo que el neoliberalismo de los años noventa, donde, le reitero, el Consenso de Washington era algo muy articulado, había caído el Muro de Berlín; parecía que la historia se había acabado.

Pero resulta que ahora han vuelto a surgir los proteccionismos. Ahí los vemos a los Estados Unidos de vuelta absorbiendo capitales para ellos, ahí la vemos a Inglaterra con el Brexit, ahí la vemos a Alemania. O sea, han surgido de vuelta los movimientos proteccionistas. Cuando la economía no da resultado, surgen siempre los

nacionalismos en todas partes. Por lo cual, estamos a contramano. O sea, lo veo a contramano también, señora presidenta.

Por eso, creo que ustedes pueden seguir con esto porque nosotros les dejamos –y esto creo que no lo puede discutir nadie– el nivel de endeudamiento externo más bajo que haya recibido un gobierno de la democracia. Alfonsín recibió el gobierno con el terrible flagelo del endeudamiento de la deuda externa contraída por la dictadura militar. Si mal no recuerdo, creo que fue –si me equivoco, espero que algún senador me corrija– de 78.000 millones de dólares...

Sr. Mayans. – Fueron 45.000 millones.

Sra. Fernández de Kirchner. – Bueno.

Estuvieron seis años para endeudarse haciendo eso. Mire lo vertiginoso del endeudamiento de estos dos años, que ya supera el de la dictadura militar.

¿Cómo recibió Menem el país? Con la hiper, con la crisis de la deuda. ¿Cómo lo recibió De la Rúa? Con la convertibilidad y con el país explotado. Y cuando Adolfo Rodríguez Saá se tuvo que hacer cargo del gobierno... Lo acusan de haber “defaultado” la deuda. Él no “defaultó” la deuda, la deuda se había “defaultado” hacía rato, no se podía pagar.

Recibimos un país en 2003 con el *default* de deuda soberana más importante no de la Argentina, sino del mundo. Y le entregamos a la gestión de Cambiemos, en diciembre de 2015, un país desendeudado, con el nivel más bajo de porcentaje de endeudamiento en moneda dura, tanto en lo privado como en lo público. No lo puede discutir nadie, están ahí los números.

Por eso lo tenemos a Caputo con el festival de deuda externa por todos lados, porque los giles, que fuimos nosotros, pagamos con recursos propios –no propios nuestros, propios de los argentinos– la deuda. Porque la restricción de la deuda externa ha sido el gran karma de la economía y de la historia argentina desde Bernardino Rivadavia para acá. Costó un Perú. Y la verdad, señora presidenta, es que me preocupa mucho que se desperdicie esa reforma estructural económica importante que era el desendeudamiento.

Crecí en la militancia escuchando hablar de la deuda externa y contra el Fondo Monetario Internacional, y dentro de poco vamos a estar

igual. Si va a ser igual que la crisis de 2001, no lo creo. No hay ninguna crisis igual a la otra.

Le relataba lo que había pasado en el 89, cuando estaba en Río Gallegos. Le puedo relatar lo que pasó acá, en 2001, porque estaba sentada en esa banca y Alfonsín estaba sentado en la banca de la senadora por Salta. Salíó él de acá con el presidente del bloque radical a pedirle la renuncia a De la Rúa; me lo dijo a mí. Esa noche, cuando volvimos, no podíamos salir de esta Cámara. Estaba rodeado el Parlamento. Estuvimos con Alfonsín hasta las doce de la noche, doce y media, comiendo en el restaurante. Cuando salimos, a oscuras, por Combate de los Pozos, la gente de los edificios de enfrente nos tiraba ollas, cacerolas, ladrillos, cuchillos, lo que viniera, señora presidenta.

Y no era que decían “ahí está Alfonsín”, “ahí está Cristina”. No, no, no veían. Se veía gente que salía del Parlamento y se subía a autos y revoleaban de todo. A Maqueda, que era senador de esta casa, actual miembro de la Corte, le fracturaron una costilla en la calle, pero no porque lo identificaron como senador, sino porque salía con corbata del Parlamento. Este Parlamento estaba sitiado, los políticos estábamos sitiados. Nadie diferenciaba si eran políticos que se habían opuesto a Menem, si habían votado a Menem... Cuando la gente se pudre, se pudre en serio.

Si me dicen que puede haber otra crisis de esas características, no, no lo creo. Fue una crisis caracterizada por la apropiación de los recursos y de los depósitos a plazo fijo, de los dólares, etcétera, de la clase media. Para esto habíamos votado... No habíamos votado, habían votado –nosotros en contra– veintiocho millones de leyes.

Mire: esto que ustedes están haciendo con los jubilados, dentro de unos meses, no les va a alcanzar. Yo formé parte del Parlamento que estuvo en contra de la detracción, del descuento del 13 por ciento a jubilados y empleados del sector público. Sí, Machinea, a principios de 2000, cuando recién empezaba el gobierno de la Alianza, planteó que la solución era la austeridad: vamos a descontar el 13 por ciento. Al año siguiente, se había esfumado ese 13 por ciento y seguíamos votando leyes.

Por eso digo que la otra cosa que se me ocurre es que cómo gente tan inteligente puede pensar

que haciendo lo mismo va a tener resultados diferentes.

Sra. Presidente. – Señora senadora...

Sra. Fernández de Kirchner. – Sí, ya voy redondeando.

Entonces, ahí, me empiezo a preocupar. Porque aquí el senador Fuentes habló de crueldad. Cuando escucho decir que el objetivo es que haya pobreza cero y el combate con la pobreza y veo, por ejemplo, lo que pasó con los créditos Argentina. Este año, supe que senadores se opusieron a los créditos Argentina para los jubilados. Y tenían razón en oponerse. Luego, el presidente lo sacó por DNU. La verdad es que los felicito a los que se opusieron.

Quiero darle algunos números, señora presidenta. Entre julio de 2017, unos días antes de las primeras elecciones, de las PASO, hasta las elecciones del 22 de octubre, Argentina dio 2.592.411 créditos; 1.134.242 créditos fueron para AUH. Se daban entre 3.000 por un hijo, a un año por cada hijo, o 5.000 por cada hijo, a dos años.

Fueron 485.588 préstamos –estos son todos informes de la ANSES a noviembre– de pensiones nacionales no contributivas y de la prestación universal creada por la reparación histórica, o sea, los sectores más vulnerables. Endeudaron a los sectores más vulnerables.

Fueron 259.195 créditos, un cuarto de millón de familias de argentinos, para los trabajadores en relación de dependencia registrados formalmente, a través del sistema de asignaciones familiares. Y 713.386 jubilados del sistema de pasividades normales y regulares.

Ese dinero que les dieron se les otorgó a una tasa que oscila entre el 24 y el 27 por ciento y hoy les están ajustando las cuotas. Y esa masa de dinero, señora presidenta, es prácticamente una parte de lo que le van a retirar por cambio de la movilidad.

Mire usted qué perversidad. Estoy segura de que muchos de ustedes no lo deben saber. El que pergeñó esto, pergeñó un nivel de endeudamiento para los sectores más vulnerables de la República Argentina, para la AUH, para los pensionados no contributivos. Los han endeudado por un año y dos, con tasas movibles de intereses. Y, al mismo tiempo, le sacan la

movilidad jubilatoria, que les garantizaba un ingreso mejor.

Entonces, acá es donde dudo, es donde dudo y digo: no, no es que no se den cuenta, es que tienen en la cabeza otro modelo de sociedad. Quieren una sociedad de jerarquías, donde los que siempre tuvieron tienen que seguir teniendo y los que nunca tuvieron tienen que seguir pisados. Porque, tal vez, crean que este es el modelo de disciplinamiento social para obtener más bajos salarios de los trabajadores, pero realmente, es incomprensible.

Mire, un economista hizo un cálculo...

Sra. Presidente. – Señora senadora...

Sra. Fernández de Kirchner. – Para finalizar, ya finalizo.

Un economista hizo un cálculo. Estos 2.590.000 préstamos familiares hubieran significado un estadio con 35.000 personas, todos los días, diferentes, desde julio hasta el 22 de octubre. Además, en esos estadios diarios de 35.000 personas, cada persona recibía del Estado un promedio de 10.000 pesos.

Quiere decir que el que ideó esto sabe del efecto que tiene la demanda agregada en el movimiento de la economía, porque no es casualidad también que, justamente en el tercer trimestre, hubo un crecimiento en la economía, que se visualizó y se veía que había más consumo. Era esto, señora presidenta: lo pensaron electoralmente y les dio resultado. El tema es que, económicamente, con todas las medidas que están tomando hoy, más este endeudamiento, la situación para los sectores más vulnerables de la economía va a ser terrible. Alguien va a tener que pensar qué vamos a hacer con estos 2.592.000 préstamos que se han otorgado a gente en condiciones de vulnerabilidad.

¡Es perverso socialmente, es de sociópatas!

Sra. Presidente. – Señora senadora...

Sra. Fernández de Kirchner. – Esto es de sociópatas, señora presidenta.

Sra. Presidente. – Cinco minutos.

Sra. Fernández de Kirchner. – Digo, señora presidenta, que es necesario entender que una discusión y un debate de una sociedad mejor implican no tenerle miedo a la discusión.

A propósito, y para finalizar, porque me dejó muy preocupada la disquisición que hizo

el miembro informante acerca de discutir, que decía que discutir era separar, enfrentar. Me fui a la Real Academia Española porque, viniendo de un ex ministro de Educación, supuse que era correcta la acepción que él le daba a ese vocablo. Y acá voy a “discutir”: disipar, resolver... “Discutir”, de acuerdo con la Real Academia Española, significa: dicho de dos o más personas, examinar atenta y particularmente una materia. Esto es lo que pido señora presidenta: que analicemos atenta y particularmente las cosas que se resuelven aquí adentro.

Repito: tenemos una responsabilidad y un contrato electoral. Ustedes, que dijeron que no iban a hacer nada de lo que están diciendo, y nosotros, que dijimos que no íbamos a permitir eso, también tenemos que tener esa responsabilidad.

No me gustaría, señora presidenta, que volviera suceder algún día. Tal vez, a lo mejor, los que hoy están haciendo pingües negocios, se van...

Sra. Presidente. – Senadora, le pido por favor.

Sra. Fernández de Kirchner. – Ya termino. Se van y queda la dirigencia política después para hacerse cargo de todo. Pero no me gustaría, señora presidenta, que alguna vez tuviéramos que salir como esa noche del 19 o 20 de diciembre con el presidente Alfonsín por la puerta de atrás y con la gente revoleando cacerolas sobre quienes salían de este Parlamento.

Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente. – Gracias, senadora.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, algunas cuestiones relativas a las formas. Nunca acostumbro a menoscabar ni a menospreciar la tarea que hace el Senado. A lo largo de este tiempo, mi mensaje y mi discurso siempre han sido la valoración de este espacio como un espacio democrático de discusión y de análisis de los temas.

Quiero decir que la ley tributaria, cuando se empezó a debatir, estaba en el Senado. Hicimos un cuarto intermedio después de la constitución de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que entrara el contenido de la ley. Debate que, además, seguimos atentamente, desde el punto de vista de nuestra participación, juntamente

con diputados del peronismo en la Cámara de Diputados. Y que seguimos desde el mismo origen cuando se discutió con los gobernadores y con el gobierno el Acuerdo Fiscal Federal, que dio lugar también a la sanción de las leyes de acuerdo fiscal, cumplimiento fiscal y también la reformulación del índice previsional.

Quiero decir que yo no puedo subestimar a los gobernadores, de ninguna manera. Son gente que vienen gobernando las provincias y lo vienen haciendo con convicción y tratando de defender el interés y los recursos en las provincias. Y, fundamentalmente, el cuidado del sector público y pagar a fin de mes los sueldos de trabajadores del Estado y de jubilados, porque muchas provincias tienen el sistema previsional y lo tienen fundido. Y hay provincias que tienen deudas con los trabajadores y hay provincias que empezaron las clases en el mes de septiembre. No voy a dar nombres por cuestiones que hacen a la delicadeza y al respeto.

Pero yo no subestimo a los gobernadores ni tampoco a la representación federal que ejercen con toda la legitimidad. Y, cuando se sentaron a discutir con el gobierno nacional, lo hicieron pensando en el interés de sus provincias. Y quiero recordar acá, por si alguno no se da cuenta, ¿qué representamos los senadores? ¡Representamos a las provincias! A las provincias. Esta es la Cámara federal, señora presidenta, representamos a las provincias. La Cámara de Diputados representa al pueblo. Por lo tanto, expresamos esa voluntad que surge de la decisión política de los gobernadores provinciales.

En cuanto a la mirada histórica, hay muchos temas que podemos compartir, pero me parece que ya está en la etapa de la revisión de la propia historia. Seguramente, el análisis los historiadores lo harán con una mirada más seria y más reflexiva.

Coincido con la senadora preopinante en que la ratio de deuda entregada por el gobierno anterior fue realmente muy importante, muy baja, extremadamente baja y que uno de los temas que nos viene preocupando es el endeudamiento, el nivel de endeudamiento que el Estado nacional tiene. También debo decir que la estructura del gasto público argentino era muy alta, era muy alta.

Ahora hablemos realmente del presupuesto y de la ley. Hablemos realmente de los números. Hablemos de lo que hicimos para mejorar lo que

el proyecto del Ejecutivo había presentado a las Cámaras. Expliquémosle a la sociedad en qué consiste la ley tributaria, cuáles eran las ambiciones o las aspiraciones que tenía el gobierno nacional en términos de aumentar impuestos internos a determinadas economías regionales y cuál ha sido nuestra tarea como senadores, para tratar de influir, de gestionar y de acordar, también con los diputados, acuerdos políticos que determinaron que la propuesta inicial fuese reducida sustancialmente, señora presidenta.

Le puedo nombrar el impuesto interno al azúcar, a la vitivinicultura y otro tipo de impuestos, como la afectación que iba a resultar desde el punto de vista de la industria electrónica en Tierra del Fuego. Hablamos de economías regionales que todavía hoy están en una situación muy compleja, muy sensible y que venía con anterioridad. La crisis de las economías regionales y un tipo de cambio barato había empezado antes, había empezado antes. Y el tema lo conozco en profundidad.

¿Qué quiero decir, presidenta? Que hubo diálogo y, además, un diálogo realizado con senadores importantes. Quiero recordar acá al senador Alperovich, en un diálogo que tuvimos, precisamente, con el ministro de Economía y la discusión que también nos dimos en el ámbito de este Senado cuando debatimos la ley tributaria.

Y hubo logros sustanciales en donde se eliminaron esos impuestos, esas aspiraciones, como, por ejemplo, la del 17 por ciento de impuesto a la cerveza, que se bajó a 14 y, además, todo lo que significa esquema de emprendimientos productivos de pequeñas o medianas pymes no tributan, digamos, lo que son cervezas artesanales. Lo digo como una decisión política lograda por el Congreso. Hemos logrado eliminar el impuesto a las ganancias sobre las pymes en función de reintegros. Las pymes que cobraban reintegros iban a tributar ganancias. Eliminamos ese tema.

Cuando hablamos del revalúo, que era una decisión política del gobierno, la primera proyección y la presentación original planteaba que el revalúo no iba a ser coparticipado. Ahí hay una masa aproximada —estimativa, porque el revalúo es una forma de blanqueo, de reacomodamiento de valores y de precios sobre

activos— de entre 7 y 10.000 millones de pesos que se van a coparticipar para las provincias.

Cuando hablamos de las provincias y de esos gobernadores que supuestamente votaron coaccionados, estamos hablando de las cajas de jubilaciones, que van a recibir 12.000 millones de pesos y, además, se van a distribuir de manera automática. Y también se resolvió un tema estructural, de fondo, porque el fondo del conurbano era un tema de litigio en la Corte y el demandado era el Estado nacional. La demanda era contra el Estado nacional.

Lógicamente, un resultado negativo en la Corte implicaba una afectación de las masas coparticipables y los gobernadores no son tontos, sabían perfectamente lo que podía significar más temprano que tarde, no sé en qué tiempo, si en seis meses o en un año, una decisión política que impactara de lleno en los recursos coparticipables de las provincias.

Se resolvieron cuestiones litigiosas y controvertidas entre provincias y Nación. Se eliminó la litigiosidad. Un dato importante: las provincias renunciaron a reclamos y también lo hizo la Nación. Esto no fue un hecho mágico, sino producto de una discusión política donde el gobierno no logró todo lo que quería y donde las provincias se llevaron una parte importante del reaseguro de su continuidad, de su sostenimiento, de sus instituciones y del mantenimiento de sus cajas no transferidas.

Muchas de esas cajas no transferidas estaban en una situación hartamente difícil y, además, el giro de la Nación para complementar los pagos, que era una obligación anterior, no se hacía, no era de carácter automático. En este marco de las normas discutidas, los 12.000 millones se van a repartir en las cajas de manera automática en los doce meses del año.

Hemos logrado mejorar la inversión de obra pública. Especialmente, en materia de viviendas, se ha subido a 5.014.430.000 el monto del Ministerio del Interior y Obras Públicas para el rubro mencionado. Este es un tema prioritario para los gobernadores provinciales.

Hemos aumentado en 1.300 millones, planilla B complementaria —reconozco que esto también se hacía en el gobierno anterior—, la partida para las universidades de todo el conurbano y de diferentes lugares del país. Esto no estaba

previsto en el presupuesto originario, pero en el debate con los diputados y con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda —debo decir que tuvo una actitud de compromiso y de interactuar apenas asumió— se pudo mejorar la partida para las universidades. Reconozco también que fue un logro importantísimo de nuestro gobierno el desarrollar la educación universitaria en distintos puntos del país y de la provincia de Buenos Aires, a fin de que muchos jóvenes puedan tener acceso al estudio universitario. Pero reitero que hemos colocado 1.300 millones de pesos en la planilla complementaria, que se distribuirán a las universidades, en función de que el presupuesto originario era muy frágil y que requerían de esos recursos.

Mejoramos —y lo quiero decir expresamente, porque fue un compromiso que tuvimos en un diálogo con el rector de la UBA, doctor Barberis, y con los diputados y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda— la partida vinculada con los hospitales que dependen de la UBA. Me refiero a los hospitales Roffo, Argerich y Garrahan, hospitales muy sensibles que usan los argentinos del interior y que fueron un factor central en materia de salud pública.

Esos 350 millones de pesos, lo quiero ratificar y espero que también lo haga el presidente del bloque de la UCR, van dirigidos al sector hospitalario de la UBA. Y digo esto porque como han quedado consignados en el presupuesto, aparece en el rubro hospitales, pero yo aclaro que son los hospitales dependientes del sistema universitario, hospitales que son trascendentes en la atención infantil, el caso del Garrahan; el Argerich, que es un hospital modelo, y el Roffo, que es un hospital modelo en la lucha contra el cáncer. Quiero decir esto y dar la tranquilidad de que vamos a bregar para que esos recursos lleguen a la UBA.

Hemos consignado el monto del fondo para La Rioja, algo que no estaba previsto en el presupuesto. Había cero pesos para esa provincia. Una deuda histórica del uno por ciento para La Rioja se consignó en el presupuesto. Son 2.800 millones de pesos.

Cuando hablamos del presupuesto, aludimos a números y a normas impositivas, las que quedaron, las que no, las que quería el gobierno y las que pusimos nosotros gracias a la discusión política. Lo de La Rioja no estaba, había cero

pesos para La Rioja y sus dificultades iban a ser tremendas para el pago de salarios.

Reitero: cajas previsionales, 12.000 millones. Distribución automática.

Avales para las provincias. Tampoco estaba esto. Muchas provincias están saliendo al mercado financiero y lógicamente el gobierno muchas veces les retacea el aval. Es todo un trámite el que deben hacer para que las autoricen a buscar deuda en el exterior. Todavía se está pagando una tasa muy alta.

Concretamente hemos consignado la autorización y los avales para las provincias y también para empresas del Estado, como INVAP y Aerolíneas, y gobiernos provinciales como los del Chaco, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, entre otros, que no tenían la autorización ni el aval para endeudarse.

Hubo incremento de partidas específicas: 600 millones para una obra planteada en el fideicomiso Austral y 90 millones para el SENASA, que es un organismo muy importante en materia sanitaria.

Hemos votado un tema que arroja interrogantes, pero que es la apuesta importante de este gobierno. Me parece de difícil análisis o de difícil resultado, incluso. Es el tema público-privado. Hay una baja en la inversión pública por parte del Estado y hay una apuesta a la inversión privada.

Debo decir y reiterar lo que dije ayer en el tratamiento en comisión, en la que estaba el ministro de Hacienda también. Es muy complejo alentar la inversión privada y hacer proyectos públicos-privados cuando el país paga tasas de interés en LEBAC de casi el 30 por ciento, en donde los fondos de inversión entran a la Argentina, ponen los dólares, los cambian por pesos, los ponen en LEBAC y a los tres o cuatro meses hacen el cambio y ganan 13, 14 o 15 puntos. Ni en el África subsahariana, en ningún país africano de segunda categoría estarían dando esos intereses. Es poco compatible este tema. Esperemos. Vamos a ver. No nos vengan mañana con que quieren afianzar garantía del Estado para este tipo de inversión, que son de por sí complejas. Hemos logrado el control de auditoría respecto a este tipo de inversiones, fundamentalmente por la parte que va a poner el Estado.

Quiero decirlo: estamos dando el aval a este tema, pero estamos planteando también nuestras dudas y nuestros interrogantes respecto a este modelo. No vemos posible inversiones en infraestructura, en obra pública con las tasas de interés que paga el Banco Central. Inviabile.

Repito: en términos de la ley tributaria, me parece que le hemos puesto mucha medida y mucho equilibrio en la defensa de los intereses provinciales, de las economías regionales y de las provincias que tienen en su producción los principales ingresos centrales. No sé si el gobierno lo hizo para negociar o aspiraba a recaudar con impuestos internos recursos que indudablemente iban a profundizar la crisis de sectores económicos que están –reitero– con un tipo de cambio muy bajo en una situación harto compleja.

Hemos formulado un planteo expreso del senador Perotti. Lo hemos discutido antes del debate en la Cámara de Diputados y hemos logrado una decisión importante. La ley venía también para aplicar ganancias a las cooperativas y mutuales, especialmente atacaba a todo el sector de la agricultura, el sector agrícola-ganadero de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, donde las cooperativas y mutuales son un sostenimiento de la actividad de los productores y dan préstamos cuando a veces los bancos no dan.

Es cierto que tenemos y nos debemos una ley para atacar las cuevas porque detrás de estas cooperativas o mutuales en la Ciudad de Buenos Aires hay cuevas financieras. Entonces, el deber del Congreso, en lugar de salir al voleo a aplicar ganancias sobre todo, es discriminar, diferenciar y aplicar ganancias sobre la renta financiera a esas mutuales, además de estudiarlas e investigarlas a todas, especialmente las que tienen domicilio en el ámbito de la Capital Federal. Esto se ha eliminado. Esta fue una posición política que sostuvimos claramente desde la oposición con el senador de Santa Fe, un hombre que conoce la temática. Y esto se ha eliminado. Lo cual es un dato importante. La Cámara de Diputados la borró.

¿Qué quiero decir con todo esto? A instancias del senador Caserio, hemos eliminado el cobro de ganancias sobre los reintegros, que es una suma importante, especialmente en las empresas exportadoras pymes. Tiene una relevancia muy importante la devolución en reintegros que hace

el Estado cuando se exporta. Y no van a pagar ganancias. Esto fue un reclamo del senador por Córdoba, que en términos muy concretos se le hizo al gobierno y al Ministerio de Economía, para que no esté consignado este gravamen a las pymes exportadoras.

No quiero aburrirlos, pero estos son los temas que hemos discutido.

Quiero referirme a que la tarea que ha hecho el Senado ha sido importante y valiosa en la interacción. Siempre ha sido así. A mí me molesta cuando somos hipócritas. O cuando borramos con el codo lo que hicimos siempre. Yo reconozco que a lo mejor el gobierno debería haber debatido esto con más tiempo. Pero, históricamente –no los voy a aburrir, pero tengo una planilla– en los últimos quince años, veinte, en el Senado en general el proceso de tratamiento del presupuesto nacional ha durado una reunión de comisión y, en general, el Senado ha ratificado la decisión que se ha tomado en la Cámara de Diputados. ¿Y sabe por qué? Porque hay un principio de responsabilidad. Porque hay un principio central: que no podemos volver a cometer el error que se cometió con el Grupo A, porque más allá de la visión que tengamos sobre la economía del país –y me voy a referir a algunas cuestiones que me preocupan–, más allá del rumbo elegido y de algunas decisiones que podemos compartir o no, que formaron parte de un acuerdo político federal, todos los gobernadores firmaron, menos el gobernador de San Luis. Por eso, yo le reconozco autoridad moral al senador por San Luis, porque ha tenido una línea. Ha discutido siempre desde una posición de solvencia fiscal, de defensa de sus intereses provinciales y ha litigado en la Corte. Tengo que reconocer que me tengo que sacar el sombrero frente a posiciones de coherencia política. Y cuando plantearon el acuerdo fiscal, el gobernador de San Luis dijo: yo no lo firmo. Los demás lo firmaron todos. Y no creo que ninguno haya estado afectado en su conciencia ni en su capacidad en términos de lo que estaban firmando. Lo hicieron como autodefensa. Lo hicieron para preservar los recursos fiscales. Lo hicieron para que las provincias sigan siendo solventes. Lo hicieron porque en la negociación no nos fue tan mal.

Repito: hay recursos que no se coparticipaban, que ahora se van a coparticipar. Hay

defensa de las cajas provinciales. Hay defensa de las economías regionales. No nos ha ido tan mal. En términos de la ecuación diría que ha sido un marco razonable. Hemos discutido con solvencia, con actitud, sabiendo cada uno lo que hacía.

Para terminar, presidenta, sí me preocupa el rumbo de la economía. Sí me preocupa el nivel de endeudamiento. Sí me preocupa esta política que yo califico de altamente irracional. No tienen un ministro de Economía. Uno que por lo menos determine cómo funciona el sistema económico. Ustedes no pueden seguir sosteniendo esta política de endeudamiento con LEBAC y pagar tasas de interés fenomenales que son casi un equivalente de las reservas. Si algún día se corren las LEBAC y van al dólar, volamos por el aire. Y la verdad, no estoy planteando acá una devaluación, pero el tipo de cambio está dejando de ser competitivo. Es uno de los más bajos de la década en términos comparados.

Y los muchachos del sector agrícola, del sector de la producción primaria sojera y cerealera están de nuevo trabajando en los silos, volviendo a llenar los silos. El silo bolsa vuelve a ser una actividad importante.

Otro de los problemas que me preocupan y del que tenemos que tomar nota detenidamente es el déficit comercial. Eso lo mencionó ayer el senador Perotti. Dio cifras muy precisas: 7.600 de marzo a noviembre. Pero cuando uno analiza la estructuración, el ministro Dujovne dijo una verdad a medias. Dijo: no, son activos que están ingresando por la industria; 21 por ciento, 25 por ciento. Lamentablemente eso no es cierto cuando uno analiza el componente de las importaciones. En esto también debo decir que solo en el año 2015 los datos arrojaron un aumento del déficit comercial. Acá tengo el cuadro. En 2015, que fue el último año de la gestión del gobierno anterior, el déficit comercial fue superior y los demás años nunca tuvimos déficit comercial, siempre estuvimos por arriba; entre importación y exportación siempre estuvimos por arriba. Desde 2003 hasta 2015, salvo el año 2015, empezó a visualizarse un crecimiento del déficit comercial. Y hay un componente de ese déficit comercial, en porcentajes importantes, que tiene que ver con estructuras suntuarias.

Esto ya es un cuadro más detenido. Estoy terminando y pido paciencia, porque también comparto que el esquema de tiempo iba a ser flexible. Esto lo acordamos en Labor Parlamentaria. También habíamos fijado un tiempo, pero siempre dentro del marco de flexibilidad y de poder extenderse.

Cuando uno analiza el componente de la importación, es cierto que hay un 25 por ciento en máquinas, aparatos y bienes que vienen para la industria, pero, después, cuando se analiza los bienes de consumo, uno se empieza a preocupar.

En este sentido, en animales vivos y productos del reino animal ustedes tienen que revisar muy bien a ese secretario de Comercio que tienen. Venimos denunciando permanentemente que sigue importando carne de cerdo de Dinamarca con el esquema sanitario al borde del vencimiento. ¿Saben por qué? Porque la principal distribuidora de cerdo es La Anónima, señora. ¡La Anónima, señora presidente! Entonces analicen bien lo que hacen y pongamos al descubierto este tema. Importación de animales y productos del reino animal, 21,1; productos del reino vegetal, 20,7; productos alimentarios, bebidas y tabaco, 29. ¿A ver, la Argentina no puede autoabastecerse en bebidas y tabacos? Materiales textiles y sus manufacturas, 24,8; calzados, paraguas y flores artificiales –todo chino, todo barato, mano de obra esclava–, 14 por ciento; colectivos y vehículos de transporte –todo brasilero–, 44 por ciento. Hemos perdido esa capacidad. Nosotros inventamos el colectivo y los fabricábamos; ahora, importamos colectivos.

¿Qué quiero decir con esto? Para el año próximo el déficit comercial está planteado en cerca de 10.000 millones. En una época tuvimos superávit gemelos. Este gobierno tiene déficit gemelos.

Estos son datos de la economía realmente complejos, con la política que llevan en el Banco Central. Vuelvo a repetir: Sturzenegger cree que maneja el banco alemán y cree que ese banco es un compartimento estanco que funciona de manera autónoma con la economía. Y realmente eso es muy malo, presidenta.

Dicho todo esto, sabemos de la importancia que tiene la ley, sabemos que no podemos no votar la ley de presupuesto. En una época, en

el año 2009, nos dejaron sin presupuesto. Esa es una señal pésima para el mundo.

Aun con nuestras diferencias y con nuestras visiones, vamos a votar positivamente, porque creemos también que la política en la Argentina no puede ser de ninguna manera la expresión de la violencia de la calle, la cual no debe ser alentada de ninguna forma por ningún sector de la política argentina, porque esa violencia reemplaza a la razón y a este debate. Y, además, porque tampoco creemos que el bloqueo sea la alternativa de una opción democrática que el peronismo tenga que construir. Creemos que hay que discutir y profundizar el debate y la discusión política en la Argentina. Y creemos que algunos rumbos el gobierno debe corregirlos. De lo contrario, indudablemente algunas visiones que se han expresado en este recinto pueden acercarse a la realidad. No creo que estemos viviendo eso todavía, pero hay datos que son negativos.

Pongan un ministro de Economía que regule la política monetaria, la política fiscal, la política del gasto. Tengan alguna centralidad desde la perspectiva de la visión política. De lo contrario, el presidente del Banco Central va a seguir aplicando tasas de interés del 30 por ciento alegremente. ¿Quién va a invertir en la Argentina?

Todo el mundo tiene el corazón sensible. Reconozco a la ex presidenta que está acá hoy como senadora una vocación por los sectores humildes. También destaco que hay 17 millones de argentinos que reciben un cheque del Estado, que hay 10 millones que trabajan y que las voces deberían ser más equilibradas. También nosotros tenemos que construir un discurso para los que trabajan, para los que apuestan al comercio, para los que apuestan a la industria. ¿Sabe cómo se sostiene eso? Con gasto público y con impuestos. No hay milagro en la economía.

No digo que los sectores humildes pierdan los derechos, de ninguna manera. Lo que digo es: cómo aumentamos la capacidad económica y los niveles de recaudación, cómo hacemos para terminar con el trabajo en negro, cómo aumentamos los recursos de la ANSES y cómo equilibramos ese sistema en términos del mediano y el largo plazo.

Un sistema previsional no lo podemos analizar para el año que viene o para el siguiente. Debe ser para los tiempos, para que sea previ-

sible, para que no volvamos al sistema de las AFJP, para que tengamos un verdadero sistema de reparto, para que la relación algún día sea de 20 millones de trabajadores y 10 millones de jubilados y que tenga algo de simetría. Porque, de lo contrario, es el Estado nacional el que tiene que poner la plata, es el Estado nacional el que tiene que financiar.

Con estas reflexiones nosotros vamos a votar positivamente la ley tributaria, la ley del cheque, el presupuesto y todas las leyes económicas que están hoy en debate.

Muchas gracias.

Sra. Presidente. – Gracias a usted.

Tiene la palabra el senador Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. – La verdad es que hemos dado un largo debate y vaya si tiene importancia. Porque como bien se señalara, en definitiva la discusión central de este debate pasa por una cuestión ideológica. Y me quiero detener en esta cuestión ideológica, es decir, a quiénes sacamos y a quiénes voy a poner. De manera textual, ese fue el eje central del debate.

Cuando se trata de posiciones ideológicas desde la política, hablamos, desde luego, desde la acción y desde distintas posiciones o verdades. Y esas posiciones o verdades hoy quedaron expuestas claramente.

Cuando existen visiones encontradas hay dos caminos para resolverlas: en el plano político o, como en este caso, en el plano parlamentario. A veces, la síntesis, la cual nos conduce a un camino de acuerdos. Cuando la síntesis no logra el resultado deseado, el método utilizado que nos acerca a la verdad tiene que ver con el cotejo de los datos, de los hechos y de la realidad.

Y me quiero quedar con las expresiones, con una frase de la senadora Sacnun, cuando lo citaba a Perón y decía que la única verdad es la realidad. Creo, sinceramente, que el mejor ordenador del debate parlamentario, del debate público en esta vorágine de los últimos tiempos, tiene que ver con estas cosas: el cotejo de la verdad y la realidad. El cotejo de los hechos.

¿Y qué nos muestra la realidad en la Argentina? ¿Qué nos muestra en el plano económico? Que hay cuestiones que son parte del ADN argentino: déficit fiscal, inflación, desempleo, pobreza; parte de nuestra triste historia.

Desde luego que, frente a estas verdades o a estos hechos que son irrefutables, también, en las distintas etapas, los gobiernos encontraron como justificación de estas crisis o de esta Argentina de los extremos –ciclos buenos, ciclos malos– distintas causales: el factor tiempo, el factor de la relación de fuerzas desde la política y el factor de los recursos.

Entonces, la verdad es que yo pregunto, fundamentalmente a quienes nos interpellaron con vehemencia y que estuvieron al frente, acá, muy cerca, hace veinticuatro meses, conduciendo en la Rosada los destinos del país, ¿qué pasó para que este ciclo continuara?, porque nos hicimos cargo de un gobierno que heredó los males crónicos de la argentina: presión tributaria altísima, inflación, estancamiento, *default*. ¿Qué pasó?

A ver, analicemos el factor tiempo. ¿Les faltó tiempo? Miren, el tiempo no fue el problema: gobernaron el período más largo que se recuerde desde el golpe del 30 hasta el presente. Desde el 30 hasta el presente. El tiempo no fue un problema.

¿El problema fueron las mayorías? Tampoco fueron las mayorías. Mayorías parlamentarias, acompañamiento de gobernadores, acompañamiento de gremios, acompañamiento empresarial.

Bueno, el otro factor, el factor central, el determinante en lo económico. ¿Les faltaron recursos? Tampoco el problema fue de recursos, porque el contexto internacional fue excepcional. Miren, en 2011, cada argentino recibía en concepto del precio excepcional de los *commodities* por la soja, el trigo, el sorgo y el maíz, 833 dólares; en 2016, 733 dólares; en todo el gobierno de Alfonsín, 313 dólares. Es decir, el problema tampoco pasó por los recursos.

¡Tuvieron todo! Un escenario de oportunidad única. Y las oportunidades se las aprovechan o se las desaprovechan. Lamentablemente, en la Argentina, una vez más, la mirada estuvo puesta en el corto plazo. Y como faltó esa visión de país de mediano y de largo plazo, todas las energías pasaban por acumular poder político y económico. Y, ahí, cuando las energías se canalizaron en el poder, aparecieron los desvíos, la pésima gestión, que es ineficiencia y, también, algunos datos concretos de corrupción que tienen que ver con este tema que aquí se habló, de “a quién voy a dar, a quién saco y a quién doy”.

¿Por qué hago estas reflexiones? Porque me parece importante aclararlo, porque escuché reiteradamente que este gobierno ha emprendido el camino no solamente del ajuste, sino de beneficiar a los sectores privilegiados. Entonces, quiero recordar –nada más para recordar y tener presente– que, lamentablemente, los ciclos se repiten. Y entre ese ciclo de doce años –que también hay que separarlos porque existió una etapa, como lo señaló el senador preopinante, de superávit gemelos–, a lo largo del camino, hay grandes ganadores y grandes perdedores. Y eso tiene que ver con la distribución o hacia dónde uno tiene el enfoque.

¿Saben quiénes son los grandes ganadores? En primer lugar, los bancos que entre 2008 y 2013 incrementaron las ganancias en el sistema bancario por el orden del 512 por ciento. ¡Los bancos! En segundo lugar, las mineras. ¡Las mineras! En tercer lugar, los grandes ganadores: ¡el juego! Bancos, mineras y el juego. Claro está que también hay que contrastar; así como se gana, también se pierde y hay que mirar en el día a día. Bueno, el senador Rozas marcó el camino. Es decir, también allá lejos y no hace mucho tiempo, se asumió con 30 por ciento de argentinos en la pobreza, 8 millones. En definitiva, los que perdieron son los que menos tienen. El 35 por ciento de trabajadores en la informalidad, los cuentapropistas son 10 millones de argentinos, muchos argentinos –3.800.000 argentinos– sin vivienda. Uno de cada tres familias no tenía una vivienda. Déficit social.

Ahora, también es cierto que el Estado con inteligencia ideó, desde la práctica y en el ejercicio de los recursos, apuntalar con subsidios para que cada ciudadano pueda contar con servicios básicos y amortiguar el golpe. Y ahí vamos también a discutir un poco: ¿hacia dónde se dirigieron los subsidios? Este es un tema central. Si uno toma los subsidios de 2012 a 2015 observa subsidios al gas, a la electricidad, al transporte y al agua, estamos hablando de 82.000 millones de dólares. ¿Cómo fue la torta? ¿Cómo se distribuyó? El 20 por ciento de los sectores más ricos de la Argentina –el 20 por ciento de los sectores más ricos de la Argentina, repito– recibieron 24.000 millones de dólares de subsidios. El 20 por ciento de los sectores más pobres recibieron 12.000 millones de dólares

de subsidios. Es claro que las cosas terminan como terminan.

Claro, como yo escuché que si uno repite la misma fórmula, el final del camino ya se sabe. Entonces, ese final del camino ya lo conocemos. Esta receta nos dejó en este estancamiento. Y lo digo, no para pasar facturas, porque tengo la percepción de que así como los que pertenecemos a partidos políticos que militamos con convicción en todas las instancias, en 2001, en el 83, en los noventa, nos hacemos cargo de nuestra historia, parece que otros no, que vienen de algún planeta y hoy están acá, en este recinto... Y hay responsabilidades políticas. Entonces, yo, por ahí, sugiero, con cierta inteligencia y con sentido de realismo de la vida, quizá –y lo digo con todo respeto– menos cátedra y más autocrítica. Eso nos va a hacer muy bien.

Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, nosotros tenemos otra mirada. Estamos convencidos de que el país de la imposición, el país de esa idea de pensar de manera hegemónica, disciplinado, nos llevó a este fracaso. No tenemos como objetivo la acumulación de poder. Pensamos un país diferente. Ahora, ¿cuál es el punto de partida para nosotros? El sinceramiento. No hay país que pueda salir adelante si no sincera las cosas. El primer sinceramiento es con la propia sociedad. Es la sociedad la que percibe dónde estamos. Es la sociedad la que percibe las medidas que se toman en un contexto complejo. Por supuesto que no fueron fáciles. Pero sincerar y ordenar tiene costos, pero también es el costo que se tiene que asumir cuando se gobierna seriamente pensando en el futuro y no solamente en el corto plazo o en el presente.

La gran diferencia, la gran diferencia es cómo iniciamos este camino. Escuché decir: “No me gusta para nada este gobierno.” Yo escuché decir: “Nuestro rol es otro. Somos opositores”. Yo escuché hablar de oposiciones engañosas o amigables, por decirlo de alguna manera. Escuché muchas cosas. Ahora bien, no escuché hablar del sentido de responsabilidad que nos indica la hora. Porque cuando el país está en una situación compleja, la salida pasa por otra vía. ¿Cuál es la vía, cuál es el camino que nosotros elegimos? Primero, estamos convencidos –es por convicción– del gradualismo en lo económico. Acá se señaló hasta el cansancio el gradualismo en lo económico.

Gradualismo en lo fiscal; gradualismo para aliviar la presión tributaria, porque fue altísima, porque tenemos la presión tributaria más alta de América Latina y esto hay que ordenarlo. Pero no podemos avanzar en una reforma tributaria de manera integral o de raíz, porque desfinanciados, descalzamos al Estado. Entonces, se toman medidas, por una parte, que benefician y garantizan la inversión, como por ejemplo la devolución del IVA a las empresas en el plazo de 180 días para los que generen inversiones en maquinaria. Como el IVA se compensa tanto con el crédito como con el débito y a veces no logra alcanzar, ahora se lo compensa en 180 días.

Además, se toman medidas que fomentan muy fuerte, fundamentalmente, el consumo, como cuando se decidió rebajar el IVA. El mismo tributo que hoy pagan las carnes vacunas del 10,5 por ciento para los cerdos y las aves. Es una medida que favorece tanto al productor como al propio consumidor.

También se adoptaron las primeras medidas en cuanto a la eliminación de las retenciones a las economías regionales. A propósito de este punto: denominador común de todos los candidatos a presidente. No había uno solo de los que competían en la última elección que no hablara de la necesidad de reducir gradualmente y terminar con estas retenciones a las economías regionales. No es cualquier punto, porque tampoco supieron escuchar. Porque muchos, o algunos, desde estas bancas, advertían que el ciclo terminaba en un callejón sin salida o en un laberinto.

Ahora bien, gradualismo en lo económico, por supuesto. Por supuesto que ese es el camino para nosotros: gradualismo en lo económico y acuerdo en lo político. Y en el camino del acuerdo, el primer paso que se dio en la Argentina —y creo que es un paso enorme— es haber recuperado el diálogo: el diálogo institucional, el diálogo interpartidario, el diálogo con los gobernadores y el diálogo parlamentario. Y fue el diálogo parlamentario el que nos permitió, gobernando en minoría, lograr la sanción de importantes leyes para la Argentina. Estos veinticuatro meses no se hubieran transitado sin el acompañamiento de una oposición responsable, en Diputados y en Senadores, porque este gobierno no tiene mayorías.

Hay que tener una visión acorde con los tiempos para mirar en el largo plazo y darse cuenta de que la sociedad no perdona más las zancadillas. Hay que mirar atrás y darnos cuenta de que la sociedad no perdona más los tropiezos o andar de prepo en la vida.

Entonces, avanzamos en los acuerdos y sancionamos importantes leyes: la salida del default; el pago a los holdouts, que nos permitió ingresar nuevamente al mercado y al mundo; el mensaje de la política con la sanción de la ley del arrepentido, que no es menor porque fue un mensaje de la política para decir: “acá no hay actitud corporativa, que se avance y se investigue” y dar un salto de calidad; la ley de acceso a la información pública y ni qué hablar de las leyes que se aprobaron a favor de las pymes y de los emprendedores en esta Cámara, y primero en la Cámara de Diputados. Eso fue el acuerdo parlamentario, esa fue la primera etapa.

Pero la primera foto que hay que recordar, más allá del Parlamento, es reivindicar a los gobernadores. Y ahí está el acuerdo federal, en el marco de la concertación federal entre la Nación y las provincias. Ese acuerdo permitió —no solamente por vía del decreto, a las apuradas, para dejar una bomba— el reintegro del 15 por ciento de la ANSES. Ese acuerdo posibilitó sentarse en una mesa y concertar un mecanismo de devolución. Ese acuerdo con los gobernadores nos permitió una ley de responsabilidad fiscal coherente, porque el sentido de realidad, del día a día, lo tienen quienes administran. Y acá hay muchos que administraron la Argentina y también provincias. Ése es el sentido de la realidad, no la presión.

Miren, yo conozco a muchos gobernadores. Voy a hablar por mi provincia. Creer que al gobernador de mi provincia lo van a llevar de prepo para firmar un acuerdo de consenso fiscal... Miren, el consenso fiscal fue un muy buen acuerdo, resolvió la litigiosidad y fue en el marco del diálogo. El consenso fiscal fue un acuerdo maduro, pero con una mirada federal, no con una mirada egoísta, con una mirada del todo, con una visión de país medianamente compartida a pesar de las diferencias. Y ese acuerdo fiscal también tenía como punto neurálgico la reforma previsional, que hay que defender. Y nosotros la defendimos, porque, fundamentalmente, así como hay 17 millones

de beneficiarios en el sistema, hay que ser pre-visibles y hay que ser serios y hay que decir las cosas como son.

Es muy bueno generar inclusión y yo celebro la inclusión de los 3.100.000 jubilados que no aportaron y que, con la moratoria, ingresaron. Pero también hay que darle la tranquilidad al que aporta y se va a jubilar y al que goza del beneficio de que puede cobrar. Para eso había que salir de una fórmula, que fue mágica. Fue mágica la fórmula, porque la fórmula del crecimiento, con la variable del promedio salarial de los trabajadores formales, tenía que ver con un crecimiento, porque las estadísticas estaban destruidas. El INDEC no era creíble.

Los países del mundo utilizan dos fórmulas para actualizar los haberes jubilatorios: o el componente salarial o el componente inflacionario. Bueno, nosotros teníamos un camino, el componente inflacionario. El bloque justicialista ha hecho su aporte con el componente inflacionario más la variación salarial y en eso se avanzó.

Para nosotros, cuando se reclama, se respeta el reclamo. Cuando se intenta avanzar en el 82 por ciento móvil, en una actualización salarial, no andamos por la vida diciendo que los jubilados son buitres o caranchos. No. Asumimos seriamente, les damos una salida. Creemos que esta es la salida para ser pre-visibles, para que puedan cobrar, para que el sistema pueda crecer, y eso es importante decirlo. Ya que se discutió tanto, y ante esta vorágine, reitero, me parece muy importante poner las cosas en su lugar.

Entonces, acuerdo, el camino del acuerdo, gobernadores, acuerdo parlamentario, acuerdo institucional. No es debilidad. Miren, no es debilidad. Algunos dicen que no tienen nada que acompañar. No es debilidad. La imposición no es buena.

Les quiero recordar que allá por 2003, cuando iniciaron esta etapa y tenían el 22 por ciento del acompañamiento de los votos, recorrieron el camino del acuerdo. Recorrieron el camino del acuerdo y había que dialogar y sentarse en una mesa. En ese camino, también se aprobaron importantes leyes para la Argentina. ¡Vaya! El paquete antievasión, la renegociación de la deuda. En ese camino, también se ha avanzado con importantes reformas en la Ley de Financiamiento Educativo. Entonces, hay que recordar

esos buenos momentos políticos, porque esos buenos momentos políticos, quizá, generaron esos buenos momentos económicos y esa especie de mirada común para salir, justamente, de estos dos extremos: crisis-bonanza, crisis-bonanza.

Mire, presidente, como el compromiso para el cierre son 20 minutos y estoy terminando, solamente quiero decirles que nosotros... A ver, la Argentina no tiene margen para repetir historias de fracasos. No son los noventa, no es 2001. En los noventa, cada uno tuvo su historia. Nadie estuvo en una isla. También, en los noventa, algunos acompañaron privatizaciones. Es decir, cada uno es parte de su historia, de un partido y lo tiene que asumir. Yo me hago cargo de todo lo que me toca. Por eso, reitero, soy parte de un colectivo y defenderé siempre a ese colectivo del partido en el cual milito y al que pertenezco.

¿Saben qué? Por lo menos, desde el 83 a la fecha, hay dos errores groseros que se cometieron desde la política. El primer gran error: gobiernos con mayorías absolutas que, por tener las mayorías, creen que tienen una especie de cheque en blanco o están por encima del Estado. El camino ya lo conocemos. El segundo: gobiernos con minorías, que sin tener mayorías parlamentarias se encontraron con una oposición destructiva y con palos en las ruedas. Ya conocemos el camino.

Entonces, para terminar con la Argentina de los fracasos, lo primero que tenemos que poner en valor es la política. Y poner en valor la política significa aprender de los errores históricos, superar la mediocridad y mirar para adelante. Y vamos a seguir en este camino, concertando y acordando con inteligencia. Y también, tomando nota de las cosas, porque hay que saber escuchar.

Porque saber escuchar es importante, no solamente a la gente que hace sesenta días se expidió y de manera contundente acompaña un proceso de cambio cultural, porque la gente siempre está un paso adelante, sino, fundamentalmente, escuchando el devenir y el día a día de los que piensan distinto.

Pensar distinto es saludable, fortalece al sistema. Y escuchar, como lo hicimos con el presupuesto, que —como bien se ha dicho— se modificó prácticamente en su totalidad con

los aportes de quienes están sentados en otras bancas y no piensan como nosotros.

La Argentina madura. Y la regla, esa famosa regla de no aceptar modificaciones, por lo menos es parte del pasado.

Gracias, presidente.

POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR MARINO

Señora presidente:

Con total franqueza, le digo que he seguido con atención las expresiones que se vinieron haciendo desde el espectro político opositor en el marco de la iniciativa que hoy nos convoca para su tratamiento y la verdad es que no salgo de mi asombro.

Incluso llegué a escuchar a algún dirigente de mi provincia –y me remito a él no por un ensañamiento personal, sino porque creo que es el sentir de varios de mis pares aquí en este recinto– que tuvo la osadía de afirmar, en alusión al supuesto reparto discrecional de fondos que propicia este presupuesto, que con Macri asistimos a un “federalismo mendicante”.

Nada más lejos de la realidad. Mire, señora presidenta, les guste o no a mis pares del partido justicialista, ellos, en el fondo, saben perfectamente que, sacando la presidencia de Alfonsín, bajo la cual se dictó la última ley de coparticipación federal que aún continúa vigente hasta estos días, Mauricio Macri ha sido el más federalista de todos los mandatarios que le han seguido a don Raúl.

Y me valgo de un breve recorrido argumental para avalar lo que estoy diciendo.

El por entonces presidente Carlos Menem, como parte del liberalismo económico más ortodoxo que siguieron sus políticas –recuérdese la privatización de las empresas públicas, la descentralización a las provincias de los servicios de salud y educación sin la remisión de los fondos necesarios para prestarlos y la desregulación de los mercados– se dedicó a meterle la mano en el bolsillo a las provincias.

Ejemplos de ello abundan. La apropiación del 15 por ciento de la masa coparticipable a través del pacto fiscal de agosto de 1992 y todas las sustracciones precoparticipables que se propiciaron también con la finalidad de solventar la seguridad social sirven como prueba de lo que digo.

¿Qué otra explicación tiene entonces ese famoso cuadro que confeccionó la Comisión Federal de Impuestos y que se lo conoce como el “laberinto de la coparticipación”?

El laberinto de la coparticipación no es otra cosa que una retorcida ingeniería legislativa orientada a desviar recursos provenientes de la recaudación impositiva antes de que proceda el reparto entre ambos niveles de gobierno.

Dicho en otros términos, fue como cuando un padre le da dinero al mayor de los hermanos para ir al kiosco a comprar caramelos y este se echa un puñado en el bolsillo antes de hacer el reparto equitativo entre todos los hermanos. Una típica avivada.

Es cierto que de la Rúa convalidó tales perjuicios a las provincias, que incluso se agravaron en el contexto de la crisis de la convertibilidad, como también es verdad que durante toda la “década ganada”, incluso cuando el superávit fiscal llegó a representar casi 4 por ciento del producto interno bruto, la discusión del federalismo fiscal prefirió no darse.

El kirchnerismo, por el contrario, no quería que la autonomía financiera de las provincias se incrementara de la mano de un aumento de las transferencias automáticas por coparticipación, ya que ello implicaba provincias más independientes que no se subsumirían políticamente ante el reparto discrecional de los fondos presupuestarios como lo terminaron haciendo.

La preocupación por el federalismo les vino un día antes de abandonar el poder. En cumplimiento del fallo de la Corte, es cierto, pero con un apuro injustificable, dado que ya se iban, se decidió devolverle a las provincias ese 15 por ciento de manera instantánea en el contexto de un Estado que padecía un déficit galopante. Una locura.

Ahora bien. En estos dos años el presidente Mauricio Macri ha hecho más por las provincias que Menem en ocho años y que el kirchnerismo en más de doce años.

Se les restituyó a las jurisdicciones de manera escalonada, pero segura, ese 15 por ciento de la masa coparticipable que Menem les sacó y que el kirchnerismo convalidó y, a través del reciente consenso fiscal, se le devolvió a la provincia de Buenos Aires el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias en concepto de Fondo del Conurbano Bonaerense sin que el resto de las provincias pierda un peso.

Acá todos sabemos que la otra solución a este litigio, que pronto iba a tener resolución judicial, hubiese sido que todas las provincias le devolvieran a Buenos Aires lo que se llevaron durante muchos años de manera injusta por el excedente entre los 650 millones de pesos y el 10 por ciento de la recaudación de ganancias.

Sin embargo, ello no pasó. Incluso provincias como la que yo represento, que no transfirieron su caja jubilaria, se llevaron la cobertura del déficit previsional sin necesidad de armonizar sus respectivas normativas con la legislación nacional, lo que hubiese significado en el caso de La Pampa recortar los haberes al tener que entregar el 82 por ciento móvil.

Señora presidenta: sin dudas que falta mucho, pero sería mezquino no reconocer que lo hecho hasta el momento no ha sido poco.

Éste es el presupuesto que necesita el gobierno para continuar cumpliendo con los objetivos que se ha planteado y por ello es que voy a acompañarlo con mi voto.

POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR DE ANGELI

Señora presidente:

Nos convocan hoy dos proyectos muy importantes: por un lado, el presupuesto nacional y, por otro lado, la reforma tributaria.

La reforma tributaria ha sido un compromiso de campaña de nuestro presidente Mauricio Macri. Sin dudas, luego de décadas, en nuestro país comenzará a bajar la enorme presión fiscal sobre los contribuyentes.

Con este proyecto comenzamos a compensar al buen pagador, a aquel productor, al empresario y a aquel vecino que cumple con sus obligaciones y, muchas veces con lo que no tiene, paga sus impuestos.

Quiero expresar mi alegría también por la eliminación de los artículos 23 y 24 del proyecto que involucraba a las cooperativas y mutuales en el pago de impuesto a las ganancias. Muchos cooperativistas y mutualistas me expresaron su genuina preocupación por esa medida. También debo decir que he conversado con las autoridades del Instituto de Cooperativas de mi provincia y también del INAES acerca del compromiso de trabajar con mucha firmeza desde la fiscalización pública para erradicar el fraude de aquellos que se aprovechan del sistema, que por naturaleza es sin fines de lucro y que debe mantenerse inmaculado. Como fue el ejemplo de Alejo Peiret –el francés que organizó las colonias del general Urquiza–, que fundó una de las primeras mutuales del país en Concepción del Uruguay. Los inmigrantes tenían muy en claro lo que era la ayuda mutua. También aquellos inmigrantes judíos que en Entre Ríos fundaron la primera cooperativa agrícola de Sudamérica, en Basabilbaso.

Con el correr de los meses, de los años, habrá mejores condiciones para quienes solo piensan en producir, en invertir y en seguir trabajando para ponerle el hombro al país.

Estamos en camino a lograr un país donde los impuestos se puedan pagar, donde los recursos del Estado se inviertan en donde corresponde, con prioridad en la salud, en la educación, en la seguridad y en la verdadera obra pública.

Desde el 10 de diciembre de 2015 la mayoría de los argentinos eligió a este gobierno para que ponga la verdad sobre la mesa y se haga lo que se tenga que hacer para sacar el país adelante.

Con mucho coraje se están tomando las medidas correctas que hagan de la Argentina un país más previsible y sustentable. Solo de esa forma vamos a fomentar la inversión y también la generación de empleo genuino que nos lleve a esa Nación con pobreza cero, que estoy convencido de que algún día vamos a tener.

Hago mi reconocimiento a todos los senadores –y, en especial, a los de la oposición– que responsablemente y con voluntad van a acompañar las reformas que propuso nuestro presidente en acuerdo con los gobernadores.

Hoy la Argentina nos necesita juntos, oficialismo y oposición, dando lo mejor de nosotros y tirando para

el mismo el lado con mucha responsabilidad. Ése es el camino, señores.

Sin embargo, me apena que la expresidenta, que tantas críticas tiene para esta gestión, haya faltado a sus primeras reuniones de Presupuesto y Hacienda con el ministro Dujovne. Ella, que condujo la Argentina durante tantos años y todavía no hizo ninguna autocrítica de por qué estamos como estamos. Ni una sola. ¿Pero qué podemos esperar? Si ni siquiera tuvo la delicadeza de hacer el traspaso de mando como corresponde.

Estos acuerdos y reformas que pactaron la Nación y los gobernadores de las provincias tienen como objetivo principal equilibrar las cuentas públicas. No podemos seguir gastando más de lo que recaudamos en todos los niveles del Estado.

Muchos dicen que este gobierno no tiene sensibilidad social, por eso les quiero aclarar que el nuevo presupuesto prevé un aumento en el gasto de servicios sociales que va a representar casi el 60 por ciento del gasto primario total para 2018. El más importante en la historia. Y eso es porque, como prometió Mauricio, no vamos a dejar a ningún argentino solo. Estamos ayudando a quienes más lo necesitan en esta transición del país que somos al país que soñamos, el de la Argentina del cambio.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA IANNI

Señora presidente:

No podemos soslayar la importancia que tiene la industria del turismo, tanto para la Nación como para la provincia en particular.

Resulta necesario resaltar que desde 2015 se registra una constante disminución en las partidas destinadas al Ministerio de Turismo, que representaba un 0,2 por ciento del presupuesto en 2015, bajando al 0,12 por ciento en 2016 y otorgando para los años 2017 y 2018 el 0,1 por ciento del presupuesto, denotando esto el poco interés en la inversión que este gobierno nacional prevé para la industria turística, que impacta de manera negativa directamente en el desarrollo de las economías regionales.

En Santa Cruz el principal programa que ejecuta el ministerio de Turismo de la Nación es “Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores”, que recibirá 7.800.000 pesos menos en 2018, evidenciando una merma del 12,5 por ciento.

Párrafo aparte merecen las declaraciones de un dirigente de Cambiemos de la localidad de El Calafate, quien a su vez tiene la responsabilidad de velar por los intereses de los prestadores de servicios privados, como presidente de la cámara de comercio, que en medios provinciales habló de una recesión en la creación de puestos de trabajo en el sector turístico desde 2010 a 2017. Siendo esto una afirmación falaz, estadísticamente comprobable: pongo a vuestra disposición los índices de ocupación correspondientes a la Secretaría de Turismo municipal, como así también los registros

de pasajeros embarcados por el concesionario del aeropuerto de El Calafate y el registro de turistas que ingresaron al Parque Nacional Los Glaciares, en los que estas entidades reflejan, de forma común, el crecimiento sostenido de la actividad turística desde el año 2010 hasta el año 2015 incluido, mostrando una caída importante para los años 2016 y 2017.

Esta notoria caída de los últimos dos años se debe a la falta de inversión por parte del gobierno nacional, que ha dejado solamente en manos del municipio la inversión en promoción turística, que permitiría recuperar mayor cantidad de visitantes que hemos perdido en estos últimos dos años y, a consecuencia de esto, la pérdida de mano de obra formal en el sector.

Resultaría más fructuoso que, en vez de utilizar los medios periodísticos provinciales para mentir, realice las gestiones necesarias con el gobierno nacional para que esta situación se revierta.

Otro tema al que quería referirme es a la quita de la asignación específica al financiamiento del ENARD que realiza el proyecto de reforma tributaria, que recibía el uno por ciento de la facturación de telefonía celular por ley, quedando actualmente librado a la discrecionalidad de un monto fijo, que desconocemos si resultará suficiente y si se mantendrá en el tiempo.

Igual de importante resulta el cumplimiento de la ley 27.201, que creó el ENADED y la AUH en el deporte, que a la fecha se encuentra pendiente de implementación y ejecución.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA RODRÍGUEZ MACHADO

Señora presidente:

El gasto presupuestado que la administración nacional realizará en la provincia de Córdoba ascenderá aproximadamente a los 131.100 millones de pesos para el año 2018, un 23 por ciento superior al monto presupuestado para 2017 (106.204 millones de pesos).

Dentro del gasto mencionado se destacan principalmente los del Ministerio del Interior. En particular: (i) Acciones del Programa Hábitat Nación. Se presupuestan transferencias de alrededor de 558 millones de pesos, un 144 por ciento superior al monto presupuestado para los mismos conceptos para el año 2017. Estas acciones contemplan: Acciones de Mejoramiento Barrial, Mejoramiento del Hábitat en Localidades Vulnerables, Programa de Mejoramiento Integral del Hábitat y Subsidio a la Vivienda y Urbanización Integral de Barrios. (ii) Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano, presupuestándose transferencias de alrededor de 590 millones de pesos y contemplando los siguientes subprogramas: Acciones para el Mejoramiento, Refacción y Ampliación de la Infraestructura Habitacional y Urbana y Acciones para la Construcción de Viviendas Sociales. (iii) Recursos Hídricos. El monto presupuestado ascendería a 52 millones de pesos, un 68 por ciento superior que el del año 2017 (31 millones de

pesos) y contempla Obras para Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías y Plan de Inversiones - Fideicomiso de Infraestructura Hídrica.

Asimismo, se destacan las transferencias por el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina – Prog.R.Es.Ar, que exhibe un crecimiento de alrededor de 126 por ciento en relación al monto presupuestado para 2017.

De igual modo, las transferencias presupuestadas por la pensión universal para el adulto mayor también muestran un notable crecimiento en relación al monto presupuestado para 2017: 1.170 millones de pesos para 2018, frente a 455 millones de pesos en 2017. Es decir, las transferencias presupuestadas serían un 157 por ciento superior que las de 2017.

En relación a los proyectos de la administración nacional a realizarse en Córdoba, el monto presupuestado alcanzaría los 2.506 millones de pesos, es decir, similar al presupuestado para 2017 (2.468 millones de pesos), pero superior al observado en años previos (año 2016: 1.922 millones de pesos, año 2015: 1.169 millones de pesos; de hecho, es más del doble que el del año 2015).

Entre los proyectos contemplados se destacan: (i) Obras de la Dirección Nacional de Vialidad por aproximadamente 1.732 millones de pesos: variante Costa Azul y puente s/ dique San Roque; autopista ruta nacional 8 Río Cuarto-Holmberg; repavimentación ruta nacional 158; malla 236, obras de recuperación y mantenimiento en ruta nacional 9; repavimentación ruta nacional 9 y ruta nacional 60, entre otros. (ii) Proyectos del Ministerio de Educación: alrededor de 137 millones de pesos, los cuales serían destinados a la construcción de más jardines en varios municipios del interior provincial: Río Tercero, Villa María, Quilino, San Pedro, La Calera, San Francisco, Huinca Renancó, etcétera. (iii) Proyectos del Ministerio de Turismo por 126 millones de pesos que involucran: saneamiento basural en Villa Carlos Paz; puesta en valor complejo Embalse Río III, construcción relleno sanitario y mejoramiento basural a cielo abierto Parque Nacional Quebrada Condorito, Villa Carlos Paz, Córdoba, etapa I; construcción centro de interpretación Cerro Colorado, provincia de Córdoba, entre otros.

Universidad Nacional de Córdoba: para el año 2018 se presupuestan aproximadamente 6.487 millones de pesos, un 26 por ciento superior al monto presupuestado para 2017 (5.155 millones de pesos).

En cuanto a la Universidad Nacional de Río Cuarto, también se observa un crecimiento en el monto presupuestado para el año 2018 (1.478 millones de pesos) con relación a 2017; es un 25 por ciento superior.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA RODRÍGUEZ MACHADO

Señora presidente:

Esta reforma tributaria complementa la idea de reducir la presión fiscal al sector productivo y, asi-

mismo, continúa con la baja de la presión fiscal al individuo que se ha promovido desde el inicio de esta nueva gestión. Así, por ejemplo, en modificaciones tributarias previas a la presente se ha ampliado el monotributo social, extendiéndose la asignación universal por hijo a los monotributistas; se ha promovido la devolución –con ciertos topes– del 15 por ciento del IVA en la canasta básica de alimentos para jubilados, pensionados, titulares de pensiones no contributivas que cobren el haber mínimo, titulares de la asignación universal por hijo y por embarazo; se ha modificado la Ley del Impuesto a las Ganancias en diciembre de 2016, cuyos principales ejes giraron en torno a la actualización de las deducciones personales y la actualización de las escalas del artículo 90 de la ley –cuyos valores no se modificaban desde el año 2000– y, asimismo, se estableció que tanto las deducciones personales como las escalas del artículo 90 se ajusten por la variación del RIPE. En la misma oportunidad se posibilitó la deducción del 40 por ciento de las sumas pagadas en concepto de alquiler en las condiciones que determina la ley; se modificaron las categorías del monotributo, entre tantos otros aspectos que esa reforma conllevó.

Somos conscientes de que estas reformas no se pueden hacer de un día para el otro, sino que deben ser realizadas con cierto gradualismo, encontrando el justo equilibrio entre la baja del déficit y la disminución de la presión impositiva. En este sentido, nos proponemos debatir una vez más una reforma tributaria que nos permita avanzar hacia un sistema más equitativo y eficiente, que promueva la inversión, la competitividad y el empleo de calidad.

La reforma tributaria que actualmente promovemos introduce una serie de modificaciones que van en esta dirección. Entre los aspectos más sobresalientes se menciona:

1. El establecimiento de un mínimo no imponible para contribuciones patronales en pos de reducir –en un plazo de cinco años– el costo de contratación de los trabajadores e incentivar la formalización de empleo, especialmente de los trabajadores de menores ingresos. En efecto, se establece un monto mínimo no imponible de 12.000 pesos, actualizables por el IPC, suministrado por el INDEC, en concepto de remuneración bruta, que los empleadores comprendidos en el decreto 814/2001 podrán detraer mensualmente, por cada uno de los trabajadores, de la base imponible considerada para el cálculo de las contribuciones patronales con destino a los subsistemas comprendidos en dicha norma.

Si bien esta medida genera una reducción del costo laboral para la contratación de todos los trabajadores (independientemente de su remuneración), se advierte que su reducción resulta drástica en los trabajadores de menor nivel de remuneración, escenario que desincentiva a operar por fuera de la ley mediante el empleo no registrado.

Asimismo, se modifica la alícuota de contribuciones patronales disponiendo una única alícuota, la cual asciende a 19,5 por ciento.

2. Para los trabajadores autónomos se duplica el importe de deducción especial en relación con el que rige en la actualidad. Esta medida tiende a dotar de una mayor equidad al sistema tributario, reduciendo la diferencia con los trabajadores dependientes. Asimismo, se dispone una deducción mayor cuando se trate de nuevos profesionales o nuevos emprendedores.

3. Dentro de las modificaciones al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, se ajusta el monto del precio máximo unitario de venta que resulta admisible para mantener la condición de pequeño contribuyente. Actualmente asciende a 2.500 pesos y se establecería en 15.000 pesos.

Asimismo, se elimina el requisito de cantidad mínima de trabajadores en relación de dependencia para permanecer en las categorías más altas.

4. Se dispone la disminución de la alícuota del IVA al 10,5 por ciento (actualmente tributa al 21 por ciento) de la carne de pollo, porcino y conejos.

5. Se reducen los impuestos internos para los productos electrónicos por no considerarlos actualmente como artículos de lujo, tales como celulares, televisores monitores, etcétera. Disponiendo reducir al cero por ciento la tasa del gravamen si los referidos productos son fabricados por empresas beneficiarias del referido régimen de la ley 19.640 (Tierra del Fuego), siempre que acrediten origen en el área aduanera especial creada por esa norma.

Se reducen los impuestos internos para los vehículos de gama media y se incrementan para ciertos productos de alta gama. Así, por ejemplo, los automotores y motos cuyos precios de venta no excedan los 900.000 pesos y 140.000 pesos, respectivamente, estarán exentos del gravamen. Esta diferenciación de vehículos de distinta gama hace más equitativo el sistema.

6. Se someten a imposición determinadas rentas que hasta ahora se consideran no gravadas o exentas: se grava la renta financiera, actualmente exenta, con alícuotas moderadas según el tipo de colocación y con un mínimo no imponible especial para evitar que el impuesto recaiga sobre el pequeño ahorrista. En el caso de rendimientos o ganancias de capital provenientes de instrumentos de renta fija en moneda nacional sin cláusula de ajuste, se propone la alícuota del 5 por ciento. Se faculta al Poder Ejecutivo nacional a elevarla, no pudiendo exceder del 15 por ciento. Para el caso de rendimientos o ganancias de capital provenientes de instrumentos en moneda extranjera o con cláusula de ajuste, se propone la alícuota del 15 por ciento.

7. Se elimina el ITI y se introduce un impuesto a la ganancia de capital por la venta de inmuebles –excepto casa habitación– con una alícuota reducida del 15 por ciento.

8. Se gravan con IVA los servicios digitales prestados por un sujeto que resida o cuyo domicilio sea en el exterior, siempre que su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país.

POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR CASTILLO

Señora presidente:

En la Argentina de hoy, en materia económica existen dos temas en los que es imposible no encontrar coincidencia en el diagnóstico. Primero, que el déficit fiscal es insostenible y, en segundo lugar, que se debe bajar la presión impositiva.

Si a eso le sumamos que el margen social y político de este gobierno es muy chico para ajustar fuerte vía el gasto público, está claro que cualquier reforma que tiene esas restricciones va a sonar limitada.

No obstante, es imposible no destacar en la reforma dos objetivos de política económica de largo plazo. Por un lado, revertir gradualmente el grado de presión vía impuestos del sector público a la actividad privada y, en línea con ello, crear condiciones más propicias para la generación de empleo por parte del sector privado.

Este proyecto tiene como efecto neto una menor presión tributaria para la actividad privada y, en consecuencia, un traslado de recursos desde el sector público a las familias. Si bien puede considerarse –como ya dije– insuficiente, de hecho hay quienes se manifestaron a favor de un proceso más acelerado, no quedan dudas de que se sigue profundizando el cambio de tendencia que en esta materia comenzó a partir del año 2016.

Así, mientras que entre el año 2000 y el año 2015 la presión tributaria efectiva en la Argentina aumento 11 puntos del PBI (del 15,6 por ciento en 2001 a 26,5 por ciento en 2015) a partir del año 2016 se han tomado medidas destinadas a ir reduciéndola paulatinamente y esta reforma es un importante paso en ese sentido.

Existe un punto en el proyecto de reforma al que quizás no se le presta demasiada atención, pero que es de fundamental importancia. El tremendo incremento de la presión tributaria vivido en la década pasada no solo fue criticable por su magnitud cuantitativa, sino además por la forma en que se lo instrumentó, ya que gran parte de él se produjo en forma deliberadamente encubierta como consecuencia del congelamiento (o la insuficiente actualización) de los parámetros de cálculo de los diversos impuestos, en el medio de un contexto inflacionario creciente. Es decir, que se incrementaron los impuestos en forma significativa sin el correspondiente trámite parlamentario y, como consecuencia de ello, de una forma inequitativa y antojadiza en la que los sectores más perjudicados no fueron los que más ganaban, sino la clase media que quedó atrapada en tasas constantemente crecientes del impuesto a las ganancias, aun cuando sus ingresos en términos reales estaban estancados y los aumentos nominales obtenidos solamente se acercaban a las tasas reales de inflación.

La reimplantación de los mecanismos de ajuste automático de los diversos parámetros tributarios y la creación de la unidad de valor tributaria asegura que en el futuro ningún gobierno pueda incrementar los impuestos sin la discusión parlamentaria correspondiente.

La presión tributaria record que registra nuestro país impacta decisivamente en la competitividad de nuestras empresas, provocando la disminución en la rentabilidad de muchas actividades y la pérdida de competitividad internacional de nuestra producción de bienes y servicios, generando dos círculos viciosos que impiden el crecimiento de la economía. Primero, la existencia de costos (y dentro de ellos, impuestos) más elevados en el país atenta contra la factibilidad de agregarle valor a la producción local de materias primas e incentiva a ser exportadas sin industrializar, ya que de lo contrario la rentabilidad disminuye o directamente se pierden los mercados. El poco valor agregado de las exportaciones es una de las principales causas que explican la existencia de un porcentaje reducido de empleo en el sector industrial en particular y en el sector privado en general. Segundo, la baja rentabilidad de muchas actividades implica que la creación de empleo por parte del sector privado, en caso de ser positiva, sea totalmente deficitaria, es decir, no alcanza a cubrir el aumento anual de la población que desea trabajar.

Estos dos fenómenos generan una notable presión sobre el gobierno (nacional, provincial y municipal) que ante los incrementos en los niveles de desocupación y el deterioro de los índices sociales se ven obligados o bien a incrementar el empleo público o a otorgar subsidios que tratan de enmascarar la situación. Y esa solución no es gratuita, dado que incrementa el déficit fiscal y, por consiguiente, la necesidad de obtener recursos para solventarlo, lo cual normalmente se traduce en nuevos impuestos o en incremento de las alícuotas de los existentes, generando así el mencionado círculo vicioso.

En este contexto, las provincias y municipios están más complicadas aun que el gobierno nacional ya que este tiene dos vías que le permiten morigerar, al menos temporalmente, los incrementos impositivos: una mayor capacidad de endeudamiento y la posibilidad de financiarse mediante la emisión monetaria, es decir, el impuesto inflacionario.

Un problema conexo a la necesidad del Estado de destinar porcentajes crecientes de su presupuesto al empleo público o a subsidios es la retracción de la inversión pública, lo que va deteriorando paulatinamente la infraestructura general del país y, por consiguiente, incrementa los costos productivos y operativos de las empresas.

Toda la reforma está destinada a tratar de reducir la presión tributaria que enfrentan actualmente las actividades productivas, con el objeto de lograr la creación de fuentes genuinas de empleo en el sector privado que permitan salir de este círculo perverso de creación de pobres en el que nos encontramos, mediante dos objetivos: que la disminución en la presión

tributaria permita incrementar los niveles de actividad y que de esta manera las empresas existentes puedan incrementar los porcentajes de utilización de su capacidad instalada –y, por consiguiente, de su planta de personal– y que en la evaluación de nuevos proyectos de inversión se contemple la progresiva reducción del costo impositivo, mejorando así la rentabilidad de la inversión privada y, por consiguiente, la futura creación de empleos en el sector privado.

Ese es el gran desafío –entiendo– al que debe converger el objetivo de todas las reformas: crear empleos genuinos con alta productividad.

Según datos publicados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, entre los años 2011 y 2016 el empleo registrado total creció un 8,42 por ciento, pero, de ese crecimiento, la generación de empleo entre públicos y privados se dio de forma que los asalariados privados crecieron el 1,64 por ciento y los empleados públicos crecieron el 17,47 por ciento.

Este comportamiento del empleo determina el mapa actual existente y que, según la mayoría de las estimaciones, sitúan al empleo privado en 6,2 millones de personas y al empleo público en 3,5 millones de personas.

En este contexto de déficit fiscal de entre 6 y 8 puntos del PBI (dependiendo cómo contabilicemos la carga financiera del Estado) y con volúmenes de nueva deuda pública no sostenible en los próximos años, claramente el empleo público ya no puede ser el motor de la generación de empleo en este país. Ya no hay forma de que pueda compensar el bajo o nulo crecimiento del empleo privado.

Es decir que, por un lado, tenemos el denominado círculo vicioso en el que está inmersa la economía, del que recién hablé, y, por otro, la necesidad imperiosa que tenemos de que el empleo crezca, no solo para absorber el crecimiento anual de la población que se incorpora a la búsqueda de empleo, sino también porque el aumento del empleo será la única garantía para ir erradicando los alarmantes niveles de pobreza que nuestro país ostenta.

Por eso creo que el conjunto de disposiciones que conforman este proyecto de reforma tributaria, –y que se estima por parte del Poder Ejecutivo en una reducción de la presión tributaria, al quinto año, de 1,5 puntos del PIB– persigue el objetivo final de reducir la presión tributaria sobre las actividades empresariales, con el objeto explícito (y lógico) de fomentar la inversión y, por ende, la creación de empleo privado genuino.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA BLAS

Señora presidente:

El pasado septiembre, en cumplimiento de lo establecido en la ley 24.156, el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el próximo ejerci-

cio. En esa ocasión, además del proyecto de presupuesto 2018, se ha presentado adicionalmente una reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal que establece nuevos criterios para la administración de los recursos públicos nacionales y provinciales. Asimismo, se presentó una propuesta de reforma tributaria. En consecuencia, la discusión de este presupuesto debe enmarcarse en un proceso de revisión de la política fiscal, que implica alejarse de la anualidad que rige el proceso presupuestario y encarar una visión de mediano plazo que apunte a la sustentabilidad del gasto público.

Supuestos macroeconómicos. De acuerdo a lo expresado en el mensaje que acompaña al proyecto de ley, el crecimiento del PIB previsto para este año es de un 3 por ciento, impulsado por un incremento de la inversión del 10,1 por ciento con respecto a 2016. El Ministerio de Hacienda resalta este dato como una muestra de la sustentabilidad del actual proceso de crecimiento económico, en contraposición con las fluctuaciones cíclicas recientes. Siguiendo con las proyecciones macroeconómicas estimadas para el cierre de 2017, el consumo crecerá un 3,4 por ciento, las exportaciones un 1,8 por ciento y las importaciones un 10,1 por ciento, a partir de una suba de las importaciones de bienes de capital del 21,4 por ciento interanual.

La leve recuperación de la actividad económica fue liderada por los sectores agropecuarios y de la construcción, en tanto que la actividad industrial estuvo más rezagada. Es importante resaltar que no todos los sectores económicos colaboraron en el crecimiento del PBI esperado al cierre del mes de diciembre en curso para el año 2017.

Para 2018, el crecimiento real esperado es del 3,5 por ciento interanual. Esta previsión se basa en una suba de la inversión aún mayor a la de 2017, que llegaría al 12 por ciento interanual, en tanto que el consumo se mantendría en una tasa de expansión del 3 por ciento.

También se prevé una aceleración de las exportaciones hasta el 5,6 por ciento interanual y una desaceleración de las importaciones al 6,8 por ciento interanual. Para los años subsiguientes se espera una estabilización de la tasa de crecimiento del PIB en el 3,5 por ciento, siempre liderado por la inversión. Como las proyecciones marcan una evolución de las exportaciones por debajo de las importaciones, se prevé un saldo comercial deficitario creciente, que llegaría a 5.600 millones de dólares en 2018. Esta tendencia se mantendría en los años subsiguientes, con déficits de 6.000 millones de dólares para 2019 y 6.900 millones de dólares para 2020.

En lo que hace a la evolución de los precios, la inflación prevista para el cierre de este año es de un 21 por ciento, por encima del 17 por ciento planteado como meta por el Banco Central y más en línea con las estimaciones de consultoras privadas.

En cuanto a la política cambiaria, el tipo de cambio promedio para 2018 se calcula en 19,3 pesos por dólar, lo que implica una depreciación nominal del 15,6 por

ciento con respecto al promedio estimado de este año (16,7 pesos). Se estima que el tipo de cambio llegará a 20,4 pesos (más 5,7 por ciento) en 2019 y a 21,2 pesos (más 3,9 por ciento) en 2020.

En cuanto a los resultados, la previsión de resultado fiscal para el cierre de este año marca un déficit financiero de 630.754 millones de pesos, equivalentes al 6,1 por ciento del PIB. Dado que el monto presupuestado para intereses de la deuda pública es de 221.703 millones de pesos, el resultado primario esperado asciende a un rojo de 409.051 millones de pesos, un 4 por ciento del PIB. Cabe destacar que este último valor marca una diferencia con lo expresado en el mismo mensaje en cuanto a que el déficit primario proyectado para el actual ejercicio sería del 4,2 por ciento del PIB. Esta divergencia corresponde a que se ha mantenido el monto nominal del déficit, pero se ha recalculado el PIB al alza. En ese sentido, correspondería que el Ministerio de Hacienda aclare si la proyección a fin de año mantiene el monto en pesos, ahora equivalente al 4 por ciento del PIB, o si toma como válido el porcentaje del 4,2 por ciento, lo que le permitiría realizar un gasto adicional de unos 20.000 millones de pesos.

Para el ejercicio 2018 se proyecta un resultado financiero negativo de 678.870 millones de pesos, lo que equivale al 5,5 por ciento del PIB. De cumplirse ese objetivo, se producirá una reducción del déficit de 0,6 puntos porcentuales con respecto a 2017. El resultado primario, en tanto, será deficitario en 395.001 millones de pesos, un 3,2 por ciento del PIB y 0,8 puntos porcentuales menos que lo previsto para este año.

Solo nos cabe mencionar si realmente el Poder Ejecutivo tendrá la capacidad de llegar a las metas planteadas, atendiendo a que busca reducir el gasto fiscal y este es sumamente inelástico a la baja o –como algunos suelen definirlo– rígido.

En cuanto a los recursos, el proyecto de presupuesto 2018 prevé que los recursos totales de la administración pública nacional (APN) alcancen los 2,10 billones de pesos, equivalentes al 17 por ciento del PIB. Estos valores implican un incremento del 19 por ciento con respecto a la estimación de cierre de 2017. Si se considera todo el sector público no financiero, la recaudación proyectada asciende a 2,33 billones de pesos. Este monto equivale al 18,8 por ciento del PIB, lo que marca una disminución de 0,2 puntos porcentuales con respecto a 2017. De cumplirse esta previsión, será la tercera baja consecutiva de la presión tributaria. Cabe ser destacado que el proyecto de presupuesto se ha confeccionado con la normativa vigente al momento de su elaboración (recordemos que se presentó en septiembre de 2017), por lo que los cambios que se puedan llegar a producir de aprobarse una eventual reforma tributaria no están contemplados en las proyecciones presentadas. Pese a lo expuesto, tampoco debemos dejar de tener presente que, cuando hablamos de un presupuesto, hablamos de un cálculo de recursos sobre la base de las leyes impositivas vigentes al momento de su elaboración y que, en

contrapartida, fijó las autorizaciones a gastar (créditos presupuestarios) hasta el límite de lo que recaudó o, en su defecto, como en este caso, lo presentó con déficit proyectado. Es decir, no deja de ser un mero cálculo de recursos y gastos proyectados, pero la prudencia y la transparencia no nos deben permitir soslayar los cambios de la reforma tributaria que tratamos en el Congreso. No están previstas en dichos cálculos.

Dentro del total de ingresos de la administración pública nacional, la gran mayoría (92,5 por ciento) corresponde a los recursos tributarios y previsionales. Los primeros ascenderían a 1,17 billones, con una variación del 14,5 por ciento sobre lo previsto para este año. Los ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social, en tanto, crecerían un 22,1 por ciento interanual, para totalizar 769.367 millones de pesos. Este incremento está vinculado a los aumentos estimados, tanto en los salarios nominales como en el número de cotizantes, debido a que se espera una mejora en el empleo formal asociada al aumento de la actividad y a un mayor esfuerzo de fiscalización. Dentro de los ingresos tributarios se destacan, como es habitual, el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias. Por el primero se prevén recaudar 406.754 millones de pesos, con un aumento del 18,2 por ciento interanual, a partir de la mejora del consumo, de la inflación proyectada, de mayores ingresos provenientes de los regímenes de facilidades de pago y de una mejora en el control por parte del organismo recaudador, tanto en las operaciones de comercio exterior como del mercado interno. Por el impuesto a las ganancias se proyecta una recaudación de 257.288 millones de pesos, con una suba del 19,4 por ciento interanual. Este incremento se sustenta en una mejora en los niveles de actividad económica, remuneraciones e importaciones, así como del crecimiento de los impuestos correspondientes a 2016 y 2017, que generan un aumento en los pagos por anticipos. También se espera que contribuyan a la mejora en la recaudación los convenios de intercambio de información firmados con los fiscos de otros países. En sentido contrario, la recaudación del año 2018 se verá afectada por el efecto pleno de los beneficios otorgados en la ley 27.264 a las micro, pequeñas y medianas empresas y por la actualización establecida en ley 27.346 de los montos de las deducciones del mínimo no imponible, de las cargas de familia y de la deducción especial para el personal en relación de dependencia, jubilados y autónomos.

El impuesto a los créditos y débitos bancarios, comúnmente conocido como impuesto al cheque, se ha transformado en pocos años en el tercer tributo que más aporta a la recaudación nacional. Para 2018 se espera que se perciban por este concepto 163.389 millones de pesos, con una suba del 17,6 por ciento interanual.

En cuanto a los impuestos que gravan el comercio exterior, por derechos de importación se prevén percibir 79.109 millones de pesos (más 23,6 por ciento interanual) y por derechos de exportación 85.338 millones de pesos (más 14,5 por ciento interanual).

Los aumentos estimados en las importaciones, las exportaciones del complejo sojero, la variación del tipo de cambio nominal y la mejora en el control de las operaciones de comercio exterior por parte de la Aduana son las principales causas de la suba esperada de estos gravámenes. En sentido contrario actuará la reducción de las retenciones a las exportaciones del complejo sojero, que se concretará a razón de un 0,5 por ciento por mes. Los impuestos internos aportarían 77.464 millones de pesos, con un aumento del 16,3 por ciento interanual, producto del crecimiento esperado de las ventas nominales de los productos gravados.

Por eso entendemos que es un mero cálculo de proyección, pero no dejemos de recordar el impacto que la reforma tributaria tendrá en estas proyecciones. Nuestro acompañamiento está fundado en ello, en que reconocemos que las estimaciones deben cumplirse y con los cambios habrá impactos diversos en los recursos. Efectos numéricos que no hemos podido analizar con precisión, pero entiendo que serán corregidos cuando se realice la puesta en marcha del nuevo ejercicio.

El impuesto sobre las naftas aportaría 22.919 millones de pesos, con un alza del 13,6 por ciento con respecto a 2017, mientras que el impuesto al gasoil llegaría a 21.820 millones de pesos (más 15,6 por ciento interanual).

En otro orden, las modificaciones normativas realizadas sobre el impuesto a los bienes personales tendrán como consecuencia una caída nominal del 29,3 por ciento en la recaudación prevista, para totalizar 5.413 millones de pesos. Esta caída en un tributo que grava la riqueza se explica por la exención del impuesto para los contribuyentes cumplidores, el aumento del mínimo a partir del cual se debe pagar el impuesto y por la disminución de la alícuota, que más que compensan la incidencia favorable que surgirá de los convenios de intercambio de información fiscal y del régimen de sinceramiento fiscal.

Los ingresos no tributarios se estiman en 51.216 millones de pesos, con un crecimiento del 29,4 por ciento con respecto a lo previsto para 2017, mientras que los ingresos por ventas de bienes y servicios llegarían a 5.924 millones de pesos (menos 6,2 por ciento con respecto a este año). Los recursos de capital aumentarían un 8,6 por ciento para totalizar 13.802 millones de pesos, en tanto que las transferencias corrientes crecerían un 13,5 por ciento interanual, para un estimado de 4.043 millones de pesos.

Por el lado de los gastos, la previsión de gastos para 2018 es de 2,78 billones, un 16 por ciento más que la vigente para este año. Los gastos corrientes llegarían a 2,57 billones de pesos, con un aumento del 15,9 por ciento interanual, mientras que los gastos de capital ascenderían a 210.941 millones de pesos, con una suba levemente superior, del 17,2 por ciento interanual.

Pero he de destacar que, en su conjunto, los gastos proyectados para la finalidad servicios sociales son los que en promedio más suben, con alrededor del 21

por ciento respecto del 2017, siendo el incremento en cada una de sus funciones similar al promedio de la finalidad, ya sea salud, promoción y asistencia social, seguridad social, educación y cultura, agua potable y alcantarillado. Tal vez pediría en esta oportunidad al Poder Ejecutivo nacional una política más agresiva en ciencia y técnica.

El gasto primario, que excluye del total los servicios de la deuda pública, llegaría a 2,50 billones de pesos, con un incremento del 14,8 por ciento. De cumplirse estas previsiones, con una tasa de crecimiento de los gastos levemente por encima de la inflación promedio estimada, pero por debajo de la variación nominal del producto, la participación del gasto total de la APN pasaría del 23,3 por ciento proyectado para el cierre de este año a un 22,5 por ciento en 2018, con una reducción de 0,8 puntos porcentuales. El gasto primario, a su vez, pasaría del 21,2 por ciento al 20,2 por ciento, con una baja de un punto porcentual.

Dentro de los gastos corrientes, el principal componente, que engloba el 43,5 por ciento del total, corresponde a las prestaciones de la seguridad social, que aumentan un 21,9 por ciento como consecuencia de la variación esperada en la movilidad jubilatoria y del impacto de la reparación histórica. Pero hemos de resaltar que no se tomaron en cuenta los efectos de la reforma previsional que acabamos de sancionar en este Congreso, que ha modificado la fórmula de movilidad, como todos sabemos. Por lo que, reitero, son solo previsiones, pero, en honor al tratamiento responsable que nos ocupa como legisladores, deberíamos contar con un estimativo de las nuevas proyecciones.

Las transferencias corrientes, segunda partida del gasto en importancia, en términos absolutos, tienen un aumento nominal del 5,2 por ciento para totalizar 669.663 millones de pesos, lo que equivale a una caída en términos reales. Allí se ve el efecto expansivo de la variación positiva prevista en los subsidios sociales con una caída del 16,2 por ciento interanual en los subsidios económicos, tanto en el área energética (menos 22,2 por ciento interanual), como en transporte (menos 5 por ciento interanual) y en otras funciones (menos 63,5 por ciento interanual, aunque con valores muy inferiores). A pesar de esa reducción, los subsidios económicos requerirán 175.883 millones de pesos en 2018, un 6,3 por ciento del total del gasto y un 1,4 por ciento del PIB. Es decir, surge a las claras que los subsidios aún impactan en el déficit fiscal pese al enorme esfuerzo de nuestros compatriotas, que pagarán ya en 2018 el 61 por ciento de la tarifa eléctrica real sin subsidios.

Las transferencias corrientes a provincias, en tanto, crecerán un 9,9 por ciento interanual, en tanto que las realizadas a universidades aumentarían un 17 por ciento interanual e insumirían 103.942 millones de pesos.

Las remuneraciones totalizan 319.128 millones de pesos, con un crecimiento del 16,4 por ciento interanual. Cabe aclarar que este porcentaje no corresponde únicamente a la anualización de los aumentos otorga-

dos durante el corriente año, sino que además contemplaría la pauta salarial estimada para el próximo ejercicio, por lo que la previsión que maneja el gobierno para esta variable se encuentra por debajo de la inflación esperada. Como en otros años, es habitual que desde la administración no la exponga en el presupuesto o no la explicita en su mensaje, para evitar que funcione como un mínimo para la discusión en paritarias.

Los intereses de la deuda pública muestran el mayor incremento del gasto corriente (más 28 por ciento interanual), casi duplicando el ritmo de crecimiento del resto de las erogaciones. La previsión para 2018 es de 283.869 millones de pesos, el 10,2 por ciento del total del gasto. Este crecimiento corresponde principalmente a los pagos necesarios para afrontar las diferentes series de bonos emitidos por el Estado. Ya en este año las estimaciones del crecimiento del gasto público, en el orden del 46 por ciento, adjudican un 70 por ciento a los intereses de la deuda.

Se eligió este camino, lo acompañamos, pero es momento de elegir otro camino para suplir las fuentes de endeudamiento.

Para los gastos de capital hay una previsión de 210.941 millones de pesos, lo que implica una suba del 17,2 por ciento con respecto al cierre de este año. Esta tasa implica un crecimiento en términos reales, pero una desaceleración con respecto a lo que viene ocurriendo durante este año (en el acumulado enero-agosto los gastos de capital crecieron un 46,5 por ciento contra el mismo período de 2016). El gobierno en su mensaje expresa que a través del mecanismo de participación público-privada se podrá compensar ese menor ritmo de expansión, cumpliendo a la vez con los objetivos de mejorar la infraestructura y reducir el déficit. Las estimaciones presentadas en el mensaje apuntan a que se generen 225.000 millones de pesos adicionales a través de estos proyectos, así como mediante inversiones de empresas públicas, fideicomisos, financiamiento a proveedores e inversión privada en mercados regulados. Confiamos que este esquema, que puede ser positivo, tenga los debidos controles y se lleven los registros adecuados a los fines de dichos controles.

La inversión real directa crece un 21,6 por ciento interanual, para totalizar 62.245 millones de pesos. De ese total, 36.101 millones de pesos se ejecutarán en el Ministerio de Transporte, particularmente en la Dirección de Vialidad. Muy por debajo de ese monto, se prevén gastos por 4.224 millones de pesos en el Ministerio de Educación, 2.794 millones de pesos en el Ministerio de Justicia y Seguridad, 2.610 millones de pesos en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y 2.425 millones de pesos en el Ministerio de Energía y Minería. Las transferencias de capital, el componente más importante del gasto de capital, aumentan un 26,7 por ciento y llegan a los 140.147 millones de pesos. Las más importantes son las destinadas a provincias y municipios, que presentan un aumento de solo el 1,4 por ciento interanual, como

consecuencia de la reducción proyectada en la recaudación de las retenciones a las exportaciones de soja que se destinan, parcialmente, a financiar el Fondo Federal Solidario. También son importantes las transferencias destinadas a financiar inversiones de empresas públicas, particularmente de AySA S.A., Nucleoeléctrica Argentina S.A. y la Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. La inversión financiera crece un 82,4 por ciento interanual, hasta totalizar 8.549 millones de pesos, sin que se incluya en el mensaje la explicación de este fuerte incremento ni la composición de la partida.

Continuando con el análisis del mensaje, en él se presentan los programas presupuestarios de mayor relevancia, con sus metas físicas y su relación con las iniciativas prioritarias. La sumatoria de estos programas representa casi el 70 por ciento del gasto primario.

En consonancia con lo expresado con motivo de los intereses de la deuda, los mayores incrementos porcentuales corresponden a la deuda pública (más 28,2 por ciento interanual), por el aumento en el pago de intereses, y a los servicios sociales (más 21 por ciento interanual), como ya se acotó previamente, impulsados por subas superiores al promedio general en educación y cultura, promoción y asistencia social y seguridad social. Para los servicios de seguridad se prevé un incremento del 13,8 por ciento interanual, con un mayor crecimiento de la función de inteligencia.

Financiamiento y deuda pública: el déficit financiero previsto para el ejercicio 2018 asciende al 5,5 por ciento del PIB estimado para ese año. Sumado a las amortizaciones de la deuda previamente contraída y a la cancelación de otros pasivos (1.284.401 millones de pesos, 10,3 por ciento del PIB), así como también a otros compromisos financieros (inversión financiera, por 235.999 millones de pesos, 1,9 por ciento del PIB), determina una necesidad de financiamiento de 2.199.269,6 de pesos (17,9 por ciento del PIB). No obstante, varios de los conceptos incluidos en la amortización de deuda y cancelación de pasivos pueden ser refinanciados de manera automática, por lo que no constituyen una carga financiera efectiva. Entre estos conceptos se observan:

- Adelantos transitorios del BCRA, que se prevé que se renovarían por un monto de 570.930 millones de pesos (aportando un financiamiento neto del orden de los 140.000 millones de pesos).

- Operaciones intrasector público, que se estiman en 506.113 millones de pesos. Adicionalmente, se prevé que habrá financiamiento por parte de organismos internacionales y multilaterales por 95.087 millones de pesos, que en un 15 por ciento provendría del BID, en un 45 por ciento del BIRF y el restante 15 por ciento del CAF, FIDA, Fonplata y otros, sin mayores especificaciones. De esta forma, las necesidades de financiamiento “efectivas” pasan a ser de 1.027.140 millones de pesos, equivalentes al 8,3 por ciento del PIB, lo que constituye una magnitud significativa.

De la información incluida en el proyecto de presupuesto no surge qué proporción de las amortizaciones de títulos públicos está en poder de organismos públicos, los cuales se podrían refinanciar sin mayores inconvenientes, reduciendo en consecuencia la necesidad de recurrir al mercado. De todas formas, los vencimientos de todos los títulos públicos representan menos de un 13,5 por ciento del total de las aplicaciones financieras que la administración nacional deberá afrontar durante el ejercicio 2018.

Las amortizaciones de la deuda y la cancelación de otros pasivos representan el 84 por ciento de las obligaciones financieras, totalizando 1.284.401,2 millones de pesos, equivalentes al 10,4 por ciento del PIB. Tres tipos de instrumentos concentran el 83,4 por ciento de esas obligaciones, que se detallan a continuación:

- Adelantos transitorios del BCRA, que deberán cancelarse por la suma de 430.930 millones de pesos.
- Títulos públicos, que vencen por un monto de 205.723 millones de pesos.
- Letras del Tesoro por 434.068 millones de pesos, que en general constituyen instrumentos de financiamiento de corto plazo y suelen otorgarse a otros entes del sector público nacional.

En cuanto a las magnitudes que implican, se encuentran las obligaciones en concepto de reestructuraciones (39.114 millones de pesos), donde se destaca el Club de París, los pagos a organismos multilaterales (30.473 millones de pesos) y la devolución del préstamo del BNA (407 millones de pesos). Préstamos garantizados, 4.374 millones de pesos; deuda consolidada (BOCON), 2.800 millones de pesos; Programa Federal de Desendeudamiento Provincial, decreto 660/10, 16.460 millones de pesos; deuda resolución Secretaría de Energía 406/03, 13.104 millones de pesos; otras, 106.947,5 millones de pesos.

El otro rubro de las aplicaciones financieras consiste en operaciones que implican el otorgamiento de préstamos a terceros, la compra de instrumentos o aportes reembolsables, por lo que constituyen una inversión financiera, que en futuros ejercicios podrán ser recuperados y utilizados como fuente financiera. En este conjunto, que alcanza los 235.998,5 millones de pesos y representa un 17 por ciento de las aplicaciones financieras totales, se destacan los siguientes conceptos:

- Adelantos a proveedores y contratistas (61.620 millones de pesos).
- Adquisición de títulos y valores por parte de la ANSES (80.378 millones de pesos).
- Asistencia financiera a provincias (33.154 millones de pesos).

Continuando el análisis del articulado, se observó:

En el capítulo VII, “De las operaciones de crédito público”, del título I, “Disposiciones generales”, del proyecto de presupuesto 2018 se establecen los lineamientos que el Poder Ejecutivo deberá seguir en la gestión de los pasivos que integran la deuda pública y se conforma de doce artículos.

En el artículo 32 se autorizan las operaciones de endeudamiento, detallándose el tipo de instrumento, monto, plazo y destino, autorizando al Ministerio de Finanzas a efectuar modificaciones a las características detalladas en la mencionada planilla a los efectos de adecuarlas a las posibilidades de obtención de financiamiento.

Por el artículo 33 se autoriza al Ministerio de Finanzas a emitir letras del Tesoro hasta alcanzar un importe en circulación de valor nominal de 330.000 millones de pesos para dar cumplimiento a las operaciones previstas en el programa financiero. Estas letras deberán ser reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emiten.

Por el artículo 34 se fija en la suma de 60.000 millones de pesos y en la suma de 50.000 millones de pesos los montos máximos de autorización a la Tesorería General de la Nación y a la ANSES, respectivamente, para hacer uso transitoriamente del crédito a corto plazo a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 24.156, y sus modificaciones. Por el artículo 35 se faculta a la Secretaría de Hacienda (dependiente del Ministerio de Hacienda) a la emisión y colocación de letras del Tesoro a plazos que no excedan el ejercicio financiero hasta alcanzar un importe en circulación del valor nominal de 14.000 millones de pesos o su equivalente en otras monedas, a los efectos de ser utilizadas como garantía por las adquisiciones de combustibles líquidos y gaseosos y la importación de energía eléctrica.

El cuadro expuesto es según sigue:

Ente autorizado	Destino	2018
Ministerio de Finanzas	Programa financiero	330.000
Tesorería General de la Nación	Autorización por artículo 82 de la ley 24.156	60.000
ANSES	Autorización por artículo 83 de la ley 24.156	50.000
Ministerio de Hacienda	A efectos de ser utilizadas como garantía por las adquisiciones de combustibles líquidos y gaseosos y la importación de energía eléctrica	14.000
Total		454.000

Por el artículo 39 se faculta al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera (Secretaría de Hacienda y Secretaría de Finanzas) a otorgar avales del Tesoro nacional a los siguientes organismos, por las operaciones de crédito público de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa a ese artículo y por los montos máximos en ella determinados o su equivalente en otras monedas, más los montos necesarios para afrontar el pago de intereses y demás accesorios, los que deberán ser cuantificados al momento de la solicitud del aval.

1. INVAP S.E. garantía de ejecución, anticipo y operaciones de prefinanciación de exportaciones, por 75 millones de dólares, con destino a ejecución de proyectos de exportación en las áreas nuclear o espacial.

2. Aerolíneas Argentinas S.A. bancaria/financiera/comercial, por 372 millones de dólares, con destino al financiamiento destinado a la cancelación de deuda con el BNDES por la adquisición de aeronaves.

3. Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) bancaria/financiera/comercial, por 1.900 millones de dólares, con destino al Plan Director de Obras AySA S. A.: Río Subterráneo Norte y E. E., Planta Depuradora Escobar-Pilar, Planta Depuradora San Miguel-Santa María, Planta Laferrere más Redes La Matanza-Merlo, ampliación Planta El Jagüel, Gestión de barros / Cogeneración de energía en Plantas Norte y Sudoeste, y otras obras del plan director.

4. ARSAT S.A. bancaria/financiera/comercial, por 250 millones de dólares, con destino a la construcción del tercer satélite geoestacionario argentino.

El artículo 41 fija en 8.600 millones de pesos el importe máximo de colocación de bonos de consolidación y de bonos de consolidación de deudas previsionales, en todas sus series vigentes, para el pago de las obligaciones contempladas en el inciso f) del artículo 2º de la ley 25.152, las alcanzadas por el 1.318 del 6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo 127 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto

(t. o. 2014) por los montos que en cada caso se indican en la planilla anexa al citado artículo.

Por el artículo 42 se faculta al Ministerio de Finanzas, a través del órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera, a la emisión y entrega de letras del Tesoro en garantía al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), por cuenta y orden del Ministerio de Energía y Minería hasta alcanzar un importe máximo de valor nominal de 2.422 dólares o su equivalente en otras monedas conforme lo determine ese órgano coordinador, contra la emisión de certificados de participación por montos equivalentes a las letras cedidas a favor del Ministerio de Energía y Minería, para ser utilizadas como garantía de pago del precio de venta de la central de generación, adquirida conforme lo previsto en los artículos 3º y 4º del decreto dictado en acuerdo general de ministros 882 del 21 de julio de 2016.

En la relación Nación-provincias, en 2018 se espera que los ingresos totales provinciales se incrementen un 18,7 por ciento interanual, nuevamente con un mayor crecimiento de los recursos tributarios de origen nacional (más 22,6 por ciento interanual) que el que se proyecta para los de origen provincial (más 18,6 por ciento interanual). De cumplirse estas previsiones, la presión tributaria provincial caería un 0,1 por ciento del PIB. Los gastos totales crecerían un 15,7 por ciento interanual, tres puntos porcentuales por debajo de los ingresos, lo que permitiría mejorar considerablemente el resultado fiscal. Así, el déficit financiero del conjunto de provincias pasaría del 0,9 por ciento del PIB al 0,4 por ciento, totalizando 47.775 millones de pesos.

Pero no debemos olvidar los impactos del consenso fiscal con el acuerdo de casi todas las provincias, del pasado 14 de septiembre. En paralelo y en el marco de la reforma tributaria en la que estuvimos abocados en el Congreso, sabemos que se vienen modificaciones a la estructura tributaria de las provincias, en particular en lo relativo al impuesto sobre los ingresos brutos,

considerado como muy distorsivo, pero que al mismo tiempo representa una de las principales fuentes de recursos provinciales. A esa situación se le sumó el reclamo de la provincia de Buenos Aires sobre el fondo del conurbano, que tensionó al resto de las provincias, excepto San Luis, ante la posibilidad de tener que ceder parte de los recursos que vienen percibiendo por ese concepto. El consenso fiscal modificará la relación entre la Nación y las provincias y sabemos que no está contemplado en este presupuesto. Sin embargo, como antes explicité, se trata de proyecciones, estimaciones, en este caso en la distribución en el reparto entre Nación y provincias, y nos lleva a su acompañamiento el convencimiento de que se reflejarán oportunamente, una vez que se inicie el ejercicio 2018.

En cuanto a la parte del gasto de las provincias, se prevé que los gastos en personal se incrementen 15,6 por ciento interanual. Al igual que el año anterior, este aumento se explicaría por el arrastre de la política salarial de 2017 y la esperada para 2018, aunque sin incrementos significativos en el tamaño de planta. El gasto en personal y las prestaciones a la seguridad social mantendrían una participación cercana al 60 por ciento de los gastos provinciales. Los gastos de capital, por su parte, crecerían un 15,2 por ciento interanual, afectados por la reducción del Fondo Federal Solidario.

Tal como se ha expresado, estas estimaciones están sujetas a modificaciones como producto de la revisión de las estructuras tributarias provinciales. Dado que se trata de problemas de muy difícil solución si se los encara individualmente, se considera que es una buena ocasión para revisar de manera integral el esquema de gastos y financiamiento que tiene el Estado argentino en sus distintos niveles de gobierno, de manera tal de sentar las bases para un crecimiento más sustentable en el futuro. Será el momento de repensar qué funciones han sido transferidas a las provincias y la cuantía de los recursos adecuados para dar cumplimiento a esas obligaciones asumidas por las provincias. Al respecto, el mensaje destaca la necesidad de continuar impulsando el debate de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, una deuda que se mantiene desde la sanción de la Constitución Nacional de 1994.

Por ende, señores legisladores, entendemos que el proyecto de ley de presupuesto 2018 mantiene la estrategia del gobierno de reducir el déficit gradualmente. El esquema general apunta a bajar impuestos de manera puntual, especialmente aquellos que se consideran distorsivos para la producción, la continuidad de las políticas de disminución de subsidios económicos, mucho más marcadas en energía que en transporte, un análisis detallado de los gastos en bienes y servicios y la búsqueda de alternativas a la inversión pública, tales como los proyectos de participación público-privada, para el cual se le dedica un capítulo especial poniendo en marcha el Fideicomiso de Participación Pública Privada. Todo esto reforzado por la reforma tributaria, la reforma previsional y el consenso fiscal. Para el resto de los gastos se busca congelarlos en

términos reales, de manera tal que el crecimiento del PIB termine licuando su participación. En los últimos tiempos se ha planteado una discusión recurrente sobre el crecimiento de los pagos de la deuda, ya que los intereses vienen aumentando por encima del resto de los gastos y se prevé que esa tendencia continúe en 2018. Pareciera como que el Poder Ejecutivo nacional pone especial énfasis en el resultado primario, dejando de lado la cuestión de los intereses. Si bien sabemos que el resultado primario es importante porque muestra las decisiones tomadas por el gobierno en cuanto a ingresos y gastos, el que define la cuantía del financiamiento que deberá conseguir el Estado es el resultado financiero, que incluye el pago de intereses. Ahí es donde, si bien acompañamos en general lo planteado por este presupuesto, debemos poner el énfasis en nuestro control, ya que si la cuantía de los intereses se acrecienta, la política económica perderá margen de maniobra y control, por más esfuerzos que se hagan en contener el gasto primario. Las proyecciones que presenta el Ministerio de Hacienda muestran que, de cumplirse las metas fiscales planteadas para 2018 y 2019, el gobierno terminaría su gestión con un stock de deuda equivalente al 34,3 por ciento del PIB y un pago anual de intereses del 2,2 por ciento del PIB, porcentajes que se ubicarían por debajo del promedio de los países de la región y que se consideran sustentables en el mediano plazo. El desafío, entonces, es el cumplimiento efectivo de estas metas. Insistimos en que el déficit fiscal no solo se disminuye controlando el gasto o sacrificando recursos a las provincias. Acompañamos, pero sabemos que hay un camino alternativo o, si se quiere, complementario: hacer crecer la economía. Con ello aumentará la recaudación y se generarán empleos que darán lugar a lo virtuoso de una economía sostenible y, por supuesto, eliminar el gasto innecesario en áreas que no impliquen mayores costos sociales. Por ese camino las necesidades de financiamiento se reducirán y, por ende, las necesidades de endeudamiento externo.

Casi el 70 por ciento del presupuesto asignado a gasto social es una muestra muy clara de las dificultades que existen para avanzar en mayores reducciones y un conjunto de provincias que también presentan una situación deficitaria. No podemos seguir sacrificando a los sectores más vulnerables si encaramos el crecimiento de la economía con políticas activas que vayan hacia ese objetivo.

No hay manera de debatir y encontrarle la adecuada resolución a estos problemas, como el de la distribución de los fondos entre la Nación y las provincias o la sustentabilidad de la política jubilatoria, si se los encara como compartimentos estancos. En lo que tiene que ver con el manejo técnico del presupuesto, se observan avances destacables. La modificación del artículo 37 de la ley 24.156 limitó las facultades del jefe de Gabinete para realizar reestructuraciones presupuestarias. A través del nuevo artículo se estableció que para el ejercicio 2017 las reestructuraciones no podían superar el 7,5 por ciento y se planteó el 5 por ciento para el ejercicio

2018 y siguientes, del monto total aprobado por cada ley de presupuesto. Son cuestiones que ayudan, pero en el marco de un conjunto de políticas públicas activas que privilegie el crecimiento, que impulse la demanda interna, que haga crecer las exportaciones, que elimine el trabajo informal y la economía informal. Por todo lo expuesto es que acompaño la propuesta de presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el ejercicio 2018.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA BLAS

Señora presidente:

Respecto de la reforma tributaria bajo tratamiento ha de destacarse que los puntos de la reforma se sustentan sobre la premisa de fomentar la inversión productiva, la competitividad y, en teoría, el empleo, gravando por el otro lado la renta financiera fundamentalmente.

En otro orden, se plantea la necesidad de que se reduzca la evasión tributaria cuando se reforme la ley de procedimientos tributarios y la ley penal tributaria.

No se debe soslayar que, en pos de una menor carga tributaria para los sectores productivos, se compensará con nuevos impuestos a la renta financiera en cabeza de las personas humanas y se reducirán algunas exenciones para cumplir con las metas fiscales. Asimismo, no debemos dejar de recordar que la mayor competitividad se logrará cuando se concrete la reducción de ingresos brutos, sellos y cargas sobre aduanas interiores una vez que se ejecute el acuerdo Nación-provincias de consenso fiscal. Estos impuestos provinciales han resultado una mayor carga impositiva y en definitiva se transformaron en impuestos distorsivos, gravando en simultáneo hechos impositivos similares como cuando hablamos de IVA e ingresos brutos.

La reforma a nivel nacional como a niveles provinciales se hará en forma gradual en un plazo de cinco años.

Cuando se analiza ganancias se puede observar que las reformas que se impulsan ratifican lo antes expuesto, ya que tienden a ir disminuyendo la tasa del 35 por ciento en las ganancias corporativas no distribuidas, pretendiendo llegar al 25 por ciento para el 2021. Como se ve, se premiarán las ganancias de las empresas que se reinviertan para fomentar la inversión, elemento indispensable para aumentar la tasa de inversión (relación inversión/PBI) del país.

En otro orden, incrementan el pago a cuenta de ganancias generado en el impuesto a los débitos y créditos. Esto dará mayor margen financiero a las empresas cuando deban pagar el impuesto a las ganancias conforme las disposiciones de la ley.

Una reforma justa y debida desde hace muchos años es la que dispone aumentar la deducción especial de ganancias para los autónomos, muchos años sin actualizar. Si esto fomenta nuevos emprendedores, generalmente dentro de esta categoría de autónomos, bienvenido sea. La puesta en marcha de la medida lo demostrara o no.

Por otro lado, conforme a políticas del Poder Ejecutivo de disminución de la carga tributaria y buscando en forma indirecta generar mayor fuentes de empleo, se impulsa la implementación de un mínimo no imponible para contribuciones patronales, las empresas no pagarán hasta una remuneración bruta, en una escala que en 2018 será de 2.400 pesos; en 2019, 4.800 pesos; en 2020, 7.200 pesos y en 2021, 9.600 pesos y llegando a 12.000 pesos en 2022.

El esquema de la reforma plantea unificar también en forma gradual las alícuotas de contribuciones patronales para el sector privado, llegando en forma progresiva a una sola del 19,5 por ciento en 2022. Este producto elimina el esquema de reducción de contribuciones por zona geográfica. Entiendo que puede con esta medida favorecerse a los grandes centros urbanos en desmedro de las economías regionales por la disparidad de ingresos de los trabajadores en el país, siendo un mismo mínimo imponible homogéneo en todo el territorio nacional.

Como contrapartida y como ya dijera, para sostener las metas fiscales que el Poder Ejecutivo se ha planteado, se extiende a otros activos financieros el impuesto a las ganancias por rentas obtenidas por las personas humanas (hasta hoy exentas). Si bien el Poder Ejecutivo nacional entiende que esto contribuirá a una mayor equidad del sistema impositivo, la realidad es que las reformas se plantearon para equilibrar lo que se deja de recaudar en un sector, aumentando la carga fiscal en otros sectores de la población. Las principales medidas al respecto han sido:

- Gravar con una tasa del 15 por ciento para activos indexados o en moneda extranjera y del 5 por ciento para activos en moneda local los rendimientos actualmente exentos. Tendrá un mínimo imponible anual de 65.700 pesos. No se gravarán las diferencias por tipo de cambio ni las actualizaciones de dichas tendencias.

- Incorporar como gravadas las utilidades por enajenaciones de moneda virtuales o digitales o bitcoins. Aunque estas son de difícil rastreo.

- Gravar la transferencia de inmuebles con el impuesto a las ganancias a partir de la compra-venta de inmuebles o compra y posterior donación que se realicen a partir del 1º/1/2018. Eliminandose el ITI y quedando gravada la utilidad de la transferencia del inmueble a alícuota del 15 por ciento con posibilidad de una deducción especial; quedan exceptuadas en dichas operaciones aquellas que se referencian a la casa habitación.

- Gravar las indemnizaciones por despido, por acuerdo entre partes o provenientes de retiro, pero cuando se trate de cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas.

Se modifican impuestos internos y se observa que la intención ha sido reducir los impuestos internos para determinados productos electrónicos, que se entienden necesarios para la actividad productiva y se gravan con

mayor alícuota a aquellos que se ha comprendido como perjudiciales a la salud de la población.

Es así como vemos, luego de la media sanción de Diputados, que resulta que los cigarrillos pasarán a pagar un gravamen del 73 por ciento sobre el precio de venta al consumidor, impuesto que no podrá ser menor a 28 pesos por cada paquete de 20 unidades. Las bebidas con cafeína y taurina pagarán al final el 10 por ciento. Las edulcoradas al final quedaron sin cambios, o sea el 4 por ciento, y las alcohólicas el 8 por ciento.

Cervezas quedó en el 14 por ciento y las artesanales en el 8 por ciento; quedan exentas las que tengan hasta 1,2 por ciento grados de alcohol. Telefonía celular: el 5 por ciento (actualmente es del 17 por ciento).

En combustibles: la gran reforma —en un inicio aplicable solo a combustibles líquidos— será que el impuesto dependerá de la cantidad de dióxido de carbono emitido, es decir, un monto de suma fija por emisiones de dióxido de carbono, como protección del medio ambiente. El otro componente de suma fija será establecido de tal manera que no altere la carga tributaria actual. Es de destacarse que se mantendrán las reducciones por zonas geográficas.

IVA: se ha impulsado la devolución anticipada de saldos a favor del IVA por inversiones. En una palabra, se viabilizará con mayor antelación el reintegro del IVA en esos casos.

Además, se amplía la base del impuesto para los servicios digitales prestados por empresas del exterior (por ejemplo: Spotify, Netflix, etcétera), siendo los agentes involucrados los que depositarán ese IVA que facturen, es decir, agentes pagadores.

O sea, se aplicará el IVA del 21 por ciento sobre aplicaciones *online*, como el alojamiento de sitios informáticos y páginas web, la descarga de libros digitales, los servicios de web en forma remota, la publicidad *online* y alojamiento del tipo iCloud o nube.

Monotributo: dentro de una serie de cambios en cuanto a quiénes serán considerados monotributistas, la gran reforma determina que se harán dos recategorizaciones por año y se cambia los lineamientos para considerar excluido del monotributo a los contribuyentes. Entendemos que la reforma plantea reducir la carga de costos que implican los honorarios por recategorización, pero la actualización automática de las cotizaciones puede ser gravosa para este sector. Como ejemplo, la AFIP ya dio a conocer los nuevos valores vigentes a partir de 2018 y en casi todas las categorías el incremento ronda el 48 por ciento. Si bien creemos que es justo que sufran actualizaciones, ya que la economía aún no ha dado muestras de eliminar el alto impacto de la inflación, actualizar favorecerá el valor actual de los ingresos del fisco, pero no debemos dejar de estar alertas a que, si no hay movimientos de la demanda, los que integran este sector se verán afectados por mayores pagos mensuales, que no necesariamente evolucionen como la cotización mensual que la AFIP pretende. Es

algo que acompañamos, pero debemos estar alertas los senadores.

Lo más destacable en cuanto a procedimiento fiscal es que se instaure una conciliación administrativa para evitar juicios en el fuero económico ante disidencias entre el reclamo de la AFIP y lo que considera el contribuyente. Otra incorporación que apoyamos es la incorporación de reglas para tramitar los procedimientos de acuerdo mutuo previstos y en respeto a los convenios de doble imposición.

En pos de penalizar a los evasores, la propuesta bajo consideración contempla nuevos montos punibles para el régimen penal.

Por todo lo expuesto, entendemos que esta es una reforma tributaria elevada con el único propósito de que se vaya disminuyendo la carga tributaria que principalmente afecta a la actividad productiva y que, por ende, se logre mejorar la tasa de inversión, generando empleo tan caro a los argentinos; mucho más aún, luego de dos años de destrucción de fuentes de empleo en muchos sectores de la economía. Obviamente, hemos de aceptar la parte de nuevos impuestos sobre las personas humanas para equilibrar las cuentas fiscales en ganancias o las nuevas actividades gravadas por el IVA, por ejemplo, pero no podemos dejar de expresar que la marcha de la reforma dirá si los objetivos planteados se van dando, si los mayores empleos se van creando y si no se generan efectos indeseados desestimulando el ahorro que, a la larga, atentará sobre la inversión que se busca hacer crecer.

Por eso nuestro acompañamiento, pero hemos los legisladores de este Congreso estar alertas en los efectos y corregir todos los desvíos no deseados si se presentan.

POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR FIAD

Señora presidente:

Tratamos hoy un presupuesto transparente, que refleja la realidad. Un presupuesto que no le tiene miedo a la verdad y que constituye una herramienta confiable para mostrar las prioridades del gobierno y un proyecto de país que transite por el camino del crecimiento y el desarrollo.

Se trata de un presupuesto que encuentra su anclaje en un contexto económico y social concreto y real. No es el dibujo al que durante años estuvimos acostumbrados, que además venía revestido de su imposibilidad de modificar.

Hoy la realidad es otra, como también son otras las prioridades, pero de verdad. Un dato incuestionable es que el gasto social llega a más del 70 por ciento y esto es porque combatir la pobreza y resolver los problemas de los sectores más vulnerables es un objetivo fundamental del gobierno.

Este solo dato ya echa por tierra toda esa retórica acusadora de la oposición que atribuye al gobierno medidas propias del neoliberalismo y de extrema insensibilidad. Aquí hay una preocupación central y

un objetivo declarado de combatir la pobreza, pero haciéndolo estructuralmente, haciéndolo desde la transformación de las condiciones básicas que hacen a la dignidad de los ciudadanos.

Esta dignidad viene de la mano de cuestiones tan indispensables como las cloacas y el agua potable, que se enmarcan en las obras de infraestructura que se van a encarar.

El presupuesto que tratamos define también las previsiones respecto de la inflación, otra cuestión que marca una gran distancia con los presupuestos del gobierno anterior, en el que la palabra inflación no podía mencionarse y en donde los datos que se proporcionaban estaban muy lejos de las percepciones cotidianas de todos los argentinos.

Hoy los datos son públicos, verdaderos y transparentes y pueden emplearse para los debates, porque existen y porque se ha recuperado la rigurosidad de las estadísticas públicas, herramienta indispensable para la planificación de políticas públicas oportunas y eficaces.

Probablemente todas las provincias tengamos demandas concretas que hubiéramos deseado que se incluyeran, pero hay que producir verdaderas transformaciones en un país que estuvo durante años detenido en muchas cuestiones. No tendríamos que estar pensando en cloacas o en agua potable si la administración anterior hubiera tenido la eficacia que pretenden ostentar en sus discursos.

Sabemos que el cambio es hasta cultural, porque necesitamos reconstruir una ciudadanía de calidad que se consolide desde la dignidad y no desde la sumisión, desde la titularidad de derechos y no desde el clientelismo, desde la autonomía de poder construir un proyecto de vida en el que el Estado no aplaste al ciudadano, sino que genere las condiciones para que viva en libertad, con dignidad y con bienestar.

Los procesos son graduales y las medidas que se propician también lo son. Seguramente todos anhelamos ver resultados con mayor celeridad, pero los pasos tienen que ser firmes para que no volvamos a tener las caídas estrepitosas de un período que todavía nos deja las huellas de la pobreza.

Y de eso se trata un presupuesto que no miente, que proyecta la atención a los más vulnerables y que, fundamentalmente, proyecta transformar un país con crecimiento y equidad.

POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR BASUALDO

Señora presidente:

En esta última sesión del año debatimos tres proyectos económicos remitidos por el Poder Ejecutivo: el presupuesto 2018, la reforma tributaria y la modificación de la ley de débitos y créditos. Los tres están relacionados entre sí, como también complementan otras leyes que se han tratado en este recinto, como lo son la ley pymes, la ley de emprendedores y la ley de consenso fiscal, que en su conjunto persiguen un mismo

objetivo: la generación de empleo genuino, sustentable y de calidad que permitan un adecuado nivel de vida de nuestra población.

Este presupuesto tiene afectado más del 60 por ciento de sus partidas a prestaciones sociales, lo cual refleja que tiene como eje central el cuidado del ciudadano, especialmente del que está dentro de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Si todos pagamos los impuestos, la recaudación aumenta y la presión fiscal disminuye. El logro del equilibrio presupuestario se va a conseguir incrementando los ingresos del Estado vía crecimiento de la economía y mediante la aplicación de un sistema impositivo moderno y progresivo que permita que los impuestos sean tributados por todos los sujetos alcanzados por ellos, donde disminuya la alícuota de imposición de las empresas en la medida que se reinviertan las utilidades y apuesten por el país. Estos casos tendrán una tasa de impuestos a las ganancias menor que aquellas que decidan distribuir todas sus ganancias.

Se grava la renta financiera apoyando al capital de trabajo que apueste a la producción, se redirecciona el ahorro interno al apoyo de los proyectos productivos y el Estado procurará lograr su financiamiento absorbiendo ahorro del exterior. De esta manera el sector público evitará absorber recursos que los particulares puedan utilizar para financiar sus proyectos. Queremos empresas ricas con empresarios con ingresos acordes a la inversión realizada, no queremos empresas pobres con empresarios millonarios. Hay que alentar a quienes invierten sus utilidades en sus empresas, a quienes apuesten a la producción, solo de esta manera se lograrán empresas eficientes y competitivas.

En los últimos veinticinco años la presión fiscal subió un 130 por ciento, creció del 17 por ciento en el año 1992 al 37 por ciento en el año 2015. Es la primera vez que se reduce la presión fiscal legal. En este proyecto de ley la presión fiscal disminuye en 1,5 puntos del PBI, pero además este esfuerzo se suma al ya realizado por el gobierno al reducir los derechos de exportación y con la baja impositiva contemplada en la ley pymes, que rondan los 2 puntos del PBI.

La devolución anticipada del IVA, el cómputo como pago a cuenta del impuesto a los débitos y créditos, sobre el impuesto a las Ganancias, constituyen medidas impositivas que implican alivio fiscal en las empresas y generan una mejora en su competitividad. La reducción de las alícuotas patronales y la implementación de un mínimo no imponible permitirán que muchas pymes logren regularizar su situación. Además, el mínimo no imponible beneficia más a las empresas del interior que a las ubicadas en los grandes centros urbanos y grandes ciudades pues, en general, el nivel de salarios en las ciudades del interior tiende a ser inferior que en las grandes urbes.

Por otro lado, el proyecto de ley de financiamiento productivo permite que las empresas y particulares puedan recurrir al mercado de capitales y conseguir

recursos para poder financiar sus proyectos. Se están sentando las bases sobre las cuales se sustentará el desarrollo del país en los próximos veinte años.

Este presupuesto nos indica el sendero que el país pretende recorrer. Nos encaminamos a una Argentina con una inflación acorde a la que poseen los países desarrollados, a un equilibrio fiscal que se conseguirá mediante el crecimiento de la economía y no en base a recortes. Se pretenden crear las condiciones para que las pymes puedan emprender sus proyectos productivos y lograr financiarlos en el mercado de capitales, el cual unificará el ahorro disponible en el país y los demandas de recursos para estos proyectos.

En acuerdo con las provincias, se procurará sustituir y reducir gradualmente el impuesto a los ingresos brutos por otro más progresivo y ecuánime. Estamos en presencia de un proyecto de ley de reforma tributaria que genera una predisposición a la inversión y a la generación de empleo, incrementando una mayor equidad y eficiencia del sistema impositivo que permitirá un desarrollo económico sustentable de nuestro país a largo plazo.

Por todo lo expuesto es que adelanto mi voto positivo a los proyectos de ley en tratamiento.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA CREXELL

Señora presidente:

I.

Una vez más nos encontramos debatiendo el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional, ahora para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018.

Dicho debate y aprobación constituye por un lado una obligación constitucional, pero en muchos aspectos se ha transformado en un formalismo necesario, toda vez que en general nos limitamos a dar su aprobación sin posibilidad de un debate profundo y seguimos postergando las discusiones estructurales que demanda especialmente el federalismo en nuestro país.

Adelanto que acompañaré la aprobación del nuevo presupuesto que ya tiene sanción de la Cámara de Diputados, en el entendimiento de que ello resulta conveniente para contribuir a la gobernabilidad, ya que lo contrario implicaría adoptar una posición que evidentemente conllevaría un significativo obstáculo, ya que trae como consecuencia dejar sin presupuesto a la administración nacional para el año entrante, más aún si se tiene en cuenta que estamos a fin de diciembre de 2017, lo cual impide en la práctica nuestra actividad tendiente a incorporar modificaciones.

Sin perjuicio de ello, dejaré sentadas observaciones estructurales que se vienen repitiendo año a año, así como también algunas inconsistencias que presenta la normativa en tratamiento.

II.

En forma introductoria y como lo he hecho en anteriores ocasiones, considero que debo referirme al federalismo fiscal como cuestión que aparece aquí involucrada y debe ser resaltada. De acuerdo con la concepción de la Constitución histórica y la que nos rige luego de las reformas de 1860 y 1994, fuimos y seguimos siendo formalmente fieles al sistema federal de gobierno. Sin embargo, la opción política que adoptó la Constitución argentina en 1853, sobre la base del proyecto alberdiano, ha sufrido una metamorfosis que ha calado su esencia y llegó a deformar la concepción original.

El federalismo que instrumentó la Constitución argentina fue un sistema mixto, que habían propiciado, en su momento, dos de los miembros más ilustrados de la junta de gobierno que se instaló el 25 de mayo de 1810, como Mariano Moreno y Juan José Paso (así lo recuerda Alberdi en *Las bases*), al propugnar un sistema que combina la unidad del régimen nacional con las autonomías provinciales, a las que se reconoce plena aptitud para la elección de gobiernos propios y de sus instituciones.

Pero la experiencia política argentina ha transformado el equilibrio entre el poder nacional y los poderes provinciales sobre el que reposa todo federalismo en un sistema que, en los hechos, se presenta a menudo como un centralismo propio de un estado unitario que ha terminado por colocar a las provincias, en muchos aspectos, en una situación de gran dependencia política y económica respecto del gobierno nacional.

Un importante sector del pensamiento político argentino atribuye ese avance del gobierno central sobre las provincias al llamado presidencialismo, cuyo avance y abuso ha sido una constante a lo largo de nuestra historia. Éste también se presenta en materia fiscal.

Los constituyentes de 1994 se plantearon intentar una atenuación del presidencialismo y en lo que hace a esa materia se procuró reivindicar la corresponsabilidad tributaria, para lo cual se estableció un sistema de ley convenio para regular la coparticipación de impuestos entre la Nación y las provincias.

Existe doctrina que critica ese sistema por considerarlo complejo para su aprobación, toda vez que los consensos que requiere son difíciles de obtener, lo que ha determinado que hasta la fecha no se haya podido aprobar la ley convenio de coparticipación federal que exige la Constitución reformada.

Lo cierto es que el régimen de coparticipación de impuestos encuentra actualmente muchos vicios, que terminan afectando siempre a las provincias, contribuyendo ello también a limitar el federalismo.

En orden a lo expuesto, resulta ilustrativo considerar la política fiscal de nuestro país. En la Argentina conviven tres sistemas básicos de distribución de tributos que existen en los países en los que impera el régimen federal, que son: a) separación de fuentes impositivas entre la Nación y las provincias; b) concurrencia de

tributos y c) unificación de la recaudación y coparticipación federal de impuestos.

Sin perjuicio de ello, resulta que se advierte una marcada concentración en manos del nivel central de gobierno de las principales atribuciones tributarias.

Los impuestos cuya administración implican economías de escala importantes, es decir, los que gravan bases tributarias móviles, aparecen en cabeza del gobierno central (IVA, internos al consumo, impuestos progresivos a los ingresos como ganancias). Por su parte, los gobiernos provinciales y municipales tienen potestades tributarias en impuestos que gravan la riqueza no móvil, típicamente los impuestos a la propiedad inmobiliaria y automotores, entre otros.

Si bien existen fundamentos y objetivos de estabilización y redistribución que justifican esa distribución, en la práctica se advierte que ello ha generado una marcada concentración de poder en el gobierno central, en desmedro de las jurisdicciones locales.

Contribuye a ello el hecho de que las potestades en materia del gasto en manos del nivel local (provisión de seguridad, educación, salud, infraestructura, etcétera) son cada vez de mayor cuantía, superando incluso a los asignados al nivel central (defensa nacional, relaciones exteriores).

No existe un crecimiento correlativo de los ingresos naturales que tienen las provincias, que resultan de las potestades tributarias que mantienen y de la coparticipación federal. Además, se han creado progresivamente a nivel nacional diversos impuestos que han ido afectando la cuantía de los recursos coparticipables, ello siempre en desmedro de los ingresos provinciales.

El esquema descrito ha generado una fuerte centralización de la recaudación y descentralización del gasto, con importantes déficits de las finanzas locales, lo que a su vez ha repercutido en la necesidad de implementar un esquema de transferencias de la Nación a las provincias y de estas a sus municipios para su solución. Pero estas transferencias quedan, en la práctica, sujetas a decisiones discrecionales, discrecionalidad que obviamente ejerce el Poder Ejecutivo nacional.

A lo expuesto se suman los excesos en que ha incurrido el gobierno central en lo que hace al manejo de los recursos coparticipables. Tal situación ha quedado evidenciada en los recientes fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocidos como “Santa Fe”, “San Luis” y “Córdoba”, en los que se hizo lugar a los reclamos planteados por esas provincias tendientes al reintegro de recursos ilegítimamente detraídos por la Nación a las jurisdicciones locales.

Se trata por un lado de la detacción del 15 por ciento de la coparticipación federal efectuada por el Estado nacional a las provincias, que originalmente tuvo sustento en el acuerdo federal suscripto en el año 1992 (ratificado por ley 24.130) y prórrogas posteriores convalidadas por las provincias, pero que luego el Estado nacional prorrogó unilateral e ilegalmente a través del artículo 76 de la ley 26.078. Esa prórroga fue declarada

inconstitucional por la Corte, que ordenó también la devolución de los importes detraídos con sustento en ella. Pero ha subsistido en forma ilegal desde el año 2006, encontrándose incluso consolidada respecto de las provincias que no han planteado reclamos por efecto de la prescripción.

Si bien se ha arribado recientemente a acuerdos entre el gobierno federal y las provincias y la Ciudad de Buenos Aires (con excepción de la provincia de San Luis), no puede dejar de señalarse la irregular situación que la cuestión referida ha significado en el sistema de distribución de atribuciones tributarias entre tales jurisdicciones.

También aparece la detacción del 1,9 por ciento sobre los recursos coparticipables destinada a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dispuesta a través del decreto 1.399/01, el cual fue declarado inconstitucional por no contar con la aprobación de las provincias.

Con relación a ello, se debe destacar que el proyecto de presupuesto ahora en tratamiento dispone mantener la detacción prevista en el citado decreto 1.399/01, conforme el artículo 22, que dispone la prórroga para el ejercicio 2018 de lo dispuesto por el artículo 22 de la ley 27.341.

Existen además otras diversas distorsiones que también afectan el federalismo fiscal, como ha ocurrido por ejemplo con la utilización discrecional de los denominados aportes del tesoro nacional (ATN), instituto que se puede decir, teniendo en cuenta su utilización histórica, se encuentra en las antípodas del federalismo originario, en tanto ha llevado a que las provincias subsistan gracias a los recursos que le proporciona un centro unificado de recaudación fiscal.

Obviamente puede objetarse también la política del gasto, en particular en lo que hace a las propias jurisdicciones locales. Más allá de su inevitable descentralización, se advierte el funcionamiento del sistema existente que se caracteriza por un marcado desequilibrio de las potestades fiscales entre la Nación y las provincias, lo cual, sin desconocer las responsabilidades de las jurisdicciones locales, ha contribuido también a un descontrol del gasto público.

En definitiva, se puede sostener que nuestro país tiene un sistema tributario inorgánico e ineficiente, que se caracteriza por la existencia de regímenes legales y mecanismos que favorecen una concentración de atribuciones fiscales en el gobierno central, con directo perjuicio en las que les corresponden a las provincias, que quedan colocadas en una posición de subordinación frente a la Nación, que las obliga a acudir constantemente a esta para obtener los recursos necesarios para el financiamiento de sus funciones esenciales y ordinarias y, por supuesto, también para la asunción de gastos de mayor envergadura, como obras públicas.

Se trata de una situación que determina una constante afectación del federalismo, en tanto las provincias que-

dan en general disminuidas como entidades políticas preexistentes a la Nación.

La ley de presupuesto nacional viene a consolidar, año a año, todos los defectos señalados.

Si bien en el último tiempo se advierte la intención de avanzar en propuestas legislativas tendientes a superar los defectos referidos, en mi opinión resultan todavía insuficientes.

Es fundamental recrear un poder nacional más equitativo con las jurisdicciones locales y en ello tiene un papel fundamental la introducción de la correspondencia fiscal de las provincias en la participación de los impuestos que se recaudan, lo que exige perfeccionar el régimen de coparticipación con una mayor intervención del Congreso en lo relativo a la asignación y control del reparto.

Solo superando los defectos señalados, por todos conocidos, se propenderá seriamente al federalismo y con relación a ello debemos asumir un compromiso para avanzar en la aprobación del régimen pendiente.

III.

En el sentido indicado precedentemente, el Congreso de la Nación convirtió en ley tres proyectos fundamentales que tienen vinculación con la cuestión presupuestaria (reforma previsional, consenso fiscal y ley de responsabilidad fiscal). Las decisiones adoptadas implican un cambio en las políticas públicas que venía sosteniendo el oficialismo y tendrán un impacto directo en el proceso de ingresos y gastos del sector público nacional.

Sin embargo, el proyecto de presupuesto 2018 que estamos considerando (presentado en septiembre pasado) fue elaborado en base a parámetros que no contemplan las reformas introducidas y por lo tanto no resulta un instrumento adecuado para evaluar el plan de gobierno y gestionar la política fiscal del año próximo.

Podría incluso señalarse que se está vulnerando el principio presupuestario de exactitud o veracidad. Por ejemplo, el cambio de la fórmula de movilidad debería involucrar una reducción significativa del gasto público y, de ser así, este proyecto implicaría una sobreestimación de gastos.

Estimo importante dejar a salvo estas cuestiones, como así también la necesidad de contar con nuevos datos, estimaciones e información complementaria para ponderar el nivel de gasto que se corresponde con las reformas introducidas.

Con relación a lo expresado, se debe mencionar que el consenso fiscal firmado entre el gobierno nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, recientemente sancionado por la Cámara de Diputados (y que ya cuenta con la sanción de este Senado), contempla tres puntos que modifican el cálculo de los recursos y gastos del Estado nacional, las provincias y la caja de la ANSES:

1) El Estado nacional y las provincias se comprometen a derogar, desde el 1º de enero de 2018, el artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y se asigna el ciento por ciento de lo producido por el impuesto al cheque a la caja del ANSES. La modificación de estos impuestos implicará una reducción de 65.000 millones de pesos en la caja del ANSES (cláusulas I.b y I.c del consenso fiscal).

2) El Estado nacional asume el compromiso de otorgarle a la provincia de Buenos Aires una suma de 21.000 millones de pesos en 2018 y 44.000 millones de pesos en 2019 para alcanzar una compensación equivalente al fondo del conurbano. También se prevé compensar al resto de las provincias que cumplan con el consenso fiscal con un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos producto de la eliminación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y la modificación aplicada al impuesto al cheque (cláusulas II.a, II.e. y II.f del consenso fiscal).

3) El Estado nacional y las provincias se comprometen a modificar la fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen previsional público, ley 26.417 (cláusula I.j del consenso fiscal). Luego, la también aprobada ley de reforma previsional detalla los términos y condiciones de la modificación de la fórmula de movilidad prevista en la ley 26.417. La reforma el régimen previsional público implicará un ahorro del gasto de 60.000 millones de pesos para el gobierno nacional.

4) Para cumplir con la cláusula II.c del consenso fiscal, en el proyecto de presupuesto se autoriza al Poder Ejecutivo a endeudarse hasta un monto de 90.000 millones de pesos extras durante el año próximo.

En el cuadro siguiente se exponen los resultados de la derogación del artículo 104 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y la modificación en la asignación de lo producido por el impuesto al cheque.

Cuadro N° 1
Estimación del impacto presupuestario del consenso fiscal

DISTRIBUCIÓN	SITUACIÓN ACTUAL			IMPACTO MODIFICACIÓN GANANCIAS (ART104) Y CHEQUE			IMPACTO OTRAS COMPENSACIONES		DIFERENCIA PROYECTO "CONSENSO FISCAL" CON SITUACIÓN ACTUAL	
	GANANCIAS	CHEQUE	TOTAL	COPA 100% GANANCIAS	CHEQUE 100% AL	TOTAL	2.018	2.019	2.018	2.019
PROVINCIAS (SIN BS. AS.)	\$ 271.129	\$ 26.973	\$ 298.102	\$ 12.727	-\$ 26.973	-\$ 14.246	\$ 14.246		\$ 0	\$ 0
BUENOS AIRES	\$ 51.836	\$ 7.543	\$ 59.379	\$ 28.214	-\$ 7.543	\$ 20.671	\$ 21.000	\$ 44.000	\$ 41.671	\$ 64.671
ANSES	\$ 128.456	\$ 138.533	\$ 266.989	-\$ 128.456	\$ 63.205	-\$ 65.251			-\$ 65.251	
TESORO NACIONAL	\$ 190.841	\$ 28.689	\$ 219.530	\$ 87.515	-\$ 28.689	\$ 58.826	-\$ 35.246		\$ 23.580	
TOTAL	\$ 642.261	\$ 201.738	\$ 843.999	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	

Fuente: Elaboración propia en base a proyecto de consenso fiscal, proyecto de presupuesto 2018, ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos.

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, las modificaciones introducidas en el pacto fiscal desfinancian a la ANSES por el equivalente a 65.000 millones de pesos.

Asimismo, la reforma tributaria implicará una reducción de los recursos del ANSES en concepto de "aportes y contribuciones". Esta decisión podría operar positivamente en la generación de nuevos puestos de trabajo, pero en el corto plazo opera negativamente en el financiamiento de la ANSES. Tenemos que pensar en la sostenibilidad del sistema de seguridad social y los cambios abordados deberían haberse tratado en el Consejo de Sustentabilidad (creado por la ley 27.260) donde además podrían haber estado representados los sectores interesados.

En el punto II, inciso a), del acuerdo firmado con las provincias, el Estado nacional reconoce que el llamado consenso fiscal produce una disminución efectiva de los recursos transferidos automáticamente desde el gobierno nacional a las provincias. Para compensar dicha pérdida el gobierno nacional se comprometió a incrementar las transferencias presupuestarias a los gobiernos provinciales (por un monto equivalente a la pérdida). Es preocupante que se detallen los montos presupuestarios que remitirá el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires (21.000 millones de pesos en 2017 y 44.000 millones de pesos en 2018) y hasta el momento no contemos con el detalle de las transferencias para cada una de las provincias. De esta manera el Estado nacional sigue concentrando para sí la discrecionalidad en el uso de los fondos para asistir a las provincias.

En lo que hace a la nueva fórmula de movilidad y el gasto en seguridad social, resultante de la sancionada recientemente ley de reforma previsional, cabe men-

cionar que, cuando nos anticiparon las consideraciones sobre la preparación del proyecto de presupuesto 2018, en ningún momento se sugirió que podría modificarse la fórmula que indexa casi la mitad del gasto público. De hecho, a partir de una lectura del mensaje que acompaña al proyecto de presupuesto 2018, es posible interpretar que las proyecciones del gasto en seguridad social del próximo año contemplan los parámetros de actualización previstos en la ley 26.417, de movilidad, ahora sustituidos.

Ese régimen, instituido en 2009, contemplaba la actualización semestral de las prestaciones en dos momentos del año (marzo y setiembre) y se basaba en un índice que pondera en un 50 por ciento la variación de la recaudación y en un 50 por ciento la variación de los salarios. De aplicarse esta fórmula y considerando los últimos datos publicados, el haber mínimo aumentaría de 7.246 pesos a 8.260 pesos en el mes de marzo de 2018 (más 14 por ciento) y se elevaría a 8.979 pesos a fines de 2018.

La nueva fórmula de movilidad se basa en un 70 por ciento en la variación inflacionaria (IPC) y en un 30 por ciento en la variación de los salarios (RIPE) y se aplica en los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Con la nueva fórmula, las jubilaciones mínimas subirían apenas un 5,7 por ciento (a 7.659 pesos) en el mes de marzo próximo y se elevarían a 8.571 pesos a fines de 2018.

En el cuadro siguiente se hace un comparativo de ambos esquemas de ajuste.

Cuadro N° 2
Proyecciones del haber mínimo (fórmula actual vs. fórmula reforma previsional)

Evolución Haber Jubilatorio Mínimo - Año 2018 -				
Mes	Haber Mínimo Fórmula de Movilidad Vigente	Haber Mínimo Nueva Fórmula de Movilidad	Diferencia	
			Absoluta	En %
Enero	\$ 7.246	\$ 7.246	\$ 0	0,0%
febrero	\$ 7.246	\$ 7.246	\$ 0	0,0%
marzo	\$ 8.260	\$ 8.033	-\$ 252	-2,8%
abril	\$ 8.260	\$ 7.658	-\$ 602	-7,3%
mayo	\$ 8.260	\$ 7.658	-\$ 602	-7,3%
junio	\$ 8.260	\$ 8.050	-\$ 211	-2,6%
julio	\$ 8.260	\$ 8.050	-\$ 211	-2,6%
agosto	\$ 8.260	\$ 8.050	-\$ 211	-2,6%
septiembre	\$ 8.979	\$ 8.322	-\$ 657	-7,3%
octubre	\$ 8.979	\$ 8.322	-\$ 657	-7,3%
noviembre	\$ 8.979	\$ 8.322	-\$ 657	-7,3%
diciembre	\$ 8.979	\$ 8.571	-\$ 408	-4,5%
Acumulado Masa Anual	\$ 99.971	\$ 95.527	-\$ 4.444	-4,4%
Promedio Anual	\$ 8.331	\$ 7.961	-\$ 370	-4,4%

(i) Jubilados que ganan la mínima con moratoria (Incluye bono de \$ 375 en marzo)

El cambio de la fórmula impacta en las magnitudes del crédito previsto en los programas 16, “Prestaciones Previsionales”; 19, “Asignaciones Familiares”; 21, “Pensiones Ex-Combatientes”, y 30, “Pensión Universal para el Adulto Mayor” a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social y el programa 23, “Pensiones no Contributivas”, del Ministerio de Desarrollo Social.

Estos programas presupuestarios impactan en los futuros ingresos disponibles de 6,6 millones de jubilados y pensionados, a 8,5 millones de asignaciones familiares y 1,4 millones de pensiones no contributivas entre otros sectores beneficiarios.

Según el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo nacional, “los programas de transferencias de ingresos continuarán siendo una herramienta esencial para el

combate de la pobreza, asegurando un ingreso mínimo para quienes más lo necesitan”. En este sentido, se observa cierta incongruencia entre los objetivos planteados por el oficialismo y el cambio de la fórmula de movilidad. Se podría entender y hasta compartir la necesidad de realizar ciertos ajustes para relegar el objetivo de la distribución del ingreso a fin de fortalecer el objetivo de la estabilización macroeconómica y la acumulación productiva, pero no es serio decir que con esta medida no se afecta la distribución del ingreso.

Seguidamente se detallan las estimaciones en materia del gasto en seguridad social, del proyecto de ley de presupuesto 2018, comparadas con una estimación del “ahorro” del gasto resultante de la nueva ley de movilidad.

Cuadro N° 3
Estimación del impacto presupuestario de la reforma previsional.
Total país. Cifras en millones de pesos.

Programa	Institución	Proyecto de Presupuesto 2018	Nueva Estimación	Diferencia
Prestaciones Previsionales	ANSES	\$ 956.069	\$ 911.009	-\$ 45.060
Asignaciones Familiares	ANSES	\$ 171.036	\$ 162.807	-\$ 8.229
Ex - Combatientes	ANSES	\$ 7.030	\$ 6.699	-\$ 331
Pensión Universal para el Adulto Mayor	ANSES	\$ 14.897	\$ 14.194	-\$ 702
Pensiones no Contributivas	DESARROLLO SOCIAL	\$ 121.126	\$ 115.418	-\$ 5.709
		\$ 1.270.158	\$ 1.210.126	-\$ 60.032

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, el cambio de la fórmula de movilidad le permitiría al Estado nacional reducir los gastos en seguridad social en 60.000 millones de pesos respecto de lo presupuestado con la fórmula anterior.

En la provincia del Neuquén, el impacto de la nueva fórmula de movilidad implicará durante el año próximo

una reducción de 782 millones de pesos en los ingresos de los beneficiarios de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y pensiones no contributivas. En este cálculo no se considera el efecto del bono compensatorio, pero se estima que no llega a compensar ni el 7 por ciento.

Cuadro N° 4
Estimación del impacto presupuestario de la reforma previsional.
Provincia del Neuquén. Cifras en millones de pesos.

Programa	Institución	Proyecto de Presupuesto 2018	Nueva Estimación	Diferencia
Prestaciones Previsionales Reparto	ANSES	\$ 7.451	\$ 7.100	-\$ 351
Prestaciones Previsionales Moratorias	ANSES	\$ 4.795	\$ 4.569	-\$ 226
Asignaciones Familiares Activos	ANSES	\$ 1.274	\$ 1.213	-\$ 61
Asignaciones Familiares Pasivos	ANSES	\$ 187	\$ 178	-\$ 9
Asignaciones Familiares AUH	ANSES	\$ 1.064	\$ 1.013	-\$ 51
Ex - Combatientes	ANSES	\$ 65	\$ 62	-\$ 3
Pensión Universal para el Adulto Mayor	ANSES	\$ 212	\$ 202	-\$ 10
Pensiones no Contributivas	DESARROLLO SOCIAL	\$ 1.487	\$ 1.417	-\$ 70
		\$ 16.534	\$ 15.752	-\$ 782

Elaboración propia en base a datos del presupuesto 2018.

IV.

Quiero dejar sentadas también algunas observaciones frente al proyecto de presupuesto en tratamiento en lo que hace a aspectos a los que aludiré que, en mi opinión, deben ser especialmente considerados.

Por un lado, una cuestión que interesa específicamente a la provincia que represento. Se trata de la

consideración de programas de inversión que contempla el proyecto en tratamiento vinculados a la provincia del Neuquén. En el cuadro siguiente se hace un comparativo de las previsiones presupuestarias previstas para el año 2018 respecto de las contempladas en el corriente año.

Cuadro N° 5
Proyecto de presupuesto 2018. Programas de inversión seleccionados.
Provincia del Neuquén. Cifras en millones de pesos.

Institución	NEUQUÉN			
	2.017	2.018	Diferencia Nominal	Diferencia Real
Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano	\$ 526	\$ 272	-48,3%	-55,3%
Acciones del Programa "Habitat Nacion"	\$ 278	\$ 327	17,6%	1,7%
Dirección Nacional de Vialidad	\$ 787	\$ 630	-19,9%	-30,8%
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria	\$ 29	\$ 27	-6,9%	-19,5%
Ejecución de Obras en Jardines Infantiles	\$ 154	\$ 42	-72,7%	-76,4%
Recursos Hídricos	\$ 99	\$ 190	100,0%	65,2%
Referencia: para el cálculo de la variación en términos reales se prevé una inflación de 15,7 por ciento				

Las políticas de vivienda y obras viales se financian en una proporción significativa a través de transferencias presupuestarias del gobierno nacional. En los últimos años, uno de cada cuatro pesos ejecutados en inversión pública dentro de la provincia se financió con recursos provenientes del gobierno nacional. En cuanto a las iniciativas previstas para el año próximo, sumando los recursos adicionales contenidos en el detalle de las planillas A, B y C del artículo 16 de la ley, se verifica una preocupante disminución del crédito presupuestado para la provincia del Neuquén.

Para la provincia del Neuquén el crédito presupuestado en “Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano” se reduce de 526 millones de pesos (2017) a 272 millones de pesos (2018), lo que representa un ajuste del 55,3 por ciento en términos reales. Los créditos asignados a la provincia del Neuquén representan apenas el 1,1 por ciento de los créditos a ejecutar en todo el país.

Tampoco habrá mayores recursos en el Programa Hábitat Nación, cuyos créditos se mantienen constantes en términos reales.

En cuanto a los programas ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad, el crédito se reduce de 787 millones de pesos (2017) a 630 millones de pesos (2018), una caída del 30,8 por ciento en términos reales. En las planillas del presupuesto se eliminó el proyecto de pavimentación de la ruta 40, Neuquén-Malargüe. Los créditos de la Dirección Nacional de Vialidad asignados a la provincia del Neuquén representan apenas el 1,6 por ciento de los créditos totales del organismo.

Respecto a la obra hidroeléctrica Aprovechamiento Multipropósito Chibuido I, en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2018 no figura en las planillas anexas correspondientes, tal como figuraba en la planilla

B al artículo 11 de la ley 27.341 –presupuesto para el ejercicio 2017–. Ello refleja la falta de compromiso de parte del Estado nacional respecto de una obra de vital importancia para la provincia, la región y el país. Si bien resultaría encontrarse prevista en el proyecto en análisis en un gasto “por debajo de la línea”, entiendo que ello no resulta suficiente para su construcción y al día de la fecha no registra ningún tipo de ejecución presupuestaria.

La inversión en infraestructura cumple un rol estratégico en la sustentabilidad del proceso de crecimiento económico y también es una herramienta importante para fomentar la inversión privada, generar nuevos puestos de trabajo y mejorar la competitividad de la economía. No se ve reflejado en el presupuesto que la obra pública sea una política pública prioritaria.

Lo que se observa en la provincia del Neuquén es que se reduce la obra pública y al mismo tiempo aumenta la asistencia del gobierno nacional en concepto de aportes del tesoro nacional (ATN). En lo que va de 2017, las transferencias en ATN ascienden a 3.855 millones, siendo las provincias más beneficiadas Buenos Aires –620 millones–, Jujuy –460 millones– y Neuquén –403 millones–. Se dejan de aplicar los recursos en infraestructura para dilapidar en otros gastos.

Otra cuestión en la que quiero hacer especial hincapié es la relativa a los gastos en la función ciencia y técnica. En el cuadro siguiente se expone un comparativo de las cifras presupuestadas para esa función en los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

Ciencia y Técnica					2018 vs. 2017	
Institución	2.015	2.016	2017 (p)	2018 (p)	Diferencia Nominal	Diferencia Real
103 - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	\$ 6.339	\$ 8.818	\$ 11.271	\$ 12.905	14,5%	-1,0%
606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria	\$ 3.667	\$ 4.686	\$ 5.934	\$ 6.253	5,4%	-8,9%
105 - Comisión Nacional de Energía Atómica	\$ 2.871	\$ 3.502	\$ 4.969	\$ 4.602	-7,4%	-20,0%
336 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	\$ 2.635	\$ 3.487	\$ 3.900	\$ 3.935	0,9%	-12,8%
106 - Comisión Nacional de Actividades Espaciales	\$ 1.833	\$ 1.968	\$ 2.451	\$ 2.431	-0,8%	-14,3%
608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial	\$ 1.147	\$ 1.729	\$ 2.184	\$ 2.391	9,5%	-5,4%
906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud	\$ 434	\$ 564	\$ 772	\$ 805	4,3%	-9,9%
624 - Servicio Geológico Minero Argentino	\$ 201	\$ 269	\$ 505	\$ 399	-21,0%	-31,8%
108 - Instituto Nacional del Agua	\$ 158	\$ 197	\$ 246	\$ 281	14,3%	-1,2%
Otros	\$ 1.664	\$ 1.817	\$ 3.014	\$ 2.988	-0,8%	-14,3%
Total	\$ 20.949	\$ 27.038	\$ 35.247	\$ 36.990	4,9%	-9,3%
Ciencia y Técnica / PBI	0,36%	0,34%	0,34%	0,30%		

Referencias: En los créditos presupuestados 2018 de CNEA se incluyen \$ 1500 adicionales incorporados en dictamen de Diputados

Los gastos en la función ciencia y técnica tienen como objetivo la investigación para la obtención de nuevos conocimientos y aplicaciones y son fundamentales para mejorar las capacidades tecnológicas y mejorar la productividad de la economía. Para el año 2018 se asigna un crédito total de 36.990 millones de pesos en ciencia y técnica, que resulta un 9,3 por ciento inferior en términos reales al gasto previsto para el año 2017.

Con estos valores, los créditos de la función ciencia y técnica se reducen nuevamente en relación al PBI: pasó de representar 0,36 por ciento en 2015 a 0,34 por ciento en 2016; 0,34 por ciento en 2017 y 0,30 por ciento en 2018.

Uno de los organismos más afectados por el recorte en ciencia y técnica previsto en el proyecto en tratamiento fue la Comisión Nacional de Energía Atómica. Situación que quedó subsanada con la asignación, en el artículo 16, de un crédito adicional por 1.400 millones de pesos destinados a la construcción del reactor CAREM, fase 2, y 100 millones de pesos el Plan Nacional de Energía Nuclear.

Respecto a la asignación de recursos en ciencia y técnica dentro de la provincia del Neuquén, veo con preocupación el recorte en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, que pasa de 29 millones de pesos en 2017 a 27 millones de pesos en 2018. Un ajuste presupuestario de casi el 20 por ciento, medido en términos reales. El organismo cumple una función importante en cuanto a la investigación y desarrollo de proyectos relativos a la actividad frutícola. Así no se mejoran las condiciones para el desarrollo de una mayor productividad de las actividades agrícolas dentro de la provincia.

Finalmente hago mención en este punto a la materia educativa. Con relación a ello, una de las políticas públicas que se definieron como prioritarias fue que fue el apoyo a la niñez. En tal sentido, se planteó como objetivo la universalización de la educación desde los tres años y la construcción de 3.000 jardines maternales para el ejercicio 2019. Este programa fue subejecutado a lo largo de este año. Se cambió la meta de escuela por la meta de aulas. En el proyecto de presupuesto 2018 se reducen significativamente las partidas para “Ejecución de Obras en Jardines Maternales” dentro de la provincia del Neuquén, ya que pasamos de contar con un presupuesto de 471 millones de pesos (2017) a 42 millones de pesos (2018).

En desarrollo de educación superior, para financiar los gastos de funcionamiento e inversión de las universidades nacionales se fija para 2018 un crédito de 95.317 millones de pesos, lo que significa un aumento nominal de 26,1 por ciento respecto al de este año (75.562 millones de pesos). En lo que respecta a la Universidad Nacional del Comahue, se contempla para el año próximo un presupuesto de 2.069 millones de pesos, un aumento real de apenas más 5,7 por

ciento. Esta recomposición no solo se encuentra por debajo del aumento promedio previsto para el conjunto de las universidades nacionales (más 7,1 por ciento real), sino que ubica a la UNCO en el puesto 54 dentro de un total de 57 universidades (planilla anexa al artículo 12).

A modo general, señalo que no veo que el conjunto de las políticas públicas detalladas en el presupuesto nos permita crear las condiciones aptas para promover el desarrollo de la productividad y la diversificación de la estructura productiva. La política monetaria está generando daños serios sobre la actividad productiva y problemas de competitividad en algunos sectores, como el complejo frutícola.

No se observa que el foco esté puesto en el desarrollo tecnológico y en el fortalecimiento de programas que nos permitan proyectar un fortalecimiento de las obras de infraestructura o en el mejoramiento de la educación de los habitantes de la provincia. El presupuesto presentado es de tipo incremental. No hay promesas de realización de obras importantes ni construcción de escuelas o centros de salud. Se reducen significativamente los recursos destinados a obras de vialidad y a organismos de ciencia y técnica como el INTA y no hay plan para desarrollo del turismo.

Hay un recorte en el gasto de seguridad social que implicará una distribución más regresiva del ingreso, pero no está claro el objetivo hacia donde nos dirigimos con la implementación de este tipo de políticas. No está claro que con este presupuesto podamos generar políticas activas orientadas al logro de un proceso sostenido de crecimiento, el desarrollo y la distribución del ingreso.

V.

Por último, estimo pertinente hacer algunas salvedades referidas a las proyecciones macroeconómicas y la política de financiamiento contempladas en el proyecto en tratamiento.

Para el año 2018 se proyecta un crecimiento del PBI de 3,5 por ciento. Analizando los componentes de la demanda agregada se espera que la inversión sea el motor del crecimiento, ya que se proyecta una considerable expansión del 12 por ciento. Respecto a las otras variables, se estima una expansión de más 3,3 por ciento para el consumo privado, 1,3 por ciento para el consumo público y 5,6 por ciento para las exportaciones. Tal como se expone en el presupuesto, la reactivación de la economía presiona a las importaciones que crecerán 6,8 por ciento el año próximo.

Para este año se proyectó un superávit de la balanza comercial de 4.500 millones de dólares. No obstante, en lo que va del año las exportaciones crecieron apenas 2 por ciento contra un aumento de las importaciones de 20 por ciento. Este comportamiento implica un aumento del déficit comercial que acumula un saldo negativo de 7.600 millones de dólares hasta el mes de noviembre y cerraría 2017 en alrededor de 9.000 millones de dólares,

casi el doble que el déficit proyectado para este año en el proyecto de presupuesto.

Este desequilibrio de las cuentas externas aparece como un serio condicionamiento para el desenvolvimiento de la economía local. Este desequilibrio se vincula a su vez con la política monetaria que está llevando adelante el Banco Central. Se dice que el tipo de cambio se determina libremente en el mercado, pero una política de altas tasas de interés –para controlar la inflación– y el sobreendeudamiento del sector público en moneda extranjera contribuyen al atraso cambiario y afectan el desarrollo productivo.

Dado el límite al financiamiento monetario del déficit fiscal, la estrategia para cubrir el desequilibrio en las cuentas del sector público se basa en el aumento de la deuda. El stock de deuda del gobierno nacional creció de 240.000 millones de dólares a fines de 2015, a 275.000 millones de dólares a fines de 2016 y cerraría en 317.000 millones de dólares a fines de 2017. La deuda neta del sector público crece a razón de 3.000 millones de dólares netos por mes, de los cuales uno de cada tres dólares que ingresan tiene como destino la fuga de capitales.

En tales circunstancias, el aumento exagerado de la deuda pública, que no se aplica a la inversión productiva, puede generar volatilidad en la evolución del PBI y afectar el desarrollo de la política económica. Esto es así porque el pago de la deuda implicará en un futuro extraer cada vez más recursos fiscales y de divisas. Esto significará en los próximos años mayores impuestos o menores gastos. La principal forma de obtener divisas es exportar más de lo que importamos y el actual esquema de la política monetaria con altas tasas de interés no favorece la competitividad ni la obtención genuina de divisas provenientes de las exportaciones.

VI.

Para cerrar, señora presidente, reitero que acompañaré la aprobación del nuevo presupuesto que ya tiene sanción de la Cámara de Diputados, pero también dejo sentadas las salvedades e inconsistencias que han sido expuestas, las que reafirmo como en el mismo sentido que lo he hecho en anteriores ocasiones.

Quiero también dejar señalada otra vez mi profunda vocación federal y de una fuerte defensa por las autonomías provinciales y, dada la fuerte vinculación que estos principios guardan con el presupuesto nacional, una vez más reivindico la necesidad de transitar el verdadero camino del federalismo, proponiéndonos a tal efecto un debate estructural sobre la coparticipación en los tiempos que siguen.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GIACOPPO

Señora presidente:

Los proyectos que hoy ponemos a consideración en esta cámara para su votación son importantes para nuestra Nación.

La reforma tributaria, el presupuesto 2018 y la modificación del impuesto al cheque son iniciativas importantes para llevar a delante estos grandes cambios que venimos a proponer.

Estamos ante una reforma tributaria integral que hace décadas nos debemos en nuestra Argentina. Hemos acumulado años de leyes de emergencias, de decretos y cuanta normativa hubo que nos llevó a la obtención de un sistema tributario distorsivo y totalmente deficiente.

Este proyecto de reforma tiene puntos fundamentales, como incentivar la inversión, formalizar el mercado laboral, mejorar la competitividad, buscar un sistema tributario equitativo y luchar contra la evasión y así poder lograr una mayor inversión y aumentar las fuentes laborales dentro del marco de la formalidad.

El tratamiento de este proyecto de ley, que hoy vamos a votar, viene a consumir el anhelo que desde hace décadas pregona la política argentina con el fin de establecer la equidad que consagra nuestra Constitución Nacional, al mencionar que la igualdad es la base de los impuestos y de la carga pública.

Lo que hoy debatimos es el inicio del de un gran proceso de transformación como sociedad. Cambios que tienden a lograr mejoras en las condiciones de salud, de educación y sobre todo la igualdad de oportunidades, en búsqueda del bien común, como el bien de todos y no unos pocos.

Disminuir la presión tributaria nos lleva a incrementar la inversión, generando mayor cantidad de empleos privados, formalizando empleos no declarados y aumentando la competitividad y la productividad, en un marco de solvencia fiscal.

La incidencia de esta reforma tributaria para la provincia de Jujuy, a la cual represento, es importante ya que baja la presión sobre los emprendimientos productivos, ayudando a su crecimiento económico.

El impuesto al cheque, que hoy venimos a modificar de modo que deje de perjudicar a nuestras empresas y pase a ser instrumento de retención, es un impuesto distorsivo, creado en el 2001 y que aún hoy se mantiene.

Estas iniciativas que hoy se debaten en esta sesión apuntan esencialmente a obtener una economía sólida y una mejor productividad y generar un cambio cultural en la Argentina.

Manifiesto mi total adhesión a las iniciativas presentadas, las que van a generar grandes cambios en la Argentina. Es por ello que voy acompañar con mi voto estas iniciativas.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA VARELA

Señora presidente:

Hoy estamos votando otra de las reformas clave que necesitamos para continuar profundizando el camino que nos llevará a la generación del empleo y la reducción de la pobreza en la Argentina.

Sin ninguna duda, a partir de esta reforma gradual, tendremos un sistema tributario cada vez más justo y equitativo.

Es imposible llevar a un país por la senda del crecimiento cuando existe presión tributaria que no hace más que poner freno a incentivos para que las empresas inviertan y ofrezcan empleo genuino.

Algunas medidas importantes que me parece importante mencionar, que van en esta línea, son los incentivos para la reinversión de utilidades. Con la reforma que estamos votando hoy regirá para todas las sociedades la reducción del impuesto a las ganancias de 35 por ciento a 25 por ciento y la devolución anticipada de saldos de IVA por las inversiones que hagan las compañías a largo plazo. También se exceptúa de pagar el impuesto a las ganancias a los inversores no residentes, salvo excepciones muy puntuales.

Necesitamos mejorar los impuestos que cobramos para poder prolongar este desarrollo a partir de la generación de mayor inversión, eficiencia y competitividad.

Por otro lado, tener un sistema tributario de bases amplias y generales, sin exenciones ni tratamientos preferenciales, facilita la recaudación y al mismo tiempo evita la evasión.

Los impuestos son el sustento para la estructura del Estado, por lo tanto, la evasión y los gravámenes regresivos contribuyen a mantener e, incluso, aumentar la desigualdad social. Por eso con esta reforma apuntamos a revertir, progresivamente, esta situación y que haya mayor equidad social, impuestos más progresivos y cada vez menos elusión tributaria.

Nuestro gobierno, sin duda, acompañará esta reforma con un cambio de cultura referido al pago correcto de las obligaciones basado en el ejemplo de un honesto, transparente y eficiente manejo del dinero público, haciéndolo visible a todos los ciudadanos. Después de todo, abonar lo que corresponde es lo que permite la existencia de un Estado, pero el ejemplo debe comenzar primero desde la dirigencia política y ese es el cambio que empezamos y queremos consolidar en Cambiemos.

No quiero dejar de destacar el gran trabajo y la gran predisposición que han tenido los gobernadores provinciales para que este gran acuerdo fuera posible, pacto que incluye la ley de consenso y responsabilidad fiscal, normas clave para cumplir, también, con las metas que llevarán a la reducción del déficit en la Argentina.

Concluyo mi alocución, acompañando la reforma tributaria con mi voto positivo e impulso a mis pares a contribuir con su voto para una Argentina cada vez más justa, equitativa, con más empleo genuino y, como consecuencia, con cada vez menos pobreza.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA VERASAY

Señora presidente:

Nos encontramos hoy en sesión para dar cumplimiento artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacio-

nal, debatiendo el dictamen en mayoría del proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, incorporando al debate la reforma tributaria venida en revisión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Empecé estas palabras resaltando la formalidad con una marcada intención política. Es que la coalición política gobernante, Cambiemos, tiene en su programa político un fuerte compromiso con la institucionalidad consagrada en la Constitución. De ahí proviene nuestra legitimidad de origen, pero hay algo que tal vez algunos actores políticos no han comprendido, este gobierno además tiene legitimidad de ejercicio, ratificado por la ciudadanía y eso le resulta inaceptable a la rancia coalición del miedo que hizo estallar su furia durante el debate en diputados. Rancia porque con el tiempo va adquiriendo un desagradable tufillo antisistema. Esta coalición, mezcla ideología de Laclau y Trotsky, entre sus objetivos busca construir un oficialismo a la medida de sus necesidades políticas. La coalición del miedo necesita de represores, ajustes salvajes, mártires. La coalición del miedo necesita que se cumpla el apotegma: “mientras peor, mejor”. No nos juzgan por lo que hacemos, decimos o proponemos, nos juzgan por cómo desearían y necesitan que seamos.

Y en esto creo que no pueden evadir su responsabilidad los diputados que embistieron contra la Presidencia para impedir el normal funcionamiento de una Cámara del Poder Legislativo. No hay lugar para la hipocresía de pedir que por los sucesos que acontecían en la plaza de los Dos Congresos se levantara la sesión, como si la movilización y la atropellada en el recinto fueran actos independientes, no relacionados, como si el aparato político que propició la movilización no fuera el mismo que trababa el debate. Nos subestimaron y por eso están más aislados, sus métodos violentos a la vista y quedan expuestos ante los ojos de millones de argentinos que no quieren verse en ese espejo de acción política violenta. Como decía, nos subestimaron, pero estamos aquí de pie, juntos, para cumplir el mandato popular. El club del helicóptero está condenado al fracaso.

Desde luego tenemos varios problemas que enfrentar y resolver, en muchos incluso hay opciones diferentes porque nadie tiene la vara mágica de la solución de los problemas argentinos, pero estamos transitando un camino que apuesta al gradualismo y que nos lleva a la encrucijada de tener que encarar objetivos de política económica muchas veces contradictorios de manera simultánea. Y acá hay lugar para el debate: debemos propiciar el crecimiento y el desarrollo mientras bajamos la inflación, debemos mejorar el sistema tributario y adecuar la presión tributaria sin desfinanciar al Estado, debemos disminuir el ritmo del endeudamiento sin un ajuste salvaje. Es un desafío gigantesco que requiere de la construcción de consensos para avanzar, por eso quiero poner especial énfasis en resaltar el acuerdo que alcanzó el Poder Ejecutivo nacional con los gobernadores. Este acuerdo, enriquecido con aportes que se hicieron en este cuerpo, fue la base para empezar a

transitar un camino que nos permita remover trabas para reimpulsar el federalismo y alcanzar una estructura impositiva más justa.

Reitero, como lo he hecho en anteriores intervenciones, poniendo el valor la constitución de la Comisión de Sustentabilidad Previsional que nos permita alcanzar soluciones de fondo a una cuestión que nos preocupa a todos. En el caso de la reforma tributaria también hemos avanzado, tenemos en el horizonte un sistema superior al que estamos modificando; sabemos que no es suficiente, sabemos que es imprescindible que las reiteradas políticas de acumular parches, que se sostuvieron durante muchos años, terminaron generando un sistema disfuncional y deben ser sustituidas por cambios con el mayor consenso posible para asegurar el funcionamiento del Estado y el estímulo al desarrollo inclusivo, para enfrentar una pobreza y una indigencia que ofenden a la democracia de los argentinos y son inadmisibles para Cambiemos. También en este punto quiero poner valor la convocatoria del señor presidente de la República cuando el 30 de octubre nos citó a alcanzar consensos y a pensar en “soluciones duraderas” y la nueva ley de coparticipación que la Constitución Nacional fijaba para 1996, se nos presenta como un desafío extraordinario hacia adelante.

Nos encontramos con la voluntad política del oficialismo y los sectores más representativos de la oposición para encontrar una agenda razonable, para ponernos en camino de cumplimentar el requisito constitucional, una ley de coparticipación equitativa, solidaria, funcional y con transferencias automáticas. Estoy segura de que en este camino también nos encontraremos alcanzando acuerdos con la provincia de San Luis.

El dictamen de mayoría sobre reforma tributaria tiene, entre otros, los siguientes ejes:

- Las empresas no pagarán aportes patronales hasta una remuneración bruta de 12.000 pesos para 2022, en una escala que comienza el año próximo con 2.400 pesos, sigue en 2019 con 4.800 pesos, en 2020 con 7.200 pesos y en 2021 con 9.600 pesos.

- Se fijan incentivos para la reinversión de utilidades –se reduce la alícuota del impuesto a las ganancias de 35 por ciento a 25 por ciento– y se establece la devolución anticipada de saldos de IVA por las inversiones que hagan las compañías a largo plazo. Esto regirá para las sociedades, incluidas las llamadas SAS.

- Se crea un impuesto para la renta financiera a las personas físicas con la alícuota del 5 por ciento para depósitos bancarios, títulos públicos, ON, cuotas partes de fondos comunes de inversión, títulos de deuda de fideicomisos financieros, bonos y demás valores, en moneda nacional sin cláusula de ajuste, y, en cambio, si están en dólares o tienen cláusula de ajuste, la tasa es de 15 por ciento.

- Se exceptúa de pagar el impuesto a las ganancias a los inversores no residentes, salvo en el caso que hayan invertido en LEBAC emitidas por el Banco Central de la República Argentina.

- Se reduce del 21 al 10,5 por ciento el IVA de los pollos, cerdos y conejos con el fin de permitir que bajen los precios de esos productos alimenticios de neto corte proteico y que son claves en la canasta familiar.

- Se gravará con un IVA del 21 por ciento a los servicios digitales prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país.

- En el caso de las bebidas espirituosas, la alícuota pasó del 29 por ciento al 26 por ciento. Se dispuso además que las bebidas que contengan cafeína y taurina (energizantes) tributen un 10 por ciento.

También se aceptaron propuestas de la oposición, como la corrección del artículo 49 del proyecto de reforma. En el caso de las indemnizaciones por despido y retiros voluntarios solo deberán abonar el impuesto aquellas personas que se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas y deberán pagar por las sumas que se generan exclusivamente con motivo de su desvinculación laboral que excedan los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral, aplicable para despidos sin causa cuando esas sumas tengan su origen en retiros voluntarios o procesos similares.

Se eliminaron los artículos 23 y 24 de la reforma, que proponían gravar con el impuesto a las ganancias a cooperativas y mutuales destinadas a cuestiones financieras.

Respecto de los impuestos internos a distintas producciones que proponía el proyecto de ley, en el caso de Mendoza se excluyó al vino del gravamen.

Para el caso del impuesto a las cervezas, se dispuso limitar la suba del impuesto al 14 por ciento, del 17 por ciento que estipulaba el proyecto original. Para las artesanales, el gravamen se mantuvo en el 8 por ciento. Las de 1,2 de graduación no pagarán.

Sobre el presupuesto, quiero hacer mención a un cambio que resulta necesario, citando al ministro de Interior: “La emergencia económica empieza a tener cada vez menos sentido, con una economía que crecerá dos años de manera consecutiva...”, y continuaba: “Como cada vez vamos a ser más precisos con nuestras proyecciones y respetar el presupuesto, la ley de emergencia económica ya no es prioridad”.

Gobernaron doce años con ley emergencia económica evitando dar debates de fondo, usando instrumentos extraordinarios para tomar decisiones y, mientras tanto, se proclamaba el fortalecimiento de la economía, el fin de la pobreza, etcétera, entre otros encantos del relato. Por eso hoy resulta serio y responsable discutir de presupuesto, porque habrá apego entre la norma y la ejecución tal como era el espíritu de los constituyentes.

Este presupuesto proyecta:

- Un crecimiento del 3,5 por ciento del PBI, un ritmo mayor al 3 por ciento calculado para este año.

- La inflación promedio proyectada es del 15,7 por ciento, mientras que la meta del Banco Central de la

República Argentina será entre el 8 y el 12 por ciento anual.

- El valor del dólar promedio es de 19,3 pesos.
- El déficit fiscal primario proyectado es del 3,2 por ciento, frente al 4,5 por ciento de este año, con ingresos que crecerán un 19 por ciento y el gasto primario un 14,8 por ciento. A su vez, el gasto de capital crecerá un 17,2 por ciento.

- El componente del gasto primario que más crecerá en 2018 son las prestaciones sociales y se destinarán 1.561.817 millones de pesos, siendo 22,1 por ciento superior a lo erogado en 2017. Este rubro representa un 65,4 por ciento del gasto primario.

- Una expansión del consumo privado del 3,3 por ciento.

- El aumento de la inversión calculada es de un 12 por ciento, para llegar a una relación inversión sobre el PBI del 17,1 por ciento.

- La ratio de deuda pública con el sector privado y organismos internacionales no superaría en los próximos años el 38 por ciento del PBI y comenzaría a descender a partir de 2021. La deuda se estabilizaría en 36 por ciento del PBI y los intereses en 1,8 por ciento.

- El gasto total en infraestructura pública será de 435.000 millones de pesos, lo que representa un 3,5 por ciento del PBI.

- El proyecto incluye también el llamado revalúo fiscal, que está centrado en la inflación y en la falta de ajuste de los valores de los bienes de uso en los balances de empresas y viene a reemplazar el llamado ajuste por inflación.

Otro punto a poner en relieve es que en el tratamiento del presupuesto 2018 los gobernadores lograron sumar unos 10.000 millones de pesos adicionales para la realización de obras públicas en los próximos tres años.

Otro de los cambios fue el financiamiento a las trece cajas jubilatorias que no fueron transferidas a la ANSES y son deficitarias, un compromiso asumido en la ley de reparación histórica nunca cumplido del todo.

Recordemos que el consenso fiscal firmado el 16 de noviembre establece obligaciones y compromisos de parte de la Nación y de las provincias. Los gobernadores, salvo el de San Luis, aceptaron la eliminación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Toda la recaudación ingresará en la masa coparticipable. La cuota del 20 por ciento que perderá la ANSES con este cambio será compensada con el ciento por ciento de lo recaudado por el impuesto al cheque, que será prorrogado hasta 2022, un punto clave del consenso mencionado. Este impuesto al cheque podrá ser computado a cuenta de ganancias, a razón de un 20 por ciento por año hasta su derogación dentro de cinco años.

Señora presidente: para ir terminando, quiero traer las palabras del poeta Antonio Machado que reflejan el tiempo que nos ha tocado, cuando dice:

*Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.*

*Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.*

No vamos a volver atrás, vamos a cumplir el mandato popular.

Sra. Presidente. – A continuación, procederemos a votar en forma individual cada uno de los dictámenes de mayoría. Puede leer, por favor, señor secretario.

Sr. Secretario (Tunessi). – Dictamen en el proyecto de ley revisión sobre reforma al sistema tributario argentino. Orden del Día N° 1.057/17 y C.D.-82/17.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador Aguilar.

Sr. Aguilar. – Señora presidente: es para consultar a la bancada del oficialismo si se van a aceptar modificaciones al proyecto de reforma tributaria, específicamente, en cuanto a la diferenciación de aportes patronales por regiones. Y al ITC, perdón. El senador Mario Pais también me consulta con respecto a eso.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Bullrich.

Sr. Bullrich. – No se van a aceptar modificaciones, señora presidente.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Lovera.

Sr. Lovera. – Señora presidente: simplemente, es para saber si se va a votar en general y, después, capítulo por capítulo.

Sra. Presidente. – Título por título.

Sr. Lovera. – Gracias, señora presidente.

Sra. Presidente. – Primero, vamos a votar la autorización de inserciones y abstenciones a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.

Tiene la palabra la señora senadora Crexell.

Sra. Crexell. – Señora presidente: es para solicitar autorización para abstenerme en este proyecto que se está tratando ahora.

Sra. Presidente. – ¿Hay alguna otra abstención? No.

Hacemos la autorización para la abstención de la senadora Crexell a mano alzada.

—Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. — Aprobado.

Vamos entonces ahora a votar en general.

Sr. Secretario (Tunessi). — Orden del Día N° 1.057/17 y C.D.-82/17. Reitero: dictamen en el proyecto de ley venido en revisión sobre reforma al sistema tributario argentino.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). — Resultan afirmativos, 52 votos; negativos, 15 votos y una abstención.

—El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sra. Presidente. — Se deja constancia de que los artículos 146, 147 y 150 fueron votados por la mayoría absoluta de los miembros de esta Cámara, de conformidad con el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional. Teníamos que hacer la aclaración.

Ahora, vamos a votar en particular el título I.

Sr. Secretario (Tunessi). — El título I comprende los artículos 1°...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. — ¿No van a aceptar modificaciones en ningún título?

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. — Lo que está haciendo es buscar de qué artículo a qué artículo va cada título. Nada más.

Sr. Secretario (Tunessi). — Del artículo 1° al artículo 86.

Sr. Pichetto. — Presidenta: si no van a aceptar modificaciones, votemos.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. — Es que algunos querían votar en contra algunos artículos.

Vamos a votar el título I.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). — Título I: 52 votos afirmativos, 15 negativos, una abstención.

—El resultado de la votación surge del acta correspondiente.²

Sra. Presidente. — En consideración el título II. Si alguno de ustedes tiene algún artículo que no quiere votar, lo dice a viva voz.

Sr. Secretario (Tunessi). — Hay senadores que anunciaron que hay artículos en particular que los quieren votar en contra, entonces la decisión era...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. — ¡Que quien quiera votar en contra, lo diga y listo, presidenta!

Sra. Presidente. — Es lo que estoy pidiendo, senador. Que cada uno...

Sr. Pichetto. — ¿Nos van a tener que explicar cómo se vota? Diga los artículos y votamos.

Sra. Presidente. — Pero estamos haciendo eso, senador: de qué artículo a qué artículo va cada título. Perdóneme, pero estamos haciendo lo que usted dice.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. — Por favor, silencio.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sra. Presidente. — Senador Snopek.

Sr. Snopek. — Marque qué artículo abarca cada título. Yo voto en contra el artículo 103.

Sra. Presidente. — Eso estamos haciendo

Sr. Secretario (Tunessi). — Título II: del artículo 87 al artículo 97. Es el título II de la ley.

Sr. Snopek. — En el título III, voy a votar en contra el artículo 103.

Sr. Secretario (Tunessi). — El título III es del artículo 98 al 128.

El título IV...

Sra. Presidente. — No. Vamos uno por uno. Vamos a votar el título II.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. — Perdón. Déjenme ordenar. ¿En el título II hay alguien que vaya a votar un artículo en contra?

Sr. Cobos. — Seguro, los 15 que votaron en contra en general...

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

Sra. Presidente. – No. Eso ya lo sé, pero estoy diciendo si hay otros.

Bueno, vamos a hacer la votación entonces.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Senador: déjeme que conduzca yo, porque si no son setecientas voces.

Vamos a votar el título II, por favor.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos, 52 votos; negativos, 15 votos y una abstención.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sra. Presidente. – Vamos al título III, que abarca los artículos 98 a 128.

Sra. Boyadjian. – Presidenta...

Sra. Presidente. – Sí.

Sra. Boyadjian. – En el título III, yo voto negativamente los artículos 122, 123 y 128.

Sr. Secretario (Tunessi). – En los artículos 122, 123 y 128 se consigna el voto negativo de la senadora Boyadjian.

Sr. Snopek. – Pido la palabra.

Sra. Presidente. – Senador Snopek.

Sr. Snopek. – Yo voto por la negativa los artículos 103, 104, 105 y 106.

Sra. Presidente. – Del 103 al 106 el senador Snopek.

Sr. Snopek. – Y el 107 también.

Sra. Presidente. – Vamos a votar, entonces sí, el título III.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 51 votos por la afirmativa, 16 votos por la negativa y una abstención y se consignan los votos negativos de los dos senadores en los artículos pertinentes.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.²

Sra. Presidente. – Queda aprobado el título III. Se va a votar el título IV.

Sr. Secretario (Tunessi). – Artículos 129 a 148.

Sra. Presidente. – Se va a votar el título IV.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el título IV se registran 51 votos por la afirmativa, 16 por la negativa y una abstención.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.³

Sra. Presidente. – Queda aprobado el título IV. Se va a votar el título V.

Sr. Secretario (Tunessi). – Artículos 149 a 164.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 52 votos por la afirmativa, 15 votos por la negativa y una abstención.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.⁴

Sra. Presidente. – Queda aprobado el título V. Se va a votar el título VI.

Sr. Secretario (Tunessi). – Artículos 165 a 173.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Perotti.

Sr. Perotti. – Señora presidente: como no se aceptan modificaciones, dejo sentado que voto en forma negativa el artículo 165.

Sra. Presidente. – Se consigna el voto negativo.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 51 votos por la afirmativa, 16 votos por la negativa y una abstención.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.⁵

Sra. Presidente. – Queda aprobado el título VI. Se va a votar el título VII.

Sr. Secretario (Tunessi). – Artículos 174 a 247.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Martínez.

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

³ Ver el Apéndice.

⁴ Ver el Apéndice.

⁵ Ver el Apéndice.

Sr. Martínez (E. F.). – Señora presidente: es para hacer la misma observación que hizo el diputado Pablo Tonelli en oportunidad del tratamiento en la Cámara de Diputados.

Por ley 27.423, que en definitiva es el código arancelario para abogados que litigan tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el fuero federal, promulgada el 21 de diciembre, quedó en claro en su artículo 3º que los honorarios serán de propiedad exclusiva del profesional que los hubiera devengado.

El doctor Tonelli vio contradictorio esto con la modificación que introduce el artículo 98 de la ley 11.683 y el artículo 217 del proyecto, en el sentido de que la Administración Federal de Ingresos Públicos será la que pueda distribuir discrecionalmente ese honorario que pertenece, como le digo, a los abogados de la AFIP.

Como pertenezco a un bloque y no pretendo que me escuchen y, en todo caso, me iré por las mías, votaré afirmativamente el artículo, pero dejo sentada la observación para que a la hora de que el Poder Ejecutivo deba promulgar la ley, tenga especialmente en cuenta la contradicción que hemos señalado, tanto en la Cámara de Diputados como en este momento.

Sra. Presidente. – Gracias, señor senador. Se va a votar el título VII.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 52 votos por la afirmativa, 15 votos por la negativa y una abstención.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sra. Presidente. – Queda aprobado el título VII.

Se va a votar el título VIII.

Sr. Secretario (Tunessi). – Artículos 248 a 278.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el título VIII, 52 votos afirmativos; negativos, 15 votos y una abstención.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.²

Sra. Presidente. – Título IX.

Sr. Secretario (Tunessi). – Artículos 279 y 280.

Sra. Presidente. – Se va a votar.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el título IX resultan 52 votos afirmativos, 15 negativos y una abstención.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.³

Sra. Presidente. – Título X.

Sr. Secretario (Tunessi). – Son los artículos 281 a 295.

Sra. Presidente. – Se va a votar el título X.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Mayans. – Faltan artículos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Afirmativos, 52 votos; negativos, 15 votos y una abstención.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.⁴

Sr. Secretario (Tunessi). – Señora presidenta: me equivoqué. El título X son los artículos 281 a 301, porque tiene el capítulo I, capítulo II y capítulo III. Es el revalúo impositivo, contable y otras disposiciones.

Sra. Presidente. – Okay.

Vamos al título XI.

Sr. Secretario (Tunessi). – Artículos 302 a 307.

Sra. Presidente. – Se va a votar.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el título XI resultan 52 votos afirmativos, 15 negativos y una abstención.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.⁵

Sra. Presidente. – Ahora vamos al título XII.

2 Ver el Apéndice.

3 Ver el Apéndice.

4 Ver el Apéndice.

5 Ver el Apéndice.

1 Ver el Apéndice.

Sr. Secretario (Tunessi). – Artículos 308 a 312.

Sra. Presidente. – Se va a votar.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el título XII: afirmativos, 52 votos; negativos, 15 votos y una abstención.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sra. Presidente. – Título XIII.

Sr. Secretario (Tunessi). – Artículos 313 a 318.

Sra. Presidente. – Se va a votar.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 52 votos, negativos 15 votos y una abstención.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.²

Sra. Presidente. – Es ley. Entonces, ahora pasa al Poder Ejecutivo nacional.

Vamos con el otro dictamen.

Sr. Secretario (Tunessi). – Dictamen en el proyecto de ley en revisión del presupuesto general para la administración nacional para el ejercicio 2018. Es el C.D.-80/17.

Sra. Presidente. – Se va a votar la autorización de inserciones y abstenciones. ¿Va a haber abstenciones en esto? ¿Alguna abstención? No hay abstenciones.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobada.

Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Pido que votemos en general y en particular y escuchamos a todos los senadores que tienen observaciones sobre los artículos. Los temas que son concretos, que los puntalicen y dejen constancia.

Sra. Presidente. – ¿Usted está proponiendo que hagamos la votación en general y en particular?

Sr. Pichetto. – Estoy proponiendo lo que acabo de proponer, presidenta.

Sra. Presidente. – Perfecto.

Se va a votar en general y en particular...

Sr. Pichetto. – Deberíamos haberlo hecho con la ley anterior, por un sentido de práctica parlamentaria.

Sra. Presidente. – Bueno, lo voy a tomar.

Se va a votar el dictamen en general y en particular. Quien quiera hacer alguna acotación sobre algún artículo que lo haga anteriormente.

Senador Mayans.

Sr. Mayans. – Primero, tiene que votar en general y, después, en particular cada uno dirá cuál es el capítulo o artículo. Primero en general.

Sr. Pichetto. – Ponga a votación mi moción.

Sra. Presidente. – Es lo que estoy haciendo.

Sr. Pichetto. – Tenemos posiciones encontradas con el senador Mayans...

Sra. Presidente. – Si se pusieran de acuerdo antes, sería mejor.

Se va a votar a mano alzada si vamos a votar primero en general y en particular en forma conjunta.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Vamos a votar en general y en particular en forma conjunta.

¿Alguien tiene alguna acotación sobre algún artículo?

Tiene la palabra el senador Mayans.

Sr. Mayans. – Voto negativamente los artículos 32, 33, 37, 38, 42 y 43, sobre el tema del crédito público.

Sra. Presidente. – Perfecto. Se consigna. Senadora Crexell: tiene la palabra.

Sra. Crexell. – En el mismo sentido que el senador Mayans, voto en contra de esos artículos.

Sra. Presidente. – Los mismos artículos que el senador Mayans.

Senadora González.

Sra. González (M. T. M.). – Los mismos artículos que el senador Mayans.

Sra. Presidente. – Los mismos artículos.

Senador Snopek: tiene la palabra.

Sr. Snopek. – Voy a pedir una inserción sobre este artículo, porque en el artículo 32 ya hay una ley de creación de la comisión para el estudio de la deuda pública. Está constituida en la Cámara de Senadores. Figura en

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

la página. Hay senadores que ya no están. La Cámara de Diputados ni siquiera la tiene como comisión. Creo que esa es la responsabilidad que tiene el oficialismo de hacerla realidad, si quiere transparencia en el endeudamiento y mostrarle a la comunidad cómo endeuda al país. Creo que eso tiene que estar. Y es la obligación que tiene el oficialismo de transparentar el endeudamiento de la República Argentina.

Sra. Presidente. – Gracias, senador Snopek. Senador Luenzo.

Sr. Luenzo. – También voto negativo en los artículos que ha mencionado el senador Mayans.

Sra. Presidente. – Vota en el sentido del senador Mayans.

Senador Perotti.

Sr. Perotti. – Coincido con el planteo del senador Snopek con respecto a la constitución de la comisión, como lo planteé en mi intervención. Y quiero dejar clara mi disidencia en el presupuesto de ciencia y tecnología, como mencioné en mi exposición. Votaré en forma negativa en particular los artículos 95 y 96.

Sra. Presidente. – Muy bien.

Las inserciones ya están autorizadas.

Se va a votar en general y en particular.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 54 votos afirmativos, 14 negativos y cero abstenciones. Se deja constancia de los artículos que se votaron negativamente y que se mencionaron.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sra. Presidente. – Se comunicará al Poder Ejecutivo nacional.

Ahora vamos a votar el tercer dictamen.

Sr. Secretario (Tunessi). – Dictamen en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica el artículo 3° de la ley 25.413, de competitividad de impuestos y débitos en las cuentas bancarias y otras operatorias, sobre destino de los recursos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Sra. Presidente. – ¿Hay alguna abstención?

Sra. Crexell. – Yo.

Sra. Presidente. – ¿En todo?

Bueno, la senadora Crexell deja constancia de su abstención.

Se va a votar a mano alzada la autorización de la abstención y también de las inserciones.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.

Ahora vamos a votar en general y en particular.

¿Hay algún comentario sobre los artículos?

Entonces, se va a votar en general y en particular el dictamen.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 65 votos afirmativos, 2 negativos y una abstención.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.²

Sra. Presidente. – Se deja constancia de que los artículos 1°, 4°, 5° y 6° fueron votados por la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, de conformidad con el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional.

Se comunicará al Poder Ejecutivo nacional.³

12

COMISIÓN BICAMERAL ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE LA DESAPARICIÓN, BÚSQUEDA Y OPERACIÓN DE RESCATE DEL SUBMARINO ARA “SAN JUAN”

(C.D.-79/17.)

RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL DEPORTE (C.D.-83/17.)

Sra. Presidente. – Corresponde considerar, sin debate, como acordamos al principio, el proyecto de ley en revisión por el que se crea la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operación de Rescate del Submarino ARA “San Juan” y el proyecto de ley en revisión por el que se sustituyen diversas disposiciones de la ley 26.912 y sus

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

³ Ver el Apéndice.

Proyecto: CD - 80/17**Descripción:** SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR**Tipo Quorum:** MAS 1/2 MC**Fecha:** 27/12/2017 21:32:41**Acta :** 15**Mayoría:** MAS 1/2**LEGISLADORES PRESENTES****Miembros del cuerpo:** 72**Votación:** NOMINAL**Presidente:** MICHETTI, Gabriela**Presentes:** 68 **Ausentes:** 4 **AMN:** 35

Afirmativos:	54
Negativos:	14
Abstenciones:	0
Resultado:	AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Aguilar, Eduardo Alberto	NO	53	37. Lovera, Daniel Aníbal	SI	5
2. Almirón, Ana Claudia	NO	57	38. Luenzo, Alfredo Héctor	SI	29
3. Alperovich, José Jorge	SI	16	39. Marino, Juan Carlos	SI	20
4. Basualdo, Roberto Gustavo	SI	64	40. Martínez, Ernesto Félix	SI	68
5. Blas, Ines I.	SI	11	41. Martínez, Julio	SI	44
6. Boyadjian, Miriam Ruth	SI	70	42. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
7. Brailard Poccard, Pedro	SI	65	43. Menem, Carlos Saúl	AUSENTE	
8. Brizuela y Doria, Ines	SI	43	44. Mera, Dalmacio	SI	17
9. Bullrich, Esteban	SI	26	45. Mirkin, Beatriz Graciela	SI	52
10. Caserio, Carlos Alberto	SI	30	46. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
11. Castillo, Oscar Aníbal	SI	8	47. Odarda, María Magdalena	NO	71
12. Catalán Magni, Julio César	SI	55	48. Ojeda, José Anatolio	SI	34
13. Catalfamo, Eugenia	NO	39	49. Pais, Juan Mario	NO	33
14. Closs, Maurice	SI	9	50. Pereyra, Guillermo Juan	SI	62
15. Cobos, Julio	SI	23	51. Perotti, Omar Angel	SI	27
16. Costa, Eduardo	AUSENTE		52. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos	SI	21
17. Crexell, Carmen Lucila	SI	63	53. Pichetto, Miguel Ángel	SI	14
18. De Angeli, Alfredo Luis	SI	69	54. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	NO	58
19. Durango, Norma Haydee	AUSENTE		55. Pinedo, Federico	SI	6
20. Elias de Perez, Silvia Beatriz	SI	42	56. Poggi, Claudio	SI	25
21. Espínola, Carlos Mauricio	SI	31	57. Porcel de Riccobelli, Blanca	SI	50
22. Fernández de Kirchner, Cristina	NO	37	58. Reutemann, Carlos Alberto	SI	61
23. Fernández Sagasti, Anabel	NO	35	59. Rodríguez Machado, Laura Elena	SI	7
24. Fiad, Mario R.	SI	24	60. Rodríguez Saá, Adolfo	NO	38
25. Fiore Viñuales, María C. del Valle	SI	40	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Fuentes, Marcelo Jorge	NO	36	62. Rozas, Ángel	SI	22
27. García Larraburu, Silvina Marcela	AUSENTE		63. Sacnun, María de los Angeles	NO	59
28. Giacoppo, Silvia del Rosario	SI	41	64. Schiavoni, Humberto	SI	48
29. González, Gladys	SI	47	65. Snopek, Guillermo	SI	2
30. González, María Teresa Margarita	SI	18	66. Solanas, Fernando Ezequiel	NO	72
31. González, Nancy Susana	NO	60	67. Solari Quintana, Magdalena	SI	10
32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel	SI	13	68. Tapia, María Bélen	SI	66
33. Ianni, Ana María	NO	56	69. Uñac, José Rubén.	SI	28
34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa	SI	49	70. Urtubey, Rodolfo Julio	SI	15
35. Kunath, Sigrid Elisabeth	SI	12	71. Varela, Marta	SI	67
36. López Valverde, Cristina	SI	54	72. Verasay, Pamela	SI	45

Observaciones: Se consignan los votos negativos de los Senadores Mayans, José; Crexell, Lucia; Gonzalez, María Teresa y Luenzo, Alfredo a los Arts. 32º, 33º, 37º, 38º, 42º y 43º.

Se consigna el voto negativo del Senador Perotti, Omar a los Arts. 95º y 96º.

VI

INSERCIONES

Las inserciones remitidas con posterioridad a la finalización de la sesión a la Dirección General de Taquígrafos para su publicación son las siguientes:

1

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
SNOPEK

Presupuesto para el ejercicio 2018 (C.D.-80/17)

Señora presidente:

El Congreso debe ejercer sus potestades constitucionales (artículo 75 de la Constitución Nacional) de “contraer empréstitos contra el crédito de la Nación” y “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. Vamos a trabajar cada vez que sea necesario, cada vez que el Ejecutivo lo necesite estaremos aquí para debatir lo que haga falta. Es necesario que el Poder Ejecutivo indique en la planilla del artículo 32 el plazo máximo de la deuda programada y reforme la ley de administración financiera (artículo 60) para disponer que cualquier endeudamiento del gobierno nacional colocado en los mercados cuyo plazo exceda los diez años requiera aprobación específica de dicho plazo por ley del Congreso.

El decreto 29/2017 del Poder Ejecutivo facultó al Ministerio de Finanzas a emitir títulos públicos por hasta 20.000 millones de dólares y determinar las “épocas, plazos, métodos y procedimientos” de su emisión. Fue forzando la interpretación de la ley de administración financiera que se dictó la resolución 97-E/2017 y dispuso la emisión del bono a cien años.

El gobierno justificó la emisión del bono a cien años explicando que era una “señal a los mercados”, necesaria para abaratar el costo futuro del endeudamiento soberano argentino. Pero para enviar tal señal hubiera alcanzado con colocar un monto simbólico, como el de los bonos centenarios emitidos este mismo año por Irlanda y Bélgica, de apenas 100 millones de euros cada uno.

Se observa un desinterés evidente por fiscalizar su evolución. La página online del Congreso, que debería informar las “actividades”, “reuniones” y “proyectos” de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación permanece prístinamente en blanco, a pesar de que han transcurrido veintiún meses (y miles de millones de deuda exterior) desde su creación por el artículo 18 de la ley 27.249. La misma ley que aprobó el arreglo con los fondos buitres, pero la facultad indelegable de control que debe ejercer este Congreso sigue sin ponerse en práctica.

2

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
ROMERO

Presupuesto para el ejercicio 2018 (C.D.-80/17)

Señora presidente:

Ajuste por inflación - Artículo 65 del proyecto

El artículo 95 de la Ley de Impuesto a las Ganancias establece un mecanismo de ajuste por inflación que, si bien no fue derogado en todos estos años posteriores a la vigencia de la Ley de Convertibilidad, por efecto de lo previsto en la ley 24.073, los índices de actualización quedaron sin variación, con lo cual desde lo práctico el ajuste quedó abrogado.

La ley incorpora distintas modificaciones y agregados en virtud de los cuales se infiere el restablecimiento práctico del ajuste por inflación y, además, teniendo en cuenta la política actual del gobierno nacional en materia de índices y estadísticas que propugna la elaboración de datos estadísticos que reflejen la realidad.

No obstante ello y para gran sorpresa de quienes siempre fuimos críticos de la gran mentira y estafa por parte del Estado al impedir el ajuste por inflación, que a la postre siempre derivó en un enriquecimiento sin causa por parte del mismo Estado, se incorpora como últimos párrafos al artículo 95 de la Ley de Impuesto a las Ganancias los siguientes:

“El procedimiento dispuesto en el presente artículo resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 89, acumulado en los treinta y seis (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al ciento por ciento (100 %).

”Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero de 2018. Respecto del primer y segundo ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso [de] que la variación acumulada de ese índice de precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y hasta el cierre de cada ejercicio, supere un tercio (1/3) o dos tercios (2/3), respectivamente, el porcentaje indicado en el párrafo anterior”.

De la simple lectura de la norma se infiere que, a los efectos de la procedencia del ajuste por inflación, será necesario que se hubiere verificado una inflación promedio anual en los últimos tres años anteriores al momento en que se evalúe su procedencia, superior al 33,33 por ciento anual.

Realmente un verdadero despropósito que implica consagrar por la vía legal, desde un punto de vista estrictamente práctico, el reconocimiento de una in-

flación de tal magnitud y, en caso de no superar tales parámetros los índices respectivos, que recordemos los elabora el propio Poder Ejecutivo, no habrá reconocimiento de los efectos de tan alta inflación en las liquidaciones impositivas, con el consiguiente ya mencionado efecto de enriquecimiento sin causa por parte del Estado, porque percibe impuestos que se liquidan sobre bases ficticias incrementadas artificialmente por efecto de la inflación, que el mismo Estado genera a través del déficit público y otrora por vía de la emisión monetaria, por lo tanto, el impuesto a las ganancias no se liquida sobre riquezas efectivamente generadas desde un punto de vista material o real, sino, reitero, ganancias meramente nominales.

Todo esto se da de patadas con el discurso del gobierno, que propugna desde el mismo momento de haber asumido la convicción de reconocer los problemas y atacarlos con la verdad. Ahora resulta que un gran problema como la inflación y su incidencia en la actividad económica y el pago de impuesto sobre bases nominales ficticias se pretende solucionar solo cuando los índices inflacionarios sean superiores al 33,33 por ciento anual... ¡¡33,33 por ciento anual!!

Un verdadero contrasentido y demostración de incongruencia entre lo que se profesa y propugna y lo que se lleva a la práctica. En los próximos años podrá registrarse una inflación, por ejemplo, del 30 por ciento anual, sin que resulte procedente ningún tipo de ajuste y, en definitiva, podremos decir: “aquí no pasó nada”.

En la era del kirchnerismo los presupuestos resultaban meros dibujos y en modo alguno reflejaban los verdaderos ingresos y egresos del Estado. Ello en consonancia con una manera de gestionar que nos colocó en la situación que todos conocemos a fines de 2015:

- Reservas: las reservas se ubicaron en 24.862 millones de pesos, cuando en 2011 estaban en 52.179 millones de pesos.

- Déficit fiscal: el resultado financiero a 2015 arrojó un déficit de 138.730.431.434 pesos.

- Tipo de cambio: el tipo de cambio se encontraba atrasado o, más bien, “manipulado” (ocultando el verdadero valor) en 9,30 pesos. Lo cual no hacía más que ocultar la verdadera inflación.

- Inflación: trepó al 26 por ciento.

- Base monetaria: la base monetaria creció en la etapa kirchnerista un 517 por ciento.

Tengamos en cuenta que la costumbre del kirchnerismo fue hacer del presupuesto un dibujo, en el que por momentos se inflaban datos, como el crecimiento económico, mientras que otros números se disimulaban o desinflaban, como el gasto público, el déficit o la inflación. Todos estos datos amparados por un INDEC que fue protagonista del mayor proceso de desprestigio de nuestra historia, producto de lo poco creíble que resultaban sus datos, absolutamente caprichosos y direccionados.

Hoy vamos a votar un presupuesto que ya no es un dibujo, como en otros años, sino una foto. Una foto que puede gustar o no, pero que responde a la realidad, que refleja la situación actual y el trabajo a realizar. Estos son los números actuales, los que tenemos. ¿De qué sirve establecer el valor del dólar en una cifra determinada, si después tenemos que valernos de un cepo para sostenerlo en ese valor mentiroso? Aquí no hay cepos, ni datos caprichosos. No se disimula la desocupación incrementando injustificada e irresponsablemente la planta del Estado.

RESULTADO FINANCIERO

2012	-55.563			
2013	-64.477			
2014	-166.388			
2015	-138.730			
2016	-396.186			
2017	-408.773	al 31/10	PRESUPUESTADO	-570.753
2018	-678.869		PRESUPUESTADO	

GASTO PÚBLICO

	<i>PRESUP</i>	<i>EJECUTADO</i>	
2012	505.130	540.651	
2013	628.659	721.195	
2014	859.542	1.105.243	
2015	1.251.630	1.355.085	
2016	1.569.412	1.935.634	
2017	2.492.670	1.875.545	AL 31/10
2018	2.904.414		

Cuenta corriente comercial: en 2015 el saldo comercial arrojó un déficit de 3.000 millones de dólares.

Hay que poner de relieve que no resultaba deficitario desde 1999.

BALANZA COMERCIAL			
	<i>EXPORT</i>	<i>IMPORT</i>	<i>SALDO</i>
2011	82.981.086	73.960.671	9.020.415
2012	79.982.381	67.974.214	12.008.167
2013	75.962.976	74.441.800	1.521.176
2014	68.404.347	65.736.069	2.668.278
2015	56.783.953	60.203.036	-3.419.083
2016	57.879.358	55.910.823	1.968.535
2017	53.881.000	61.538.000	-7.656.000

El déficit se debe a la marcada caída de las exportaciones que comenzaron a derrumbarse a partir de 2012. Es así que cayeron entre 2011 y 2015 (año en que se registró el primer déficit en la balanza comercial desde 1999) un 31,57 por ciento, para comenzar nuevamente a crecer a partir de 2016 de la mano de la eliminación de las retenciones.

En cuanto a la situación y perspectivas actuales

Si bien es cierto que está proyectada la baja en el déficit y que el porcentaje de deuda sobre el PBI está entre lo que podría considerarse razonable, no es menos cierto que esta gestión depende muchísimo del endeudamiento para financiar el gasto.

En este contexto resulta fundamental equilibrar las cuentas públicas, considerando que, si el crecimiento del PBI no resulta ser el esperado y el déficit no se controla, todo ello con un constante déficit de mercado externo, el endeudamiento continuará creciendo y con él el peso de los intereses en el total de los gastos.

Para ello habrá que controlar el gasto evitando las dilapidaciones de recursos públicos, de manera de evitar mayor endeudamiento o apelar a la emisión indiscriminada, como lo hiciera la anterior gestión. Habrá, entonces, que “optimizar” el gasto público para evitar los desfases en los que incurrió el gobierno anterior. No se trata de tener un Estado gigante y fofo, sino uno presente, que destine los recursos económicos –y, por tales, escasos por naturaleza– a mitigar las inequidades y generar las condiciones para el crecimiento de la economía y con ella del empleo.

Mientras el endeudamiento se mantenga en niveles razonables, el déficit tienda a equilibrarse y la obra pública se encuentre en pleno crecimiento, podemos ser optimistas en el mediano y largo plazo. En este sentido, la gran cantidad de obras contempladas en el presupuesto que estamos votando (ya sea las financiadas enteramente por el Estado o las de participación público-privada) resultan un dato alentador, pero habrá que poner especial atención en la ejecución de las obras programadas, dado que no alcanza con que simplemente se destinen fondos del presupuesto a ellas,

sino que el verdadero crecimiento se obtiene a partir de su oportuna ejecución y el efecto multiplicador en el consumo y acelerador en la inversión privada que de ellas devienen.

En tal sentido, el Plan Belgrano, además de aportar al crecimiento de la inversión con el consiguiente efecto en la economía, contribuye al desarrollo de las provincias del Norte Argentino (históricamente postergadas) y, con ello, a su incorporación al crecimiento de la economía. Así, entonces, resulta fundamental que el Plan Belgrano pase de ser un cúmulo de buenas intenciones o un enunciado de obras a realizarse a una verdadera política de inversiones que impulse el desarrollo necesario para mitigar las inequidades existentes en infraestructura entre las provincias del Norte y el resto del país.

Las obras comprometidas en el Plan Belgrano, en tanto se ejecuten, van en sintonía con un federalismo bien entendido que nivela oportunidades. Considérese que el costo logístico para una pyme de mi provincia es de entre un 30 o 40 por ciento más caro que en otras provincias. Esto afecta su rentabilidad, que resulta el motor de la inversión. Sin rentabilidad no hay inversión. Es de vital importancia impulsar las economías regionales, generando las condiciones necesarias.

La aprobación de este presupuesto es un voto de confianza a la inversión y una forma de cumplir con la cláusula del progreso para permitir que todas las provincias se desarrollen.

A su vez, será fundamental que no solo el Estado nacional controle el gasto, sino que las provincias se comporten con verdadera disciplina fiscal.

En cuanto al mercado externo, no es un dato menor el hecho de que se proyecta un crecimiento de las exportaciones hasta el 2021 del 24,65 por ciento, al tiempo que las importaciones crecerán un 27,80 por ciento. Esto profundizará el déficit de la cuenta corriente, llevándolo de 4,5 calculado para 2017 a 7,6 en 2021 (en miles de millones de dólares). Ello hace que tengamos que poner especial atención en impulsar las medidas necesarias para el crecimiento de nuestras exportaciones, reinsertando a nuestro país en el comercio

mundial, apartándonos del modelo kirchnerista que nos aislaba más y más del mundo. El déficit se debe a la marcada caída de las exportaciones que comenzaron a derrumbarse a partir de 2012. Es así que cayeron entre 2011 y 2015 (año en que se registró el primer déficit en la balanza comercial desde 1999) un 31,57 por ciento, para comenzar nuevamente a crecer a partir de 2016 de la mano de la eliminación de las retenciones.

Deberá contenerse la inflación en los valores presupuestados, puesto que hasta ahora los valores superarían casi en un 50 por ciento (del 17 por ciento al 24,5 por ciento) a las estimaciones del gobierno para el 2017. Este es un dato importante, dado que el BCRA estableció una política de suba de interés para controlar la inflación y esto impacta en forma directa y negativa en la inversión privada, fundamental para el buscado crecimiento del PBI.

Entiendo que este presupuesto que estamos aprobando se ajusta a nuestra realidad. Algunos hablan de los peligros del endeudamiento, pero me pregunto: ¿es posible equilibrar el déficit heredado con un recorte brusco en el gasto? ¿Está el país en condiciones de soportar semejante shock? Seguramente la situación social no lo permite. Entonces: ¿subimos los impuestos? Este tampoco puede ser el camino, considerando que el actual nivel de actividad no lo permite y, además, estamos propiciando un sistema tributario que aliviane la presión tributaria. Podríamos elegir también el camino transitado por el kirchnerismo y emitir moneda de manera indiscriminada, pero ya sabemos el final de esa historia.

Entiendo que el camino del endeudamiento no es ni bueno ni malo en sí mismo, sino que implica una vía posible en un contexto de absoluta disciplina fiscal.

3

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PEROTTI

**Reforma al sistema tributario argentino
(O.D. N° 1.057/17 y C.D.-82/17)**

**Presupuesto para el ejercicio 2018 (C.D.-80/17)
Modificación de la ley 25.413 (C.D.-81/17)**

Señora presidente:

El proyecto de reforma tributaria remitido por el Poder Ejecutivo nacional contemplaba que los excedentes de las cooperativas y mutuales que desarrollan actividades de crédito, financieras, seguros o reaseguros, fueran alcanzados por el impuesto a las ganancias. Si bien fueron eliminados los artículos 23 y 24 de aquel texto, teniendo en cuenta lo manifestado precedentemente, corresponde que nos refiramos a esta cuestión. Sabido es que, por su naturaleza jurídica, las cooperativas y mutuales no generan ganancias que puedan o deban ser afectadas por impuestos o retenciones, sino que producen excedentes y la actividad que llevan a cabo no tiene carácter lucrativo.

El rol de las cooperativas en regiones como mi provincia y, en mayor o menor medida, en toda la geografía argentina, es fundamental para motorizar el esquema productivo y de empleo de estas zonas. Por esto, las cooperativas son un instrumento esencial de toda política de desarrollo territorial y es importante hacer foco en su sustentabilidad.

Lo dicho anteriormente no quita que no debemos discutir seriamente y discernir de forma clara aquellos casos en donde, bajo el uso de estas figuras, puedan aparecer desvíos del encuadre legal. Cuando las actividades y el uso de estas figuras excedan los términos legales, el Ejecutivo nacional debe tener todas las instancias de control y supervisión sobre ellas. En este sentido, acompañaremos estos mecanismos, ya que representan una modalidad óptima para resguardar el espíritu de cooperativas y mutuales y garantizar, a su vez, la transparencia en términos tributarios.

Señora presidente: en el mismo sentido, adelanto mi voto negativo respecto del artículo 165 del proyecto en tratamiento. Este artículo establece la unificación de las contribuciones patronales generando una marcada desigualdad. Actualmente las pequeñas y medianas empresas (pymes) abonan en concepto de contribuciones patronales el 17 por ciento y las grandes empresas el 21 por ciento. Resulta evidente que para las pymes la unificación en el 19,50 por ciento genera un agravamiento impositivo. Se perjudica a este sector, que es el mayor dador de trabajo en el país y, como correlato, se beneficia a las grandes empresas, que pasarán a tributar una alícuota inferior a la que abonan actualmente. La alícuota uniforme impide la posibilidad de generar políticas regionales diferenciadas para tratar de atraer y radicar inversiones en lugares que de por sí no tendrían un atractivo. Eso es clave en la Argentina para la integración territorial y el equilibrio poblacional. Si no se implementa un esquema diferencial, toda la actividad se vuelca a las grandes ciudades. Necesariamente el Estado debe propender al arraigo y al equilibrio poblacional en la Argentina, con un criterio de equidad que evalúe las características de cada región. En este sentido, siempre reclamamos la incorporación al Plan Belgrano de zonas de nuestra provincia de Santa Fe con características muy parecidas al Chaco y a Santiago del Estero.

Señora presidente: equiparar a las pymes con las grandes empresas, así como a las que dan trabajo en el centro del país o en las zonas más alejadas, con aquellas que funcionan cerca de los puertos y centros de distribución significa un retroceso en las políticas tendientes a hacer más sustentable la actividad productiva desarrollada en todas las regiones de la Argentina.

Por ello, reclamamos una reforma tributaria que incentive el desarrollo, la creación de puestos de trabajo y las inversiones en cada región, cada provincia, cada lugar del territorio argentino y no un sistema que beneficie exclusivamente las economías centrales.

Por otro lado y en relación al tratamiento del proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2018, quiero manifestar que quienes hemos ejercido funciones ejecutivas tenemos muy presente la relevancia de esta ley: sin presupuesto, carecemos de los instrumentos necesarios para disponer de un buen ejercicio de la administración del gobierno. Nadie puede poner en duda la importancia de la ley de presupuesto como herramienta central para la organización, el financiamiento y la administración del Estado.

Sin embargo, quiero señalar algunos elementos que nos preocupan, principalmente porque creo comprometen la perspectiva de cumplimiento de este presupuesto.

En primer lugar, señora presidente, a los santafesinos nos preocupan las manifestaciones que realizó ayer el señor ministro de Hacienda en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando al ser consultado sobre la cancelación de la deuda contraída con la provincia de Santa Fe en el juicio por la detención indebida del 15 por ciento de fondos coparticipables, respondió que se entregaría un bono que no impactaría en el próximo ejercicio 2018. De esta manera, estamos frente a un escenario incierto de pago por parte del Ejecutivo nacional, teniendo en cuenta que ya cuenta con el derecho al cobro de las sumas oportunamente reclamadas.

Quiero decir que me resulta incomprensible que ante un reclamo de la provincia de Buenos Aires a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin sentencia a la fecha de hoy, se ha buscado una alternativa para que a partir del 1° de enero de 2018 comience a percibir parte del reclamo interpuesto, mientras mi provincia, aun con sentencia firme, tiene que esperar más allá de 2018 para percibir lo adeudado.

Voy a insistir permanentemente en la defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe y, en particular, la de este reclamo histórico de la deuda. Hemos acompañado las presentaciones de los sucesivos gobiernos de mi provincia para que haya un entendimiento y queremos que se llegue a un acuerdo porque es dinero de los santafesinos, es dinero que se tiene que recuperar para la provincia.

En cuanto a la estimación de la deuda pública en el presupuesto, resulta preocupante su crecimiento constante respecto al PBI que venimos observando desde diciembre de 2015. Según registros del Ministerio de Hacienda de la Nación, en 2016 la deuda aumentó en 35.000 millones de dólares, mientras que en 2017 crecería entre 42.000 y 45.000 millones de dólares, sumando a fin de este año un total aproximado que oscila entre los 317.000 y 320.000 millones de dólares, 75 por ciento en dólares y 25 por ciento en pesos. Así, en tres años la deuda aumentaría en torno a los 125.000 millones de dólares.

Si consideramos que el stock de deuda para el año 2017 asciende a 28,5 por ciento del PBI, surge que la evolución para los próximos siete años lo elevará al 37 por ciento. Si además tenemos en cuenta que el presu-

puesto prevé un crecimiento en la participación de los intereses de la deuda, que pasan del 1,76 por ciento del PBI en 2017 a 1,97 por ciento en 2018, alcanzando un pico máximo en 2019 con 2,15 por ciento del PBI, el diagnóstico general no solo es preocupante, sino que nos advierte del peligro que implica la toma de deuda en forma compulsiva y la consecuente pérdida de soberanía en la toma de decisiones sobre las políticas públicas.

En este contexto, preocupa cómo se van a pagar los servicios de la deuda (capital e intereses) y por eso mismo, señora presidente, insistimos en que hay que prestar mucha atención al déficit de la balanza comercial.

En el presupuesto de 2017 la perspectiva era tener un déficit de la balanza comercial de 4.500 millones de dólares y al mes de noviembre dicho déficit ya alcanzaba los 7.600 millones de dólares. Deberíamos ser más exactos en parámetros tan importantes que nos ayudarían a corregir variables económicas fundamentales para avanzar en el diseño de políticas de crecimiento sostenido basadas en la promoción de exportaciones. Necesitamos saber cuál va a ser la política exportadora y si se aplicará de forma seria y comprometida; tenemos que conocer cómo y de dónde vamos a obtener divisas genuinas para hacer frente a este contexto de endeudamiento creciente.

Teniendo en cuenta estos datos y después de las leyes de reciente tratamiento en este Parlamento que modifican el cálculo presupuestario para el ejercicio 2018, sería oportuno, señora presidente, el envío de una ley que ratifique o corrija estos datos para acercarnos a un presupuesto real.

No han sido días fáciles en mi provincia porque numerosas industrias están atravesando procesos de crisis, de suspensiones de personal y cada vez más familias santafesinas quedan sin ingresos, por lo cual es fundamental que podamos trabajar sobre las dificultades de este presupuesto que impactan directamente en la economía de las provincias y en la vida de la gente.

De eso hay que hablar cuando se hacen expresiones de cuál va a ser la inserción de la Argentina en el mundo, cuáles son nuestros socios comerciales y dónde buscamos esos vínculos y desde aquí plantear la necesidad de ser inteligentes y de leer adecuadamente los cambios que el mundo ha tenido en estos últimos tiempos. No escapa a nadie que algunos sectores nacionales han sufrido por la suba de aranceles en EE. UU. y no son aranceles menores: llevar al 70 por ciento una protección para el tema del biodiésel en EE. UU. habla a las claras de que nadie se pone colorado cuando hay que proteger un sector. Que cuando se habla de las negociaciones con la Unión Europea, aparece claramente la definición de ellos respecto de sectores sensibles y de sectores a proteger. Seamos inteligentes para resguardar los sectores que nos pueden generar genuinas divisas, tengamos una estrategia inteligente de vinculación y fortalecimiento del Mercosur y con los países de América Latina para desde allí poder negociar inteligentemente.

Señora presidente: de las situaciones que se dan cuando analizamos en particular estos sectores que tienen que desarrollarse, crecer y generar posibilidades de más divisas y que requieren de financiamiento surge una nueva preocupación: la del Banco Nación, que debe garantizar el apoyo a los sectores productivos que necesitan equiparse, que necesitan agregar valor y que necesitan exportar.

Sin embargo, en este proyecto de presupuesto se está solicitando la transferencia de 20.000 millones de pesos hacia el Tesoro por parte del Banco de la Nación Argentina. La disminución de su capital por dicho monto más la autorización para distribuir futuras utilidades de la entidad se contraponen con las últimas informaciones que han tomado estado público respecto a que el banco ha suspendido determinadas líneas de crédito. Además, el elevado nivel de deuda no permite vislumbrar cómo será el repago, atento a los bajos niveles de exportación y al déficit comercial anteriormente mencionado. Por ello, creo que se trata de una medida riesgosa que puede al menos entorpecer el cumplimiento de su finalidad, que no es otra que la de acompañar a los emprendedores productivos.

Respecto a la aparición de las obras bajo la figura de participación público-privada (PPP), está claro que su perfil está dirigido a áreas de gran rentabilidad: nuestro deber es defender que la planificación obedezca a un criterio federal. Es fundamental que, como representantes de las provincias, tengamos un rol prioritario en el control parlamentario de este tipo de proyectos.

Quiero resaltar que no podemos dejar exclusivamente librado al mercado el direccionamiento de las inversiones privadas en la obra pública. Por el contrario, el Estado tiene que establecer una clara estrategia de desarrollo, control y regulación de las inversiones privadas para que las expectativas de las diversas regiones del interior del país sean crecientes.

Por ello, señora presidente, creo que es conveniente y prioritario que se constituya una comisión bicameral responsable del seguimiento de la totalidad de los contratos de participación pública-privada y de la determinación de las zonas en las cuales esas inversiones se van a localizar.

De la misma manera, respecto a cuando hablaba de los incrementos en los servicios de la deuda, es necesario que recordemos que esta Cámara le dio sanción a un proyecto de ley para recuperar las facultades plenas del Congreso en el manejo de la deuda. Ese proyecto ha pasado a Diputados y allí está. Y hay otra comisión, la Bicameral para el Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, donde tenemos la necesidad de renovar inmediatamente los miembros y ponerla a funcionar. No es un tema menor en la composición del gasto dentro de este presupuesto que se está analizando.

Con respecto a la inversión en la obra pública, queremos destacar que quedan garantizados en este presupuesto los aportes para las rutas nacionales 33, 34 y 11

de nuestra provincia y los aportes para la continuidad del Gasoducto Regional Centro II, también conocido como “Lechero”, y la construcción del Centro Penitenciario Federal en Coronda. También está asegurado el aval para la construcción de la segunda etapa del Acueducto Desvío Arijón, que veníamos reclamando hace tiempo, y oportunamente hemos solicitado al señor jefe de Gabinete de Ministros.

En este sentido, celebro que mi provincia haya recibido el reconocimiento que se merece, por su impacto en el desarrollo demográfico y productivo.

Por último, señora presidente, voy a referirme a la función Ciencia y técnica programada en este presupuesto, dejando asentado desde ya mi disidencia con la inversión allí destinada. El 23 de agosto de este año, con 39 votos a favor, este Senado le dio media sanción a un proyecto de ley que establecía la voluntad de un presupuesto creciente y sostenido en ciencia y técnica para llegar al 3 por ciento del PBI para el año 2030. En el año 2015 estábamos en el 1,58 por ciento del presupuesto y hoy observamos que ese porcentaje se redujo al 1,22 por ciento. Estamos presenciando una caída preocupante en la función. Aquí no estamos observando que en ningún lugar del mundo existe un sistema tecnológico pendular.

Señora presidente: uno puede correr con viento en contra, pero nadie corre para atrás si quiere llegar a la meta. Puede aflojar la marcha, pero, en todo caso, es siempre para reafirmar el sentido en el que se corre. La Argentina debe apoyarse definitivamente en la ciencia, en la tecnología y en la innovación para su desarrollo y tenemos ejemplos en el mundo muy claros. Después de la crisis mundial de 2008, China invirtió y creció en su inversión en un 118 por ciento; Polonia, por su lado, invirtió arriba del 62 por ciento y Corea del Sur, 56 por ciento. Por eso me parece que es allí donde tenemos diferencias.

Contrariamente, la Argentina en el año 2017 otorgó a los distintos organismos y jurisdicciones que componen la función Ciencia y técnica 35.248 millones de pesos. Para el año 2018 se fija una asignación de 36.900 millones de pesos. Este pequeño incremento nominal no debe inducirnos al error de considerar que el presupuesto de ciencia y tecnología crece: si asignáramos en 2018 lo mismo que en 2017, ajustado a la inflación, la función debería recibir un total de 40.782 millones de pesos, es decir, debería contar con 3.882 millones de pesos más de los que estamos presupuestando.

Esta diferencia afecta a casi el ciento por ciento de los dieciocho organismos involucrados e implica que, en términos reales, el presupuesto en ciencia se reduce en un 10 por ciento para el próximo año.

Mi diferencia la planteo desde el convencimiento de que tenemos un enorme potencial en el sector científico-tecnológico y que es trascendente alentar a este sector. Nuestro país debe apoyarse en este sector para lograr su desarrollo. El presupuesto para la in-

versión en estas áreas es fundamental para federalizar la ciencia y la tecnología, diversificar nuestra matriz productiva, incentivar la innovación y generar nuevos emprendimientos, valor agregado y empleos reales de calidad. Es vital, además, para integrar territorialmente y equilibrar poblacionalmente a la Argentina. En ese sentido, los números que vemos y que nos marca este presupuesto que hoy estamos tratando no dan una señal clara de eso.

Allí es donde debemos hacer un esfuerzo diferente si queremos dar señales de una verdadera política de Estado hacia el sector científico-tecnológico, su comunidad y su referencia internacional y es en el presupuesto donde debemos incorporar todas las modificaciones necesarias que nos conduzcan hacia ese objetivo. Señora presidente: solo de esta manera podremos generar las condiciones que este sector necesita para que nuestro país pueda incorporar valor agregado y divisas genuinas, fundamentalmente en un contexto de endeudamiento creciente al que debemos dar respuesta.

Estamos convencidos de que con mayor innovación tendremos más y mejor futuro. Por ello debemos seguir fortaleciendo el sistema científico-tecnológico, principal motor de la innovación para nuestros jóvenes, que son los emprendedores del futuro. Ese debe ser el camino, porque nadie que quiera llegar a la cima lo hará bajando escalones.

Quiero finalizar con una frase: “La disyuntiva es clara: o bien se cultiva la ciencia, la técnica y la investigación y el país es próspero, poderoso y adelanta, o bien no se la practica debidamente y el país se estanca y retrocede, vive en la pobreza y la mediocridad. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico - tecnológico. Y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”. Esta frase, dicha en 1967, es de uno de nuestros premios Nobel: Bernardo Houssay. Ojalá tomemos definitivamente conciencia de que es necesaria una inversión en ciencia y tecnología seria, permanente y que nos permita un crecimiento sostenido.